

Jorge Elías

Maten al cartero

*Posdata del asedio a la prensa durante
las dictaduras militares del Cono Sur*

*Prólogo de José Ignacio García Hamilton
Ilustración de tapa de Ricardo Trotti*



Elías, Jorge

Maten al cartero : posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Cadal, 2005.
304 p. ; 19x13 cm.

ISBN 987-21129-8-3

1. Dictaduras Militares. 2. Libertad de Prensa. I. Título
CDD 323.445

Fecha de catalogación: 21/11/2005

© 2005

Diseño de tapa y armado: Fernando Jiménez

Ilustración de tapa: acuarela de Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

ISBN 987-21129-8-3

Impreso en la Argentina por La Imprenta Wingord

imprentawingord@wingord.com.ar

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

Prohibida su reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de los editores.

Noviembre de 2005

*A mis puntos cardinales:
Yolanda, mi mujer;
Agustín y Macarena, mis hijos,
y Quica, mi madre*

AGRADECIMIENTOS

Este libro no tiene un autor, sino tres cómplices.

Uno, Ricardo Trotti, por haberme alentado a escribirlo.

El otro, José Ignacio García Hamilton, por haberme obligado a editarlo.

Y el otro, Gabriel Salvia, por haberlo hecho realidad.

A ellos, y a todos los que contribuyeron con testimonios, documentos y aliento, gracias.

Muchas gracias por la complicidad.

EL AUTOR

ÍNDICE

| | |
|--------------------------------------|----|
| Prólogo postal | 11 |
| Las vísperas de después | 15 |

PRIMERA PARTE

| | |
|--|-----|
| 1. La policía del pensamiento | 21 |
| Pacto de caballeros | 24 |
| El Cóndor pasa | 30 |
| Almas en pena | 35 |
| 2. La ignorancia es la fuerza | 38 |
| Buenos muchachos | 42 |
| El show debe continuar | 48 |
| Secretos en reunión | 54 |
| 3. La conjura de los medios | 60 |
| Informe de la situación | 63 |
| Comunicado número uno | 68 |
| Socios del silencio | 74 |
| Amistades peligrosas | 83 |
| 4. Pretérito imperfecto | 87 |
| París era una fiesta | 91 |
| Plegaria no atendida | 96 |
| La indiferencia del mundo | 100 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| | A cara descubierta | 104 |
| | Cruzados en el aire | 107 |
| 5. | Montevideo esquina Buenos Aires | 112 |
| | Siete años no es nada | 118 |
| | Abrete, Sésamo | 124 |
| | Era en abril | 132 |
| | País de paradojas | 136 |
| 6. | En el nombre del hijo | 141 |
| | Rebelde con causa | 146 |

SEGUNDA PARTE

| | | |
|------------|---|-----|
| 7. | Devuélvase al remitente | 155 |
| | Estamos prisioneros, carcelero | 163 |
| | Ni olvido, ni perdón | 169 |
| | Tolerancia cero | 175 |
| | Periodismo versus patriotismo | 179 |
| 8. | Montesinos y yabranes | 184 |
| | Suicidio en defensa propia | 187 |
| | La delgada línea roja | 191 |
| | Un poco de insatisfacción | 196 |
| | Mentiras verdaderas | 206 |
| 9. | Levántate y baila | 215 |
| | Súbditos de la corona | 219 |
| | Lamento boliviano | 224 |
| | And the winner is... .. | 227 |
| | Cambio de hábitos | 230 |
| 10. | Enemigos íntimos | 236 |
| | ¿Por quién doblan las campanas? | 239 |
| | ¡Hasta la carga final! | 244 |
| | Cortinas de humo | 250 |
| | El general Desconcierto y el mayor Sigilo | 254 |
| 11. | Sueño con serpientes | 260 |
| | El oráculo de Chávez | 269 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| El hombre y su circunstancia | 271 |
| La pesadilla hegemónica | 273 |
| O inventamos o erramos | 276 |
| Epílogo certificado | 279 |
| Fotos | 289 |
| Fuentes | 293 |

PRÓLOGO POSTAL



JORGE ELIAS es uno de los mejores periodistas de la Argentina y, además, como lo demuestra en este libro, un brillante escritor. Más allá de su estilo incisivo, veloz, penetrante, impresiona su conocimiento de la América latina, en sus distintas expresiones y geografías, y también de los Estados Unidos, país en el que se desempeñó como corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, como lo hiciera el cubano José Martí un siglo antes.

Martí dejó la corresponsalía de La Nación en Nueva York para regresar a su patria y encabezar la lucha para lograr la independencia de España, pero a los pocos meses encontró la muerte en Dos Ríos. Jorge Elías abandonó los Estados Unidos y volvió a su país, donde, como investigador de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), inició un vasto trabajo de recopilación de documentos y de testimonios que lo llevó a encontrar la muerte de muchos colegas, víctimas en la década de los setenta de un llamado plan Cóndor elaborado por varias dictaduras militares latinoamericanas, que plasmaron la integración de sus sociedades no en el plano comercial o cultural, como hubiera sido deseable, sino en el siniestro terreno de las persecuciones a los opositores, la desaparición de los disidentes y la sofocación del periodismo libre.

Jorge nos cuenta acá esos episodios y su narración, como si fuera el tableteo de una ametralladora literaria, nos envuelve, sacude y hasta nos perturba con datos, relaciones, conexiones y reflexiones sobre una realidad que, a treinta años de haberla vivido, todavía nos parece

una pesadilla y nos atraviesa con sus enigmas. ¿Cómo en Chile, que a partir de 1830 fue la primera nación de Hispanoamérica en instaurar un sistema republicano estable, y cuyo orden institucional y educativo sirvió de inspiración para los argentinos Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, pudieron instrumentarse estos crímenes domésticos y transnacionales con la tolerancia de gran parte de su población? ¿Cómo en la Argentina que surgió de la Constitución de 1853, cuyas instituciones de división de poderes, libertad de cultos, educación pública, igualdad, juridicidad, autonomía individual y fomento de la inmigración europea la llevaron a principios del siglo XX a situarse entre los diez países más ricos del mundo, pudo producirse el drama de los desaparecidos, todavía impune e irresuelto? ¿Cómo en el Uruguay de la educación laica, el divorcio y los derechos de la mujer, la separación de la iglesia y el estado, la seguridad social y el ejecutivo colegiado, pudo detenerse a tantos opositores y se utilizó el Río de la Plata para que sus aguas fueran cruzadas por los asesinos?

Con las armas del talento, la ironía, la síntesis, y el don de la expresión contundente, la frase aguda y la comparación chispeante, Jorge Elías se mueve por todo el continente y avanza y retrocede en el tiempo, por lo cual su mirada se extiende a la corrupción de los noventa en el Perú, al encubrimiento de la prensa estadounidense durante la guerra con Irak, o a la complicidad que en 1980 mostró en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el gobierno de Fidel Castro, el pretendido sucesor de Martí en Cuba, con la dictadura militar argentina.

Su ritmo es tan veloz que a veces nos parece que nos lleva demasiado a prisa en este carrusel de bajezas, crímenes, terrorismo de Estado y desprecio por los derechos y libertades. Pero luego advertimos que es al revés: no es el escritor quien nos conduce velozmente por esta feria de maldades, sino que es el vértigo de un pasado todavía sin asimilar el que infunde su rauda marcha al autor que no puede demorarse, y a los lectores que tampoco podemos serenarnos, acaso porque todos fuimos protagonistas de una época que todavía nos cuesta entender. Es el paso vivo de los dictadores latinoamericanos que avasallaron todas las libertades y no conocie-

ron límites ni fronteras, geográficas ni humanas, el que marca el compás de este libro tan apasionante como duro.

Desde el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia o el comunismo en Rusia, todas las dictaduras del siglo XX eliminaron de entrada la libertad de prensa, como un medio para poder vulnerar los derechos de los ciudadanos sin que la población pudiera enterarse o reaccionar contra las arbitrariedades del poder. Con plena información del público, posiblemente, no hubiera sido posible cometer en el mundo tantos crímenes con tanta impunidad. La libertad de prensa, por ello, ha sido definida como la libertad sin la cual no pueden existir las otras libertades.

Bienvenido sea entonces este *Maten al cartero*, de Jorge Elías, que nos pone a los latinoamericanos un espejo, para mostrarnos que la libertad de prensa no es un derecho y menos un privilegio de los periodistas, sino uno de los instrumentos que tienen los ciudadanos para construir y mantener sociedades republicanas y pluralistas, cuyos gobiernos respeten la vida, los bienes y las garantías cívicas de sus habitantes.

José Ignacio García Hamilton

LAS VÍSPERAS DE DESPUÉS

E

RA un sábado de octubre de 1974. De noche. Un taxi recorría cansinamente el centro de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, al noroeste de la Argentina. Dos sujetos le hicieron señas al chofer para que se detuviera cerca de las calles Junín y San Martín; querían asaltarlo.

No sabían que el chofer era un oficial retirado del Ejército y que, por ello, portaba un arma. La desenfundó. En el tiroteo, uno terminó herido en un ojo y el otro se rindió. La policía provincial comprobó que no se trataba de delincuentes comunes, sino de policías federales que, al parecer, procuraban apropiarse del vehículo (móvil, en su jerga) para realizar un operativo. Ilegal, obviamente.

El diario El Pueblo, de San Miguel de Tucumán, consignó los hechos en su edición del día siguiente y, asimismo, reprodujo el parte de prensa de la policía.

“Esa noche, a la una de la mañana del lunes en realidad, una bomba destruía el frente de nuestro diario y dañaba prácticamente todos los vidrios y los frentes de media cuadra”, me dijo su entonces director, José Ignacio García Hamilton, tucumano ilustre que ha sabido plasmar en biografías noveladas las vidas de próceres latinoamericanos como Juan Bautista Alberdi (*Vida de un ausente*), Domingo Faustino Sarmiento (*Cuyano alborotador*), José de San Martín (*Don José*) y Simón Bolívar (*Simón*).

En la comisaría, mientras radicaba la denuncia, García Hamilton notó con sorpresa y decepción cierta “displacencia y desinterés” del jefe de turno.

Tres décadas después de aquel incidente, nunca antes revelado, concluyó: “Con nuestra mentalidad educada en el Estado de Derecho no podíamos entender ni darnos cuenta de lo que luego de algunos años todo el país tuvo trágica evidencia: el Estado empezaba a convertirse en terrorista con la complicidad o la anuencia de otras áreas de la misma administración”.

Abogado, periodista, historiador, doctor en derecho y en ciencias sociales, profesor universitario y conferencista en ámbitos académicos nacionales e internacionales, García Hamilton ha escrito *Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva)*, reeditado en España con el título *El autoritarismo hispanoamericano y la improductividad*. No era un amateur.

Desde un auto, ráfagas de ametralladora perforaron, días después del atentado, la fachada, la cortina metálica y el interior del edificio de El Pueblo. El plomo de las balas, incrustado en las paredes y en los ciellorrasos, caía de tanto en tanto sobre los escritorios y los biblioratos, cual recordatorio de otra agresión con tono de amenaza.

García Hamilton recibió entonces una nota, firmada por la organización de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), por la cual era conminado a abandonar en 24 horas el país bajo pena de ser “ajusticiado”. Permaneció en la provincia, no obstante ello. Y fue detenido, el 24 de noviembre de 1974, por la Policía Federal.

¿Los cargos? Algunos artículos publicados en el diario “habían caído mal en Buenos Aires”, obtuvo como respuesta.

Proceso judicial no hubo.

A los pocos días quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

“En nuestro diario teníamos una postura progresista, pero habíamos condenado duramente la violencia como método de transformación social –dijo García Hamilton–. Como ejemplo de esto, recuerdo claramente nuestro repudio categórico de los asesinatos de Arturo Mor

Roig y del industrial azucarero José María Paz por parte de los montoneros. Así, para la guerrilla éramos oligárquicos y para las llamadas fuerzas del orden éramos pro izquierdistas dentro de ese proceso de radicalización política en el que el país se sumergía.”

Faltaban apenas 15 meses para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Eran las vísperas de después. De un asunto mal manejado por tres, según el cantante Piero: almirante, general o brigadier.

De niño, García Hamilton, autor, también, de una obra de teatro, *Azúcar y estudiantes*, había jugado en una casa que pertenecía a la familia Padilla; estaba en la calle Santa Fe 630, de San Miguel de Tucumán. En ella, ahora sede de la Delegación de la Policía Federal en Tucumán, permaneció durante los primeros 10 días de su arresto. Fue, dijo, una suerte de inmersión en los códigos de la época, o de la lucha contra la subversión, traducidos por el jefe del área: “Si el chorro (ladrón) no tiene quien le compre lo robado ni quien le facilite un aguatero (sitio en donde esconderse), termina por no robar. Lo mismo pasa con los guerrilleros: si usted liquida a los que les venden víveres o mercaderías, evita que se publiquen noticias sobre sus acciones e impide que se les preste asistencia médica, y terminan por desaparecer”.

Era hombre de confianza del ministro de Bienestar Social del gobierno de María Estela Martínez de Perón, José López Rega, alias El Brujo, mentor de la Triple A. A tal punto era hombre de confianza de él que un día recibió un radiograma, del que se enteró García Hamilton, que decía: “Negro, cruzáte a Salta que te encargo la seguridad de la señora”. La señora era la presidenta de la República.

No tenía aspecto de policía, o de represor, sino de carnicero, según García Hamilton. “Cuando el subcomandante de la V Brigada de Infantería, un coronel amigo de los familiares, vino a la Delegación a interesarse por mi situación, fue recibido con absoluta descortesía y evidentes malos modales por el jefe policial –dijo–. Cuando yo le pregunté al delegado cuáles eran las publicaciones de mi diario que, según él, habían caído mal en Buenos Aires, aludió al taxista asaltado por policías federales y a una información referente a un

policía corruptor de menores. Después averigüé a través de mi secretario de redacción que esta última información era sobre un profesor de matemáticas que llevaba alumnos a su casa y los corrompía. Era también policía federal, pero eso no lo sabíamos y no se había publicado.”

Después supo García Hamilton, pariente de los fundadores y directivo de La Gaceta, el primer periódico dominical de la provincia de Tucumán y uno de los más influyentes del noroeste argentino, que había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por un pedido expreso de sus carceleros. En El Pueblo, decían, había “publicaciones que atacaban a las fuerzas de seguridad, contribuyendo al accionar de la izquierda y de la ultra izquierda”.

El oficial retirado del Ejército que conducía el taxi, asaltado aquella noche aciaga de octubre de 1974 por los dos policías federales, acudió a La Gaceta con el propósito de denunciar el hecho. Regresó horas después: pidió que no se publicaran sus declaraciones. Lo había citado el general Luciano Benjamín Menéndez, a cargo de la brigada provincial: una denuncia de ese calibre podía entorpecer la lucha contra la subversión, esgrimió

En la hoguera de Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en La Calera, Córdoba, desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979, ardieron el 30 de abril de 1976 colecciones completas de libros de Marcel Proust, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Sigmund Freud, Karl Marx, Julio Cortázar, Paulo Freire, Marta Hanneker, John Cooke y Eduardo Galeano, entre otros, definidos como un veneno para la nacionalidad argentina por el gobierno militar.

“Mientras estuve detenido en la Delegación de la Policía Federal comprobé que en ese lugar se imprimían las amenazas que distribuían las Tres A y que los miembros de esa organización eran policías que salían por las noches a poner bombas en nombre de la misma –dijo García Hamilton–. Y así estuve casi seis meses detenido, meditando en simplista policial sobre la conveniencia de evitar que se publicaran los hechos subversivos. Me trasladaron a la Escuela de Policía, donde alterné con el también detenido rector de la Universidad, doctor Pedro Amadeo Heredia.”

Desde su lugar de arresto, García Hamilton continuaba dirigiendo el diario. Un día ordenó publicar una información sobre un atropello contra una parroquia rural y un sacerdote sospechoso de ser de izquierda. Había sido cometido por un grupo de tareas bajo las órdenes del delegado de la Policía Federal que, a su vez, era responsable de su detención. Al día siguiente lo trasladaron, a punta de ametralladora, a la cárcel penitenciaria de Villa Urquiza. Tenían toda la intención, y todas las ganas, de darle un paseo (golpiza, en la jerga de ese inframundo), pero se opusieron los policías provinciales. En coincidencia con el nacimiento de su segundo hijo, el 1° de marzo de 1975, regresó a la Escuela de Policía. El delegado había sido reemplazado. Lo recibió “con lágrimas en los ojos” el rector Heredia.

“Hubo numerosas gestiones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) a mi favor, como también del diputado peronista Nicasio Sánchez Toranzo, el senador Eduardo “Lalo” Paz y muchos otros—dijo García Hamilton—. Don Ricardo Balbín, Fernando De la Rúa y Francisco Rabanal también realizaron reiterados pedidos, como muchos otros dirigentes y legisladores.”

Lo liberaron el 22 de mayo de 1975. Había compartido la habitación con el rector Heredia y con un senador provincial peronista cuyo nombre prefirió mantener en reserva. El senador había sido desaforado, juzgado y condenado por homicidio a raíz de una información publicada en El Pueblo: su amante, ingresada de urgencia en la guardia del hospital Padilla, de San Miguel de Tucumán, había sido víctima de un intento de asesinato.

En ese momento, un secretario de redacción de El Pueblo, Domingo Schiavoni, llevó la noticia al diario, rotulada como confidencial, y García Hamilton dispuso publicarla. Todo apuntaba contra el senador: la forma en que habían entrado los balazos, su auto estacionado frente a la casa de la mujer y su presencia en el hospital.

El senador, con el cual le había tocado en suerte compartir la habitación en una situación más que penosa, jamás profirió una palabra de reproche, según García Hamilton. Cada día le contaba una nueva versión del crimen, alegando su inocencia.

JORGE ELÍAS

Moraleja: “Quien cumple con su deber profesional nada debe temer como consecuencia”. En el mejor de los mundos posibles, no en las vísperas de después.

PRIMERA PARTE

1. LA POLICÍA DEL PENSAMIENTO



ENSAJE claro: viajaré mañana.

Mensaje encriptado: NXDBD TCADJ DJD.

Mensaje clave: viaja reman ana.

Es decir, reemplazada la ene por la eñe, viaja rémañ ana.

Y, una vez reagrupadas las letras, viajaré mañana.

Como en *1984*, la novela de George Orwell, los gobiernos del Cono Sur tenían, durante los años de plomo, su newspeak. O neolengua. De la cual se valían para compartir información confidencial. Secretos de Estado. En especial, de subversivos y de sospechosos por razones políticas. Presuntos agitadores o detractores de izquierda, en su mayoría, a los que debían derribar, o eliminar, como muñecos en un parque de diversiones. Los llamaban fuerzas negativas, según el dossier reservado de una conferencia bilateral de inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y de la Argentina. Que, entre otros enunciados, proponía: “Procurar una efectiva penetración en el campo de la superestructura de los medios masivos de comunicación”. Factor decisivo, al parecer.

Como en *1984*, el poder no era un medio, sino un fin: “No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura –dice Orwell–. El objeto de la

persecución no es más que la persecución misma. La tortura sólo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme?”.

Como en 1984, la mentira parecía verdad y la crueldad parecía respetable, dándole solidez al mismísimo viento: “...para enfrentar esta guerra psicopolítica hemos estimado que debemos contar en el ámbito internacional no con un mando centralizado en su accionar interno, sino con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias...”, dicen los fundamentos de la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, organizada entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975, en Santiago, Chile, por el coronel Manuel Contreras, al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Pura legitimación del horror en medio del horror. Del asedio de los secuestros, de las bombas y de las muertes provocado por extremistas de izquierda. Documentado, el 18 de septiembre de 1979, en una amable invitación de la Secretaría de Inteligencia de la Argentina, dirigida al jefe del II Departamento del Estado Mayor General de Paraguay, general de brigada Benito Guanes Serrano, para que tres miembros de su fuerza, con los grados de coronel o de teniente coronel, o funcionarios civiles de alto rango, participasen del curso superior de inteligencia que iba a ser impartido, del 1° al 30 de noviembre de ese año, en Buenos Aires.

La amable invitación mereció una respuesta no menos amable del ministro del Interior de Paraguay, Sabino Augusto Montanaro, fechada el 6 de octubre y firmada por el jefe de la Policía de Asunción, general de división Francisco Alcibiades Brítez: “...De conformidad a una orden invitación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, transmitida a este Ministerio por el jefe del Estado Mayor General, general de división Alejandro Fretes Dávalos, se servirá disponer que el inspector mayor Alberto B. Cantero, director de Política y Afines del Departamento de Investigaciones, se presente en la brevedad posible al II Departamento del Estado Mayor General para recibir instrucciones sobre su viaje a la República Argentina para seguir un curso superior de inteligencia a realizarse en la ciudad de Buenos Aires del 1° al 30 de noviembre del año en curso...”.

El temario era escueto, pero rotundo:

- Inteligencia y contrainteligencia.
- Subversión y terrorismo.
- Medios de comunicación social.

El orden de los factores no alteraba el producto. Los medios de comunicación siempre han sido considerados peligrosos por el poder. Fuera de facto, fuera democrático. Como determinados periodistas, des-carrados, capaces de dudar de la autenticidad de la información oficial y de revelar asuntos espinosos con investigaciones consideradas truculentas sin estar necesariamente enrolados en una corriente política. Periodistas señalados. Marcados. O, peor aún, fichados. A riesgo de ser torturados o de perder la vida, en algunos casos, o de hallar en el exilio la única forma de conservarla, en otros. Lejos del espanto, cerca de la desolación. Fugados, como viles criminales, del acoso y de la arbitrariedad. Menoscabados en su esencia. En su razón de ser: la búsqueda de la verdad.

“No escapará al elevado criterio del señor general la importancia que tiene el tema inteligencia nacional, especialmente en los tiempos actuales, caracterizados por la envergadura de la agresión terrorista internacional y por la acción insidiosa de la penetración ideológica –dice la carta de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con membrete de la Presidencia de la Nación Argentina–. Estoy seguro de que es indispensable para la seguridad de nuestras naciones realizar el mayor esfuerzo para que nuestros niveles de inteligencia se coloquen a la altura de la situación regional, continental y mundial.”

Eran frecuentes los cursos y las charlas. El intercambio de conocimientos y, sobre todo, de información. “Tengo el agrado de dirigirme al señor jefe de Investigaciones con el objeto de hacerle llegar invitación para asistir el día jueves 8 de julio del corriente año, a las 8 horas, en el salón de las Banderas del Ministerio de Defensa Nacional, a la conferencia que pronunciará el general de división Don Joao Matista de Oliveira Figueiredo sobre el tema Principios fundamentales sobre los que se basa un servicio nacional de inteligencia”, firma Fretes Dávalos una esquila dirigida al jefe de la División de Investigaciones de la Policía de la Capital, Pastor Coronel, fechada el 7 de julio de 1976 en Asunción.

Toda una novedad para un modesto educador paraguayo, Martín Almada, sorprendido el 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana, por toneladas de documentos con membretes, firmas y sellos en las afueras de Asunción. Sorprendido por los Archivos del Terror. Membretes, firmas y sellos que reflejaban los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Por los secretos, y la correspondencia, de su policía política, embarcada desde mediados de los setenta en una causa común con sus pares de la región: la Operación Cóndor.

La DINA, su virtual eje, había sido creada el 18 de junio de 1974 por Augusto Pinochet. Tenía fondos en abundancia y estaba por encima de las Fuerzas Armadas y de los carabineros. Contreras, llamado Cóndor Número Uno, pidió el 16 de septiembre de 1975 una partida adicional de 600.000 dólares y dos personas más en Perú, Brasil y la Argentina, y una más en Venezuela, Costa Rica, Bélgica e Italia, según uno de los documentos hallados por Almada. En el cual, entre otros motivos, aducía la necesidad de fondos frescos para la neutralización de los principales adversarios de la junta de gobierno en el exterior. Sobre todo, en México, la Argentina, Costa Rica, los Estados Unidos, Francia e Italia. Y una partida mayor para Perú: “Ayuda a nuestros partidarios en la Armada peruana y en la prensa, particularmente contribuciones a Equis X y Opción Libre”.

Pacto de caballeros

El documento sobre la reunión de inteligencia en Santiago, rubricado con el sello de secreto, era el blanqueo, más que el acta fundacional, de la Operación Cóndor. La partida de nacimiento: “La subversión desde algunos años se encuentra presente en nuestro continente, amparada por concepciones políticas y económicas que son fundamentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la religión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio –dice–. Esta situación descrita no reconoce fronteras ni países y la infiltración penetra todos los niveles de la vida nacional”.

La cruzada, en la cual estuvieron comprometidos los gobiernos de facto de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y, como último eslabón, Ecuador, era enfrentar la llamada guerra psicopolítica, de modo de contrarrestar en conjunto las agresiones de la subversión. No por separado, como hasta ese momento, sino codo a codo: “Los países que están siendo agredidos política, económica y militarmente (desde adentro y desde afuera de sus fronteras) están combatiendo solos o, cuando más, con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros”, dice el documento, dejando entrever un desprecio absoluto por el principio de territorialidad (reclamado por el gobierno democrático chileno en beneficio de Pinochet mientras estaba detenido en Gran Bretaña) y los procesos de extradición.

Del otro lado, en la vereda de enfrente, advertían con estupor: “La subversión ha desarrollado mandos intercontinentales, continentales, regionales y subregionales centralizados para coordinar las acciones disociadoras. A manera de ejemplo podemos citar la Conferencia Tricontinental de La Habana, la Junta Coordinadora Revolucionaria para el Sur, etcétera, todo ello amenizado con toda suerte de comités de solidaridad con..., de congresos para..., de tribunales de..., de encuentros..., de festivales..., de conferencias..., etcétera”.

Por la Operación Cóndor, el presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, Jorge Rafael Videla, en prisión preventiva desde 1998 por el robo de bebés durante la dictadura, ha sido el primer procesado, desde el 10 de julio de 2001, por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Un día antes, el agosto mentor de la Operación Cóndor, Pinochet, era eximido de juicio por la justicia chilena después de haber purgado 503 noches en los suburbios de Londres por el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón, finalmente denegado.

Roto el cerco con su detención, el 16 de octubre de 1998, las organizaciones de derechos humanos creyeron que era el final de la impunidad. Con la que el senador vitalicio, de ochenta y tantos años, manejaba los hilos de una democracia vigilada, según su definición. Resignada al unicato que instauró entre 1973 y 1990, tres años antes del golpe de Estado en la Argentina y siete después de la restauración cons-

titucional. Precipitada por la derrota en la Guerra de las Malvinas, a la cual Pinochet contribuyó, por temor a un conflicto posterior en la Patagonia, en alianza con Margaret Thatcher. Visita frecuente durante su estancia forzada en Gran Bretaña.

“La única forma de solucionar los problemas es olvidarlos”, improvisó Pinochet el 22 de septiembre de 1995. Su régimen, a diferencia de las desapariciones usuales en la Argentina y de los encarcelamientos frecuentes en Uruguay, se había caracterizado por fusilamientos colectivos y sumarios. Sin discriminar entre las víctimas. Como el cantante Víctor Jara, militante del Partido Comunista, de 40 años, autor de *Te recuerdo, Amanda* y de *Ruego de un labrador*. En prisión, según testigos, le pegaban en las manos con las cuerdas de la guitarra, y le gritaban: “¡Ahora, canta!”.

Garzón echó mano de los Archivos del Terror. Con el descubrimiento, en una comisaría de las afueras de Asunción, Almada se topó con su pasado. Signado por la muerte por tortura psicológica de su primera mujer, Celeste Pérez, docente, el 5 de diciembre de 1974, mientras él, secuestrado 10 días antes, era sometido a tormentos.

“Diez días después de mi secuestro, la despertaron a medianoche con la excusa de que fuera a retirar el cuerpo del educador subversivo que había fallecido; la noticia le provocó un infarto –me dijo Almada desde Manhattan, Kansas; dictaba clases de derechos humanos en la Universidad del Estado–. En los días anteriores recibía llamadas de la policía política. La hacían escuchar mis llantos y mis alaridos en la sala de tormentos. Murió por falta de atención médica. Los médicos del pueblo, San Lorenzo, no se animaron a brindarle atención por temor a las represalias.”

Almada, recibido de abogado en la Universidad Nacional de Paraguay, ha sido el primer doctor en ciencias de la educación de su país, carrera que cursó en la Universidad de La Plata, Argentina. En el momento de su secuestro, el 26 de noviembre de 1974, era el director del Instituto Juan Bautista Alberdi, de enseñanza primaria, secundaria y técnica, de San Lorenzo, Paraguay, cargo que ejercía desde 1960.

“Fui secuestrado en mi lugar de trabajo por la policía política y llevado directamente ante un tribunal militar integrado por autoridades paraguayas, civiles y militares, y por los agregados militares de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay –dijo–. Me imputaron haber escrito mi tesis doctoral, en La Plata, titulada *Paraguay. Educación y dependencia*. Víctor Oscar Espinoza, dactilógrafo de la carrera de veterinaria al servicio de la Operación Cóndor, envió un ejemplar a la policía política en septiembre de 1974. Stroessner la recibió el día de su cumpleaños, el 3 de noviembre.”

Era sospechoso. De promover el movimiento cooperativo Techo Propio a Cada Educador Paraguayo. De militar en el Movimiento Popular Colorado (Mopoco), concebido por Waldino Ramón Lovera y Miguel Angel Casabianca en Buenos Aires. De presuntas conexiones con estudiantes subversivos de la Argentina y de Chile.

“Los agregados militares estaban vestidos en forma impecable y usaban, en su mayoría, anteojos oscuros –dijo Almada–. Un militar chileno quería saber cuáles eran mis contactos en la Universidad Católica de Arica, en donde estudié sociología de la educación, y un comisario argentino quería saber cuáles eran mis contactos entre los estudiantes de La Plata y de Córdoba. Supe después que eran el coronel de aviación Jorge Oteiza López y el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Héctor García Rey, respectivamente. Como no respondí en la dirección que me señalaban, me torturaron paraguayos entrenados especialmente en la Argentina y en la Escuela de las Américas, de los Estados Unidos.”

A los ojos de sus captores, Almada era un terrorista intelectual. Mote aplicado habitualmente a todo aquel que hablara o escribiera de más. En especial, en medios de comunicación. En el sótano del instituto que dirigía, intervenido en los siguientes 20 años, adujeron que habían encontrado armas cortas y largas.

“Traté de explicarles que eran bolsas de galletas, de arroz y de azúcar de la cooperativa de consumo, en experimentación, y bolsas de cemento de la Cooperativa Docente de la Villa del Maestro, en construcción –dijo Almada–. Inventaron los cargos y las mentiras, presentándome como la cabeza visible del terrorismo en Paraguay. Querían impresio-

nar a la Embajada de los Estados Unidos, de modo de recibir más ayuda económica y militar frente al serio peligro de desestabilización que corría el país.”

El régimen vitalicio de Stroessner, legitimado por la Asociación Nacional Republicana (ANR), o Partido Colorado, era un modelo para el gobierno de Richard Nixon: “En el campo de los asuntos internacionales no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza comunista”, dijo el 4 de mayo de 1958 en una visita a Asunción mientras era vicepresidente de Dwight D. Eisenhower. Escala de una gira por la Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Que, accidentada por protestas en Lima y en Caracas, fraguó su pésima impresión de América latina: tanto él como Henry Kissinger, asesor especial para la Seguridad Nacional, primero, y secretario de Estado, después, no iban a escatimar esfuerzos en derrocar al presidente de Chile, Salvador Allende, de corte comunista, y en instaurar la dictadura de Pinochet.

No imaginaba Kissinger, premio Nobel de la Paz, que iba a recibir el 29 de mayo de 2001, mientras estaba alojado en el hotel Ritz, de París, un petitorio del juez francés Roger Le Loire. Lo citaba a declarar, por medio de la brigada criminal, por la desaparición de cinco franceses en Chile. Se negó. Había arribado dos días antes, invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Y, según el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, tenía una agenda sobrecargada.

Quince meses después, en agosto de 2002, el Departamento de Estado desclasificaba 4677 documentos de los viejos tiempos. Despachos confidenciales sobre los años de plomo en la Argentina, en particular. El diario La Vanguardia, de Barcelona, rubricaba en un editorial: “Las crueles ironías de la historia hicieron posible que recibiera el Nobel por sellar la paz con el Vietcong antes de demostrarse que se había entregado en cuerpo y alma a alargar aquella guerra durante años. Pero el fantasma que ahora persigue a este sátrapa de la realpolitik no son las atrocidades que propició en Vietnam o en Timor, sino su cruzada anticomunista en América latina. Una de las grandezas de los Estados Unidos es que todo lo que hace se acaba sabiendo, aunque sea con retraso. Por ello, ahora

puede certificarse documentalmente que Kissinger inspiró, con su Operación Cóndor, las atrocidades que cometieron las dictaduras militares. Incluso ignoró los informes críticos de su embajador en Buenos Aires, para quien «asesinar a sacerdotes y dejar 47 cadáveres en la calle en un solo día» no era la forma más adecuada para derrotar a nadie. Tras los atroces atentados del 11 de septiembre (de 2001), a Kissinger le faltó tiempo para asegurar que «tan culpables como los terroristas son quienes les brindan apoyo». Una reflexión certera aunque obscena proviniendo de quien, de haber nacido en los Balcanes, sería acusado de criminal de guerra”.

Kissinger, redimido con el Nobel, presidía el jurado del Premio Houphouet-Boigny, institución que galardona cada año a gente que aboga por la paz en el mundo. En esa ocasión iba a recaer en la alta comisionada de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, Mary Robinson.

“¿Qué diablos es América latina? —estallaba Nixon en el Salón Oval, el 8 de abril de 1971, mientras hablaba por teléfono con Alexander Haig, del Consejo de Seguridad Nacional—. Colombia, ¿tienen que cambiar de partido cada cuatro años? México es un sistema de un solo partido. Venezuela..., y el resto es caos, con la excepción de Brasil, que tiene relativa estabilidad. La Argentina, eso es una tragedia, tragedia porque, maldita sea, tendría que ser el segundo mejor después de Brasil y, de repente, ese hijo de puta de Perón dejó..., dejó... residuos.”

En la Argentina, el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, instaurado el 26 de marzo de 1971, negociaba en secreto con Juan Domingo Perón, exiliado en Madrid, la reapertura democrática y su retorno al país mientras las dictaduras militares ya campeaban en la región.

Siete micrófonos ocultos, cinco en el escritorio y dos en la chimenea, grababan en forma clandestina cada palabra de Nixon: “Creo que debemos apoyar a quienes sean nuestros amigos en el mundo —decía el 5 de marzo de 1971 al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Helms, también por teléfono—. Creo que en la mayoría de los países de América latina... no digo dictaduras, ésa es una palabra horrible, y les sonaría mal a los norteamericanos, pero un liderazgo fuerte es esencial. De Gaulle lo comprobó. Francia es un país latino, y hasta Fran-

cia, con toda su sofisticación, no pudo manejar una democracia. Italia..., España... y ningún país de América latina que yo conozca puede... con la excepción de Colombia”.

En otra conversación con Haig, el 11 de mayo de 1971, no iba a dejar dudas sobre su visión del patio trasero: “Esperamos demasiado de esta gente. Después de todo lo que pasaron, no podemos esperar que tengan elecciones libres de un día para el otro (...) Por Dios, miremos a América latina. Todos tienen constituciones como la americana (...) Pero nombren a un país que no esté muerto... En este momento, el único país más o menos es Brasil, y Brasil está bajo una dictadura. ¡Mi Dios! Los chilenos se están yendo por el tubo. Los peruanos están cayendo. Los bolivianos ya se fueron. Paraguay, por supuesto, es una dictadura... La Argentina es una mierda. Colombia, buu, buu... Venezuela va a lograrlo por el petróleo. Gobernar no es fácil”.

El Cóndor pasa

En el Paraguay de Stroessner, ponderado por Nixon, habían hallado refugio desde el médico nazi Josef Mengele hasta el jefe de la logia masónica P-2, Licio Gelli, así como represores franquistas y chilenos. Escudados en nombres falsos. Un racista alemán, Bernard Forster, fundó la colonia Nueva Germania en su vano afán de preservar la pureza aria, por ejemplo.

La policía de Stroessner era algo así como la policía del pensamiento de Orwell. Función que, desde Chile, ejercía Contreras, emisario de Pinochet, firmando las invitaciones, en octubre de 1975, para la reunión de fines del mes siguiente con sus pares de inteligencia de la región. A ellas adjuntó el temario: un pantallazo sobre la subversión y las redes de inteligencia en Chile, el primer día, y una invitación para exponer sobre idénticos asuntos en los otros países. Con un margen generoso para las intervenciones de los delegados extranjeros: una hora y media cada uno.

Prólogo del plan de coordinación de inteligencia de cada país. Que, en realidad, ya estaba en vigor. Sólo faltaba una organización formal

en la cual, según el Anexo A del esquema presentado por Contreras, una secretaría, una oficina de partes y otra de seguridad iban a depender de un director. De ellas iban a depender, a su vez, secciones específicas: banco de datos, antecedentes, microfilms, central de informaciones, transmisiones, criptografía, correos, apoyo administrativo, personal, materiales y fondos.

La mecánica de consulta, desglosada en el Anexo B, describía un centro coordinador que verificaba archivos propios y ajenos, recibía antecedentes y pedía más a los otros. Usaban para comunicarse entre sí un sistema de sustitución simple. Cada letra minúscula del alfabeto corriente, llamado claro, debía ser reemplazada por una mayúscula del alfabeto cifrador, llamado clave. La a por la D, la b por la Q, la c por la Z, la d por la Y, la e por la C y así sucesivamente hasta la z por la O.

Un jeroglífico, en apariencia: “Una vez cifrado todo el texto, se toman las letras y se agrupan de cinco en cinco –dice el Anexo C–. Se escriben en el formulario definitivo para transmitir o enviar. La letra eñe no se ha considerado, por lo cual deberá reemplazarse por la letra ene”.

El modelo del banco de datos era la filial de Interpol en París. Con un capítulo exclusivo: la subversión. “Para obtener un eficaz rendimiento en el uso del banco de datos es necesario contar con un sistema de comunicaciones moderno y ágil que permita cumplir con los principios de rapidez y oportunidad en la entrega de la información”, dice el documento, cual programa tentativo. Y da como ejemplos la transmisión por télex, los medios de criptografía, los teléfonos con inversores de voz y el correo.

Al pie figura el hombre de consulta, o contacto, ante cualquier duda de los participantes (tres por país): Luis Gutiérrez, télex INSRE. 40619-CL. Era el seudónimo, o el nombre de guerra, del coronel de aviación Mario Jahm Barrera, subdirector de la DINA, según Almada.

Stroessner, ofendido por haber recibido en noviembre una invitación fechada en octubre, decidió que asistiera el agregado militar en Santiago, coronel Ricardo Bogado Silva, en lugar de un representante de alto rango de la Inteligencia de Asunción. Luego iba a designar al general Alejandro Fretes Dávalos como coordinador del sistema. Era, según

Almada, el Cóndor Número Uno de Paraguay, así como Contreras era el Cóndor Número Uno de Chile, e impartía las instrucciones, desde un organismo militar denominado Esmegenfa, al jefe de la División de Investigaciones de la Policía de Asunción, Coronel, y a la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, a cargo de Antonio Campos Alum.

La Operación Cóndor, sin embargo, ya había cobrado sus víctimas. Como el general chileno Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Allende, y su mujer, Sofía Cuthbert, asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Como Bernardo Leighton, dirigente de la democracia cristiana chilena, y su mujer, Anita, heridos de gravedad, el 6 de octubre de 1975, en Roma. Como Almada. E iba a cobrar otras en 1976. Como el senador uruguayo Zelmar Michelini, del Frente Amplio, ex ministro de Educación, periodista del diario La Opinión, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Blanco, presidente de la Cámara de Diputados, secuestrados, en Buenos Aires, el 18 de mayo; sus cadáveres aparecieron tres días después en un auto, baleados y maniatados. Como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, cuyo cadáver fue hallado el 2 de junio bajo el puente Giles, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Como el ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffit, liquidados el 21 de septiembre en los suburbios de Washington, DC.

“Insistí con mi inocencia, lo que enfureció a Pastor Coronel, jefe de la policía política del Paraguay –dijo Almada–. Ordenó a sus especialistas que me hicieran cantar y me ordenaron firmar una declaración prefabricada. Tuve miedo de mirarlos. Me pareció que sus ojos lanzaban fuego. Que dejaban de ser hombres para ser bestias. Sabía que los verdugos de la Argentina y de Chile se presentaban ante sus víctimas con máscaras. En el régimen de Stroessner no necesitaban ocultarse. La ferocidad era mérito de rápido ascenso. Me torturaron con golpes de karate, látigos, cachiporras, focos enceguecedores, picanas, zambullidos en aguas fétidas. La sangre saltaba a borbotones. Manchó la ropa del comisario Camilo Almada Morel, entrenado en la Argentina, y aumentó su ira. Yo no veía personas, sino perros rabiosos. Música brasileña neutralizaba

nuestros gritos de dolor, desesperados, y evitaba que los vecinos y los feligreses que iban a misa en la Catedral, a dos cuadras, advirtieran ese infierno.”

A un paro cardíaco, razón de una internación de urgencia en el Policlínico Policial de Asunción, sobrevino una recuperación rápida y renovadas torturas. Entre los documentos que halló Almada en los Archivos del Terror, uno, en particular, le llamó la atención. Era un libro titulado *Cómo mantener vivos a los torturados*. Luego desapareció en forma misteriosa. Por más que, dos días después del descubrimiento, el diario Última Hora, de Asunción, hubiera reproducido algunas de sus instrucciones. Como el baño de descarga: un litro de agua y cinco cucharadas de sal para aplacar el dolor.

“En la noche del 26 de diciembre de 1974 fui trasladado con otros 42 prisioneros políticos a la Comisaría Primera, sede la naciente Interpol-Paraguay –dijo Almada–. Estábamos en el primer piso y, desde la ventana, veíamos que los verdugos jugaban ping-pong y fútbol de salón los sábados por la mañana. Los conocíamos a todos, pero no sabíamos sus nombres. Un día fue puesto en nuestra celda el comisario Mario Mancuello, castigado por no haber informado que su hijo Carlos pertenecía al Centro de Estudiantes de la Universidad de La Plata. Yo quería saber cómo había muerto mi esposa y por qué me interrogaban militares extranjeros. Martín Almada, me respondió, estamos en las garras del Cóndor.”

Era la primera vez que oía de la Operación Cóndor. El hijo de Mancuello, Carlos, murió, asesinado, apenas pisó Asunción. Su nuera, Gladys Ríos de Mancuello, estudiante, nacida en Mercedes, provincia de Buenos Aires, había sido enviada al centro de detención de Emboscada, a 45 kilómetros de la capital paraguaya; estaba embarazada.

Por mala conducta, Almada fue transferido, el 3 de mayo de 1975, a una prisión de alta seguridad. Famosa por su nombre: Sepulcro de los Vivos. En ella estaban desde hacía 15 años los detenidos más antiguos de América latina: Antonio y Ananías Maidana, Alfredo Alcorta, Julio Rojas, Virgilio Bareiro, Dimas Acosta y Felipe Vera Báez, entre otros.

“Me parecía haber sido transportado a una de esas prisiones romanas de la era esclavista que, siendo niño, había visto en la película *Quo Vadis?* durante Semana Santa –dijo Almada–. Una verdadera jaula. Desde el exterior, oficiales y sargentos nos observaban como seres extraños, venidos de otro planeta. No existíamos, en suma. En la celda contigua, pero en peores condiciones que nosotros, estaba un argentino, Amílcar Latino Santucho, abogado (hermano de Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP). Me comentó que había pasado por el vía crucis del Tribunal Militar Cóndor con su compañero chileno, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue la segunda vez escuché que estábamos en las garras del Cóndor.”

Fuentes Alarcón había sido arrestado mientras cruzaba en ómnibus la frontera argentino-paraguaya. La Comisión Rettig, encargada de investigar los crímenes de la dictadura de Pinochet, concluyó que había sido capturado e interrogado merced al trabajo conjunto de los servicios de inteligencia de la Argentina, de representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires (en contacto con la Policía de Investigaciones de Chile) y de policías paraguayos. En Santiago se perdieron sus rastros.

Poco a poco, la idea de una conspiración internacional iba cobrando cuerpo en Almada. En prisión conoció a la doctora Gladys Meilinger de Sannerman, paraguaya, dueña de un sanatorio en Misiones, secuestrada en 1974 por la policía política de Stroessner con la ayuda de las autoridades argentinas. El marido de ella, Rodolfo Jorge Sannerman, también paraguayo, había sido torturado en Buenos Aires.

“La doctora Sannerman me contó que éramos víctimas de la alianza militar y política de intercambio de información, ubicación de supuestos subversivos o terroristas, y tortura, ejecución o traslado, sin más protocolo o pase libre de cualquier país miembro –dijo Almada–. En ese momento ya tenía claro el panorama. También conocí en ese infierno a un joven estudiante argentino, Oscar Rojas, muy católico, entregado a las autoridades argentinas.”

En el Sepulcro de los Vivos, Almada hizo huelga de hambre durante 30 días. Intervinieron Amnesty International y el Comité Inter-Iglesias de Paraguay. Y, gracias a ellos, recuperó la libertad. Fue el 27 de septiembre de 1977. Por nuevas persecuciones halló asilo en la Embajada de Panamá y, el 28 de febrero de 1978, partió rumbo a ese país con sus tres hijos, Ricardo, Lincoln y Celeste. Fue declarado huésped de honor por su libro *Paraguay. Educación y Dependencia*, inspirado en el modelo educativo panameño de 1971. Recibió, asimismo, condecoraciones en Francia, en Brasil y en la Argentina.

En París, mientras trabajaba como consultor de la Unesco, quiso reconstruir su pasado. Y, para ello, se valió del consejo del comisario Mancuello, ex compañero de prisión: seguir la Revista Policial Paraguaya. Tres hechos hilaron su búsqueda: la caída de Stroessner, entre el 2 y 3 de febrero de 1989, por un golpe de Estado encabezado por el general Lino Oviedo, razón de su asilo desde entonces en Brasilia; la reforma constitucional, y la incorporación del recurso de hábeas data en junio de 1992. Tres meses después pidió sus antecedentes a la Policía paraguaya, pero halló una respuesta negativa: no existían.

Almas en pena

“Un día me encontré con una señora de más de 70 años –dijo Almada–. ¿Usted es el maestro Martín Almada?, me preguntó Nos abrazamos, emocionados. Después cambió de actitud. Ah, ustedes, los que se fueron, vuelven como héroes, y nosotros, los que nos quedamos, seguimos sufriendo, me dijo. Pastor Coronel (jefe de la policía política) me sacó por la fuerza esa propiedad que ve allí. No se acerque a ella en vísperas de mal tiempo, me dijo, porque jóvenes argentinos, uruguayos, chilenos lloran, piden socorro a gritos. ¿Viven allí?, le pregunté. No, me dijo, son sus almas en pena.”

Un allanamiento de los archivos de la Jefatura Policial, en Asunción, no había dado resultado. En el despacho de abogado de Almada, después de un llamado telefónico, apareció una mujer elegante que le dio

una pista: los papeles estaban en la casa señalada por la anciana, la comisaría de Lambaré, barrio obrero, a 20 kilómetros de la capital paraguaya. Después supo que su informante había estado casada con un funcionario gubernamental que se había enamorado de su secretaria. Una anécdota trivial, pero crucial frente al allanamiento encabezado por el juez José Agustín Fernández, venciendo la resistencia inicial del comisario.

“Eran los 50 años de la represión en Paraguay en los documentos de la policía secreta de Stroessner –dijo Almada, emocionado–. La conexión nazi, el tráfico de armas, las listas de víctimas de diversas nacionalidades, los informantes, el espionaje telefónico de los líderes de la oposición y de las embajadas, miles de fotografías, las pruebas de que los agregados militares eran los ojos y los oídos de la Operación Cóndor...”

Los documentos, casi cinco toneladas, fueron trasladados, por orden del juez Fernández, a un depósito en el Poder Judicial de Paraguay. La Operación Cóndor llegó a tener su propio banco en Asunción, la financiera Urunday, quebrada en 1997. Muchos han negado su mera existencia. Como Hugo Bánzer, dictador boliviano devenido en presidente democrático hasta que renunció, el 6 de agosto de 2001, a causa del cáncer por el cual murió poco después: “Digo a fe de hombre, ni siquiera de presidente, que nunca he sabido y ni siquiera sé de qué se trataba la Operación Cóndor –dijo–. Lo niego y voy a negarlo siempre, y que me prueben que yo he tomado parte en eso. Estoy seguro de que no va a haber pruebas porque eso no ha funcionado en Bolivia”.

Tan rotunda certeza contrastó con la afirmación del diputado Fernando Kieffer, ex ministro de Defensa de Bánzer: “Por supuesto que existió, pero los gobiernos de Bolivia, de Perú y de Brasil fueron accesorios de las acciones que desplegaron los militares argentinos y chilenos”, dijo por televisión.

La ocupación de la radio Pío XII, propiedad del obispado boliviano, así como la expulsión de sacerdotes y el allanamiento de parroquias, derivó, en julio de 1975, en un documento con tono de parte de inteligencia que circuló por algunas redacciones. Entre ellas, la revista

Diálogo Social, de Panamá, consideraba que no se trataba del problema de un país en particular, sino de América latina en general.

“Los apresamientos se han de hacer preferentemente en el campo, en calles silenciosas o a altas horas de la noche –dice el décimo de los 15 puntos–. Una vez que se ha realizado el apresamiento de un sacerdote, el Ministerio ha de tratar de introducir en su portafolio, y si es posible en su habitación, propaganda subversiva y algún arma (preferentemente pistola de gran calibre) y se ha de tener listo su historial para desprestigiarlo ante los obispos y la opinión pública.”

Instaba entonces a publicar solicitadas en medios de comunicación (El Diario, de La Paz, sugería) para desprestigiar a monseñor Manrique, tildado de enemigo del gobierno de Bánzer, y aquellos sacerdotes y religiosos que representaban una línea de avanzada en la Iglesia.

De la Operación Cóndor ni los norteamericanos hablaban. En algunos documentos desclasificados por el Departamento de Estado, los embajadores se preguntaban sobre ella y sobre su eventual rédito para el interés nacional de los Estados Unidos. En la neolengua, o el newspeak, de la época mencionaban el peine grueso (aniquilar el brazo armado de la subversión) y, como correlato de él, el peine fino (persuadir a periodistas, escritores, religiosos y demás sospechosos).

Mensaje claro: continuará.

Mensaje encriptado: ZVJWXJLDTD.

Mensaje clave: continuara.

Es decir, acentuada la última letra, continuará.

Y sellará una era.

De terror.

2. LA IGNORANCIA ES LA FUERZA

P

ROMEDIABA la década de 1920. George Orwell era un oficial de subdivisión de la Policía de Moulmein, allá lejos, en la baja Birmania, antigua colonia británica. Tronó bien temprano el teléfono, despabilándolo. Tanteó el auricular: “¡Un elefante está devastando la feria!”, reconoció en el grito la voz de un subinspector birmano.

Los elefantes eran empleados en las plantaciones de teca para desplazar troncos. Siempre existía el riesgo de que alguno se descarriara y provocara destrozos. Algo usual para un nativo, no para un blanco como él. Tomó su Winchester 44, un rifle demasiado pequeño para vérselas con un animal tan grande, y montó en su caballo.

La mañana era húmeda y sofocante, como cualquier mañana de la estación de lluvias. En el camino, interrumpido por birmanos alterados, iba enterándose de las fechorías del elefante: había hecho añicos una choza de bambú, había matado una vaca, había invadido un puesto de frutas, había dado vuelta un carro municipal... Su cornac, el único capaz de detenerlo, había salido a buscarlo en la dirección equivocada; ya se encontraba a 12 horas de distancia.

A Orwell (Eric Arthur Blair, su nombre original) lo aguardaban el subinspector y cuatro alguaciles hindúes en el barrio en el que el elefante había sido visto por última vez. Era un laberinto de escuálidas chozas de bambú techadas con hojas de palma que culebreaba en una ladera empinada. Dieron vuelta en un recodo y hallaron el cadáver de un negro tendido en el barro. El elefante, aseguraban los dudosos testigos, le había puesto una pata encima tras sujetarlo con la trompa.

Suficiente, se dijo Orwell, empuñando ahora un rifle prestado de mayor calibre. Les avisaron que estaba en los arrozales y allá fueron, cuesta abajo, convocando curiosos a sus espaldas. Un blanco con un arma al hombro no era cosa de todos los días.

El elefante ni se mosqueó. Orwell se dio vuelta y contempló, azorado, un océano de más de 2000 rostros amarillos, felices y excitados.

Dudó un instante, pero finalmente cerró el ojo izquierdo y oprimió el gatillo. “Muchas veces me pregunté si alguien se habría dado cuenta de que yo lo había hecho simplemente para no parecer un tonto”, concluye el relato.

Crédito para Jean François Revel: “La primera de las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”, sentencia. Es decir, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, como dice el pobre Winston Smith en *1984*. “Y la libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro –redacta clandestinamente–. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.”

El comportamiento es un espejo frente al cual cada uno recoge su imagen. Está edificado sobre una pila de intereses particulares, no generales, de los cuales saca provecho, a veces, gente inescrupulosa en desmedro de valores tan esenciales como la libertad, la democracia y la justicia. Sometidos a dieta, en algunos casos. A reglas no escritas de convivencia, por más que la violencia sea consecuencia de otra violencia. Como en América latina: de afanes revolucionarios tan totalitarios, en el fondo, como la réplica por la cual terminaron pagando justos y pecadores. Por figurar en una agenda. Por estar en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Por meras sospechas. Por miedo, el lenguaje compartido. De un lado y del otro. Miedo a perder, sobre todo. A ir contra la corriente. Contra los usos y las costumbres de un período determinado, despiadado, en el cual un elefante dejó sus huellas.

Las mentiras, tiempo después, navegan a la velocidad de la luz por correo electrónico: desde las alarmas sobre virus de computadoras hasta las cadenas de la suerte y las campañas por la salud de seres tan ignotos como una tal Jessica y un tal Brian. Puro spam, en la jerga informática, cual renacimiento de Nostradamus o de Orson Wells.

Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado. En el despuntar del siglo XXI, o del tercer milenio, había en el mundo 50 millones de cámaras de televisión que figoneaban la vida ajena, amenazando la privacidad. A tal punto que 3000 millones de diálogos telefónicos, mensajes de correo electrónico y transmisiones vía satélite eran monitoreados por terceros. Desde las som-

bras. En febrero de 2001, gracias a la cámara de un cajero automático de Messina, Italia, un comerciante pudo probar que un cuervo (un ave, literalmente) le había arrebatado el dinero de las manos. Absurdo, pero real. Y, sobre todo, filmado.

Parecieron preverlo los participantes del III Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), realizado entre el 28 y el 30 de marzo de 1977 en Asunción, Paraguay: “Investigar a escritores, periodistas, comentaristas y locutores extranjeros que sean comunistas para desenmascararlos ante las autoridades competentes como subversivos y solicitar su salida del país, adoptando, de igual modo, las medidas que sean pertinentes en relación con los nacionales”, acordó.

El documento, presentado por la Comisión de Prensa, Radio y Televisión de la CAL por iniciativa de la delegación de México, habrá contado con el beneplácito del anfitrión, Alfredo Stroessner. En dos de sus cuatro artículos conjuga, cual latiguillo, el verbo desenmascarar. O, en otros términos, señalar, apuntar y, en el caso más expeditivo, disparar. Si no, amenazar. O presionar. O capturar. O encarcelar. O torturar. O, finalmente, eliminar, aniquilar, “llevando a cabo, entre otras medidas, manifestaciones populares con padres de familia, maestros, estudiantes, obreros y campesinos, etcétera, en contra de esos medios, desenmascarándolos como dañinos para el sentir patriótico del pueblo; invitando a la ciudadanía en general a no comprar la prensa comunista, a no ver los programas de TV marxistas, ni escuchar las estaciones de radio de estas tendencias. Exhortándolos también a no comprar los productos que se anuncien en estos medios. Adquiriendo sólo los que ofrezcan los medios patrióticos y anticomunistas”.

El asunto era borrar de la faz del planeta todo vestigio de juicios contrarios a los valores occidentales y cristianos, uniformando criterios, dictando opiniones y coartando libertades. Entre ellas, la de expresión. Más allá de que, del otro lado, la violencia fuera el idioma casi único. Exclusivo. El vínculo entre la subversión y el terrorismo de Estado. Las dos caras de los años que vivimos en peligro. Cercados entre izquierdas descerebradas y derechas enceguecidas.

De ahí, la solución impulsada por la CAL: “La fundación de periódicos, editoriales, estaciones de radio y TV que produzcan materiales y lo difundan con gran contenido anticomunista, incorporando sistemáticamente, para que trabajen en estos medios, a todos los periodistas, escritores, locutores, comentaristas y técnicos anticomunistas que haya en cada país”, dice el tercer artículo del documento.

Los lineamientos básicos, expuestos en un documento previo datado en Guadalajara, México, decían que los periodistas que asistieran al foro como miembros de la Comisión de Prensa, Radio y Televisión podrían presentar planes de acción cuyo fin fuera contrarrestar el empleo de esos medios masivos.

Textualmente para:

a. desprestigiar mundialmente a los gobiernos e instituciones patriotas y anticomunistas, difundiendo toda clase de calumnias para echar contra ellos a todo el mundo, propiciando estrangularlos con un cerco internacional, político, económico y moral que facilite su derrocamiento;

b. desprestigiar en su propio país a los gobiernos e instituciones patrióticas y anticomunistas, engañando al pueblo para lanzarlo contra dichos gobiernos e instituciones y así facilitar su caída y su sustitución por regímenes comunistas o cómplices del comunismo;

c. engañar a los pueblos, ocultando los defectos y fracasos de los regímenes marxistas y la maldad del socialismo colectivista, haciendo aparecer a éste como el sistema que traerá a los pueblos su mejoramiento y su felicidad, con el fin de facilitar el triunfo de este sistema que esclaviza a las naciones y las sume en la pobreza y la miseria;

d. calumniar al régimen de libre empresa y propiedad privada, y facilitar todos los fines perversos del comunismo, engañando a los pueblos mediante el uso masivo de la prensa, la televisión y la radio.

La vara que iban a aplicar era tan difusa como toda receta discriminatoria. Descontaban, de hecho, la pertenencia de tal o cual periodista a tal o cual línea de pensamiento y, por ello, debía desaparecer. No dejaban resquicio, siquiera, para el lavado de cerebro al que termina sometido Winston en la novela de Orwell. No dejaban resquicio para

nada más que un extremismo tan nocivo como el otro. El que pretendían combatir. Fumigar, al parecer. Exterminar.

“La formación profesional de nuevos escritores, periodistas, locutores, comentaristas y técnicos de radio y TV, inscribiendo a jóvenes anticomunistas en las mejores universidades de América latina, que por su ideología y alto nivel académico garanticen tanto la preparación de buenos profesionistas como su formación ideológica”, propone el cuarto y último artículo del documento, firmado por el doctor Martín Chiola, presidente, y el profesor Ramón Rodríguez, secretario.

Buenos muchachos

Un símbolo de esos tiempos, huérfanos de democracia. Ricos en colaboración entre los regímenes de facto. Documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos hablan de la cooperación entre militares argentinos y uruguayos en secuestros realizados en Buenos Aires y del conocimiento, en Washington, DC, del entrenamiento que agentes de la CIA dispensaban a represores en Montevideo. Todo bajo la supervisión del comisario Hugo Campos Hermida, una de las cabezas del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

Uno de los documentos, fechado el 2 de julio de 1976, dice: “Un grupo de uruguayos recientemente secuestrado y luego liberado en la Argentina pudo reconocer y nombrar a oficiales uruguayos que están desarrollando operaciones conjuntas con oficiales argentinos contra los refugiados de manera muy activa en Buenos Aires”. Está dirigido al embajador norteamericano en Montevideo, Ernest Siracusa, y firmado por su par en Buenos Aires, Robert Hill.

Su sucesor, Raúl Castro, iba a recibir informes sobre una violencia fuera de control entre la derecha y la izquierda. Sin mayores detalles sobre los desaparecidos ni mención alguna de la Operación Cóndor, según el adjunto de la sección política de la Embajada en Buenos Aires entre 1977 y 1979, Allen “Tex” Harris, autor de alrededor de 9500 fichas de violaciones de los derechos humanos.

Tema ignorado antes del gobierno de Jimmy Carter. Que dividía las aguas en Washington, DC. Sobre todo, en el Departamento de Estado: la subsecretaria del área, Patricia Derian, se inclinaba por presionar a los regímenes militares; el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman, embajador en la Argentina en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín y en los comienzos del gobierno de Carlos Menem, prefería preservar las relaciones bilaterales.

El embajador Castro, de español fluido, había sido, entre 1975 y 1977, el primer gobernador de Arizona de origen mexicano. En aquellos años, como en 1984, la dialéctica hegeliana campeaba con sus dobles sentidos. La guerra era la paz, la libertad era la esclavitud y la ignorancia era la fuerza. Ergo: la ignorancia de muchos era la fuerza de unos pocos.

Tarde, a eso de la una de la mañana, Harris conducía rumbo a su casa, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Frente a un semáforo en rojo, ocho hombres armados descendieron de dos autos. Lo rodearon. Pensó que iban a secuestrarlo. O matarlo, según el modus operandi de los años de plomo. “Tomé el incidente como una señal de que los militares estaban disgustados con mi trabajo”, me dijo casi un cuarto de siglo después en McLean, Virginia, en donde vivía. Fue uno de los peores momentos de su vida, confesó.

Hasta entonces, Harris creía que recopilar información sobre familiares de desaparecidos, su misión en la Argentina entre 1977 y 1979, no era bien vista por el gobierno militar. No al extremo de arriesgar su vida, empero. Es alto, de dos metros exactos, y de textura física robusta. Corpulento, capaz de meter miedo. Miedo que, en realidad, sintió él aquella noche, en un suburbio porteño, rodeado de ocho rufianes que, envalentonados con sus armas, parecían decididos a liquidarlo. Demasiados contra uno solo, por más que fuera una molestia, o un escollo, para los planes del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Había sido enviado a Buenos Aires en junio de 1977. Pertenecía en forma discreta a un ala nueva del Departamento de Estado: Derechos Humanos. Al principio, Harris mandaba informes y Castro, nacido en 1916 en México, ciudadano norteamericano desde 1939, recibía felicita-

ciones. Eran los primeros tiempos de una convivencia que iba a tornarse difícil. Casi imposible.

Entre 1977 y 1979, Derian estuvo tres veces en Buenos Aires. Y, a puertas cerradas, eran frecuentes las discusiones de ella con el embajador, cada vez más afecto a la línea Todman de no meter las narices en el problema.

“El gobierno argentino era hostil con nosotros –dijo Harris–. Me llamó la atención, apenas arribé al país, que un grupo de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza hiciera rondas, todos los jueves, frente a la Casa de Gobierno. Era la prueba de que algo grave estaba ocurriendo. Cuando acepté el cargo, mi condición había sido que no hubiera restricciones para que la gente informara a la Embajada acerca de las desapariciones. Me entrevisté con quienes sufrían atropellos, fueran víctimas o familiares, e iba a las concentraciones de las Madres de Plaza de Mayo.”

Doble mérito: habla poco español.

Recogía los casos en fichas pequeñas de cartón con renglones. Que, mes tras mes, iban a multiplicarse como panes. Los familiares de los desaparecidos, una vez que corrió la voz, formaban filas frente a la Embajada. Lo cual significaba una amenaza para un régimen que estaba convencido de que obraba en forma correcta contra el comunismo y de que los argentinos, por esa razón, eran derechos y humanos. Un régimen que se ufanaba, asimismo, de haber extirpado el cáncer de la subversión. No sólo en el país, sino, por añadidura, en el hemisferio occidental.

“¿Por qué insistían los militares argentinos en la guerra contra sus propios ciudadanos sin reparar en las consecuencias para su país y para ellos mismos? –dijo Harris–. Había una clara intención de exterminar gente. Los militares se enloquecieron. Creyeron que podían decidir sobre la vida y la muerte de miles de personas sin pensar en las repercusiones políticas e históricas. Era una locura.”

Sus informes, primero aceptados de buen grado por sus pares de la Embajada, iban directamente a Washington, DC. Sin enmiendas ni tachas. “Sólo contaba los hechos”, dijo. Pero la Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, chocó con el primer obstáculo: le negaron, en los Estados Unidos, un pedido de cascos para pilotos de la Marina.

Era el indicio de que la tarea de Harris, silenciosa, estaba surtiendo efecto, por más que, en el Departamento de Estado, Todman y Derian mantuvieran agrias disputas sobre el camino por seguir. Hubo después cortes de fondos previstos para el país en los programas de los Estados Unidos para la compra de material militar.

Castro, embajador político que había ocupado idéntico cargo en El Salvador, entre 1964 y 1968, y en Bolivia, entre 1968 y 1969, notaba que un oficial joven, de rango medio, estaba complicándole las cosas en su misión en la Argentina, en donde iba a terminar su carrera en 1979.

“Los cables dejaron de ser seguros –dijo Harris–. Tuve que empezar a usar aerogramas, memorándums y cartas oficiales clasificadas. Uno de los informes, copiado para el embajador Castro, fue retirado de la bolsa diplomática. Me advirtieron que no iba a ser despachado porque contenía información que perjudicaba a un holding subsidiario de la Marina que dependía de un seguro para astilleros argentinos. Es decir, para los mismos que manejaban la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como un centro clandestino de detenciones.”

Harris volvió a los Estados Unidos en agosto de 1979. Lo sancionaron. “Casi fui echado por insubordinación”, dijo con un dejo de amargura. Dos décadas después recibió la máxima distinción del Departamento de Estado. Su valentía en la Argentina, por la cual corrió peligro de muerte, estuvo a punto de costarle la carrera. Que comenzó en 1965 y durante la cual prestó servicios, también, en Washington, DC, y en las embajadas de los Estados Unidos en Venezuela, en Sudáfrica y en Australia. “Si miro atrás, me doy cuenta de que, aún en esos años terribles, uno solo puede hacer la diferencia”, dijo. Pero admitió de inmediato que nunca sintió tanto miedo como aquella noche, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

De la Operación Cóndor no sabía, no contestaba. No hablaba. Era una muletilla tabú. Vedada, por más que fuera casi una marca registrada. Pocas veces mencionada. Menos aún escrita. Salvo en raras ocasiones. Como en un oficio firmado por el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción, Pastor Coronel, dirigido al jefe de la fuerza, general de división Francisco Brítez, que revela, en un recuento

de las actividades del Movimiento Popular Colorado (Mopoco) y del Partido Colorado en el Exilio, raleados por la dictadura de Stroessner, la participación de militares argentinos en ella.

Está fechado el 13 abril de 1981. Y dice textualmente: "...El Mopoco, por su parte, a más de ir absorbiendo a los ex seguidores de Méndez Fleitas, está permanentemente trabajando en asegurar su seguridad interna para poder actualizar sus cuadros directivos, pero ante la posibilidad de que sean detectados y tomados por las Fuerzas Militares Argentinas, dentro de la Operación Cóndor, están analizando y buscando un lugar seguro donde realizar sus reuniones principales y la gran Convención...".

El oficio es uno de los pocos en los cuales figura con todas las letras la Operación Cóndor. Ha sido rescatado por Martín Almada, el descubridor de los Archivos del Terror. Copia de él obraba en poder del juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral en vísperas de que tomara una decisión sobre la situación procesal de Videla, bajo arresto domiciliario por el robo de bebés en cautiverio durante la dictadura.

En un cable fechado el 19 de julio de 1976, la Embajada norteamericana en Buenos Aires comunica al Departamento de Estado que los gobiernos de la región "se han organizado en el intercambio de información y de cooperación en determinadas áreas". Entre paréntesis figura la Operación Cóndor, advirtiendo sobre los lazos entre Chile y la Argentina en asuntos de seguridad, así como entre Chile y Uruguay, aludiendo que se trataba de una respuesta "a la internacionalización del terrorismo y de la subversión, representada en el Cono Sur por la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria)".

En otro cable, fechado el 19 de octubre de 1976, el almirante César Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, se mostraba "eufórico" y en estado de "júbilo", según el embajador Hill, a raíz del mensaje inequívoco que había recibido del secretario de Estado, Henry Kissinger, en una visita reciente a Washington, DC: la prioridad no era respetar los derechos humanos, sino terminar con el terrorismo.

"Guzzetti viajó a los Estados Unidos totalmente convencido de que iba a escuchar algunas advertencias fuertes sobre las prácticas rela-

tivas de los derechos humanos de su gobierno –escribió Hill–. En vez de eso volvió en un estado de júbilo, convencido de que no hay un problema real con los Estados Unidos sobre ese asunto (...) Mientras este convencimiento perdure, no será ni realista ni eficaz que esta Embajada insista en presionar con sus reclamos al gobierno argentino sobre las violaciones de los derechos humanos.”

En respuesta al cable, Kissinger fue informado por un funcionario del Departamento de Estado: “Bob Hill ha registrado en forma oficial su preocupación por los derechos humanos en una queja amarga sobre nuestro supuesto fracaso con el canciller Guzzetti sobre cuán seriamente vemos nosotros la violencia en la Argentina”. Ni se mosqueó, aparentemente, como el elefante descrito por Orwell. Y Hill recibió como indicación: “En estas circunstancias, los argentinos van a tener que tomar sus propias decisiones”.

Guzzetti, oídos sordos frente al reproche de Hill por el impacto negativo que podía tener en la opinión pública “el asesinato de sacerdotes y arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día”, había estado cuatro meses antes con Kissinger en Santiago. Le habría prometido que a fines de 1976 iba a ser liquidado el terrorismo en la Argentina.

Por la Operación Cóndor, Videla se negó a declarar el 20 de junio de 2001. Canicoba Corral, a su vez, pidió las extradiciones de Stroessner, asilado en Brasilia, y de Manuel Contreras, ex director de Inteligencia Nacional de Chile, detenido en Santiago, y las capturas de tres militares y de un policía uruguayos comprometidos con secuestros y torturas en la Argentina.

De su existencia habría sido notificado en agosto de 1975, si no antes, el general Vernon Walters, entonces director adjunto de la CIA. Documentos desclasificados del Departamento de Estado revelan que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) habría colaborado con la represión en el Cono Sur, prestando instalaciones de comunicaciones para operaciones de inteligencia. En uno de los cables, fechado en 1978, el entonces embajador norteamericano en el Paraguay, Robert White, cita al general Alejandro Fretes Dávalos, colaborador de Stroessner, y confirma que compartieron información.

No por nada el director del FBI, Clarence Kelley, agradecía a Coronel, el 10 de diciembre de 1976, con una esquila del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la amistad y la cooperación en todas las áreas de la actividad humana, enumerando el cumplimiento de la ley, los negocios y las artes, así como los asuntos diarios de cada ciudadano.

Varios documentos reflejan los vínculos entre los países en esa suerte de multinacional de la persecución de presuntos subversivos, pero omiten el nombre que sombreó una era con sus alas desplegadas. Es decir, la Operación Cóndor. Uno de ellos, rotulado como secreto, aboga por la necesidad de una eficiente coordinación de actividades de inteligencia entre los ejércitos de la Argentina y de Paraguay, de modo de coartar los planes de las llamadas fuerzas negativas.

Un oficio dirigido a Coronel por el comisario inspector Alberto Cantero, director de Política y Afines, dice que el 16 de mayo de 1977, a las 16.34, había partido desde Asunción hacia Buenos Aires un avión bireactor de la Armada Argentina, con matrícula 5-7-30-0653, en el que iban detenidos uruguayos y argentinos. Habían sido entregados por dos militares paraguayos a dos militares argentinos. “Ambos del SIDE (Servicio de Inteligencia del Ejército)”, rubrica, dejando entrever las tareas conjuntas como algo habitual. Casi un trámite. Otro, firmado el 27 de marzo de 1974 por Coronel, consigna que había sido enviada a Montevideo una sospechosa de pertenecer a los tupamaros, Victoria Godoy Vera, alias Koki. La habían detenido tres días antes en el aeropuerto de Asunción.

El show debe continuar

A la dictadura sobrevino la democracia; a la represión sobrevino la corrupción. Testaferro frecuente del atropello contra los derechos humanos. En alza en todo el mundo, según Transparency International. Lacre y reflejo de los abusos de poder que ha ido perfeccionándose, y multiplicándose sin panes para repartir, desde la caída del Muro de Berlín.

“Lean a Orwell y comprenderán que algo feo debe esconderse detrás del eufemismo usado por el portavoz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante la guerra de Kosovo: daños colaterales (significa muertos civiles inocentes) –apunta Timothy Garton Ash, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Oxford–. Lean a Orwell y sospecharán que hay gato encerrado siempre que un periódico o un político británico una vez más pronuncie una frase prefabricada del tipo de la inexorable marcha de Bruselas hacia un superestado europeo.”

Neolengua. O newspeak. Lean a Orwell y entenderán que no es casualidad que el primer uso de la expresión Guerra Fría anotado por el Oxford English Dictionary proviene de un artículo de él. Lean a Orwell y entenderán, también, que Slobodan Milosevic no ha sido extraditado de Yugoslavia a otro país, sino puesto a disposición de un tribunal de las Naciones Unidas en La Haya. Sutil diferencia con la detención de Augusto Pinochet en Londres por pedido de la justicia española y, al mismo tiempo, con la captura de Vladimiro Montesinos en Venezuela. Puntadas, todas, de un orden cada vez más globalizado, no uniforme, que, en casos extremos, actúa como El Gran Hermano contra El Gran Hermano. De igual a igual contra uno mismo.

Es más barato ser personas públicas que meros fantasmas, como pretendieron Montesinos, ladero del presidente peruano Alberto Fujimori, y el empresario argentino Alfredo Yabrán, responsable del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. No figurar en los directorios telefónicos tiene un costo adicional. Y se reproducen como hongos, mientras tanto, las compañías que ofrecen programas para espiar casillas de correo electrónico, sean de empleados o de cónyuges. La paranoia crece. Con reality shows celebrados por la gente. Feliz, aparentemente, de meter las narices en casa ajena. En coincidencia con cámaras que invaden hasta el momento más íntimo: la muerte. Con vanos intentos de difundir en vivo y en directo la ejecución Timothy McVeigh, autor de la muerte de 168 personas por la voladura del edificio federal de Oklahoma, y de hacer una apología de la eutanasia con los finales dignos del Doctor Muerte, Jack

Kevorkian, cuyo video, exhibido por el canal norteamericano CBS, tuvo 15 millones de televidentes.

En Belgrado, durante la Guerra de Kosovo, una burócrata del gobierno serbio, Sanja, tosía como loca. “Es que, por el desabastecimiento, fumo cigarrillos de diferentes marcas”, se excusaba en el edificio del Ejército, Dom Army. No pensaba abandonar el hábito, más de dos paquetes por día, en el correlato de una desgracia que, según ella, continuaba aguijoneando a sus compatriotas desde la televisión. Y confesaba que no podía ver ni en figurillas a Christiane Ampanpour, corresponsal de CNN. No estaba sola: no había funcionario serbio que le prodigara un piropo.

El gobierno de Milosevic había preparado un documento con un título más que sugestivo: *La guerra de los medios contra Yugoslavia. Libertad de expresión o libertad de decir mentiras. El show debe continuar*. Era como si la prensa occidental hubiera estado embarcada en un complot contra el régimen, atribuido a lobbies de compañías multinacionales en un mundo que, señalaba, debía distinguir entre los buenos, ellos, y los malos, los otros, con tal de divulgar la verdad y nada más que la verdad. Su verdad.

Las fosas comunes halladas por la OTAN en Kosovo no eran más que una justificación del ataque, interpretaban en Belgrado. Y los refugiados albaneses no habían huido de la represión serbia, sino de las bombas. “¿Qué sentido tiene destruir un puente o una refinería en Novi Sad cuando el problema está en el Sur?”, me decía Sanja.

El documento, anterior a ello, explicaba: “La guerra de los medios consiste en un repertorio de técnicas de presión psicológica que aplican lobbies internacionales, y organizaciones e individuos en busca de metas políticas, usando a la audiencia en contra de blancos seleccionados en sus países y en otros durante períodos determinados”.

La presunta conjura de los necios, o de los medios, era una campana que repicaba a menudo en las voces gubernamentales, cual prólogo de toda entrevista, ya que, según el documento, la globalización implicaba que la opinión de uno de gran audiencia, como CNN o BBC (no los nombraba, en realidad), volcaba la tendencia del resto en esa direc-

ción. Idéntico discurso usaban, curiosamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sus primos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus enemigos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Contra la globalización, entendida como la concentración del poder en un solo polo, se pronunció Milosevic en su primer discurso después de sellar la paz, o de rendirse, destacando que la resistencia serbia durante los bombardeos había sido una contribución a la historia. Yugoslavia se veía afectada por la presunta campaña mediática desde marzo de 1998, un año antes de la guerra, cuando surgió el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y el Gobierno aplicó mayores rigores contra los albaneses de esa provincia.

Pero ya sucedía eso, según el documento, entre 1991 y 1993, momento en que los serbios y los montenegrinos comenzaron a ser personificados como la encarnación del diablo, con calificativos de bárbaros, destructores de la civilización, nazis, comunistas, peligro rojo, bandidos, borrachos y asesinos, ilustrados con imágenes mudas de cerdos, dinosaurios, hienas y monstruos de todo tipo.

Entre los estereotipos más usuales, decía el documento, los serbios y los montenegrinos eran los agresores, los serbios provocaron la crisis del país, Kosovo no era autónoma y Yugoslavia era un Estado artificial por culpa de la hegemonía serbia que rechazaba una sociedad multiétnica, multicultural y multipartidaria. Mencionaba entonces a los defensores de una conspiración inventada, y manipulada, por los medios de comunicación: George Soros, Susan Sontag, Margaret Thatcher y Vaclav Havel, entre otros.

“La meta era crear una legítima defensa desde los medios para una Croacia secesionista, una Bosnia-Herzegovina dominada por musulmanes y una Kosovo independiente, lo que significa una Gran Albania, presumiendo que la gente ordinaria tiende a creer que debe de ser cierto lo que dice la gente prominente”, decía el documento. Y ponía como ejemplo la presunta manipulación de imágenes que realizó en 1992, en un campo de concentración de Trnopolje, el canal de televisión británico ITN, testimonio recogido por Newsday, de Nueva York, con el calificati-

vo de campo bosnio de la muerte. Los periodistas, según una serie de fotos, habían estado dentro del campo, no fuera de él, separados de los detenidos por alambres de púas.

Milosevic, a su vez, aparecía en televisión y hablaba por radio con tono seguro y confiado, procurando ganar popularidad por los mismos medios en los que, fuera de casa, se sentía agraviado. Para tranquilidad de Sanjia, mientras tanto, el Gobierno autorizó la importación de 200 toneladas de cigarrillos extranjeros que iban a costar un 40 por ciento menos que entonces.

Vladimir Ilic, asistente federal del Ministerio de Información de Yugoslavia, no podía contener la indignación: “No somos ángeles, pero nunca atacamos a nadie –me dijo–. Sólo defendimos a nuestro país. Esta guerra es, esencialmente, económica y política”. Y mediática, según el documento.

Su nombre parecía evocar a Lenin, pero se debía a Vladica Kovacevic, un astro de fútbol del equipo favorito de su padre, el Paritzah. Fútbol no había en esos días en Yugoslavia, salvo algún que otro partido amistoso. Ilic, de 33 años, no pensaba en ello, sino en el correlato de Kosovo: “Tienen que justificar la guerra de algún modo y muestran las fosas comunes a la prensa de Main Street (Washington, DC) –insistió–. La OTAN, con sus bombas, mató civiles serbios y albaneses, y nadie reparó en ello”.

Los serbios eran coherentes: desde Milosevic hasta la gente estaban convencidos de que la OTAN se guiaba por intereses más económicos que humanos en Kosovo y de que, según Ilic, le importaba poco y nada la democracia en la provincia en tanto pudieran poner un pie en ella. En especial, los Estados Unidos. De ahí que los periodistas norteamericanos tengan un escudo protector en las guerras que cubren, las compañías para las cuales trabajan, pero, a la vez, una contra, el odio que despiertan.

Desde Vietnam, Ignacio Ezcurra, corresponsal de guerra del diario La Nación, de Buenos Aires, reflexionaba en mayo de 1968: “Todos los que estamos aquí sentimos que estamos corriendo riesgo. Y ése es un precio que tenemos que pagar por estar cubriendo la historia más grande y, tal vez, más triste en este momento”. Lo asesinaron.

En Somalia, Dan Eldon, reportero gráfico de Reuters, retrató en julio de 1993 la hambruna devastadora de la gente. Lo asesinaron; a pedradas, en su caso.

El hotel Hyatt, de Belgrado, era el cuartel general de prensa durante la guerra de Kosovo. Todas las tardes había un cóctel, o happy hour, en uno de los pisos altos poco antes de que sonaran las sirenas, zumbaran los misiles y murieran todas las luces de la ciudad. Enfrente, un edificio con fumarola negra en la terraza evocaba el día en el que habíamos empezado a vivir el resto de nuestras vidas. Así y todo, los periodistas procurábamos tomar un poco de aire en tugurios oscuros, iluminados con velas, en donde pianistas malolientes de ojos tristes dejaban correr sus dedos transpirados sobre el teclado de un blues amargo de cerveza y rakija (aguardiente).

La mayoría salía, o rompía las reglas, menos los norteamericanos. Ellos amanecían juntos, comían juntos, caminaban juntos y se iban a dormir juntos (en camas individuales, supongo). Es la división que se da, invariablemente, en toda guerra: habitualmente, latinos con latinos (hablen español, italiano o francés), orientales con orientales (hablen chino, japonés o coreano) y norteamericanos con norteamericanos (hablen inglés o inglés).

En todo conflicto, o zona de riesgo, cuesta diferenciar, a veces, entre los buenos y los malos, por más que uno, íntimamente, tome partido por uno de ellos. Íntimamente, no en su trabajo, de modo de mantenerse imparcial. Salvo que se trate de forajidos. En los caminos serpenteantes de la selva Lacandona, Chiapas, Ramón, mi chofer y guía, me dijo en uno de mis viajes desde que estalló el conflicto, el 1° de enero de 1994, en coincidencia con el ingreso de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con los Estados Unidos y con Canadá, que la sombra del subcomandante Marcos, con su pipa humeante y su revolución por Internet, ocultaba el reclamo de los indígenas. Tenía razón: varios periodistas, europeos en particular, terminaron enamorándose de él, confundiéndolo con Robin Hood, mientras la gente del lugar seguía, y sigue, padeciendo las mismas miserias y los mismos pesares.

De Marcos se rió a carcajadas, cuando le pregunté, el comandante Raúl Reyes, cabecilla de las FARC, en un claro del búnker que

dominaba en Inspección Los Pozos, a una hora de auto desde San Vicente del Caguán, al sur de Colombia. “Ese no es revolucionario”, me dijo, despectivo, quejoso de la prensa de Bogotá.

Las FARC (o los farianos), así como el ELN (o los elenos) y los paramilitares, provocaban temor. No los zapatistas cuyos pasamontañas eran tan comunes en el sur de México como los atuendos coloridos de las indígenas que vendían sus artesanías en la plaza de San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo llegar a ellos? Todo académico de periodismo dirá por las vías naturales, absteniéndose de sobornos y demás. Quien iba al sur de Colombia sin salvoconductos (whisky, cigarrillos y chocolates) mientras existía la zona de despeje, o liberada, podía estar un aprieto. El dinero no compraba voluntades, sino aguardiente de pésima calidad.

En otros casos sólo cuentan los billetes. Como expone Arturo Pérez-Reverte: “En las guerras sólo es posible moverte repartiendo dinero por todas partes y no hay tiempo, ni medios, ni ganas de ir por ahí pidiendo facturas. Cuando caen las bombas las cosas no funcionan: no hay paradas de taxis, ni teléfonos, ni agua caliente, ni gasolineras. No hay tiendas abiertas, ni semáforos, ni policías, y la gente te dispara. Un chofer puede cobrar cinco mil duros por recorrer 10 kilómetros en una zona batida por francotiradores, una lata de conservas cuesta 1000 o 2000 pesetas, un kilo de leña 200 marcos en pleno invierno. Si en la guerra alguien quiere moverse y trabajar, no tiene más remedio que relacionarse con traficantes y con gentuza”.

Secretos en reunión

En guerra o en paz, los códigos no varían demasiado. El ex presidente argentino Carlos Menem habló de una campaña mediática en su contra en cuanto quedó detenido, el 7 de junio de 2001, por sospechas de haber sido el jefe de una asociación ilícita que contrabandearon armas a Croacia y Ecuador. Lo mismo había hecho su cuñado, Emir Yoma, también procesado y detenido por esa causa. Siempre es culpa del otro. Sobre todo, del cartero. De los medios de comunicación en general.

Conjetura inimaginable en los Estados Unidos, en donde la identidad de Deep Throat (Garganta Profunda), el soplón de Bob Woodward y de Carl Bernstein, periodistas de The Washington Post, en el caso Watergate, iba a ser un misterio hasta su muerte, según me dijo el editor Ben Bradlee.

“Supe quién era sólo un año después de la renuncia de Nixon (el 8 de agosto de 1974), pero no puedo abrir la boca hasta que llegue el momento”, redondeó.

Era el secreto mejor guardado del periodismo norteamericano, signado desde sus orígenes como el escándalo del siglo. Ellos, sus protagonistas, respetaron durante tres décadas el pacto de honor que habían sellado con su vocero hasta que él mismo, Mark Felt, de 91 años, subjefe del FBI durante el gobierno de Nixon, decidió revelarlo el 31 de mayo de 2005.

Todo comenzó el 17 de junio de 1972 con la detención de cinco presuntos ladrones en la sede del Comité Nacional Demócrata, opositor, instalada en el complejo Watergate, de cara al río Potomac. Un llamado de teléfono aguijoneó el olfato de los editores del Post mientras Bradlee, uno de ellos, pasaba el fin de semana en West Virginia, pescando: “¿Me quieres decir qué hacían esos cinco tipos con equipos de escuchas telefónicas?”, preguntó.

Le sonó raro. Y, después de algunos cabildeos, asignaron la misión a dos reporteros de asuntos locales: Woodward, un ex oficial de la Marina que hacía sus primeras armas en el diario, y Al Lewis, un prototípico cronista policial que amaba los uniformes. “No teníamos nada que perder, excepto tiempo”, me dijo Bradlee.

Woodward y otro reportero, Bernstein, un pelilargo que hasta ese momento había demostrado más pasión por la guitarra eléctrica que por la máquina de escribir, formaron poco después la dupla que llegó a llamarse Woodstein dentro del Post. Y que cobró vida en 1976 en la película *All the President's men* (*Todos los hombres del Presidente*), con Robert Redford (Woodward), Dustin Hoffman (Bernstein) y Jason Robards (Bradlee).

Garganta Profunda estaba en lo cierto, pero Bradlee conoció su nombre sólo un año después de la renuncia de Nixon: “En una caminata por la plaza McPherson Square le pedí a Woodward que me confesara quién era, y me lo dijo. Ya era hora, ¿no?” Algunos indicios señalaban a un hombre, uno solo. “Sólo mi mujer lo sabe”, me dijo Woodward, sonriente.

Vanas fueron en los dos años siguientes las maniobras de Nixon y su gente por ocultar la verdad mientras Garganta Profunda hacía de las suyas, colaborando en forma anónima con los cabos sueltos que iba atando el Post. Alguien puso la mano sobre el hombro de Bradlee en medio de la investigación: “A veces queda al descubierto la yugular del periodismo. Una vez cada ocho siglos, más o menos, uno se topa con una historia o con un rumor tan maravilloso que da vergüenza confirmarlo”.

Nixon, el único presidente norteamericano en la historia que se vio obligado a renunciar, murió el 22 de abril de 1994 a causa de un derrame cerebral. Seguirá siendo un enigma si sabía con certeza quién era Garganta Profunda. ¿Un traidor, un patriota? El periodista ya no es el vehículo de las noticias, sino su intérprete. Y debe ser esencialmente escéptico, según Bradlee, frente al caudal de mentiras que pasa delante sus narices. No sólo durante una dictadura. En una democracia debe lidiar con presiones, intereses, censuras, mordazas, amenazas y réplicas, privilegiando siempre, como su estrella, la verdad.

Cara y cruz con los acuerdos de la CAL. Entre ellos, uno, aprobado en la Comisión Plenaria por iniciativa de la delegación de Bolivia, proponía denunciar ante la opinión sensata y democrática del pueblo norteamericano la conducta equivocada del presidente Carter: “Conducta que beneficia al comunismo en su constante agresión a los pueblos libres y contribuirá a la dominación roja de nuevas naciones”, agregaba.

E instaba a alertar a las Fuerzas Armadas norteamericanas sobre el grave peligro que significaba para el mundo democrático (textuales palabras) y para el destino de los Estados el debilitamiento de la defensa de los países sudamericanos ante la permanente acechanza del comunismo. De ahí, el acuerdo. Una suerte de ratificación de la Operación Cóndor, omitida deliberadamente su mención: “Pedir a todos los gobiernos nacio-

nalistas y democráticos de Latinoamérica que formen un solo bloque de naciones anticomunistas para defenderse en conjunto de esta nueva forma de agresión a su soberanía y a su soberanía (repite por presunto error de redacción) y a su independencia política”.

Prólogo de otra iniciativa, también presentada por la delegación de Bolivia, de forjar una nueva posición, llamada doctrina del nacionalismo humanista latinoamericano. Apéndice, tal vez, de la doctrina de la seguridad nacional. Bajo cuyo alero iban a estar las entidades cívicas y políticas, los sindicatos, las fuerzas armadas, las instituciones y los gobiernos, “a fin de uniformar los principios rectores, los objetivos y las finalidades del movimiento para movilizar integralmente la voluntad de los pueblos y de cada uno de los sectores y constituir el más poderoso frente capaz de oponerse triunfalmente a todas las amenazas del comunismo y de las potencias que pretenden avasallar nuestros valores fundamentales y someternos a la opresión, la miseria y el atraso...”.

Como el elefante que estaba devastando la feria, aprovechándose de la ignorancia de los demás. Nutrida, el 19 de noviembre de 1980, con una respuesta evasiva del gobierno argentino al norteamericano sobre la situación de los derechos humanos mientras Carter, demócrata, inauguraba la X Asamblea Interamericana en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, DC, después de haber perdido las elecciones, el 4 de ese mes, frente a Ronald Reagan, republicano.

“Algunos ignorarán u opondrán resistencia a esos atesorados derechos, los derechos de los individuos y de las naciones, pero el futuro está con aquellos que los aclaman y están dispuestos a defenderlos”, decía Carter.

El canciller argentino, Washington Pastor, permanecía de pie, pero no aplaudía.

El secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, también argentino, decía: “El apoyo hemisférico a los derechos humanos es un movimiento histórico que ha sido reconocido este año con el premio Nobel de la Paz. Estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento”.

El premio había sido concedido a otro argentino, Adolfo Pérez Esquivel, ligado por el régimen de su país a actividades subversivas:

“Nosotros hemos combatido el terrorismo de izquierda y de derecha, de abajo y de arriba”, decía, rebatiendo acusaciones.

La confrontación iba en aumento, sin embargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brazo de la OEA, había estado el año anterior en la Argentina. Y, más allá de que los argentinos fueran argentinos y humanos, como rezaba un slogan inscripto en calcomanías y en volantes, concluyó que el Gobierno había cometido graves y numerosas violaciones de los derechos humanos. Expresaba preocupación por la suerte corrida por miles de desaparecidos (palabra entrecomillada en la prensa) y recomendaba que informara sobre casos concretos, explicara los procedimientos y los actos policiales, e investigara las denuncias de torturas.

En respuesta a ello, el gobierno de Videla indicaba que muchas de las violaciones documentadas se habían enmarcado en el proceso de lucha contra la guerrilla izquierdista y reprochaba a la CIDH que no hubiera dedicado la misma atención exhaustiva a los crímenes de los terroristas. También afirmaba que estaba creando las condiciones para la normalidad política del país, “empeñado en el fortalecimiento constante de las instituciones destinadas a una más eficaz protección de los derechos de todos sus habitantes”.

Era una nota informativa que esgrimía que 1970 había significado el comienzo del terrorismo y que 1980 significaba “el restablecimiento y la consolidación del orden y de la paz interior como correlato de la derrota de las bandas armadas guerrilleras”. En los primeros 10 meses de ese año, exponía, se habían registrado sólo ocho detenciones bajo el estado de sitio, seis de las cuales pasaron a disposición de la justicia ordinaria mientras las otras dos quedaron en el área del régimen de libertad vigilada.

“La cifra contrasta notablemente con las estadísticas proporcionadas en un cuadro adjunto, que muestra 8733 arrestos en relación con las actividades antsubversivas desde noviembre de 1974 –decía el diario La Prensa, de Buenos Aires–. La mayoría de esas detenciones se produjo entre 1974 y 1977, decreciendo a 386 en 1978, 54 en 1979 y ocho en 1980.”

En vísperas de la transición de Videla a su sucesor, Roberto Viola, el arzobispo de Córdoba, cardenal Raúl Francisco Primatesta, en su condición de enviado especial del Papa Juan Pablo II, se entrevistaba con Pinochet, en Santiago, de modo de mediar en el litigio entre la Argentina y Chile por los mares australes. El canal de Beagle, en realidad. Motivo de desconfianzas mutuas entre los regímenes de entonces. Y Carter procuraba separar la paja del trigo, Haití de la Argentina, en materia de derechos humanos. Pero ya era un lame duck (pato rengo) en la Casa Blanca. Un elefante que, aún no devastada la feria, tenía el tiempo contado: apenas dos meses.

3. LA CONJURA DE LOS MEDIOS

ESCRIBIA un día antes: “La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.

Moría un día después en un enfrentamiento armado con un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Era el 25 de marzo de 1977; era el primer aniversario del golpe de Estado. Había titulado la pieza que no pensaba que iba a ser póstuma: “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”. Y la había firmado como una carta de lectores, con nombre y apellido, y con el número de su cédula de identidad, 2.845.022.

Rodolfo Walsh, de 50 años, autor de los libros *Operación Masacre* (1957) y *¿Quién mató a Rosendo?* (1969), había incurrido en la prensa subterránea por medio de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla). Eran despachos que, entre 1976 y 1978, iban por correo, en copias hechas con papel carbónico, a redacciones nacionales, corresponsales extranjeros y publicaciones internacionales. Militaba en Montoneros.

“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde –continúa Walsh–. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo

remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese «ser nacional» que ustedes invocan tan a menudo”.

El ser nacional, así como otras muletillas de entonces, era el compromiso de la supuesta reserva moral del país. El último seguro de vida contra todo tipo de subversión, corrupción, demagogia o degradación política, según el historiador Félix Luna: “De muy atrás les venía esta idea. Se suponía que los militares, felizmente distintos de los civiles, podían asumir emprendimientos de purificación y orden que jamás podrían tomar sobre sus espaldas los partidos políticos, esos colectivos corruptos; las corporaciones, sólo preocupadas por sus intereses, o las instituciones republicanas, lentas e ineficaces. Decimos que este concepto era antiguo porque la obra de salvación nacional que de él derivaba la habían ejercido las Fuerzas Armadas en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966, sin contar otras veces que trataron de reiterarla sin conseguirlo”. Fracasaron invariablemente.

Era la excusa, esta vez, desde 1976, de una empresa que trascendía fronteras: la Operación Cóndor, acordada antes del derrocamiento de la viuda de Perón por fuerzas de inteligencia que, enredadas en luchas de poder descarnadas entre facciones propias y extrañas, iban a sembrar miedo y cosechar muerte.

Con la sospecha generalizada de la gente de que algo habrían hecho, las víctimas, eran capturadas, encarceladas, torturadas y liquidadas. Estaba amparada la represión en el resquicio legal que otorgaba uno de los tres decretos rubricados el 6 de octubre de 1975, casi seis meses antes del golpe de Estado: “Las Fuerzas Armadas bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, decía el número 2772.

El verbo madre de ese decreto, aniquilar, iba a ser decisivo. Entre los primeros botines de guerra, o de la guerra sucia, estaban, entre otros instrumentos de control, los canales de televisión abiertos. Los únicos antes de que apareciera el cable: el 7 y el 9 para el Ejército, el 11 para la Fuerza Aérea, y el 13 para la Armada.

En blanco y negro, la pantalla, antes de que en 1978, en coincidencia con el Mundial de Fútbol, incorporara el color. En blanco y negro, la pantalla, sometida a la censura desde 1976. En blanco y negro, la pantalla, vedada de noticieros o de programas que fueran un poco más allá de la moral y de las buenas costumbres de la época, omitidas las desapariciones forzosas y las otras calamidades cotidianas, en una puja que comenzó en 1974, con la estatización de los canales 9, 11 y 13, y que terminó siendo la caldera en la cual iban a dirimirse las diferencias internas del peronismo, con el poder creciente del ministro José López Rega desde poco antes de la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974.

Un día después iba a ser despedido Tato Bores, humorista capaz de no dejar piedra sobre piedra con sus célebres monólogos políticos. Idéntica suerte corrió El Capitán Piluso, Alberto Olmedo, por el simple hecho de ostentar un rango militar en un programa infantil. Libres de toda sospecha de marxismo-leninismo quedaban series norteamericanas como *La mujer maravilla*, *Mujer policía*, *Los ángeles de Charlie*, *SWAT*, *Starsky y Hutch*, y *Bonanza*. Y el dibujo animado *La Pantera Rosa...* hasta que su figura desgarrada de andar irresuelto empezó a ser comparada con el aspecto físico de Jorge Rafael Videla.

“En las páginas de los diarios se reflejan los esfuerzos realizados para señalar errores, denunciar transgresiones o formular opiniones que permiten a la ciudadanía alimentar su propio espíritu crítico en procura de hallar el mejor camino para encauzar la vida de la Nación –decía el editorial de El Día, de La Plata, provincia de Buenos Aires, del 7 de junio de 1977, Día del Periodista–. En las mismas páginas queda constancia también de los que cayeron o desaparecieron en el cumplimiento de su misión, como consecuencia de su negativa a torcer el rumbo que, entendían, era su deber mantener. En una época llena de confusión, terrorismo y pasiones contrapuestas los periodistas debimos entregar la cuota de sacrificio.”

El director del diario, David Kraiselburd, secuestrado el 17 de julio de 1974 por los montoneros, murió en un tiroteo entre miembros de esa organización y la policía mientras permanecía cautivo en una casa de los suburbios de Buenos Aires. Su hijo, Raúl, asumió desde entonces el cargo.

“Kraiselburd había atraído la atención de los montoneros por habersele entregado el periódico El Día, anteriormente propiedad sindical, después del golpe militar de 1955, y haber dirigido un monopolio de la prensa en La Plata (junto con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, una de las principales plazas fuertes de los montoneros)”, resume el investigador británico Richard Gillespie.

Informe de la situación

Desde el comunicado número uno del gobierno militar, transmitido por la cadena nacional de radio y televisión, la razzia, por medio de interventores en los canales de televisión, derivó en listas negras, exclusiones y exilios de periodistas, de directores, de actores y de autores mientras el fútbol, alentado por el relator José María Muñoz, puntal de Radio Rivadavia, y los entretenimientos en general colmaban la programación. La vida colmaban, en realidad, descafeinada por el jolgorio del Mundial 78. Eran los campeones. Y eran los mejores, desbordados por el grito de gol, con los brazos en alto, del trío Videla-Massera-Agosti en fotos publicadas en diarios y en revistas.

“En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti –insistía Walsh un año y monedas antes del 3 a 1 del seleccionado de César Luis Menotti contra Holanda en el partido final del Mundial–. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre «violencias de distintos

signos» ni el árbitro justo entre «dos terrorismos», sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay.”

Era aquello que se veía venir. Lo peor, reflejado en julio de 1975 en las conclusiones de la VII Conferencia Bilateral de Inteligencia entre los Ejércitos de Paraguay y de la Argentina: “No se puede negar la necesidad de una eficiente coordinación de actividades de inteligencia entre los ejércitos de Paraguay y de la Argentina como el mejor medio para coartar el logro de los planes elaborados por los grupos subversivos”, decía un documento conjunto en vísperas del cónclave del cual iba a surgir la Operación Cóndor en Santiago, Chile.

La subversión perseguía la socialización del continente, decía el documento. La filosofía era la lucha armada; la estrategia era continentalizarla. De ahí, la orientación y las características de la campaña psicológica dirigida, en especial, desde París: “Hacer comprender que en América latina existen formas fascistas de gobierno; hacer comprender que el ejercicio de la lucha armada (guerrilla) no representa un exterminio ideológico, sino que encierra en su acción un desarrollo liberador unido intrínsecamente a las luchas de las masas; convencer que en América latina existen condiciones objetivas y subjetivas para iniciar la marcha hacia el socialismo”.

En un documento posterior, de 1978, los aspectos de inteligencia más controvertidos estaban desglosados como “problemas surgidos en la jurisdicción sobre la participación de organizaciones terroristas y políticas de otros países en apoyo a las que operan en la misma”. Enumeraba, entre ellos, una reunión de judíos en la Sociedad Hebrea de Villa Angela, provincia del Chaco; una conferencia de la Comisión Mundial de Pueblos Indígenas; una visita de la Cruz Roja Internacional a provincias del norte argentino, y la mera existencia del Ejército Rojo Japonés.

“La banda de delincuentes terroristas continuaría ejecutando en la Argentina y en Paraguay la maniobra que le diera resultado en Europa y en algunos países latinoamericanos, buscando apoyo en organizaciones legales y/o tradicionales (Cruz Roja, Comisión de Derechos Humanos, Amnesty International) con argumentos adecuados, explotando situaciones o hechos que generen motivaciones populares de solidaridad, apoyándose en las corrientes progresistas de la Iglesia”, dice.

En 1975, la situación, país por país, era motivo de preocupación castrense, según el otro documento:

- Bolivia: “El gobierno del general Hugo Bánzer, luego del golpe de Estado que derrocara al gobierno marxista del general Torres, se abocó a depurar a los elementos marxistas localizados en todos los sectores del Gobierno con el objeto de intentar orientar al país hacia una estabilización política y económica que le permita en un plazo razonable desarrollar un plan para quitar al país del subdesarrollo en que se hallaba sumido desde (hacia) varias décadas. Para conseguir estos objetivos, el general Bánzer se apoyó en las dos fuerzas políticas de más arraigo: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB), y en las Fuerzas Armadas; actualmente, con la disidencia de estos partidos políticos. La estabilidad del Gobierno está supeditada exclusivamente a la lealtad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que también aleccionados por elementos de izquierda han organizado el grupo generacional, cuyos componentes constituyen jefes y oficiales jóvenes descontentos por la conducción de la política interna y externa del país, lo que nos hace suponer que las posibilidades de los elementos subversivos de izquierda infiltrada dentro del Gobierno y del país pueden en un momento dado intentar nuevamente la toma del poder o la iniciación de acciones subversivas de envergadura, alentados y apoyados desde Perú y por elementos subversivos coligados y organizados dentro de la Argentina con la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria)”.

- Brasil: “El gobierno de Brasil, con las experiencias asimiladas de los países que han caído bajo el flagelo de los elementos subversivos orientados y solventados desde el exterior, con el establecimiento de un estricto control de las actividades y de los miembros responsables de la conducción de los distintos campos del poder, ha podido mantener y controlar las actividades posibles y futuras de estas organizaciones, permitiéndoles actualmente desarrollar su política en todos los campos, sin el inconveniente que afrontan muchos gobiernos de la Cuenca del Plata por la acción de estos elementos subversivos que, si bien no gravitan en la conducción general para el desarrollo de la política nacional, crean una imagen de inestabilidad y de inseguridad para la ejecución eficaz de los programas económicos y la atracción de inversiones extranjeras para los logros de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de todo el país”.
- Chile: “Con el golpe militar que destituyó al gobierno marxista de Salvador Allende, y las posteriores acciones de las Fuerzas Armadas contra sus elementos componentes, se dispuso la intención y la preparación por parte de los países líderes del comunismo de establecer la base principal desde donde irradiar la subversión a los países componentes del Cono Sur, obligando a los elementos marxistas a replegarse hacia Perú y principalmente hacia la Argentina, en donde fueron acogidos por los elementos subversivos organizados dentro de la misma, como el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), Montoneros y desde donde dirige sus operaciones. En los últimos meses, a través de la prensa internacional, se han podido conocer que se han detectado campos de entrenamiento para ciudadanos del MIR en territorio argentino limítrofe con Chile; asimismo, se han apresado a varios elementos del MIR cuando intentaban traspasar la frontera chilena desde la Argentina. Actualmente el Gobierno se encuentra en una etapa de franca consolidación”.
- Perú: “La Junta Militar sigue consolidando su posición y, con la caída del poder socialista en Chile, el grueso del esfuerzo eco-

nómico, político y militar de los países socialistas se volcó hacia ella, constituyéndose actualmente, con la experiencia chilena, en una futura base de operaciones de las acciones subversivas para América latina en estrecha colaboración con Cuba y los elementos marxistas establecidos y organizados en Bolivia y en la Argentina. Si bien el gobierno militar de Perú trata por todos los medios de desmentir esa posibilidad o esa imagen que tiene de ella la opinión internacional occidental, todos los indicios y procedimientos nos indica, con algunas variantes, ser el mismo sistema de gobierno establecido por el extinto presidente Salvador Allende”.

- Uruguay: “Las Fuerzas Armadas uruguayas obtuvieron una rotunda victoria contra los tupamaros, obligando al resto de esa organización a dirigirse fuera del país, principalmente hacia la Argentina, Perú, Cuba y países europeos. A partir del presente año los tupamaros organizaron el partido político (PLR) que fue reconocido como tal por la IV Internacional. El objetivo de la misma es reorganizar los cuadros dispersos y organizar bases dentro del territorio uruguayo con la misión de reiniciar acciones de guerrillas urbanas y rurales. En los últimos meses, para la concreción de estos objetivos, la JCR creó un grupo llamado Frente de Fronteras. Durante los meses de junio y julio los elementos de seguridad de Uruguay han detenido a más de 100 extremistas, quienes tenían la misión de comprar bienes raíces dentro del territorio y reorganizar sus cuadros”.
- Venezuela: “Se puede afirmar que las Fuerzas Armadas mantienen el control de las actividades subversivas a pesar del apoyo masivo recibido por éstas desde Cuba y están en condiciones de derrotarlas, a corto plazo, en forma definitiva”.
- Paraguay: “...las ideas marxistas no encuentran el campo fértil que han hallado en países divorciados de su pasado y geográfica o étnicamente no integrados como nación. Es por ello que, hoy en día, la estrategia de infiltración del comunismo en Paraguay parece haber desechado las masas obreras para orientarse

hacia el campo estudiantil, fundamentalmente el universitario, buscando en el cambiante pensamiento juvenil introducir y hacer germinar sus concepciones como símbolo de snobismo que generalmente deslumbra mentes políticamente casi vírgenes...”.

No contaban con la astucia de El Gran Hermano, “el general del Ejército, don Alfredo Stroessner, cuya obra y pensamiento constituyen un elemento vital de la actualidad y del futuro patrio...”. Partidario del intercambio del bien más valioso y, a la vez, más perecedero del mundo: la información. Alma, y vida, del mensaje claro, encriptado, clave y descifrado de los gobiernos del Cono Sur: la Operación Cóndor.

Comunicado número uno

No iba a transcurrir un año. En Buenos Aires, las portadas de las sextas ediciones (nocturnas) de los diarios La Razón y Crónica anunciaban el 23 de marzo de 1976: “Es inminente el final. Todo está dicho” y “Movimientos de tropas”, respectivamente. Al día siguiente, sin condenas ni repulsas después de una madrugada febril, Clarín decía: “Nuevo gobierno”. Y La Nación: “Las Fuerzas Armadas asumen el poder; detúvose a la Presidente”. Estaba todo dicho, pues: “Gobierna la Junta Militar”, rubricó el 25 de marzo La Opinión. Así como La Prensa: “La Junta Militar asumió el Poder Ejecutivo Nacional”.

Nada había quedado librado al azar. Ni en pie. En especial, en los medios de comunicación, seducidos al comienzo por el triunvirato incipiente. Por los pasillos de los canales de televisión se sucedían los uniformes de color verde oliva. Y esa misma noche, la del 23, el seleccionado de Menotti batía a Polonia en una ciudad llamada Katowice, exceptuado de los alcances de la cadena nacional. Radio Colonia, de Uruguay, sonaba a tope con las últimas noticias. Como el fuego que empezaba a consumir todo aquello que pudiera ser, o parecer, subversivo: desde panfletos y revistas hasta libros.

“Que en la Argentina hay organismos del Estado que queman libros e impiden su entrada en el país, efectúan cortes en las películas y

prohíben representaciones teatrales no es una novedad –escribía Víctor Massuh en 1970, no en 1976–. Es una costumbre vieja que no molesta y ya forma parte de la fisonomía colectiva. A ratos, alguna protesta airada advierte que el mal existe e irrita a aquellos que sufren sus síntomas en un grado más alto: los artistas, los jóvenes, los intelectuales. El Estado hace oídos sordos porque tal vez considera que se trata de una cuestión política. Nada de eso. La censura agrava uno de nuestros males mayores: la auto represión del argentino por miedo a los riesgos del crecimiento. Por terror a la madurez, el habitante de este país asesina cotidianamente su libertad.”

Seis años después, los tanques recorrían la Avenida de Mayo, frente a las narices de la Casa Rosada. Vano había sido un discurso grabado por Oscar Alende, dirigente del Partido Intransigente, de centro izquierda, en defensa de la democracia. En las pantallas, como era habitual, se sucedían las series *La pandilla*, *Yo soy espía*, *El hombre nuclear*, *Ladrón sin destino*, *Los invasores* y *El hombre del rifle*, y River Plate, al igual que el seleccionado contra Polonia, ganaba 2 a 1; a Portuguesa, de Venezuela, por la Copa Libertadores de América.

A las 0.30, la viuda de Perón iba rumbo al helicóptero con el cual partiría, para nunca más volver como presidenta, de la Casa Rosada. Era la hora de los microprogramas eclesiásticos, como *La paz sea con vosotros*, preludio, esa madrugada aciaga, del comunicado número uno, leído por el locutor Juan Vicente Montesana. Y de los siguientes. Como el número 19, una mordaza para los medios de comunicación: iba a ser “reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara comunicados o imágenes provenientes o atribuidos a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo” e iba a ser “reprimido con reclusión de hasta 10 años al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”.

Mordaza que, con matices, no cambió sustancialmente hasta la Guerra de las Malvinas, en 1982. El comienzo del fin de la dictadura, por

más que José Gómez Fuentes, secundado por Silvia Fernández Barrio y por el corresponsal Nicolás Kasanzew, dijera una y otra vez por el canal estatal Argentina Televisora Color (ATC): “Vamos ganando”. Como si de un partido de fútbol se tratara. Con tono similar, y aire triunfalista, titulaba la revista Gente su portada: “Estamos ganando”; en esas páginas, Videla había negado en forma rotunda, en diciembre de 1977, que hubiera campos de concentración o detenidos en establecimientos militares.

La censura fomentaba la autocensura, moneda corriente en el periodismo argentino desde el golpe militar de 1930. En septiembre de 1979, mientras la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrada por Andrés Aguilar, presidente, y por los abogados Luis Tinoco Castro, Marco Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo, recogía testimonios sobre 5580 casos de desaparecidos, el slogan en boca de todos era: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Una burla, alentada por la Junta Militar, que coincidía con una visita de Videla a Roma, ampliamente cubierta por periodistas que iban con la delegación oficial, y con un partido de fútbol del seleccionado contra Italia para el cual había sido fletado un avión chárter para felicidad de la patria deportiva.

Un año después, el 13 de octubre de 1980, el arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel, coordinador del Servicio de Paz y Justicia, recibía el Premio Nobel de la Paz. Y, a diferencia de otros gobiernos que se hubieran considerado halagados, la Junta Militar sintió, con razón, que era una afrenta. Una bofetada. Embarcada como estaba en la caza de brujas, de la cual no permanecían al margen los medios de comunicación.

La revista femenina Para Ti, del 6 de julio de 1977, brindaba consejos para padres con tal de reconocer la infiltración marxista en los colegios: “Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese «transbordo ideológico» que nos preocupa. Aparecerán frecuentemente los vocablos: diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etcétera. Otro sistema sutil es hacer que los alumnos comenten en

clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas y que nada tienen que ver con la escuela”.

Hasta era subversiva la matemática moderna, prohibida en la provincia de Córdoba por tratar a los números en grupos colectivos, trastornar los postulados de la lógica formal y, de ese modo, abrir un camino peligroso hacia la penetración izquierdista. Era subversivo, también, *El Principito*, de Saint-Exupéry. Y *La tía Julia y el escribidor*, de Mario Vargas Llosa. Y relatos infantiles, como *Un elefante ocupa mucho espacio*, de Elsa Isabel Bonermann, y *El nacimiento, los niños y el amor*, de Agnes Rosenstichl, porque, según el decreto de prohibición, tenían “una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de capacitación ideológica del accionar subversivo”.

Había, también, largometrajes no aconsejables, como *Help!* (de los Beatles), *Yo acuso* (el caso Dreyfuss) y *El juicio de Nuremberg*. Y otros, tampoco aconsejables, que se exhibían en versiones destrozadas por amor a la patria, como *El gran dictador*, de Charles Chaplin; *La ciudad de las mujeres*, de Federico Fellini; *Manhattan*, de Woody Allen; *La mujer 10*, de Bo Derek (con 65 cortes); *All that jazz*, de Bob Fosse; *Submarino amarillo*, de los Beatles, y *Hair*, de Milos Forman. De las escenas de *Argentinísima*, selección de folklore argentino, desaparecieron Mercedes Sosa y Horacio Guarani.

Un memorándum sobre torturas y desapariciones en la Argentina, preparado por el Departamento de Estado, advertía que, después de los primeros años de la dictadura, había disminuido la represión. No porque hubiera sido prohibida, sino porque había menos terroristas y subversivos. “La tortura utilizada para intimidar y extraer información descripta por la Embajada incluye «descargas eléctricas, el submarino (prolongadas inmersiones en agua), sodio pentotal, severas golpizas, incluyendo el teléfono, en el que se asesta un golpe simultáneo en ambas orejas con las manos ahuecadas» –decía–. Un informe de 1978 de Amnesty International adicionalmente describe «quemaduras de cigarrillos, abuso sexual, violaciones, la extracción de dientes, uñas y ojos..., quemaduras con agua hirviendo, aceite y ácido, e inclusive la castración».”

Tres organizaciones de derechos humanos habían costeado el 7 de mayo de 1977 una carta abierta a Videla, publicada en una página completa de La Prensa, en la cual urgían una explicación por el paradero 2592 desaparecidos. The Buenos Aires Herald, a su vez, editorializaba: “Todo esfuerzo debe ser hecho para rastrear a las personas desaparecidas. Es la única manera de convencer al mundo, y de probarnos a nosotros mismos, que sí nos importan los derechos humanos. Si los familiares ansiosos son ignorados o tratados fríamente, se convertirán en símbolos como víctimas de una sociedad totalmente brutalizada”.

El diario escrito en inglés, dirigido por Robert Cox, corrido por los servicios de inteligencia (“...no nos dedicamos a desayunar niños envueltos...”, le escribieron), había sido el único en informar sobre el asesinato de Walsh. Así como sobre las desapariciones y sobre los centros de detención. Sobre las atrocidades mientras Buenos Aires era recorrida por Ford Falcon de color verde sin chapa patente. Naves insignias de la Policía Federal, dejadas de fabricar en 1994.

“Inmediatamente después del golpe del 24 de marzo de 1976 hubo una corriente ininterrumpida de personas que venían a la redacción a informar del secuestro de familiares por las fuerzas de seguridad –describe Andrew Graham-Yooll, editor del Herald hasta que, después de dos intentos de homicidio, debió exiliarse con su familia en Londres en noviembre de ese año–. Parecía que la venganza no tenía límites contra aquellos que habían sido identificados con la izquierda en los cuatro años anteriores de inestabilidad política, ya fueran militantes o simpatizantes.”

La venganza iba a ser terrible: en la madrugada del 15 de abril de 1977 fue secuestrado Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión; estaba en su departamento de La Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. La consigna, impartida por el coronel Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tras ordenar que le quitaran la venda que le cubría los ojos, era categórica: “Usted es un prisionero del Primer Cuerpo de Ejército en operaciones”. Lo torturaron, lo despojaron de los bienes y de la ciudadanía, lo expulsaron del país.

“Para cualquier periodista con cinco centímetros de dignidad y lucidez, lo no escrito de nuestra profesión en aquellos años de miedo fue el siniestro espacio en el que murieron las palabras –dice Carlos Ulanovsky, redactor de La Opinión, en crónicas posteriores sobre su exilio en México–. Cada uno tendrá situado el principio de esta auténtica película de terror.”

La Opinión había aparecido el 4 de mayo de 1971. Era un diario de tamaño tabloide, con algunos rasgos de Le Monde, de información y análisis, según se promocionaba a sí mismo. Sin fotos, ni información policial, ni avisos clasificados. Una ruptura con los cánones tradicionales de la prensa argentina. Y, en el caso de Timerman, una forma de superar el impacto que había causado con la revista Primera Plana, fundada en 1965. Tambaleaba entonces el gobierno democrático de Arturo Illia. Estaba por caer ahora, en el filo de los años setenta, el llamado del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse al Gran Acuerdo Nacional (GAN), potencial bisagra para la vuelta a la legalidad. Que no iba a prosperar, por más que hubiera elecciones y que, de su exilio en Madrid, retornara Perón.

Después de la desaparición de Edgardo Sajón, periodista de La Opinión, Timerman preservó su buena relación con la Junta Militar. No había entendido la naturaleza de los militares que habían tomado el poder en 1976, según la periodista y biógrafa Graciela Mochkofsky: “No advertía que ellos se habían aislado de la sociedad y querían transformarla radicalmente –me dijo–. Creía que podía mantener con Videla un código político común, como había sucedido con Lanusse. Sólo se dio cuenta de que las cosas eran diferentes como consecuencia de su propio secuestro”.

Tal era la confusión que en una reunión distendida con Massera, regada de whisky, Timerman bromeó:

–¿Sabe, almirante? Creo que usted y yo tenemos algo en común.

–¿Qué cosa?

–Ninguno de los dos puede llegar a ser presidente. Yo porque soy judío y usted porque es marino.

Socios del silencio

“El director (Cox) se enfureció –afirma Graham-Yooll–. ¿Cómo podían abandonar a sus propios hijos? ¿Cómo podían olvidarlos como a un paraguas en un tren o perderlos como un perro en la calle? Pero era el único que se enfadaba. En realidad, casi todos los directores de publicaciones lo despreciaban a Cox por arriesgar su diario por la causa de los derechos del individuo y las costumbres civilizadas. Le decían que las Fuerzas Armadas estaban usando simplemente los métodos necesarios para liberar al país de la amenaza de la izquierda.”

Ya había sido secuestrado y asesinado Michelini, senador uruguayo y periodista de La Opinión, y ya había desaparecido Sajón, entre otros. Timerman iba a ser el próximo. Pocos días después estaba sorprendido, tal vez, por haber respaldado la asonada militar, de modo de que “las Fuerzas Armadas pongan control y orden”, según escribió. Proclama frecuente en el último tramo del gobierno de la viuda de Perón, compartida por la mayoría de los estratos de una sociedad que, golpe tras golpe, no confiaba en otra alternativa que no fuera la fuerza. El control y el orden.

¿A qué precio? Altísimo, según Cox, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entre 2001 y 2002 y, mientras tanto, subdirector del diario The Post and Courier, de Carolina del Sur: “El Gobierno trató de callarnos la boca, diciendo que solamente se permitía publicar la aparición de cuerpos a través de la información oficial. Manejamos esa censura a nuestro modo; esencialmente, la ignoramos. Habíamos cubierto el otro lado de la guerra terrible, la guerra sucia que comenzó antes de la llamada guerra sucia, la del terrorismo y la matanza terrible de los escuadrones de la muerte. Pero el resto de la prensa no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Honestamente no sé por qué”.

El capítulo séptimo del informe sobre la Argentina que elaboró la misión de la CIDH dice, en su apartado sobre la libertad de prensa, que en el país había existido aún antes del pronunciamiento militar de 1976 un régimen peculiar de censura configurado por las limitaciones y los condicionamientos que entrañaba el estado de sitio, decretado el día del

golpe, y por las disposiciones dictadas por la Junta Militar. En particular, una que preconizaba el “control de los órganos de difusión por medio de la aplicación taxativa de las leyes correspondientes modificadas convenientemente, a fin de que sirvan a la obtención de los objetivos básicos establecidos”.

De los medios de comunicación en general dice, asimismo, que adoptaron una “política explicable por razón de las circunstancias” y que se abstuvieron de conceder importancia a los operativos de apresamiento de ciudadanos que eran considerados terroristas o subversivos, a las diligencias de hábeas corpus y a otros hechos similares, “negándose con frecuencia a publicar, en inserciones pagadas, listas de personas desaparecidas, evidentemente para evitar problemas con las autoridades”.

Durante su visita, los miembros de la CIDH mantuvieron el 19 de septiembre de 1979 una reunión con representantes de algunos medios de comunicación de la cual, según el informe, se llevaron la impresión de que no existían mordazas para la prensa. “La visita de la Comisión fue cubierta en forma amplia y continua, sin ningún tipo de censura, tanto por los órganos locales de difusión como por las agencias internacionales de noticias y por los reporteros de la prensa extranjera que llegaron especialmente al país para ese fin, lo cual parece confirmar la opinión anterior”, acota.

Dice el informe, también, que los medios de comunicación adoptaron una actitud de extrema prudencia en el juicio de la política y de los actos de gobierno. Que, por lo general, se abstuvieron de comentar, “siendo muy pocos aquellos órganos de difusión que hicieron labor de crítica”. Entre ellos, La Opinión, cuyo director y fundador, Timerman, había sido encarcelado y condenado, después, a un régimen de arresto domiciliario. Agravada la situación por la intervención militar de sus instalaciones, con un administrador oficial de la sociedad editora y un director periodístico que impuso una línea editorial afín a la dictadura.

El panorama expuesto en las consideraciones generales del informe de la CIDH no era alentador, por cierto: “...la acción represiva de diversos cuerpos militares o policiales que allanaron diversas empresas periodísticas en distintas localidades del país, deteniendo y encarcelan-

do a directores, redactores y reporteros de distintos medios de comunicación social; interviniendo militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa y los sindicatos de periodistas de distintas ciudades del país; clausurando o prohibiendo la circulación de determinadas revistas y periódicos; expulsando a corresponsales de agencias extranjeras de prensa y radio; y haciendo incinerar numerosos libros y revistas. Las medidas que afectaron a organizaciones políticas o gremiales repercutieron, además, en el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, por cuanto las leyes específicas adoptadas por el Gobierno establecieron penas de prisión que oscilan entre tres y ocho años para aquellas personas que llevaran a cabo la difusión ideológica, la exhibición, impresión, edición, reproducción, distribución o propagación de material relativo a las entidades mencionadas, lo que puede decirse también de las disposiciones específicas dictadas como medidas de seguridad nacional, puesto que ellas castigan toda actividad tendiente a alterar o suprimir el orden institucional y la paz social y como tal entienden las autoridades que será comprendida toda publicación que ellas consideren peligrosa. Buen ejemplo de esto lo ofrece el caso sucedido al director del diario Buenos Aires Herald, señor Robert Cox, quien fue detenido por haberse reproducido en aquel una información publicada en Roma sobre una conferencia dictada allí por un opositor del Gobierno”.

La última nota al pie del informe dice que Cox, nacido en Londres, radicado en la Argentina desde 1959 y casado con Maud Daverio, argentina, en 1961, anunció en diciembre de 1979 su intención de irse al exterior por las amenazas que había recibido de grupos que, estaba convencido, eran protegidos por la Junta Militar. El Herald, como La Opinión y la mayoría de los diarios, estuvo de acuerdo con la asonada, de modo de frenar la violencia de la Triple A, de los montoneros y de los otros grupos armados. Hasta llamaba afectuosamente “Dr. Joe” al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Pensaban Cox y otros directores que el papel de los militares iba a limitarse a restaurar la democracia y volver a la ley. Pero impusieron su propia ley. Una ley tan despiadada que no había ley. Lo comprobó la misión de la CIDH durante su observación in loco: “Un gran número de

periodistas fue víctima de violaciones a sus derechos individuales como persona por el hecho de ejercer actividades periodísticas”, concluyó.

Entre ellos, según informó una subcomisión de familiares de periodistas que formaba parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, unos 500 periodistas se habían visto obligados a abandonar el país por razones políticas. Otros habían desaparecido o se encontraban privados de la libertad. En una lista figuraban 68 periodistas desaparecidos y 80 detenidos.

Algunos casos habían sido confirmados in situ por la CIDH:

- “En la visita que la Comisión hizo a la cárcel de Rawson constató la detención bajo acusación de delitos subversivos de personas que ejercieron el periodismo: Mario Eduardo Quintana, alojado en el Pabellón 8. Cuando fue detenido trabajaba para la Agencia Informativa Interpress, y su caso ha sido denunciado ante la Sociedad Interamericana de Prensa. Se encuentra procesado y detenido bajo el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) por Decreto 791/98. Eduardo Jozami, alojado en el Pabellón 6, detenido desde 1975, es abogado y periodista, y al ser detenido se desempeñaba como secretario general de la Federación de Periodistas de Buenos Aires. Está condenado a 8 años de reclusión por un Consejo de Guerra. José Estigarribia, alojado en el Pabellón 1, detenido desde 1975, cuando se dedica al ejercicio del periodismo. Se encuentra procesado y detenido bajo el PEN por Decreto 3168. Es de nacionalidad paraguaya y llegó a la Argentina como refugiado político, siendo su esposa e hijos argentinos. Ha sido declarado refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
- “En el Hospital Penitenciario de Villa Devoto, la Comisión pudo constatar la detención del Sr. Felleri Vogelius, de 61 años de edad, habiendo informado que era director y dueño de la revista Crisis, de Buenos Aires.

- “En el establecimiento carcelario Unidad 9 de La Plata, la Comisión constató la detención de Plutarco Antonio Schallar, bajo el Poder Ejecutivo Nacional y con proceso, quien fue privado de su libertad el 24 de marzo de 1976. Como periodista trabajaba en el diario El Independiente.”

En la celda de la Superintendencia de Seguridad en la que Cox estuvo alojado, llamada vulgarmente tubo, oyó gritos de gente que era torturada, y vio una svástica e inscripciones en las paredes. En su mayoría, súplicas religiosas. Excepto una del ERP. Sólo esperaba que lo mataran.

La Junta Militar procuraba contrarrestar el informe de la CIDH, pero midió los tiempos. No debía ser antes del 15 de marzo de 1980, de modo de evitar un dictamen negativo en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. En ella, un dictador de otro signo, Fidel Castro, desdibujó el drama de los desaparecidos argentinos que planteaba una resolución de los Estados Unidos. Terminó siendo una condena lavada, y centrifugada, por iniciativa de la Unión Soviética, principal importadora de granos de la Argentina.

No era una cuestión ideológica, sino pura preservación del statu quo. Personal, en el caso de Castro, con tal de no tenderse a sí mismo una trampa. O, visionario al fin, de no verse obligado a suspender una gira en el exterior por hernia de disco, como Augusto Pinochet en Londres. Después, a diferencia de él, contribuyó con su respaldo moral a la causa argentina en la Guerra de las Malvinas. Actitud que no tuvo con la democracia, salvo que pudiera sacar partido. O rédito.

Contra el informe de la CIDH, presentado finalmente el 11 de abril de 1980, el régimen de Videla tenía instrucciones precisas: “Impugnación y rechazo por ser fruto de razones políticas que responden al interés de una gran potencia que ha utilizado la maquinaria de la OEA para sus designios respecto del futuro gobierno argentino (...) Debe ser presentado como el mejor ejemplo de la falta de un auténtico espíritu de comprensión y cooperación en la materia y como muestra de utilización política de un instrumento internacional (...) Debe condenarse la insensibilidad de la CIDH ante la conmoción interna de nuestro país y la defor-

mación de nuestra situación (...) La respuesta deberá tener el máximo nivel de ataque dado que se pretende enjuiciar al Gobierno (...) Resulta indiscutiblemente conveniente producir una respuesta categórica que incluya la impugnación y rechazo del informe (...) Se considera más providente y efectivo estudiar la posibilidad de enfatizar la impugnación sobre la base de subrayar el propósito sensacionalista, demagógico y oportunista de los miembros de la CIDH”.

Tanto Cox como Máximo Gainza, de La Prensa, y otros directores de diarios recibieron desde mediados de 1976 órdenes escritas de la Secretaría de Información Pública, en papeles sin membrete ni firma, de no publicar noticias de desaparecidos, de hallazgos de cadáveres o de enfrentamientos armados. Presiones, en una palabra. De las que también fue objeto la periodista radial Magdalena Ruiz Guiñazú, luego miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El país debía ser un vergel, acallando el reclamo de los familiares y de los amigos de las víctimas.

En octubre de 1977, el capitán de navío Pablo Carpintero, secretario de Información Pública, convocó a su despacho al director de La Nación, Bartolomé Mitre. Estaba disgustado por la publicación en el diario, el 8 de ese mes, de una noticia de agencia referida a la captura de buques extranjeros; había sido recogida de la agencia soviética Tass.

Dos días después, en la tapa del diario apareció un relato por menorizado del malestar oficial por “el tratamiento que dicho matutino dio en su edición del día 8 del corriente a una información procedente de Moscú, por la que se pretende inculpar a la Armada Argentina de un arbitrario acto de fuerza contra pesqueros rusos y búlgaros, sosteniendo que los mismos se encontraban fuera del límite de las 200 millas”.

Con la réplica del diario de los Mitre como valor agregado: “Entiende La Nación que el Gobierno pueda no coincidir en el tratamiento que los periódicos dan a las noticias, en el ejercicio de la libertad de prensa que el mismo Gobierno ha sostenido pública y reiteradamente –decía–. Lo que no puede dejar pasar en silencio es que el texto dado a conocer se exprese que la objetividad informativa «no debiera dar lugar a que un diario argentino pueda comportarse como un mero y pasivo

espectador en cuestiones que afectan a los intereses de la República». Y no puede callar, porque en sus 107 años de vida La Nación –diario fundado por un argentino y propiedad de argentinos– no ha hecho otra cosa que ocuparse cotidianamente de la defensa de los derechos e intereses nacionales”.

Timerman decía que sólo podía dar noticias sobre los desaparecidos bajo la argucia de las solicitadas. Por haber publicado un artículo de un sacerdote jesuita, crítico de la lucha antisubversiva, padeció la primera clausura de La Opinión. Después de la dictadura, mientras dirigía el vespertino La Razón, era considerado un periodista controvertido por el gobierno norteamericano a raíz de sus zigzags entre la democracia y los militares, según un despacho diplomático de 1984. Que presumía que la línea editorial del diario iba a ser más crítica de la gestión del presidente Raúl Alfonsín. Ese diario, al igual que La Nación y Clarín, eran socios del Estado. De Papel Prensa S.A.; en septiembre de 1978 inauguraba su planta en la localidad bonaerense de San Pedro.

Por haber sido europeo y judío, y por haber vivido en Israel, Timerman era, también, blanco de suspicacias. Sobre todo, después de haber sido expulsado del país en 1979. En 1991 firmó un artículo con el fiscal Julio César Strassera y con el escritor Osvaldo Soriano, publicado en España, en el cual denunciaba al gobierno de Carlos Menem por haber indultado a los cabecillas del régimen militar, juzgados durante la presidencia de Alfonsín. “Se instala en la sociedad argentina un peligroso sentimiento de impunidad”, decía. Declaró en el proceso contra los nueve jefes que, mientras permanecía en un centro clandestino de detención, había dicho que era judío, sionista y socialista, argumentos que llevaron a sus captores a descartar la posibilidad de una pronta ejecución.

Menem, también preso en la dictadura, perdió una querrela que había iniciado contra él por haber afirmado que, por su intermedio, el narcotráfico iba a ingresar en la Argentina. Años después, Timerman iba a participar de la creación de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente y de la red International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Había nacido el 6 de enero de 1923 en Bar, Ucrania; murió el 11 de noviembre de 1999 en Buenos Aires.

Para algunos había emprendido, igual que otros, una vil campaña de desprestigio del país en el exterior. Que, según la Asociación Patriótica Argentina, consistía en:

- Ser cínico. Cuanto más cínico sea el que planifique la campaña, mejor.
- Saber mentir. Cuanto más se mienta, mejor.
- Saber exagerar. Cuanto más se exagere, mejor.
- Saber inventar historias de torturas, violaciones en las más variadas formas, etcétera. Cuanto mayor imaginación se tenga, más truculenta resultará la historia y más despiadadamente aparecerán agraviados los derechos humanos.
- Crear organizaciones de carácter internacional y nacional para que se ocupen de defender los derechos humanos. Si ya están creadas, asegurarse su colaboración.
- Lograr un buen apoyo de agencias de noticias y corresponsales extranjeros.
- Asegurarse el amplio apoyo de la prensa mundial de izquierda.
- Constituir en Europa, los Estados Unidos, México, etcétera, centros de información o de solidaridad con los pueblos oprimidos para que se ocupen de alimentar convenientemente a los principales medios de comunicación de izquierda.
- Distribuir documentos calificados o inventados.
- Propagar rumores falsos y mal intencionados.

“Pero mucho más efectivos son los corresponsales extranjeros que por estar identificados con el marxismo o porque les pagan abundantes dólares constituyen el medio más eficaz para lograr una rápida y muy amplia difusión de narraciones orientadas a presentar en el exterior una imagen de una Argentina salvaje, sanguinaria, inhumana—decía la Asociación Patriótica Argentina, vinculada con fuerzas militares y policiales, y con familiares de víctimas de la subversión—; de una Argentina cuyas calles están permanentemente regadas de sangre y los cadáveres en ellas se acumulan unos sobre otros. Entre los corresponsales que más se han destacado y algunos que aún se destacan en la exageración y deformación de la realidad argentina pueden mencionarse: Philip Lebreux (Le

Monde), Oscar Romero (Pueblo, de Madrid), Vicente Panetta (Associated Press), Oscar Serrat (Associated Press) y Flavio Tavares Freitas (Excelsior, de México).”

En la Argentina de 1978, aquel señalamiento era una suerte de denuncia pública. Casi una sentencia. O, acaso, una réplica frente al sanguinario relato de Mario Eduardo Firmenich y Norma Arrostito, cabe-cillas montoneros, sobre la ejecución del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, ex presidente de facto de la República, publicado en la edición del 3 de septiembre de 1974 de la revista *La Causa Peronista*, cuya portada recordaba que cuatro días después, el 7 de ese mes, era el Día del Montonero.

A Aramburu lo habían secuestrado el 29 de mayo de 1970, Día del Ejército. El último del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Lo llevaron en la parte trasera de una camioneta, atado, disimulado entre fardos de césped. Era un pez gordo, considerado el cerebro de la Revolución Libertadora. Por ella cayó el segundo gobierno de Perón.

“El aramburazo, como lo bautizó el pueblo, que jamás tuvo dudas respecto de los autores del operativo, fue el lanzamiento público de una organización político militar que habría de transformarse, en poco tiempo, en ejemplo y bandera del peronismo, en la máxima expresión de la lucha contra el imperialismo y todos sus aliados y sirvientes nativos”, dice el artículo.

Lo llamaron Operativo Pindapoy: “En Aramburu se había sintetizado el antipueblo –agrega-. El vasco era responsable directo de los bombardeos a la Plaza de Mayo, de las persecuciones y las torturas. Aramburu era culpable directo, además, del fusilamiento de 27 patriotas durante la represión brutal de junio del 56”. Tema del libro *Operación Masacre*, de Walsh.

En un sótano, Fernando Vaca Narvaja, el ejecutor, dijo:

–General, vamos a proceder.

–Proceda –obtuvo como toda respuesta.

“Fernando disparó la pistola 9 milímetros, al pecho –dice la revista-. Después hubo dos tiros de gracia, con la misma arma, y uno con

una 45. Fernando lo tapó con una manta. Nadie se animó a destapararlo mientras cavábamos el pozo en que íbamos a enterrarlo.”

Tan fidedigno era el relato que Aramburu, sólo preocupado por la suerte de su familia y por la presencia de un sacerdote, denegada, terminó muriendo como un héroe. Como un buen cristiano que, tranquilo en todo momento, sólo quería reconciliarse con su alma y estar en paz con Dios.

Amistades peligrosas

La guerrilla, cual estigma, era parte de una generación diezmada. De los años setenta, signados por la utopía. Los periodistas, según Graham-Yooll, de padre escocés y madre argentina nacida en Gran Bretaña, no podían dedicarse a cubrir información cultural o social, sino política: “Varios habían sido mis compañeros de clase, mis compañeros de juego cuando era niño –dice–. De adolescentes íbamos a los mismos bailes en Quilmes y La Plata (provincia de Buenos Aires). Esas eran zonas de gran agitación que tuvieron un papel muy importante cuando comenzó la barbarie”. En la barbarie estaban, entre otros, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga, Enrique Gorriarán Merlo y Firmenich.

La autocensura, agrega, llevaba a los medios de comunicación a no difundir denuncias de gente que hablaba de cosas raras: desaparecidos y demás especies. La mayoría de los editores pensaba entonces que, en realidad, era una cortina de humo para cubrirlos mientras, perseguidos por algún delito inconfeso, emigraban hacia otras latitudes. Si no aparecían muertos a balazos.

La crónica de una conferencia de prensa de Firmenich previa a la liberación del empresario Jorge Born, secuestrado el 19 de septiembre 1974 en la localidad bonaerense de Olivos con su hermano Juan, directores de la compañía exportadora Bunge & Born, hizo de Graham-Yooll, radicado en Londres, la clave en la extradición del líder montonero. En 1984, convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, regresó al país para brindar su testimonio.

En seis meses habían liberado a Juan Born. Por el rescate de Jorge Born pagaron 60 millones de dólares. El mayor botín de la historia argentina, depositado, en gran parte, en el Banco Nacional de Cuba y, al parecer, retirado en la década del ochenta.

Firmenich anunció ese día, 20 de junio de 1975, feriado nacional, que iba a ser liberado. Pidió que fuera acompañado voluntariamente por dos periodistas. Graham-Yooll y Luis Guagnini, desaparecido el 21 de diciembre de 1977, se ofrecieron. Salieron en un auto de la casa de la localidad bonaerense de Acassuso, en donde había permanecido cautivo durante nueve meses, y se despidieron de él, casi sin hacerle preguntas, cerca de la estación Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.

“Lo mejor será que hagas un informe frío como si proviniera de la agencia de noticias –sugirió a Graham-Yooll un compañero de la redacción del Herald–. Nada de primera persona. Ya has estado preso unas cuantas veces y tienes proceso abierto. Ni tú ni el diario pueden aguantar otra más.”

Era la historia que no había podido escribir en ese momento, sino mucho después. Esa historia con la cual sueña todo periodista. La primicia y, a la vez, la vivencia, teniendo a mano al personaje más buscado. Quien, ya liberado, sólo atinó a decir: “Qué hermosa tarde”. Sin estridencias, deseoso de ir a su casa en lugar de tomar un café o un trago en un bar cercano, como pretendían sus súbitos escoltas.

Por todas había pasado Graham-Yooll, periodista del Herald desde 1966, a los 22 años. Diez años hasta la partida obligada, entrevistándose con militares y, según el léxico de la época, con elementos de la organización proscripta, el ERP, y de la organización autoproscrita, Montoneros.

Born, curiosamente, iba a formar después una sociedad con uno de sus secuestradores, Rodolfo Galimberti, muerto en febrero de 2002 a causa de un aneurisma. Eran dueños de una compañía de seguridad, Hard Communication, que desde 1999 había entablado una demanda por un presunto fraude en los premios millonarios que otorgaba el programa televisivo de Susana Giménez, diva de tiempos pretéritos, de quien el ex jefe montonero, ligado a la CIA y a la Secre-

taría de Inteligencia del Estado (SIDE), había sido guardaespaldas. Una historia singular. Y circular. Como las de otros subversivos, de participación activa en secuestros y en atentados, reciclados a sus profesiones originales. El periodismo, entre ellas.

Eran otros tiempos, marcados por el quiebre que había provocado la derrota militar en las islas Malvinas, en 1982. El salvoconducto de la democracia. Resistida hasta último momento: en el proceso electoral del año siguiente era blanco de un atentado el semanario *El Porteño* y eran secuestrados ejemplares de la revista *Humor*, la preferida de la clase media, a raíz de un artículo que afirmaba que 2,5 millones de argentinos habían partido hacia el exterior para eludir la represión o para buscar trabajo.

Superadas las sentencias del juicio a las juntas militares con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final durante el gobierno de Alfonsín y con los indultos para ambos bandos durante el gobierno de Menem, más de una década demoró el mea culpa del terrorismo de Estado. Borroso, sin embargo: “Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, ordeno, una vez más, al Ejército Argentino, en presencia de toda la sociedad argentina, que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y reglamentos militares –dijo el jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, el 25 de abril de 1995, por televisión–. Quien lo hiciera, incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales”.

Casi dos décadas antes, Walsh advertía en su carta: “Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido”.

Tres años después del mea culpa de Balza, en enero de 1998, casi al filo del menemismo, el capitán Alfredo Astiz, alias El Angel Rubio de la Muerte por su participación en secuestros en la ESMA y por haber marcado sospechosos como infiltrado en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, se ufanaba en una entrevista: “Soy el mejor hombre preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista (...) Para los periodistas ahora resulta que no existió la subversión (...) Tienen que cuidarse; van a terminar mal”. Como si el tiempo no hubiera pasado.

4. PRETÉRITO IMPERFECTO

E

STABA entusiasmado. Como pocas veces, parece. Algo, empero, iba a comenzar a turbarlo, disipando aquella reacción inicial. Aquel fervor espontáneo frente al desafío de trasponer una puerta del otro lado del Atlántico: en la Embajada de la República Argentina en París, encargándose de asuntos de prensa. Marisa Presti, su mujer, vacilaba. Sabía que era una oportunidad única para él, Rodolfo Fernández Pondal, de 29 años, periodista, hombre orquesta del semanario *Ultima Clave*, de Buenos Aires, y que, con una hija de apenas un año y ocho meses, iba a significar algo así como el trampolín hacia una nueva vida. Vacilaba, sin embargo. Temerosa de lo nuevo. O de lo desconocido.

Lo nuevo, o lo desconocido, terminó tendiéndoles una trampa: “Súpose extraoficialmente que en las últimas horas de anteanoche fue secuestrado el periodista Rodolfo Fernández Pondal, perteneciente a la redacción del semanario *Ultima Clave* y colaborador de varias publicaciones en el exterior –decía la crónica–. De acuerdo con esta versión, anteayer, a las 23.50, Fernández Pondal viajaba en un automóvil Alfa Romeo en compañía de la segunda secretaria de la Embajada de Suiza cuando, al llegar a la calle Carlos Pellegrini entre Juncal y Arenales, observó que era seguido por un Ford Taunus de color amarillo en cuyo interior viajaban dos hombres”.

La crónica, publicada el domingo 7 de agosto de 1977 en el diario *La Nación*, de Buenos Aires, era escueta, pero precisa. Sumamente precisa. Todo en ella iba a coincidir con los relatos posteriores, recogidos por Marisa Presti, la mujer de Fernández Pondal, mientras recorría un vía crucis inesperado en busca de una verdad vacilante, como ella ante la puerta que se abría, allá lejos, hace tiempo, en París. Esa verdad con la cual no quiso comulgar durante años. Esa verdad que necesitaba evidencias, más que otras cosas.

“El periodista descendió de su vehículo y se encaminó hacia un edificio de departamentos donde llamó insistentemente por el portero eléctrico –decía la crónica–. Al no obtener respuesta intentó retornar al automóvil en el que viajaba cuando los dos hombres que se desplazaban en el rodado que los seguía, y mediante el empleo de armas de fuego, lo obligaron a introducirse en el Ford Taunus, que se alejó velozmente del lugar. Posteriormente, el hecho fue denunciado a las autoridades de la comisaría 15a., donde se inició un sumario por privación ilegítima de la libertad con la intervención del juez Dr. Adolfo Lanús, por Secretaría Número 106 del Dr. Carlos Garvarino.”

Rodolfo Jorge Fernández (el segundo apellido, Pondal, era un seudónimo), cédula de identidad número 5.773.108, libreta de enrolamiento número 5.274.710, socio de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires número 6178, matrícula de periodista en trámite, carnet de jubilaciones en trámite, había desaparecido en ese agujero negro de búsquedas infructuosas que deparó la metodología del terror aplicada por el gobierno militar argentino desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 contra todo aquello que presumiera subversivo o, en su caso, peligroso.

Era hijo de Rodolfo Luis Fernández y de Hilda Beatriz Fernández. Había nacido el 9 de junio de 1948 en el populoso barrio de Flores, Buenos Aires. Un funcionario del Registro Civil de Buenos Aires, por instancias de un juez federal, dictó el 5 de enero de 1982, a cinco años y cinco meses del secuestro, la presunción de su fallecimiento. Y fijó como fecha el 6 de agosto de 1977, un día después de su desaparición.

“El señor Fernández Pondal es, según los archivos del Herald (que no son exhaustivos), el décimo periodista en desaparecer desde el golpe –decía el 24 de agosto de 1977 un editorial del diario The Buenos Aires Herald–. Tan sólo cuatro de los diez han aparecido hasta ahora. Uno fue hallado asesinado. Cuatro permanecen desaparecidos. A otras profesiones –las penurias de los abogados acuden a la mente– puede haberles ido aún peor. El caso no es que un periodista destacado –por conmocionados que nos sintamos ante que cualquiera pueda secuestrar a alguien de la integridad y honestidad del señor Fernández Pondal– haya sido secuestrado. Debemos desprendernos de esa piel extra que

hemos adoptado para protegernos del sufrimiento en bien de los demás. La acción del gobierno no se efectivizará sólo si la reacción pública fuerza a que se adopten medidas para concluir con este gangsterismo, que se remonta a la apatía pública e indiferencia oficial de comienzos del año 1970. El país jamás se recuperará si la falta del imperio de la ley subsiste bajo la superficie de la vida argentina, reclamando innumerables víctimas, mientras nos desentendemos.”

En los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada a fines de 1983 por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín con el objeto de establecer el destino de aquellos que un día no regresaron a casa, Fernández Pondal iba a quedar identificado con el número de legajo 2620 entre 84 casos de periodistas desaparecidos (cifra corregida y aumentada después): “Fue secuestrado en la vía pública en Capital (Buenos Aires) –indicaron registros posteriores–. Visto en CCD (Centro Clandestino de Detención) ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), sin indicación de fecha”.

Había sido visto con vida, según una nómina divulgada a comienzos de 1984. Tres habrían sido los testigos, según una nota sin fecha del Ministerio del Interior dirigida al juez federal Miguel Guillermo Pons, en cuyo despacho estaba asentada la causa: Jaime Feliciano Dri (ex dirigente montonero y diputado provincial peronista de la provincia del Chaco, fugado el 19 de julio de 1978 rumbo a París; había estado detenido en la ESMA, hasta el 27 de diciembre de 1977, y en tres centros clandestinos de Rosario, provincia de Santa Fe); Alberto Eduardo Gironde (también radicado en París después de haber estado detenido en la ESMA, en donde preparaba informes políticos sobre la base de libros escogidos por los militares), y una persona de identidad anónima.

En el casino de oficiales de la ESMA, enclavada en la Avenida del Libertador, Buenos Aires, cerca del estadio de fútbol de River Plate, sede principal del Mundial 78, operaba el Grupo de Tareas 3.3.2, integrado por el Servicio de Inteligencia Naval. Era cedido, en ocasiones, al Ejército y la Fuerza Aérea. Tenía tres pisos; en el sótano y en el altillo estaban alojados los detenidos, blanco de torturas.

Por aquellos crímenes han sido juzgadas las sucesivas cúpulas militares y sus ejecutores, beneficiados por las leyes de Obediencia Debidada y de Punto Final, dictadas durante el gobierno de Alfonsín. Entre otros, el teniente de navío Alfredo Astiz, llamado a sí mismo Gustavo Niño mientras fingía pena por un presunto familiar desaparecido como infiltrado en las reuniones de las Madres de Plaza de Mayo en 1977, y su par Ricardo Miguel Cavallo, retirado como capitán, alias Miguel Angel Cavallo, Sérpico, Ricardo o Marcelo, involucrado en el secuestro, la tortura y la desaparición de 227 personas, la tortura de otras 110 y la desaparición de 16 recién nacidos cuyas madres habían sido secuestradas.

Cavallo quedó detenido el 24 de agosto de 2000 en Cancún, México, mientras dirigía el Registro Nacional de Vehículos (Renove) de ese país. En el auto de procesamiento, cursado al mes siguiente por el juez español Baltasar Garzón a la Corte Suprema de México para resolver su extradición a Madrid, figuraba Fernández Pondal en una lista de más de 200 víctimas de la represión en la ESMA.

En ella había detenidos que eran clasificados como Casos 1000. Es decir, políticos, sindicalistas, artistas, periodistas o dignatarios de la Iglesia considerados peligrosos que, a su vez, eran difíciles de secuestrar por su trascendencia. Fernández Pondal era uno de ellos, según la revista *La Semana*, del 22 de marzo de 1984: “Fue uno de los pocos Casos 1000 que salió de los archivos para ser sometido a ejecución. Ex integrante de Radio Rivadavia y codirector del boletín confidencial *Clave Política* (Última Clave, el nombre correcto), Fernández Pondal fue secuestrado por los capitanes (Jorge Enrique) Perren y (Alberto) González Menotti porque «después de coquetear largo tiempo con (Emilio Eduardo) Massera quiso pasarse del lado de Viola», según el testimonio coincidente de varios sobrevivientes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Tras permanecer encerrado varios días en un calabozo de la Capucha, Fernández Pondal fue finalmente trasladado”.

Trasladado significaba ejecutado.

“No sabemos quién tomaba las decisiones, no sabemos si el Tigre (capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta) un día se levantaba y decía: «Hoy hago un traslado», o si lo charlaba en el Edificio Libertad con

Massera (comandante en jefe del arma; miembro de la primera junta militar) y decía: «Comandante Cero, tengo el piso lleno, son 40, voy a hacer un traslado», y éste le firmaba la papeleta... –relató Miriam Lewin de García, sobreviviente de la ESMA–. No sabemos si dependíamos exclusivamente de la simpatía o antipatía de ellos, para nosotros es algo absolutamente oculto. Hubo gente a la que ya habían «puesto a trabajar» y después la asesinaron. Fueron muy pocos, pero los hubo.”

Entre marzo de 1976 y marzo de 1977, Perren, alias Puma, Octavio, Morris o Inglés, era el jefe del sector Operaciones de la ESMA; luego estuvo en Francia, en donde dirigió el Centro Piloto de París, al cual había sido convocado Fernández Pondal, en realidad, no a la Embajada, como presumía al comienzo Marisa Presti. El otro imputado, González Menotti, alias Luis o Gato, era un oficial de inteligencia que ejercía acción psicológica desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

París era una fiesta

En 1977, en coincidencia con el secuestro de Fernández Pondal, las salas de torturas de la ESMA tenían los números 12, 13 y 14. Los traslados significaban la muerte: el día señalado, los denominados pedros llamaban por su número a los elegidos por un grupo de oficiales. Los sacaban de sus cuchas (celdas), distribuidas en la Capucha (recinto con forma de ele) y, conducidos al sótano por los verdes (guardias), recibían una inyección de Pentotal (Pentonaval, en la jerga de los represores) para adormecerlos. En ese estado eran conducidos al sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, y cargados en aviones desde los cuales los arrojaban, vivos, al Río de la Plata o al mar. Otros métodos de exterminio eran el ahorcamiento, la aplicación de descargas eléctricas, el remate con armas de prisioneros heridos, la inyección letal y la incineración de los cuerpos, llamada asado, como si de un festín gastronómico se tratara.

En una ocasión, el difunto padre de Fernández Pondal, suboficial mayor retirado del Ejército, estaba en un bar del barrio de Constitu-

ción, Buenos Aires. Estaba solo, bebiendo un café. Desde una mesa vecina, un hombre se ufanaba de los métodos de la represión: decía que algunos detenidos eran asesinados y que, por la noche, eran arrojados desde aviones al Río de la Plata, así como a un lago de la provincia de Mendoza, con piedras atadas a sus cuerpos.

Rodolfo Luis Fernández, fuera de sus cabales, se puso de pie y, blandiendo una botella con ánimos de hacerla añicos en su cabeza, bramó que su hijo había sido secuestrado y que, desde entonces, no sabía de él. El hombre que había hecho la brutal apología del exterminio estaba acompañado por otro que terció en la discusión, diciendo que tuviera cuidado, que era un comodoro. Es decir, un militar.

En la ESMA, según relatos de sobrevivientes, campeaba un proyecto de recuperación o de captación de algunos detenidos, de modo de lograr su adhesión ideológica a la dictadura militar. Por la vía de la reducción a la servidumbre, ellos realizaban trabajos de mantenimiento y de electricidad, así como falsificaciones de documentos, transcripciones de cintas grabadas, traducciones y monografías sobre temas históricos de especial interés para las autoridades militares. Había otra tarea que guardaba relación con una de las pistas, o de las causas, de la desaparición de Fernández Pondal: el control y el seguimiento de las noticias emitidas por un teletipo de la Agencia France Press (AFP). En ello tallaba la oferta que había recibido antes del desenlace. ¿Ser parte del área de Prensa de la Embajada argentina en París? Ser parte del Centro Piloto de París. Su fin era “influir en el mejoramiento de la imagen de las autoridades militares en el exterior respecto a la situación de los derechos humanos en la Argentina”, según el auto de procesamiento de Cavallo cursado por Garzón. En términos militares, “contrarrestar la propaganda antiargentina”. Premisa a tono con la guerra psicopolítica desatada desde las entrañas de la Operación Cóndor, multinacional del crimen de la cual participaban los servicios de inteligencia del Cono Sur.

Astiz intentó infiltrarse en grupos de argentinos exiliados en París, al igual que en Buenos Aires con las Madres de Plaza de Mayo. El entonces embajador en Francia, Tomás de Anchorena, había planteado al gobierno militar “la necesidad, justamente, de tener un grupo de gente

que manejara bien las noticias (...) La idea fue aceptada, pero, a mi juicio, desvirtuada (...) En vez de un equipo profesional, se convirtió en un equipo de gente de la Armada (...) Creía que su obligación estaba más hacia el comandante que hacia el jefe de la misión (...) Mi secretaria de Prensa tiene choques con esos oficiales de la Armada que estaban al frente del Centro Piloto de París”.

La secretaria de Prensa de la Embajada era la diplomática Elena Holmberg, sobrina del ex presidente militar Alejandro Agustín Lanusse. Era su primera misión en el exterior. Debió regresar a la Cancillería por los choques que tenía frecuentemente con el capitán Perren, señalado como uno de los autores del secuestro de Fernández Pondal, al frente del Centro durante un tiempo. La secuestró el 20 de diciembre de 1978, en Buenos Aires, el Grupo de Tareas 3.3.2; su cadáver apareció el 11 de enero de 1979, descompuesto, en el río Luján, Tigre, provincia de Buenos Aires.

La investigación sobre el asesinato de Holmberg, encarada por sus hermanos, derivó en una hipótesis inquietante: Massera temía que ella revelara su pertenencia a la logia masónica Propaganda Dos (P-2), de Licio Gelli. De esa hipótesis, a su vez, surgió una conexión con los secuestros de Fernández Pondal y del embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá. Ambos sabían, al igual que ella, que el jefe de la Armada, apodado Almirante Cero o El Negro, había recibido 1.400.000 dólares de Montoneros para financiar su proyecto político, el Partido para la Democracia Social, estableciendo una suerte de tregua en la campaña contra el gobierno militar en vísperas del Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la Argentina en 1978.

Del Centro Piloto de París se enteró entonces Lewin de García, periodista, detenida en la ESMA desde el 26 de marzo de 1978 hasta el 10 de enero de 1979; la habían secuestrado el 17 de mayo de 1977. Otra detenida, Mercedes Carazzo, había trabajado en Francia como encargada de relaciones públicas del Centro, según testificó el 18 de julio de 1985 durante el juicio a las juntas militares.

También se enteró entonces Lewin de García de la desaparición de Hidalgo Solá por boca de otro secuestrado, Lisandro Cubas: “Me parece que estos se hicieron a Hidalgo Solá”, escuchó. Había un deteni-

do que respondía a sus características, pero “no se nos permitía tener acceso a él, se lo mantenía apartado totalmente del resto de los detenidos; cuando esa persona ingresaba en el baño, se nos retenía en habitaciones”.

Fernández Pondal, al igual que Holmberg e Hidalgo Solá, eran cercanos al general Roberto Viola, sucesor de Jorge Rafael Videla en la presidencia de facto en 1981. Entre sus pertenencias, Holmberg atesoraba una foto de Massera con Mario Alberto Firmenich, jefe de Montoneros, tomada en el hotel Intercontinental, de París, durante uno de los viajes clandestinos que habría realizado a Francia, Italia y Rumania, según declararon en la causa los diplomáticos Gregorio Dupont (hermano del publicista Marcelo Dupont, asesinado) y Gustavo Urrutia. De ello tuvo noticias, también, un hermano de ella, Enrique Holmberg, teniente coronel retirado del Ejército.

En una reunión realizada en la casa de María Cristina Guzmán (luego diputada por el Movimiento Popular Jujeño y candidata a vicepresidenta de la Nación) estaba Viola. En abril de 1985, el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas, Horacio Domingorena, reveló durante el juicio a las juntas militares que alcanzó a formularle dos preguntas: “Si eran conscientes de que las armas que se habían repartido entre los grupos paramilitares o parapoliciales se podían volver en contra de ellos en el futuro y si tenía presente el secuestro del periodista Fernández Pondal. Viola me contestó que eran conscientes de ese peligro y a lo segundo me dijo que él venía de hablar con la esposa de Fernández Pondal y que su desaparición no se podía atribuir a grupos subversivos, sino que había sido secuestrado por otras fuerzas que nada tienen que ver con la guerrilla. Ojalá, me dijo, que pudiera algún día precisar quiénes fueron los que lo secuestraron”.

¿Qué sabía Fernández Pondal? Algo, seguramente. Algo que ni su mujer, Marisa Presti, había logrado desentrañar en más de un cuarto de siglo de dudas, más dudas que certezas. Algo que en diálogos sucesivos conmigo, frente a ceniceros que iban a poblarse rápidamente de imágenes borrosas, desembocaba, cual círculo perverso, en cabos sueltos, antiguos contactos, conjeturas absurdas, situaciones inauditas, sonrisas sin humor, recuerdos imprecisos. Malla de contención, o pretérito

imperfecto, frente a la indiferencia de algunos colegas de su marido, periodistas como yo, capaces de cruzar la calle frente a ella con tal de no verse involucrados, de no mover un solo dedo, o un solo resorte, por ayudarla, y ayudarse a sí mismos, a esclarecer un pasado, entonces presente, inverosímil, aberrante.

Tan aberrante que, si por ella hubiera sido, tan sólo estaba dispuesta a agradecer las gestiones del director del Herald, Robert Cox, británico. En diciembre de 1979, de tanto meter las narices, debió irse del país con su familia por una amenaza de muerte proferida contra uno de sus hijos en una carta firmada por Montoneros (siempre sospeché que era del gobierno militar); había estado preso durante 24 horas, el 22 de abril de 1977, por haber violado una ley de seguridad.

“Mi marido manejaba mucha información y tenía contactos con embajadores y gente de la Marina y del Ejército, y hasta Massera lo había invitado a visitar una plataforma submarina –me dijo Marisa Presti–. Nunca supe de amenazas ni nada de eso. Fue una venganza, creo. Le habían ofrecido un cargo en la Embajada en París. Y estaba contentísimo con eso. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero debía acompañarlo. Una noche me dijo que ya no le gustaba la idea y que no íbamos a ir. Recuerdo que le dolía el estómago.”

Hacia un mes que tomaban clases de francés. Iban con otro periodista, de nombre Héctor Carricart, y su mujer. Ese periodista, colaborador de un diario de Villaguay, provincia de Entre Ríos, hasta donde pude saber, habría sido el nexo entre Fernández Pondal y el embajador De Anchorena, según Marisa Presti. A los pocos meses del secuestro partió rumbo a Suiza, al parecer. Y ella no supo más de él, pero, me confesó, desde un primer momento no se sentía cómoda con su presencia. Le molestaba algo; no sabía qué.

La clave estuvo en otra frase de Fernández Pondal, aquella noche, cuando decidió no ir a París: “Esto es un segundo caso Graiver”. Fue la causa formal que utilizó el gobierno militar para terminar con el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman: el banquero David Graiver, fallecido en agosto de 1976 en un misterioso accidente de aviación cerca de Acapulco, México, llegó a poseer el 45 por ciento de las acciones de la

compañía editora del periódico, Olta S.A., y de los talleres Establecimientos Gráficos Gustavo S.A.

Pesquisas del gobierno militar concluyeron que había sido financista de Montoneros en el botín obtenido por el secuestro del empresario Jorge Born, en 1974, del orden de los 60 millones de dólares. El banco de Graiver, a su vez, recaudaba fondos para María Estela Martínez de Perón, llamada Isabel o Isabelita.

La Opinión era crítica de la subversión. Graiver había sido en 1971, en coincidencia con la fundación del diario, el financista fantasma de una revista que alentaba la lucha armada, pero, al mismo tiempo, viajaba con el entonces presidente de facto, Lanusse. En su gobierno ocupó un cargo en el Ministerio de Bienestar Social, copado después, en el gobierno de la viuda de Perón, por José López Rega, mentor de la Alianza Antiterrorista Argentina (Triple A).

Plegaria no atendida

Tras la desaparición de Fernández Pondal, Cox fue uno de los pocos que se acercó a Marisa Presti. La llevó a ver unos documentos en la Embajada de Suecia: decían que había sido “trasladado en forma individual”. Era la sentencia de muerte. Que ella, en su fuero íntimo, se rehusaba a aceptar.

Cox tenía buena relación con el embajador de Suecia en Buenos Aires, Bertie Kollberg: “El y su mujer hicieron mucho por detener la máquina de tortura y muerte de la ESMA –me dijo–. Obviamente, el caso Hagelin era una alarma temprana para ellos”. Después de ver los documentos, le transmitió a Marisa Presti su impresión: “Creo que a Rodolfo lo han matado”. Ella no dio crédito a sus palabras, aferrada a la esperanza de volver a verlo. De vivir como antes. O de revivir.

El caso Hagelin, sin embargo, había abierto una puerta. Todo comenzó el 26 de enero de 1977, a eso de las cinco de la tarde, con la detención de Norma Susana Burgos en la vía pública. Obra de un grupo comando de la ESMA que, horas después, arribó con ella a su domicilio,

en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Lo allanaron y montaron en el lugar una guardia de siete personas armadas. Estaban bajo el mando de Astiz. Al día siguiente, a las ocho y media de la mañana, Dagmar Ingrid Hagelin, sueca, de 17 años, fue a visitar a Burgos, amiga de ella. Iba a preguntarle si partía de vacaciones rumbo a la playa.

Los guardias creyeron que era María Antonia Berger, rubia y de ojos claros como ella, dirigente de Montoneros. La encañonaron. Hagelin entró en pánico. Huyó. Astiz, en la vereda, puso una rodilla en tierra, extrajo su pistola reglamentaria y efectuó un solo disparo. Dio en la espalda de la muchacha que, herida, iba ser puesta en el baúl del taxi de un vecino. ¿Destino? La ESMA.

El embajador Kollberg otorgó a Dagmar Hagelin amparo diplomático, envió notas de protesta y se reunió con miembros del gobierno argentino. A comienzos de febrero de 1977, la junta militar (el triunvirato formado por Videla, Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti) discutió el caso en el Edificio Libertad, propiedad de la Armada. Ragmar, el padre de la muchacha, no dudó en señalar al responsable: Massera. El ejecutor, según todos los relatos, había sido Astiz.

En agosto de 2003, derogadas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y reabiertas las causas por los crímenes cometidos en la ESMA y en el Primer Cuerpo de Ejército, interrumpidas en 1987, la Corte Suprema de Justicia resolvió continuar con el caso Hagelin: ordenó la detención de Astiz, condenado en ausencia en Francia, a cadena perpetua, por el asesinato de dos monjas de esa nacionalidad, Alice Domon y Léonie Renée Douquet.

En el Herald, fundado en 1876 por el escocés William Cathcart, los editoriales debían ser publicados en inglés y en español por una ley de los tiempos de Juan Domingo Perón. Un capricho del general con tal de prescindir de los servicios de un traductor. Al año del secuestro de Fernández Pondal apareció uno conmovedor. “En homenaje”, se titulaba. Y decía: “Rodolfo Fernández Pondal era el periodista más valorado de la Argentina. Los embajadores extranjeros lo invitaban a almorzar cuando tenían que escribir un informe sobre el panorama político argentino. Sus contactos eran del más alto nivel y podía tomar el teléfono y llamar a

generales, almirantes y brigadieres, quienes le tenían confianza y lo respetaban (...) En la creencia de que Rodolfo se salvaría por sus contactos de alto nivel, sus amigos y colegas no dieron la alarma con estridencia, la única defensa de la prensa, tan vulnerable en una década de terror (...) Quizá fuera apresado por las mismas personas que sequestraron a otros dos demócratas muy respetados y que desaparecieron hace más de un año, el entonces embajador en Venezuela, Dr. Héctor Hidalgo Solá, y el ex secretario de Prensa de la Presidencia, Sr. Edgardo Sajón. ¿Quién sabe? (...) Lo único que nos queda hacer, entonces, es rezar (...) Hoy ofrecemos una plegaria por Rodolfo Fernández Pondal y también rendimos homenaje a todo lo que él representó. Si está vivo todavía, no habrá cambiado. Su espíritu es inconquistable y vencerá. Esperamos que esta victoria signifique su retorno sano y salvo a su esposa y a su pequeña hija. Pero si así no fuera, su victoria se dará en el triunfo final de los principios por los cuales vivió y por cuales tantos hombres dieron su vida”.

En términos similares se pronunció días después La Nación: “Tal caso es, en definitiva, testimonio del alto riesgo que ha significado en todos estos años la actividad periodística –decía en un editorial–. Es un caso, entre otros de más antigua y también de muy reciente data, sobre los que no hay luces esclarecedoras. Pero por eso mismo constituyen la certificación del grado de inseguridad individual que todavía perdura en la República y de la vulnerabilidad relativa del Estado para impedir que haya grupos operantes dispuestos a compartir con él el uso de la fuerza. Lo grave es que pueden haberlo compartido”.

¿Por qué Cox, como pocos, se involucró en el caso Fernández Pondal? “Tuve dos razones primordiales –me respondió–. Sabía que era posible salvar una vida con la publicación de una nota sobre la persona, especialmente en un caso en que tan obviamente no era un terrorista. La otra razón era que la línea editorial del Herald era tratar de persuadir al gobierno militar de que sus métodos no eran aceptables. James Neilson, excelente escritor, me ayudó con su filosofía conservadora (liberal, en el sentido real de la palabra) a hacer sermones dirigidos a la conciencia de los militares y de sus ayudantes civiles.”

En una reunión que mantuvo en junio de 1979 con el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, después de una conferencia de prensa, llegó a espetarle: “Mire, los excesos son, por ejemplo, Fernández Pondal. Muchos periodistas son excesos. Hidalgo Solá es un exceso”. Su interlocutor, acompañado por el subsecretario de Interior, coronel José Ruiz Palacios, respondió: “Hidalgo Solá, sí. Fernández Pondal no sé cómo murió. Sí. Yo no puedo saber si es exceso o no”.

En vano insistió Cox:

–Pero ustedes tienen que hacer algo por la gente que es sincera, y hay mucha gente que lo es. Ese es el gran problema. Como me dijo la señora Fernández Pondal: ¿cuál es el problema? ¿Mi marido es un paquete? Ella no ha conseguido absolutamente nada. Ni la han llamado desde la Cancillería diciendo, bueno, señora, tenemos... No sabe qué hacer.

–Yo, a los hijos de Hidalgo Solá, hace mucho que no los veo –dijo Harguindeguy, yéndose por las ramas–. Han estado en mi despacho hablando conmigo, conversando varias veces después de haber muerto el padre y demás.

–Toda la investigación es una broma.

–Cero. Broma no. Llegó a cero, llegó a cero. Escúcheme, Cox, escúcheme...

En una carta dirigida el 26 de mayo de 1980 desde Virginia, Estados Unidos, a su amigo Harry Ingham, empresario germano-argentino radicado en Buenos Aires, Cox le confesó: “Estoy particularmente preocupado por los colegas que han desaparecido, y nunca me silenciarán hasta que los culpables del asesinato de Fernández Pondal sean juzgados. Porque un día podrían elegir desaparecer a otros colegas o amigos. Me imagino que les encantaría deshacerse de Manfred Schonfeld (columnista de La Prensa) o de Jim Neilson (director del Herald después de él). Y como me siento tan culpable por no haber gritado más fuerte cuando se lo llevaron a Rafael Perrota (director de El Cronista Comercial), y pidieron un rescate a su familia, y a mucha otra gente inocente, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que sepan que podría (y sin duda lo haría) levantar un huracán de protesta en el exterior, si empiezan nuevamente con su

maquinaria de terror. Me doy cuenta de lo cómplice del diablo que fui y debo corregir esto ahora”.

En otra carta, fechada el 9 de junio de 1982 en Portland, Maine, le dijo: “Estoy totalmente convencido de que el problema de los desaparecidos necesita una enérgica lucha para encontrar soluciones; que los responsables de los excesos deben ser castigados, y que los casos de inocentes –como los de Hidalgo Solá, Perrota, Holmberg, Sajón, Pondal– deben ser examinados”.

El enigma sobre Fernández Pondal ha perdurado. Marisa Presti no cejó en su intento de hallar una respuesta: “La muerte necesita un cuerpo”, ha esbozado en una novela testimonial en la que, cual catarsis, procuró reflejar el calvario de ser la esposa de un desaparecido durante la dictadura militar. De ser la viuda de una sombra que durante años, más de un cuarto de siglo, ha transitado cada rincón de su departamento del barrio de Caballito, Buenos Aires, del que no se atrevió a mudarse, esperando, tal vez, que todo volviera a su lugar. Que Fernández Pondal, Rolo en la intimidad, regresara aquella noche del 5 de agosto de 1977. La noche en que iba a ser visto por última vez.

“Este era Rodolfo (...) –dice Marisa Presti, Sara en su novela–. Era una persona muy vital, periodista, como vos, siempre corriendo... Amaba lo que hacía; era capaz de pasar más de un día sin dormir, a veces alimentándose sólo con café. Sentía pasión por enterarse de las últimas noticias antes que otros (...) Un hombre joven, inerte, con unos inmensos ojos verdes abiertos y fijos en la nada.”

La indiferencia del mundo

Aquel viernes fatídico había comenzado otra vida para Marisa Presti (Alicia María Isabel Prestigiaco, su nombre real), creativa publicitaria y docente universitaria, y la pequeña María Paula, no por nada periodista en su edad adulta. Esa otra vida estaba signada, más que todo, por la falta de solidaridad de propios y extraños frente a un dilema irresoluble: la desaparición de un ser querido en una sociedad que nega-

ba que aquello fuera cierto. Una realidad más tremenda y traumática que la muerte misma, quizá, por la falta de certeza sobre el paradero y, a la vez, por una terrible sensación de sospecha por ser familiares de alguien cuyos rasgos sólo han atesorado los recuerdos en un derrotero errático en el cual su mujer, sobre todo, recibió desde promesas de un pariente militar (“el paquete está”, “al paquete le late” o “al paquete lo mudaron”) hasta certezas de una vidente. Infundadas todas ellas.

El secuestro coincidió con amenazas y persecuciones de otros periodistas. Como Edgardo Sajón, ex secretario de Prensa y Difusión del presidente Lanusse, editor coordinador de *La Opinión*, y Enrique Jara, subdirector de *La Opinión*, desaparecidos. El desenlace iba a ser la intervención del diario, el 25 de mayo de 1977, con un general como director, y la partida de Timerman del país, con un pasaporte de no argentino y una visa del Estado de Israel, después de haber sido torturado en dos centros clandestinos de detención.

Fernández Pondal, según Marisa Presti, solía volver tarde a casa. El día de su secuestro, vestido con jeans, mocasines y una chaqueta azul (regalo de Massera en la visita a la plataforma submarina), partió a media mañana con la promesa de regresar temprano a cenar: “Me pidió que lo esperara, pero, a las 10 de la noche, me llamó por teléfono para disculparse”. A eso de las tres o cuatro de la mañana, ella se despertó, sobresaltada. No había llegado: “Me inquieté un poco”. A las seis, angustiada, llamó por teléfono a un general retirado de apellido Ponder. Cuatro horas y media después tuvo el primer indicio: “Me dijo que habían visto que se lo llevaban en un Ford Taunus amarillo”.

La descripción coincidía con la crónica que iba a aparecer al día siguiente en *La Nación*. Pero no conducía a nada. Y Marisa Presti, casada con Fernández Pondal el 16 de noviembre de 1973 después de cuatro años de noviazgo, se sintió desgarrada. A tal punto que tiró el teléfono y estalló en llanto. “Sentí dentro de mí una tragedia”, me dijo. En los tres años siguientes nada cambió de lugar en su casa: “Todo lo estaba esperando —escribió—. Sus cosas, su ropa colgada en el placard, su taza de desayuno, su toalla. Me parecía que en cualquier momento podía sonar el timbre y lo iba a ver por la mirilla de la puerta. Estaba convencida. Pero, en lo

más íntimo, mi corazón parecía estar seguro de lo contrario”. Simón, el perro de la familia, ya no ladraba frente a la ventana cada vez que su marido tocaba la bocina del Peugeot 504 que conducía. Era una señal, por más que ella sintiera “una eterna sensación de presente suspendido”.

La denuncia había sido radicada en la Comisaría 15a. (Suipacha 1156, Buenos Aires), cerca de donde había sido visto por última vez. Allí fue. La había radicado la segunda secretaria de la Embajada de Suiza, Luisa Caroni. Estaba con él cuando se produjo el secuestro, esperándolo en su auto, un Alfa Romeo blanco, mientras Fernández Pondal, advertido de que eran perseguidos, había decidido ir a la casa de un militar que solía tener custodia en la puerta del edificio en el que vivía.

Esa noche, casualmente, no había nadie. Y, ante la mudez del portero eléctrico, regresó al auto en el que estaba Luisa Caroni. Había dejado en él su bolso de cuero (habitual en los años setenta y ochenta). No llegó a recogerlo.

Poco después, Marisa Presti se encontró con Luisa Caroni en un bar. Y se reencontró con el bolso negro de Fernández Pondal. En él estaban, intactos, el documento de identidad, la agenda, el carnet de periodista y las llaves de su casa, entre otras cosas. Supo entonces que esa noche había estado en la casa de la diplomática suiza y que habían hablado de trabajo. Unas traducciones del italiano, parece.

Al notar que iban por ellos (por él, en verdad), giraron en el Obelisco y se dirigieron a la casa del coronel Ricardo Flouret, del Estado Mayor General del Ejército, amigo de Fernández Pondal. Luisa Caroni permaneció en el auto, frente al volante. “No me contesta”, dijo él después del primer intento. En el segundo, rodeado por dos hombres que iban en el Ford Taunus tipo coupé (de dos puertas), encañonado por la espalda, su figura delgada se perdió en la esquina.

Luisa Caroni radicó a la mañana siguiente la denuncia, previa consulta al embajador de su país, y retornó poco después a Suiza.

“La agenda fue uno de mis solitarios calvarios –escribió Marisa Presti–. Noche a noche, la abría y trataba de traducir cada palabra, cada marca, cada raya realizada sobre las hojas. Estudiaba las citas previas y posteriores al drama, me detenía en los nombres de las personas, trataba

de sacar conclusiones. Me había convertido en una especie de Sherlock Holmes inútil. Sola, sentada en la cama de nuestro dormitorio devastado, a veces me quedaba hasta la madrugada yendo y viniendo por las páginas de la famosa agenda.”

Todas las direcciones conducían a la ESMA. En 1988, el presidente Carlos Menem anunció su demolición. No pudo ser: era patrimonio cultural del país, según un fallo del juez federal Ernesto Marinelli. Años después, el presidente de mandato inconcluso Fernando de la Rúa, re-nuente a la devolución a la ciudad de Buenos Aires del predio que había cedido en 1904, quiso que allí se instalara un polo educativo. Tampoco pudo ser. Desde el 9 de febrero de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner, sensible a someter a juicio a los militares involucrados en la represión, insistió en devolverlo a la ciudad y en convertirlo en un museo de la memoria.

Menos de un mes después, el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, asumía el primer mea culpa de la fuerza sobre las atrocidades cometidas en los años de plomo: “Así como no puede ocultarse el sol tras un harnero, no pueden esgrimirse argumentos válidos para negar o excusar la comisión de hechos violentos y trágicos en ese ámbito –dijo–. Hechos que nadie podría justificar, aún en las gravísimas circunstancias vividas”.

Fue el 3 de marzo de 2004 en el patio de las palmeras del Edificio Libertad, frente a una formación de marinos con sus uniformes blancos, en ocasión del 147° aniversario de la muerte del almirante Guillermo Brown; era el Día de la Armada. Sólo era comparable con la autocrítica del general Martín Balza, jefe del Estado Mayor del Ejército, el 25 de abril de 1995.

Ese día, desde Bogotá, en donde hacía un mes que había asumido como embajador, Balza me dijo que sólo dos tenientes coroneles, dos coroneles y un general conocían el contenido del discurso que pronunció en el programa de televisión Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt. Que el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, le había pedido una copia y que prometió mandársela por fax: “¿Usted cree que se la mandé? –repuso, sonriente–. Hablé por teléfono con los otros jefes del Estado Mayor y, por una cuestión de camaradería, les dije que iba a dar

una respuesta del arma. Nada más. Hablé, también, con mis generales, pero ninguna autoridad política sabía qué iba a decir”. No iba a pronunciar el discurso ese día, en realidad, sino un mes y cuatro días después, el 29 de mayo, Día del Ejército.

A diferencia de él, Godoy había acordado con el presidente Kirchner y con el ministro de Defensa, José Pampuro, los términos del replanteo de su fuerza. En el cual, curiosamente, no mencionó en ningún momento las siglas ESMA.

“Quiero la ESMA”, le había dicho, meses antes, Kirchner a Pampuro. Y Pampuro tragó saliva: “Bueno, veremos qué puedo hacer”. Debía ser antes de un nuevo 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado de 1976.

A cara descubierta

El padre de Fernández Pondal presentó el 11 de agosto de 1977, a la una de la tarde, un recurso de hábeas corpus, por medio del abogado Pablo González Bergez. También pidió informes a “organismos de las Fuerzas Armadas y de seguridad”. De nada sirvió.

De nada sirvió, tampoco, la denuncia radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, DC, en coincidencia con la misión realizada en la Argentina, en septiembre de 1979, por denuncias de numerosas violaciones de los derechos humanos. El caso quedó incorporado con el número 5024: “La Comisión ha transmitido a las partes pertinentes de su comunicación al gobierno de la Argentina, solicitándole que suministre la información correspondiente –decía el 1° de febrero de 1980 su secretario ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño, en una carta dirigida a Rodolfo Luis Fernández–. Aunque la tramitación de su denuncia pueda llevar cierto tiempo, quisiera asegurarle que se hará todo lo posible para esclarecer los hechos denunciados por usted y se le informará de cualquier desarrollo, decisión o resultado al respecto”. Menos suerte tuvo con otra gestión, encarada el 23 de mayo de 1980 ante el

director de la Oficina de Normas Internacionales y de Asuntos Jurídicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Karel Vasak.

Familiares de periodistas desaparecidos, entre ellos Fernández, pidieron información a la junta militar sobre sus paraderos. No obtuvieron respuesta. La lista ascendía entonces, el 18 de noviembre de 1980, a 72.

En un largo derrotero por despachos oficiales, Fernández había tenido el 26 de abril de 1979, de las 10.45 a las 11.20 de la mañana, una audiencia con Videla. La había solicitado el 1º de marzo. En ella, según narraba en un escrito dirigido al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, después de los saludos de rigor, “las primeras manifestaciones del señor presidente fueron: sabemos que su hijo era antiterrorista, antisubversivo, anticomunista, antimarxista, antimaoísta, y que actuó siempre de frente y a cara descubierta; a lo que respondí, señor presidente, si ustedes conocen todo el accionar y el pensamiento de Fernández Pondal, pretenden que les crea que no saben qué fue de él; me manifestó que realmente lo ignoraba”.

Videla admitió en esa audiencia que se habían cometido “excesos y abusos”. No hablaba con el padre de un desaparecido, sino con un militar retirado. A tal punto que, en un momento del diálogo, Fernández tildó de responsables del secuestro de su hijo a los generales de brigada Viola, jefe del Estado Mayor General del Ejército; Harguindeguy, ministro del Interior; Guillermo Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo de Ejército y jefe de la Zona I de Seguridad; Edmundo René Ojeda, jefe de la Policía Federal, y Agosti, comandante en jefe de la Aeronáutica; el almirante Massera, comandante en jefe de la Armada, y el coronel Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. “No hable así de los camaradas”, obtuvo como réplica.

La madre de Fernández Pondal “tuvo que someterse a un tratamiento psicológico y el suscripto, posteriormente, a un tratamiento psíquico, ambos en atención permanente en el Hospital Militar Central, caso contrario hoy mi mujer estaría internada en un establecimiento de salud mental”, decía Fernández en el pedido de audiencia.

En otro párrafo, ponderando los valores cristianos de su hijo, decía que “su excelencia, el señor cardenal (Raúl Francisco) Primatesta (arzobispo de Córdoba y enviado especial del Papa Juan Pablo II) conocía perfectamente el pensamiento y el sentir de mi hijo, ya que lo ligaba a él una buena amistad y comunicación por la actuación que desempeñaba en el Canal 10, de Córdoba, y en Radio Universidad, de dicha provincia, mientras fuera su representante en Buenos Aires”.

A mediados de ese año, 1979, Videla calificaba a la prensa argentina de “responsable y libre, pero, sobre todo, responsable” en una conferencia de prensa con periodistas peruanos que habían acompañado al presidente de facto de su país, general Francisco Morales Bermúdez, en una visita a Buenos Aires. Y agregaba: “Esa es nuestra realidad y no uno, dos o cinco que pueden estar detenidos y que no merecen ser denominados periodistas. Han dejado de ser periodistas para ser delincuentes. Optaron y ahí tienen el resultado de su opción”.

¿Estaba Fernández Pondal entre ellos?, quiso saber su padre. Le respondió el director general de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, coronel retirado Vicente Manuel San Román, el 15 de octubre: “...llevo a su conocimiento que, habiéndose reiterado los trámites relacionados con el nombrado, los mismos han arrojado resultado negativo a la fecha”.

En una audiencia con Massera obtuvo como indicio, “como quien deja correr la cosa”, que “para mí, es un procedimiento del Ejército, sin afirmar ni negar”. En el Ejército, a su vez, obtuvo como indicio “que era una cuestión de la Marina”.

En una carta a Videla, “personal-confidencial”, fechada el 9 de diciembre de 1980, Fernández, agotados todos los recursos, invocaba a su nieta “para que el día de mañana no se cruce por su mente que su progenitor pudo haber sido un depravado moral y no un honorable hombre de bien útil a la sociedad como en realidad lo era”.

Seis días después, Videla respondía, también por escrito: “...deseo transmitirle la seguridad de mi preocupación por su grave problema y por la angustia que lo aflige en estos momentos. Asimismo, le manifiesto que la desaparición de su hijo, el periodista Rodolfo

Fernández Pondal, es aún motivo de investigación y, por lo tanto, no se da por cerrado el caso”.

Cruzados en el aire

Restablecida la democracia, Ariel Lara, ex agregado cultural de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, declaró en agosto de 1985 en el juzgado federal a cargo de Miguel Guillermo Pons acerca de la desaparición de Fernández Pondal: era un “profesional que trabajaba en un medio especializado; era hombre valiente y bien informado cuyos artículos, para quienes saben leer entre líneas, resultaban realmente importantes”, dijo. Tenía “excelentes contactos”, agregó, y sus escritos eran “muy veraces”.

En ello coincidió, en un diálogo conmigo, Rubén Aramburu, socio de Fernández Pondal en Última Clave: “Nunca pensé que la cosa iba a llegar a ese extremo –me dijo–. Rolo tenía una personalidad muy fuerte. Y creía que, con su experiencia en Radio Rivadavia (de donde había sido despedido), la revista iba a convertirse en un trampolín hacia adelante”.

La revista, de circulación semanal, eran ocho páginas tamaño carta, de información política, que se distribuían por suscripción. Tenía aspecto de newsletter. Había sido fundada el 10 de septiembre de 1968. Y, con tal de darle dinamismo, variaban los encabezados: Situación, Los hechos, La coyuntura, Los sucesos, El clima, La alternativa o Para el cotejo. Figuraban Juan Martín Torres como director y Fernández Pondal como subdirector; eran amigos desde la adolescencia.

“Rodolfo dialogaba con los militares más civilistas, como Viola –me dijo Aramburu–. No recibíamos órdenes ni dinero de los militares. Era natural que él, como periodista, dijera qué iba a publicarse. Tenía una sensación de superioridad en el análisis político y era muy hábil para buscar información, pero necesitaba un editor.”

En el momento en que recibió la oferta de trasladarse a París, “le quedaba chica la revista”, dijo Aramburu. “El quería un progreso mayor –agregó–. Si no lo alcanzaba por un lado, lo buscaba por otro.”

Dos meses después del secuestro, Aramburu y Torres estuvieron detenidos, sin motivo aparente, durante 48 horas. Torres hizo identikits de dos individuos (uno de 40 años; el otro, de 23 o 24, según el padre de Fernández Pondal). Habían ido a la redacción de Última Clave, en Rivadavia 717, oficina 404, Buenos Aires, sin un fin determinado, horas antes del secuestro. Eran las 9.30 de la noche. Le habían pedido que publicara alguna información en particular. Quedaron en regresar al día siguiente.

“Eran servicios (agentes de inteligencia)”, concluyó Fernández Pondal en cuanto cerraron la puerta detrás de sus pasos.

Uno de los identikits, según su padre, coincidía con los rasgos del teniente de navío Antonio Pernía, alias Martín, Trueno o Rata, encargado de los secuestrados “en proceso de recuperación” hasta 1978 en la ESMA. Lo supo por una foto de él, publicada el 27 de febrero de 1987, en la portada de La Nación, mientras varios marinos procesados declaraban ante la Cámara Federal.

Tres años después del secuestro, Última Clave publicó un recordatorio en la portada. Era, casi, una aceptación de la impotencia: “Nosotros sólo podemos decir, después de estos tres duros años, que no olvidamos su conmovedora amistad, que extrañamos sus arrolladoras condiciones de periodista, su sensibilidad de ser humano. Y que seguimos sin entender la absurda, psicopática, bestial motivación de sus agresores. Su vacía inconsciencia”.

En 1977, poco antes de su secuestro, Fernández Pondal permaneció más tiempo del previsto en Venezuela; Marisa Presti no quería que viajara. En una foto aparecía con otro hombre, desconocido para ella, en la isla Margarita. ¿Había hablado con el embajador Hidalgo Solá? “Nos cruzamos en el aire”, llegó a decirle a su mujer; no sabía ella si se habían cruzado, uno de ida y el otro de vuelta en diferentes vuelos, o en el mismo avión.

Se habían cruzado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, según una versión. Y allí, Fernández Pondal “había recibido información sobre un comando argentino en Venezuela y comunicada confidencialmente al entonces embajador Hidalgo Solá” por el presidente de ese país, Carlos Andrés Pérez, según una investigación realizada

por Rogelio García Lupo, corresponsal en Buenos Aires del diario El Nacional, de Caracas.

Dos miembros de ese grupo, reconocidos por diplomáticos venezolanos, tenían pasaportes falsos. Eran Perren y Pernía, hombres de la ESMA. Iban a secuestrar a Julio Broner, dirigente de la Confederación General Económica (CGE) durante el gobierno de la viuda de Perón que se hallaba exiliado en Caracas desde el golpe de Estado de 1976. El plan, del cual también participó el teniente de navío Juan Carlos Rolón, era dispararle dardos con drogas para paralizarlo. Pero fracasó.

La inteligencia de Venezuela, regida por un gobierno democrático, no comulgaba con el credo de la Operación Cóndor, acordada por las dictaduras militares de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador con tal de enfrentar la llamada guerra psicopolítica emprendida desde los centros neurálgicos del comunismo, razón por la cual, en principio, Perren, Pernía y Rolón no contaron en Caracas con las facilidades usuales en otras capitales para secuestrar y, en algunos casos, repatriar a aquellos que consideraran subversivos o peligrosos, como Broner.

En el momento en que Massera se negó a declarar ante el juez federal Claudio Bonadío por apropiación ilegal de bienes, Perren se entregaba, identificándose a sí mismo como el jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2, “de combate contra el terrorismo”, porque Rolón, su subordinado, estaba detenido. Ambos admitieron en septiembre de 2001 que habían secuestrado al periodista Juan Gasparini, Gabriel mientras era dirigente de Montoneros, uno de los sobrevivientes de la ESMA.

“Cuando Hidalgo Solá viajó a Buenos Aires para informar de la situación al general Videla, quien aparentemente desconocía los hechos, fue secuestrado, lo mismo que el periodista Fernández Pondal dieciocho días más tarde”, señalaba el artículo de El Nacional, publicado el 12 de diciembre de 1983.

El juez José Nicasio Dibur quiso conocer la identidad de los informantes, pero García Lupo se negó a revelarla. Por la información en sí viajó un día después a Caracas, en donde, según la agencia de noticias ANSA, contaba “con un testigo valioso que habría visto a Hidalgo Solá

y Fernández Pondal en el aeropuerto de Ezeiza el día en que uno viajaba a la capital venezolana y el otro regresaba”.

Un periodista no identificado por la agencia Diarios y Noticias (DyN), cercano a Fernández Pondal y a Hildaldo Solá, había dado otra versión en 1982: “El diplomático, en los días previos a su desaparición, se hallaba seriamente preocupado por versiones periodísticas relativas a su persona que consideraba tergiversadas. Recuerda el periodista que el lunes 11 de julio de 1977, Fernández Pondal, que dirigía por entonces el semanario Última Clave, le solicitó que lo trasladara en su automóvil hasta el aeropuerto, desde donde debía partir hacia Caracas en un viaje decidido, al parecer, en forma precipitada. Durante el trayecto, Fernández Pondal reveló a su colega que Hildaldo Solá llegaría esa misma tarde procedente de Venezuela, de ese modo ambos se cruzarían prácticamente en el aire, lo que les impediría encontrarse, como al parecer tenían convenido, en Buenos Aires o en Caracas. Pondal pidió a su interlocutor que informara de ello a su interlocutor. La inminente llegada del diplomático despertó inmediatamente el interés del periodismo del aeropuerto. Dos días antes, un despacho de la Agencia France Press le había atribuido el reclamo de una rápida institucionalización del país mediante la instauración de un gobierno cívico-militar de coalición, y lo señalaba al diplomático, militante en el radicalismo, como posible próximo presidente de la Nación. Cuando a las 19 de ese mismo día llegó el diplomático a Ezeiza lo esperaban dos periodistas. El destacado en el aeropuerto, que debía transmitirle el mensaje de Fernández Pondal, y el representante de un semanario porteño. Antes de iniciarse el reportaje, Hildaldo Solá fue informado de la partida hacia Caracas de Fernández Pondal, ocurrida por la mañana. Fue evidente que la noticia lo preocupó hondamente”.

Fernández Pondal, según la solicitud de hábeas corpus planteada por su padre seis días después de su secuestro, “tenía una entrevista otorgada por el presidente Carlos Andrés Pérez”. Desde Caracas, en el viaje anterior, Marisa Presti había recibido una postal de él; estaba fechada el 12 de mayo de 1977, menos de tres meses antes del desenlace. Le decía que la extrañaba y que, mientras tanto, bebía champaña francesa.

A fines de ese año, Marisa Presti recibió otro tipo de correspondencia. Era una carta formal, fechada el 22 de diciembre: “En el marco de la Navidad, propicio a la oración y el recogimiento, quiero hacer llegar a usted y sus hijos, las muestras de mi más profunda solidaridad personal. Deseo también, fervorosamente, que Dios Nuestro Señor le brinde la fuerza espiritual necesaria para afrontar esta hora de desasosiego para su hogar. Saludo a usted con mi más distinguida consideración”. El matase- llos era del 26 de diciembre, un día después de la Navidad. Llevaba el membrete Presidente de la Nación Argentina sobre el escudo correspondiente y estaba firmada por Videla, ignorante, entre otras cosas, de que no tenía hijos, sino una hija.

Con él había estado en tres audiencias. Vanas. Como vanos han sido todos los intentos de dar con el paradero, o con el destino, de Rodolfo Fernández Pondal, Rolo a secas en la intimidad, su marido, enfrentando una realidad penosa e incómoda: durante años debió mentir hasta su estado civil, de modo de disimular que era la mujer de un desaparecido, mientras transitaba el vía crucis, y sus recodos, en busca de una verdad vacilante, como ella ante la puerta que se abría, allá lejos, hace tiempo, en París.

5. MONTEVIDEO ESQUINA BUENOS AIRES

Lo usaron, dice: “Yo nunca maté a nadie ni torturé a nadie”. Empero, Agustín Efraín Silvera, presunto agente de la Policía Federal Argentina retirado después de siete años de servicio, admite que estuvo implicado, o complicado, en un crimen horrendo, brutal, espantoso. Propio de una era en la cual la vida valía poco. O nada. Como nada, o poco, valían las certezas sobre los autores y las causas. Como poco, o nada, valía la libertad. Nada, o poco, valía todo, en realidad.

“Yo me encargué de Michelini con otra gente –dice el tal Silvera–. Todo lo que tenía que hacer era seguirlo y averiguar dónde iba y a qué hora, y esas cosas. El senador comía casi siempre en un restaurante de la calle Maipú que era de unos uruguayos. Salía del hotel donde vivía, iba al restaurante, almorzaba, a veces volvía al hotel y otras veces iba directamente del restaurante, en taxi o en auto particular, al diario donde trabajaba, La Opinión. CH tenía gente en La Opinión, entre los elementos de seguridad del diario, y ellos le informaban quiénes venían a hablar con el senador y esas cosas. Creo que CH tenía gente también a otro nivel en ese diario, pues hasta sabía cosas que decía Michelini en la redacción y datos así que solamente podían venir de gente de adentro.”

CH era el comisario uruguayo Hugo Campos Hermida. Tanto él como el mayor José Nino Gavazzo y los capitanes Manuel Cordero y Jorge Silveira se vieron amparados en el rechazo del gobierno de Uruguay a un pedido de detención preventiva, con miras a la extradición a la Argentina, cursado el 21 de junio de 2001 por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Aducía que habían participado de la Operación Cóndor, al igual que el juez español Baltasar Garzón: incluyó a los capitanes Ernesto Rama, Guillermo Ramírez y Ricardo Medina y al mayor Enrique Martínez en el exhorto cursado el 27 de enero de 1997 por la desaparición de unos 200 ciudadanos españoles a manos de fuerzas de seguridad de la Argentina y de Uruguay.

El tal Silvera, autor de un testimonio de apariencia tan verosímil por su aspecto como dudosa por su identidad, dice que temía por su vida. Que había entregado a gente de su confianza una cinta grabada y algunos documentos, sus únicos avales. Y que, desde la cárcel, buscaba un salvoconducto: "...para asegurarme que no me pase nada aquí adentro, porque si ellos quieren, me boletean (liquidan) –señala en el documento–. Lo que quiero es una garantía. Eso es todo”.

No quería terminar como el senador uruguayo Zelmar Michelini, cuyo último empleo había sido como periodista de La Opinión, de Buenos Aires. El diario de Jacobo Timerman, preso sin nombre, celda sin número, como tituló el libro en el cual desgranó el suplicio del secuestro, del calabozo y de la tortura a santo de nada. De la nada usual de aquellos años. El diario iba a ser intervenido y clausurado. En coincidencia con el final precipitado del programa de televisión Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo Neustadt, en Canal 11, y con otros cierres e intervenciones supuestamente preventivos.

Michelini, de 52 años, apareció muerto un día después de su cumpleaños, el 21 de mayo de 1976, a las 9.20 de la noche, en una cupé Torino roja abandonada en la esquina de Perito Moreno y Dellepiane, de Buenos Aires. En ella yacían los cuerpos del presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, de 51, exiliado en Buenos Aires desde el golpe militar del 27 de junio de 1973 en su país, y de los militantes tupamaros William Whitelaw Blanco, de 29, y Rosario del Carmen Barredo de Schroeder, de 26, uruguayos también, residentes en Buenos Aires desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Todos ellos, secuestrados tres días antes, habían sido torturados y baleados; tenían los pies y las manos atadas. Había sido secuestrado, también, Benjamín Liberof, de 55 años, médico, comunista, argentino nacionalizado uruguayo, de paradero desconocido.

“Las pericias realizadas sobre los cadáveres permitieron establecer la identidad de tres de ellos, a saber: Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Rosario del Carmen Barredo de Schroeder, concordando los nombres de los occisos con los mencionados en los panfletos hallados en el interior del rodado en los que una agrupación subversiva se

adjudicaba la autoría del hecho –decía un comunicado de la Policía Federal Argentina–. Los cadáveres presentaban varios impactos de bala y sus cuerpos se hallaban maniatados.”

Fue una pantalla, empezando por los panfletos. El ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, instó de inmediato a una investigación profunda. Tan profunda como vana. Otra pantalla, de modo que todo quedara en nada. En la nada corriente: “Este luctuoso suceso, que no puede tener otro origen que la acción de la subversión que agrede al pueblo argentino, está siendo aprovechado para pretender desprestigiar a la República y trabar el resurgimiento de nuestro país”, decía el 25 de mayo, feriado nacional, un comunicado oficial publicado en los diarios de Buenos Aires. Lo mismo había dicho en Montevideo el comandante en jefe del Ejército de Uruguay, general Julio César Vadora.

Los cadáveres tenían señales de torturas: costillas fracturadas, contusiones, hematomas, huesos rotos del cráneo y meninges desgarradas. Los informes periciales y las autopsias indicaban que Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw Blanco y Barredo de Schroeder habían sido asesinados el mismo día del hallazgo, 21 de mayo, por disparos en el cráneo efectuados a corta distancia.

Tres días antes, el 18 de mayo, a las cinco de la mañana, entre 10 y 12 hombres armados entraron en el hotel Liberty, en la esquina de la avenida Corrientes y la peatonal Florida, de Buenos Aires. Le exigieron al conserje la llave de la habitación número 75, en el séptimo piso, en la que Michelini se alojaba desde 1973. Les dijeron a los empleados que estaban cumpliendo con un operativo de la Marina. Era personal del Ejército argentino, según la querella presentada el 16 de abril de 2004, ante el juez Canicoba Corral, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en nombre de los familiares de Michelini y de Gutiérrez Ruiz.

“Zelmar, te llegó tu hora”, espetó uno de ellos en cuanto abrió la puerta.

Lo maniataron y lo vendaron. En la habitación estaban dos de sus hijos, Zelmar Eduardo y Luis Pedro Michelini Delle Piane; los cubrieron con mantas. Y, mientras hacían atados con la máquina de escribir

portátil marca Hermes de color rojo de Michelini, los binoculares que solía llevar al hipódromo, un grabador, un proyector de diapositivas, una máquina de afeitar, un reloj pulsera, 100 dólares, un bolso y varias carpetas que contenían artículos periodísticos y correspondencia personal, le preguntaban insistentemente dónde estaban las armas.

“¿Dónde?”, gritaban.

Armas no había.

“Cuando ellos irrumpen estábamos los tres durmiendo –dice uno de los hijos de Michelini en un libro referido a su padre y Gutiérrez Ruiz–. Ni recuerdo la hora. Sé que fue de madrugada. Abrieron con una llave común, que se las dio una persona del hotel, o abrió ella. Entraron varias personas. Me han preguntado varias veces si yo podría distinguirlos y he dicho que no. Yo lo único que me acuerdo es de una cara cuadrada, con un bigote muy espeso, un tipo fortachón, que fue el que irrumpió de campera azul (...) Las últimas palabras que él nos dijo fueron: «Llamen a Louise». Y Louise era justamente una periodista estadounidense que tenía preparada una presión de los Estados Unidos a nivel internacional. Que se hizo y mucho. La presión fue muy grande. Pero totalmente infructuosa.”

En esa zona céntrica de Buenos Aires, famosa la avenida Corrientes por ser la calle que nunca duerme, eran habituales los patrulleros policiales. Enfrente del hotel estaba la compañía telefónica estatal ENTel, custodiada por personal militar, y el edificio que ocupaba la Embajada de los Estados Unidos. Aquella madrugada, el grupo que cometió el secuestro no tuvo inconveniente alguno en estacionar sus vehículos Ford Falcon antes de irrumpir en la habitación de Michelini. Ni en retirar bultos envueltos en sábanas sin exhibir credenciales.

Con apenas tres horas de diferencia, un grupo de características similares que se desplazaba en dos Ford Falcon había entrado en el edificio en donde vivía Gutiérrez Ruiz, en Posadas 1011, cuarto piso, del elegante barrio de La Recoleta, cerca de las embajadas de Brasil, Francia, Rumania e Israel, custodiadas en forma permanente; ni vestirse pudo mientras, esposado y vendado, era arrancado de su habitación. El operativo, en el cual intervino personal de la Policía Federal y de las fuerzas

armadas, duró una hora. Robaron dinero, alhajas y documentos. Y cortaron la línea telefónica.

“El llegó a casa, serían las doce y media, y yo todavía no me había acostado—dice la mujer de Gutiérrez Ruiz, Matilde Rodríguez Larreta, en el libro sobre su marido y Michelini—. Y nos fuimos a dormir y, a la hora, esa sensación de que no ha pasado mucho rato, pero no sé exactamente la hora, no miré el reloj. Algunas veces digo una y media, y otras, dos y media o tres. No sé. Golpearon muy fuerte la puerta. Unos golpes brutales. Una puerta antigua en un departamento antiguo. Y nosotros teníamos el dormitorio muy cerca de ahí, y saltamos inmediatamente. Cuando llegamos ya estaba abierta la puerta, abierta a golpes. Y había un hombre muy grande que la había violentado. No sé cómo lo hizo. ¡Era una bestia! Eran ése y cuatro más. Mi visión era de cinco hombres, aunque me puedo equivocar. El impacto es terrible. Estaban en una actitud absolutamente violenta. Es más, yo siempre pensé que actuaban como drogados, porque una violencia así contra gente que no conocen, que no tienen ni idea de quién es... Estuvieron mucho rato y robaron absolutamente de todo, de todo lo que se pueda imaginar. Estuvieron mucho rato, aunque es difícil calcular cuánto, pero fue más de una hora. Fue muy largo. Mientras tanto mi marido estaba ahí, en el living. Ellos recorrieron toda la casa, entraron en el cuarto de los chicos. Vacieron todo. Los objetos de valor. ¡Una facilidad brutal para detectarlos! Sabían perfectamente dónde podían encontrarlos y se llevaron todo, todo. Dinero, alhajas, todo lo que pudiera ser de valor. Todo. Hicieron un desvalijamiento de la casa.”

A la mañana siguiente, la mujer de Gutiérrez Ruiz acudió a la comisaría con la intención de radicar la denuncia. Le dijeron: “No pierda tiempo, señora. Haga un hábeas corpus, si quiere. No le va a servir para nada. Va a gastar papel. Pero hágalo”.

Al conserje del hotel Liberty, en donde había sido secuestrado Michelini, tampoco quisieron tomarle la denuncia: obtuvo como respuesta que “se les había informado que en las intermediaciones se estaban efectuando diversos operativos conjuntos y el que se denunciaba podía ser uno de ellos”.

En ambos casos, el robo de objetos personales pasó ser un mero extravío. La mujer de Gutiérrez Ruiz envió telegramas al presidente argentino de facto, Jorge Rafael Videla; el ministro Harguindeguy; el jefe de la Policía Federal, y los comandantes de las tres armas. Frente a la presión internacional de los días posteriores, la respuesta del gobierno argentino no pudo ser más evasiva y grotesca: “En ciertos casos, no existen las respectivas denuncias ante las comisarias de la Capital Federal”. Ninguna gestión emprendió, a su vez, el embajador uruguayo en Buenos Aires, Gustavo Magariños, según la querrela presentada por los familiares.

“Esta insensibilidad de las autoridades llegó a tal grado que el 22 de mayo de aquel año (un día después del hallazgo de los cadáveres), una hija de Michelini y la señora de Gutiérrez Ruiz debieron labrar ante escribano público actas de manifestación, protesta y notificación con una prolija denuncia de los hechos delictuosos”, concluyó la comisión parlamentaria uruguayo que investigó los crímenes. Los domicilios de las víctimas no habían sido visitados por la policía.

En Buenos Aires, Michelini trabajó en la sección de política internacional de los diarios Noticias, primero, y La Opinión, después. En forma simultánea adquirió un kiosco que era atendido por sus hijos. Llevaba una vida muy austera, como consigna el tal Silvera en su documento. Pero se había convertido en uno de los voceros más autorizados de la resistencia uruguayo por denunciar las violaciones de los derechos humanos en su país. El entonces canciller, Juan Carlos Blanco, presionaba al gobierno de Héctor Cámpora para que fuera expulsado, al igual que el senador Enrique Erro, también exiliado.

Poco antes de su secuestro, el 5 de mayo de 1976, Michelini entregó una carta a un redactor de La Opinión, Roberto García. Le pidió que fuera publicada sólo en caso de que le ocurriera algo. Lo presentía, al parecer: “En estos días he recibido amenazas telefónicas anunciándome un posible atentado y, además, mi traslado por la fuerza a Montevideo. Me llega asimismo la información de que el ministro uruguayo Blanco plantearía ante las autoridades argentinas la necesidad de que se me aleje de este país. No sé cuál puede ser el curso futuro de los acontecimientos,

pero en previsión de que efectivamente un comando uruguayo me saque del país, le escribo estas líneas para que usted sepa que no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar la Argentina, y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio uruguayo, es porque he sido llevado allí, en forma arbitraria, inconsulta y forzada. No sería la primera vez que se intenta hacer aparecer como voluntaria lo que es una actitud impuesta por la prepotencia y el salvajismo. Disculpe esta molestia y le agradezco desde ya el uso que usted haga, si es necesario, de esta confidencia. Su amigo, Zelmar Michelini”.

Dos días después, el 7 de mayo, el canciller Blanco se reunió en Buenos Aires con su par argentino, César Augusto Guzzetti. Fue un viaje relámpago. Posterior a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), de Uruguay, en la cual, según un documento mimeografiado aportado por el senador Alberto Zumarán a la comisión investigadora parlamentaria y el testimonio del arzobispo de Montevideo, Carlos Parteli, se votó el desenlace de Michelini y de Gutiérrez Ruiz. Excepto el presidente de facto, Juan María Bordaberry, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Dante Paladín, los otros (el ministro del Interior, general Hugo Linares Brum; el ministro de Defensa, Walter Ravenna; el comandante en jefe del Ejército, general Vadora, y el comandante en jefe de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibarгойen, así como un militar argentino) decidieron que fueran ejecutados.

Siete años no es nada

Enigmático, el tal Silvera habrá meneado la cabeza en su celda, convencido de que la investigación, alentada por Videla, iba a quedar en nada. En la nada usual de la época. Con la premisa del régimen militar, instaurado apenas 58 días antes de los crímenes de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, de orientar, o desviar, la mirada de la opinión pública hacia un callejón sin salida: la virtual participación de los montoneros, de los tupamaros o del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre otras facciones izquierdistas que operaban en la clandestinidad, en un asesi-

nato cuádruple que tenía todas las marcas, y las huellas, del terrorismo de Estado. Incipiente aún. Tenía todas las marcas, y las huellas, de una represión que no iba a respetar fronteras, inscrita en los cánones de una sociedad casi anónima entre los servicios de inteligencia de la región: la Operación Cóndor.

“La primera vez que vi a Campos Hermida fue a fines de marzo –dice el tal Silvera–. Yo sabía que él era comisario en Montevideo y de «la pesada», pero nunca lo había visto antes, pese a que él prácticamente vivía en Buenos Aires. Según supe después, tenía unos 15 hombres a su cargo, todos uruguayos, sin contar a los de aquí que a veces colaboraban con ellos.”

No menciona la Operación Cóndor el tal Silvera en las nueve carillas, tamaño oficio, del documento redactado con máquina de escribir, aparentemente antes de 1978, en el que traza los detalles de un trabajo sucio que, a pesar de ello, iba a ser “seguro, tranquilo”. En él habla también de la intención de asesinar a otro político uruguayo, Wilson Ferreira Aldunate. Eran dos grupos, al parecer, pero uno falló.

“A Campos Hermida me lo trajo Miguel Castañeda, un ex boxeador que ahora andaba en el bagayo (trabajo sucio) y que [...] conocía a muchos de la Federal –dice el tal Silvera–. Yo estuve siete años en la Federal y Miguel también me conocía de ahí. Campos me dijo que tenía un buen trabajo para el que necesitaba un hombre sin problemas y experimentado. Dijo que era un trabajo seguro, tranquilo, porque estaba palanqueado (manejado) por el general Ojeda, un hombre que tenía mucha banca (peso). Dijo que ellos, los uruguayos, estaban trabajando a todo trapo (en forma intensa) y no podían cubrir todo lo que tenían que hacer, así que a través de un subcomisario apellidado Soria había hablado con Ojeda para que le recomendara unos hombres. Según me dijo Campos, Soria le dijo que Ojeda le había dicho a él, a Soria, que dejaba el asunto en sus manos y Soria había pensado en mí, entre otros. Soria se contactó con Miguel, porque sabía que Miguel era conocido mío, y Miguel me trajo a Campos.”

Dos generales de brigada de apellido Ojeda casi homónimos, Edmundo R. y Edmundo René, figuran en las listas de represores de los

años de plomo. Uno de ellos, liberado por la Ley de Punto Final; el otro, liberado por la Ley de Obediencia Debida. Edmundo R. era en el primer semestre de 1976 el jefe de la Subzona 12; estaban bajo su órbita los centros clandestinos de detención La Huerta de Tandil, Monte Pelone, la Brigada de Investigaciones de Las Flores y la Delegación de la Policía Federal en Azul. El otro Ojeda, Edmundo René, estaba procesado por privación ilegítima de la libertad mientras era subcomandante de Institutos Militares; en él funcionaba el centro clandestino de detención Campo de Mayo. El primer Ojeda, fallecido, respondía a órdenes directas del ministro Harguindeguy.

“Nos encontramos un sábado en un bar llamado Unión, en el Bajo, cerca del bar de Edmundo Rivero (cantante de tangos), y Campos Hermida me explicó que se trataba de hacer unos seguimientos –dice el tal Silvera–. Yo sólo tenía que seguir a la gente que él me marcara, averiguar dónde vivían, con quiénes se veían y esas cosas. Me dijo que tenía que pasarle la información a un tal Blanco, también de la Policía uruguaya, que iba a trabajar en lo mismo. Me dijo que me iba a dar unos 300 dólares mensuales y unos pesos para gastos extra. Yo le pedí 400 y él dijo que sí, que no había problema. Después Blanco me dijo que CH tenía una partida de 8000 dólares para esos gastos pero yo nunca pude comprobar eso.”

En el testimonio del tal Silvera aparecen 16 de las 40 personas implicadas, o complicadas, en el crimen, según Rafael Michelini, uno de los 10 hijos de Michelini, senador nacional como su padre, así como contactos frecuentes entre represores argentinos, uruguayos, chilenos y brasileños, y la participación de la Policía Federal Argentina, de la Triple A (organización de ultraderecha creada en agosto de 1973 por el ministro de Bienestar Social de la Argentina, José López Rega, secretario privado de Perón durante el exilio en Madrid) y de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. No deja de ser un documento extraño. Con tachaduras y correcciones manuscritas. Y seudónimos, muchos seudónimos. Fue hallado casi de casualidad por una exiliada uruguaya en París mientras embalaba sus pertenencias antes de regresar a Montevideo.

“Blanco tenía tres automóviles, por lo menos –dice el tal Silvera–. Un Ford Falcon, que era de la Federal; un Renault rojo, y una Rural, todos con placas de Córdoba, falsas. CH viajaba cada dos por tres a Córdoba y a Tandil, y también a otros lugares, pero preferentemente a Córdoba y a Tandil. Por algunas cosas que me dieron a entender, creo que Tandil era uno de los cuarteles generales que ellos tenían porque cada vez que volvía de Tandil traía instrucciones nuevas. Allí, en Tandil, se veía con Ojeda. Yo no sé qué pito (papel) jugaba Ojeda pero era un tipo importante en el asunto, porque dos por tres CH decía que Ojeda había decidido esto o aquello.”

El único parecido con el tal Silvera que halló un ex agente de la CIA que investigó el caso respondía a un homónimo que había ingresado en la Policía Federal el 1º de noviembre de 1976 y que había egresado el 6 de agosto de 1978. Fechas posteriores al asesinato cuádruple. La ficha número 16.298 dice que nació el 9 de agosto de 1948 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Que medía 1,70 metro de estatura. Que era soltero. Que había completado el cuarto año de la escuela técnica. Curiosamente, los domicilios de los hermanos, en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, tenían las numeraciones invertidas, 4521 y 1254. El autor del documento sólo confiesa que tenía una hija que cumplía seis años a fines de abril de 1976. Rafael Michelini descartó esa pista, convencido de que el testimonio era “muy real”, pero el nombre del autor era ficticio.

“En realidad, ellos recibían instrucciones de Montevideo, pero la cosa operativa, por lo menos hasta donde yo me enteré, estaba en Buenos Aires, en las manos de Ojeda –dice el tal Silvera–. Un colaborador de Ojeda al que conocíamos por Tito viajaba dos o tres veces por mes a Brasil y creo que traía dinero de allí también. Nosotros le decíamos «El Brasileiro». Aunque siempre lo vi de particular, sé que era militar, pero no sé su grado. Un día a CH se le escapó que había reuniones en Brasil de las que él había participado. El día que dijo eso él estaba con unas copas de más y contó cómo cada vez que iba a Brasil se cogía a una negra que había conocido allí.”

En dos horas matizadas con una sola vuelta de café en un bar del barrio porteño de Caballito, el presunto Tito, delgado, de estatura

mediana y pelo entrecano escaso, no hizo más que evadir mis preguntas. Era un militar retirado. Había nacido, como Ojeda, en Concordia, provincia de Entre Ríos. Entre 1976 y 1978, dijo, había asistido a cursos de perfeccionamiento en Bonn y en Colonia, Alemania. Y, por esa razón, adujo que no tenía nada que ver con las muertes de Michelini y de Gutiérrez Ruiz. Ni idea, me dijo: “Mire, primero me llamó por teléfono un general norteamericano con acento puertorriqueño –concedió–. Me dijo que necesitaba mi colaboración. Yo le respondí que no sabía de qué me hablaba. E insistió: «General, yo estoy en su línea». Le dije que no me interesaba el tema y no volvió a llamarme”.

El general norteamericano era el ex agente de la CIA que investigó el caso, presumo. Con él también me reuní con tal de atar los cabos sueltos que legó el tal Silvera en su testimonio. Iba a encontrarse con el presunto Tito en el Florida Garden, bar famoso de Buenos Aires por su clientela. Puro espía. La cita, finalmente, no se concretó. Y el presunto Tito estaba inquieto, aguijoneado por fantasmas de un pasado que, si había sido parte de su historia, no quería revivir. Quería verlo muerto y sepultado, como declaraba muerta y sepultada a la guerra sucia en sí.

“Lo primero que me dio para hacer (Campos Hermida) fue vigilar la sede del Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), creo que es una oficina de las Naciones Unidas, que está en la calle Suipacha –dice el tal Silvera–. Blanco me llevaba, estábamos ahí un rato y cuando salía alguien que Blanco señalaba, yo lo seguía. A veces iba con Blanco y a veces solo. Estuve unos días haciendo eso en el Acnur, en otra oficina de las Naciones Unidas en la calle Córdoba. CH parecía estar enterado cuando alguien que a él le interesaba iba a ir a uno de esos lugares. Según me dio a entender, ellos tenían información de adentro.”

Relatos de secuestrados en aquellos años señalan a Campos Hermida como uno de los responsables de la represión contra los uruguayos, pero atribuyen al mayor Gavazzo el vínculo con la Operación Cóndor por medio del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA).

El vínculo era ignorado por los uruguayos que, asediados por la dictadura militar implantada desde 1973 en su país, buscaban asilo del

otro lado del charco, o del Río de la Plata, a poco más de 40 kilómetros de Montevideo. El vínculo que quedó al descubierto, al menos para unos pocos, con los crímenes del senador Michelini, colorado hasta que fundó con otros el Frente Amplio, y del diputado Gutiérrez Ruiz, del Partido Blanco (Nacional), raptados en forma casi simultánea. En el plan, según el documento del tal Silvera, estuvieron involucrados siete uruguayos, cinco argentinos, un francés, un paraguayo, un chileno y un puertorriqueño, entre otros.

“Los contactos con Blanco y con CH los hacíamos en algunos boliches (bares) y en un local de [...] Rivadavia y [...] Maipú –dice el tal Silvera–. Allí había una oficina de unos uruguayos, una especie de agencia de publicidad o algo así. En realidad, era un local de la Policía uruguaya y ellos usaban la agencia como pantalla. Creo que después del asunto Michelini dejaron de usarla, pero me consta que parte del asunto Michelini se planeó allí, como veremos después. En total seguí a unos ocho tipos, entre ellos dos chilenos. Seis hombres y dos muchachas.”

Gutiérrez Ruiz, una de las víctimas, había denunciado ante parlamentarios europeos las violaciones de los derechos humanos en su país. Lo mismo había hecho, en otros foros internacionales, Michelini. El tercero en la lista del OCOA, Ferreira Aldunate, logró escapar; halló refugio en Europa.

“Un día CH me dijo en la agencia que estaba muy conforme con mi trabajo y que me iba a dar unos pesos extra –dice el tal Silvera–. Yo creo que en realidad ellos me habían estado probando y ahora estaban seguros. Ese mismo día vino el Brasilero a la agencia, acompañado de un [...] uruguayo. Era un oficial de la inteligencia militar que se presentó como Sosa y dijo que traía instrucciones para «apurar las cosas» y que había que hablar urgentemente con Ojeda. Después me vine a enterar que Sosa se refería a lo del senador Michelini y el otro diputado.”

En Uruguay, mientras tanto, era tema de debate la sucesión del presidente de facto, Bordaberry. Había quienes abogaban por el retorno de la democracia, como el ministro de Economía, Alejandro Vegh Villegas; en Buenos Aires mantuvo entrevistas con Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Aldunate. Fue el 9 de mayo de 1976, poco antes de la muerte de

dos de ellos. Logró irritar a los militares afectos a la preservación del régimen.

“CH se puso a putear y dijo que allí, en Buenos Aires, el asunto estaba muy caliente y que era muy fácil ordenar cosas desde allá, pero había que estar aquí, en Buenos Aires, para saber cómo eran las cosas –dice el tal Silvera–. Sosa le dijo que se tranquilizara, que él sólo estaba haciendo de emisario y que no se la agarrara con él. CH le dijo que estaban ocupados con los anarcos y los tupamaros, y no podían dejar todo a medio hacer, y que si lo hacían a él, a CH, lo iban a colgar de los huevos porque tenía órdenes de llevar 25 para Montevideo y ahora no podían parar el asunto. Después los dos se fueron a Córdoba y volvieron dos días después. CH no volvió a comentar el asunto, al menos no frente a mí, aunque Blanco me dijo que CH estaba muy preocupado porque le habían encomendado un trabajo grande, que podía resultar fulero (peligroso).”

Abrete, Sésamo

En Venancio Flores 3519, esquina Emilio Lamarca, de Buenos Aires, había un taller antiguo de dos plantas. Automotores Orletti, según el cartel del frente. Para los militares argentinos, en conexión con sus pares uruguayos, era El Jardín. Dependía del I Cuerpo de Ejército, a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason. Tenía una puerta grande con cortina metálica de enrollar y, a la izquierda, una puerta blindada con mirilla que se abría en forma mecánica. La consigna, emitida por radio, era Operación Sésamo. Abrete, Sésamo, tal vez.

Una de las sobrevivientes de Automotores Orletti, Margarita Michelini Delle Piane, hija de Zelmario Michelini, vio la máquina de escribir portátil de su padre, parte del botín en el secuestro. Arriba había una sala en la que se realizaban los interrogatorios, dirigidos por la Superintendencia de la Policía Federal; otra de torturas, y una terraza en la que tendían ropa. Abajo, el piso de hormigón, sucio de tierra y de grasa, estaba poblado de autos robados y de chasis desparramados. Una

roldana pendía sobre un tanque de agua; de ella colgaban a los presos para el submarino (inmersión).

“Blanco hizo un viaje a Montevideo y, como él siempre andaba con los autos, cuando se fue, CH me pidió que le hiciera de chofer hasta que volviera Blanco –dice el tal Silvera–. Lo llevé tres veces a la Superintendencia de Seguridad, a la casa de un tipo de apellido Márquez, Julio César, también uruguayo, y varias veces al Aeroparque a recoger paquetes que le mandaban de Uruguay. CH se entrevistaba seguido con la gente de Seguridad Federal, creo que para coordinar operativos y para intercambiar información. Un día me dijo que la gente de Seguridad Federal estaba trabajando con ellos desde el (año) 71 y que antes que él se ocupara del asunto de los uruguayos en Buenos Aires, Seguridad se ocupaba directamente y pasaba información semanal a Montevideo, tanto a la Jefatura de Policía como a la inteligencia militar. También me enteré que Morán Charquero, un inspector de la policía uruguaya que mataron los tupamaros, había estado desde antes en contacto directo con la gente de Seguridad y del CIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE), a través de un periodista español que trabajaba en un diario de Montevideo [...]”

De Automotores Orletti, centro clandestino de detención al cual iban a parar casi todos los uruguayos capturados en Buenos Aires, se ocupaban, del lado uruguayo, el mayor Gavazzo y el director del Servicio de Información de Defensa (SID), general Amauri Prantl, y, del lado argentino, el director de la SIDE, general Otto Carlos Paladino, y el agente Aníbal Gordon, conocedor del paño por haber actuado en la otra orilla con documentos falsos de la Marina de ese país.

“Otro tipo que me enteré había estado en lo mismo era un marino, un tal Nader, que integró durante un tiempo un comando operativo en Montevideo que recibía informaciones de Seguridad sobre viajes de sospechosos uruguayos a Buenos Aires y esas cosas –dice el tal Silvera–. Otro al que CH veía seguido era a un puertorriqueño, Jaime del Castillo, [...] que cumplía no sé qué funciones en la Embajada norteamericana. Este Del Castillo había andado mezclado en algunos líos con Paino, el que denunció a las AAA.”

Salvador Horacio Paino, autoproclamado fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), o Triple A, o Tres A, quedó detenido en forma preventiva el 28 de noviembre de 1983 en Montevideo mientras el juez federal argentino José Nicasio Dibur tramitaba su extradición, invocando el Tratado de Derecho Penal Internacional del 23 de enero de 1889, ratificado el 3 de octubre de 1892 por Uruguay y el 11 de diciembre de 1894 por la Argentina. Negada finalmente por la justicia uruguaya.

Era un militante peronista separado del Ejército en 1955 con el grado de teniente primero, pronto a ser ascendido a capitán. Había sido compañero de promoción de Reynaldo Bignone, el último presidente del denominado Proceso de Reorganización Nacional, y de Cristino Nicolaidis, entonces comandante en jefe de la fuerza. Vivía en Carmelo, a unos 150 kilómetros de Montevideo. De la Argentina había huido, rumbo a Brasil, el 1° de marzo de 1979, poco después de un atentado contra su vida. Pensaba radicarse en Uruguay: hasta buscaba trabajo, de modo de afiliarse a una caja de pensiones. Pero encendió el ventilador. Y armó un revuelo de proporciones, al extremo de prestar declaración testimonial en la Embajada argentina, a mediados de octubre de 1983, por haber adjudicado a la Triple A el crimen del secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973.

El diario El Día, de Montevideo, publicaba anticipos de un libro de su autoría, *Yo fundé la Triple A*. En él aseguraba que, en unas 300 operaciones, habían matado a unos 2000 izquierdistas. Entre ellos, el cantante folklórico Jorge Cafrune; el sacerdote Pedro Mujica; el diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, director de la revista Militancia, y Silvio Frondizi, hermano del ex presidente argentino Arturo Frondizi. En 1976, decía, la Triple A tenía armas por valor de dos millones de dólares “para enfrentar a los terroristas de izquierda”; estaban en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social. Y disponía de dinero a granel, obtenido de la llamada caja chica, con el cual “se contrataba, además, a cientos de confidentes, como porteros de edificios y personas que se hacían pasar por estudiantes”.

Cafrune murió el 31 de enero de 1978, embestido por una camioneta en la ruta 27, cerca de Benavídez, provincia de Buenos Aires; pensa-

ba recorrer a caballo el trayecto de 750 kilómetros entre las ciudades de Buenos Aires y Yapeyú. Por la decisión de liquidar a Ortega Peña, acribillado a tiros en el centro de Buenos Aires, dice Paino que desertó de la Triple A, en 1974. Hasta abril de ese año fue jefe de organización y administración del Ministerio de Bienestar Social. En diciembre de 1973 había recibido la orden de su jefe, López Rega, de crear una estructura armada para combatir el terrorismo: “Me propuso que nos tuteáramos y me planteó lo que quería –dijo en una entrevista con una enviada a Montevideo del semanario Cambio 16, de Madrid–. Según entendí, los terroristas estaban creando mucho descalabro y no se los combatía como había que hacerlo. Quería que nosotros organizáramos algo para hacerles frente”.

La Triple A, o AAA, iba a llamarse Alianza Antiimperialista Argentina. Tenía como objetivo, entre otras ideas descabelladas, la recuperación de las islas Malvinas, aunque fuera por unas horas. Plan desechado, al parecer, por Perón. Eran, en un comienzo, 145 hombres que, a su vez, integraban la custodia personal de López Rega. Estaban organizados en ocho grupos, identificados de la letra A a la H.

“La gente le echa la culpa de los desaparecidos a las Fuerzas Armadas, pero usábamos camionetas en las que pintábamos Ministerio del Interior, Escuela de Caballería o Regimiento 601 –dijo Paino–. En la Triple A no había militares; eran todos de la custodia de López Rega y amigos de él.”

En marzo de 1976, una semana antes del golpe de Estado, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Argentina hizo un careo entre Paino y Jorge Conti, ex subsecretario de Prensa y Difusión. Fue en la unidad carcelaria de Villa Devoto, Buenos Aires, en donde un ex funcionario de Bienestar Social, preso, había revelado detalles de la Triple A. Estaban prófugos López Rega y Carlos Villone, su secretario mientras era ministro.

Conti, ex reportero de Canal 11, llegó a ser famoso; hasta tenía su propio club de admiradoras, creado en 1972. Cada semana recibía de ellas una boleta de Prode (Pronósticos Deportivos) que jugaban a su nombre. Después hizo un programa de televisión con Gerardo Sofovich, Las dos campanas, y un vuelo en un avión chárter rumbo a la Argentina

en el que obtuvo la única entrevista del momento con Perón. Le había ganado una apuesta a su colega Sergio Villarruel, de Canal 13. Con una condición: el afortunado iba a viajar con el camarógrafo del otro, de modo que ambos canales tuvieran la primicia.

Poco antes, en junio de 1971, Paino había estado alojado en la Unidad 20 del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda, de Buenos Aires. “Aparentemente, el informe del médico legista fue minucioso y contundente –escribió el periodista uruguayo Tabaré de Paula–. Diagnosticaba delirios, síntomas de agresividad, un oscurecimiento de la razón que pedía a gritos la reclusión de Salvador Horacio Paino en esa pesadilla con rejas que es la Unidad 20. Pero tanta prosa doctoral encubría una falencia: decía apoyarse en un examen que no había tenido lugar. El autor del referido informe nunca revisó al supuesto demente.”

Demente o no, Paino es nombrado por el tal Silvera en su testimonio a raíz de la relación que tenía con Del Castillo, el supuesto puertorriqueño que frecuentaba las embajadas norteamericanas en Buenos Aires y en Montevideo. Un ex agente de inteligencia norteamericano, ligado a la CIA, llegó a decirme que Del Castillo usaba otro nombre, Richard Vargas, y que estuvo cerca, en su momento, de Vladimiro Montesinos, el monje negro del presidente peruano Alberto Fujimori, y de los paramilitares colombianos.

“Del Castillo se veía regularmente con CH hasta que se fue a Venezuela –dice el tal Silvera–. Creo que aún está [...] allí. Seguramente era un tipo de la CIA. Vestía muy bien, siempre andaba con mucho dinero. Había vivido tres o cuatro años en Montevideo, cuando trabajó en la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Era muy amigo de Ojeda y todo hace pensar que era uno de los contactos entre Ojeda, CH y otra gente. El también viajaba a Brasil cada dos por tres y algunas veces creo que viajó con CH, según me dijo Blanco. CH me dijo que un día me iba a llevar con él a Brasil, si es que Ojeda no hacía problemas. Ese Del Castillo tenía un grupo de gente que [...] siempre andaba con él, dos o tres tipos que iban a todos lados con él. Entre ellos, un francés que había estado en Argelia y que, según Blanco, era instructor de tiro. El francés también era de los que viajaban a Córdoba y a Tandil, creo que como custodia o algo

así. Después me vine a enterar que tenía una academia de karate en Flores, que a veces CH usaba para hacer reuniones. Allí se reunían CH, Del Castillo y el Brasileiro. Yo nunca fui a la academia, pero Blanco sí y Sosa también.”

En caso de ser cierto el testimonio del tal Silvera, la CIA habría estado involucrada en el crimen al igual que otros regímenes militares de la región enrolados en la Operación Cóndor. Tema vedado entonces. Que ha ido cobrando vuelo después. Con declaraciones de los participantes. O de los protagonistas, como el contralmirante uruguayo Eladio Moll: dejó estupefacto al diputado José Mujica, ex tupamaro, miembro de la comisión investigadora de la Cámara. “Tengo el orgullo de decir que usted está ahí y que sus amigos vivieron porque existen unas fuerzas armadas orientales, ya que la orden de los gringos era que no valía la pena que ningún guerrillero viviera después de que se le sacara la información”, espetó. ¿Por qué mataron a Michelini y los otros, entonces? Por ausencia de liderazgo, especuló. O por el factor humano. O por decisiones independientes.

“Sosa había estado varias veces en Buenos Aires –dice el tal Silvera–. Tenía cierta superioridad sobre CH y aunque a CH eso le molestaba, no tenía más remedio que aceptarlo, porque la actividad que los policías uruguayos tienen en la Argentina está supervisada por la inteligencia militar. CH tiene alguna flexibilidad para moverse pero la inteligencia militar le marca los objetivos y él tiene que cumplir. Con CH siempre había problemas porque él en muchas cosas se movía según su propio criterio y nunca daba informes sobre el manejo que hacía del dinero para sueldos y para gastos y Sosa le decía que tuviera cuidado, que anduviera derecho. Sosa, según me enteré, había estado al mando de los grupos que habían llevado gente para Montevideo. Sé que por lo menos en dos oportunidades llevaron gente en el Vapor de la Carrera y otra en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, desde Ezeiza.”

La violencia dejaba huellas. No tenía marca registrada, sin embargo. La Triple A actuaba como el terrorismo de Estado, pero, en realidad, era una suerte de célula paramilitar de la cual, al parecer, no participaban los mismos represores. Nexos, igualmente, existían. Nexos que López

Rega, alias El Brujo por sus creencias en dotes sobrenaturales y por su influencia en la presidenta María Estela Martínez de Perón, alias Isabel, se llevó a la tumba el 9 de junio de 1989. Había nacido el 17 de octubre de 1916. Lo arrestaron en 1986 en los Estados Unidos, después de haber estado prófugo durante una década. Murió en la Argentina mientras esperaba ser juzgado.

“Con Sosa trabajaba en esas cosas otro oficial uruguayo, también del Ejército, llamado Tasca, Juan Manuel Tasca, que vivía en Buenos Aires –dice el tal Silvera–. Este Tasca tenía una fobia enorme contra todos los izquierdistas y estaba encargado, con Sosa y el Márquez que ya mencioné, de los interrogatorios que hacían a la gente que agarraban en Buenos Aires. Para eso tenían una casa por Palermo, que antes había sido un local de la gente de López Rega, las tres A. Para los interrogatorios colaboraba con ellos un paraguayo y me consta que coordinaban algunas cosas con un chileno, que era de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Este chileno también era un tipo importante y también iba a Superintendencia de vez en cuando. Del Castillo era muy compinche del chileno y muchas veces salían de farra juntos, a veces con CH.”

En abril de 1977 desapareció el periodista Edgardo Sajón, editor coordinador de La Opinión, en donde trabajaba Michelini, y ex secretario de Prensa y Difusión del ex presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. Paino dijo que no había sido ejecutado por esa organización, sino “por orden de un general que fue ministro del Proceso argentino, porque sabía demasiado de sus asuntos”.

Timerman comenzó a publicar sueltos en la portada del diario que llevaban el título Sajón e informaban brevemente sobre el tiempo transcurrido sin novedades sobre su destino ni sobre su paradero a pesar de las averiguaciones en los organismos de seguridad del Estado. Sajón había investigado sobre la muerte de Michelini; llegó a preguntarle al almirante Emilio Eduardo Massera, uno de los tres miembros de la junta militar, sobre la suerte que había corrido. Su desaparición coincidió con la de otros periodistas, como Rodolfo Fernández Pondal, subdirector del semanario Última Clave.

En una reunión con Timerman, Massera dijo que no tenía idea sobre los captores de Sajón. Idéntica respuesta recibió Lanusse de Videla. Después iba a desaparecer Enrique Jara, subdirector de La Opinión. En la portada iba a aparecer un segundo suelto de las mismas características antes de que fuera detenido, y torturado, el mismo Timerman.

Paino había presenciado un atentado contra las rotativas del diario Clarín. Dijo que, fallecido el dueño, Julio Noble, había sido secuestrado un secretario de redacción: “Como precio por la liberación, Clarín debió publicar artículos en los que se atacaba a López Rega; a su yerno, (Raúl) Lastiri, presidente provisional argentino entre julio y octubre de 1973, y a su esposa. Entonces, la Triple A decidió dar el escarmiento”. Desde un auto, en la vereda de enfrente, vio cómo se desarrollaba el operativo: “Los hombres de López Rega entraron en los talleres y rompieron todo lo que pudieron –dijo–. Sin embargo, el diario se siguió editando”.

En el momento del pedido de extradición a la Argentina, denegado por la justicia uruguaya, Paino fue internado en el hospital estatal Maciel, de Montevideo, bajo la custodia de dos agentes de Interpol-Uruguay. Padecía insuficiencia cardíaca. Dado de alta por el médico Jorge Tombo, su mujer, Sofia Ferreira, uruguaya, dijo: “Está perfectamente bien”. Pero el propio jefe de la Policía de Montevideo, coronel Washington Varela, advirtió que debía guardar reposo absoluto y disponer de oxígeno, metabloqueantes, antigorisma de calcio, diuréticos y sedantes.

“En líneas generales puede decirse que Sosa y CH eran la cabeza del grupo –dice el tal Silvera–. Del Castillo era un hombre de enlace con Ojeda y supongo que con la Embajada (de los Estados Unidos) o con la CIA. Blanco y Soria estaban a cargo de los seguimientos y después yo también me encargué de eso. Además Blanco estaba a cargo de los contactos con la gente que pasaba información. Como ya dije había otros 15 hombres, todos uruguayos, a quienes se les encomendaban los operativos. CH salía con ellos muchas veces a buscar gente, pero en esos casos, cuando Sosa estaba en Buenos Aires, el mando lo tenía Sosa. Por lo general, cuando iban a buscar a alguien, encargaban el asunto a gente de la Federal, todos relacionados con Soria. Soria tenía

mucha banca arriba y era el hombre que mantenía contactos más estrechos con Ojeda y con el Ministerio del Interior. Cada vez que iban a hacer algo Soria iba al Ministerio del Interior y avisaba. Ojeda tenía el mando operativo, según ya dije, y había otro tipo, Ramírez, un militar uruguayo creo que general, que nunca vi, pero al que CH y los otros nombraban seguido. Ese Ramírez, por lo que pude averiguar, tenía también mucha banca en Interior y era el que coordinaba con Ojeda. Creo que era un tipo importante, pero por lo que yo sé sólo Sosa, Soria y por supuesto Ojeda hablaban personalmente con él, cuando venía a Buenos Aires. Todos trabajaban con gran apoyo de la Federal y del CIDE (SIDE). El contacto con el CIDE (SIDE) era CH y a veces Sosa, cuando estaba en Buenos Aires. Del Castillo también tenía amigos en el CIDE (SIDE) y en ocasiones acompañaba a CH cuando éste tenía que ir al CIDE (SIDE).”

Era en abril

El plan contra Michelini y Gutiérrez Ruiz, según el tal Silvera, había sido trazado a mediados de abril en un local de Rivadavia y Maipú, Buenos Aires, rentado por uruguayos, en el cual funcionaba una agencia publicidad o algo por el estilo. Había pertenecido a la Triple A. Campos Hermida y un oficial uruguayo de Inteligencia eran las cabezas del grupo. Otro militar uruguayo, Ramírez, con rango de general, aparentemente, y Ojeda, argentino, cercano al ministro Harguindeguy, estaban encargados de la parte operativa.

“Ahora recuerdo que CH también recibía dinero de los chilenos, porque una vez Blanco y él andaban calientes diciendo que los chilenos no habían pagado todavía –dice el tal Silvera–. Desde el Ministerio del Interior, CH y Sosa llamaban casi diariamente a Montevideo. El que más llamaba era Sosa, pero CH también llamaba.”

Otros involucrados por el tal Silvera: Miguel Castañeda, ex boxeador; un subcomisario de apellido Soria; Blanco, policía; un colaborador de Ojeda llamado Tito o El Brasilero en el testimonio; Julio César Márquez (o Marques); Juan Manuel Tasca, y Del Castillo, el agente de la CIA.

“Fue a mediados de abril cuando CH me dijo que estaban planeando el asunto de Michelini –dice el tal Silvera–. Me lo dijo en la agencia. Estaban Sosa, Soria, Del Castillo, Blanco, Márquez y yo, además de CH. Sosa dijo que Michelini y el otro diputado «eran boleta», pero que ellos no tenían que tocarlos. Según dijo Sosa, todo lo que tenían que hacer era llevarlos a interrogarlos a la casa de Palermo y soltarlos después. El que expuso todo cómo era la cosa fue Sosa. Dijo que ya estaba todo arreglado en Interior y que Ramírez quería que fuese un trabajo limpio, sin problemas. Dijo que Ramírez estaba encargado personalmente del asunto y que sólo respondía ante el Ministerio de su país. Dijo que Ramírez lo había responsabilizado a él del trabajo en Buenos Aires y que Ojeda supervisaba todo. Dijo que lo primero que había que hacer era vigilar a Michelini y al otro para saber si había posibilidad de lograr otras pistas que llevaran a otra gente, además de la que ya estaba marcada. Sosa y CH tenían una lista de unas veinte personas importantes, todas uruguayas, que estaban en contacto con los diputados y querían ver si esa lista se podía ampliar, para llevar más gente a Montevideo o para interrogarlos en Buenos Aires y sacarles más datos.”

Michelini, según el tal Silvera, se había dado cuenta de que estaba vigilándolo. No cambió su rutina, no obstante ello: “El hermano venía a veces de Montevideo y también otra gente vinculada a él y CH sabía con anticipación cuándo venían amigos de Michelini de Montevideo y me avisaba para que estuviera alerta –dice–. Casi todos los días CH, Blanco y también Sosa revisaban la lista de los aviones y además recibían información de Montevideo, sobre viajes, a través de la Embajada uruguaya. Sosa era el que más manejaba esas cosas y desde Interior avisaba a Montevideo cuando la gente que había venido iba a volver y qué estaban haciendo en Buenos Aires y a quiénes veían y esas cosas. Tenían a mucha gente de la Federal trabajando en eso, además de los uruguayos que estaban en Buenos Aires”.

Estaba cada vez más cerca el desenlace. Que el 20 de abril, dice el tal Silvera, aún no tenía fecha. Sosa, en una reunión realizada en el local, montó en cólera: Del Castillo había dicho que su contacto (otro

eslabón, anónimo en ese caso) no estaba seguro de la conveniencia, o de la oportunidad, de ejecutar el plan.

“En realidad, CH se limitaba a cumplir órdenes, aunque me parece que el asunto no le gustaba mucho –dice el tal Silvera–. Sosa dijo que el trabajo lo había planeado para que lo hiciera gente argentina y que ya Superintendencia e Interior estaban tomando las medidas del caso. Dijo que había que ir a lo de Michelini y a la casa del otro, Gutiérrez, a la misma hora y que otro grupo trataría de encargarse de Ferreira Aldunate, otro político uruguayo que estaba en Buenos Aires. Dijo que en total participarían unos 40 hombres, todos argentinos, menos él y otros dos uruguayos que no nombró, que iban a venir de Montevideo y participarían del asunto. Dijo que esos dos hombres que iban a venir eran de Inteligencia Militar, del Ejército. Después uno no vino y lo sustituyó uno de la Marina. Pese a lo que dijo Sosa, a última hora se agregó Márquez y él también participó, creo que por orden del tal Ramírez. CH dijo en esa reunión que lo de Ferreira le parecía una locura. Dijo también que cualquiera de los tres se [...] podía [...] resistir porque no eran ningunos idiotas y que si eso pasaba había que boletearlos y eso iba a causar problemas. Sosa dijo que las órdenes que él tenía eran sacarlos vivos y llevarlos a Palermo. Después, allí, esperarían órdenes.”

Del plan estaban enterados brasileños y chilenos de la DINA, órgano manejado por el coronel Manuel Contreras, uno de los mentores de la Operación Cóndor. Informarles, según Sosa, era parte del acuerdo. Como había sucedido en 1974, según el tal Silvera, con el asesinato del general chileno Carlos Prats y de su mujer, Sofía Cuthbert, exiliados en Buenos Aires tras el derrocamiento de Salvador Allende. En ese momento, los chilenos habían dado cuenta a los uruguayos.

“Sosa se fue unos días a Tandil y cuando vino nos reunimos otra vez en la agencia, creo que el 24 o 25 de abril –dice el tal Silvera–. Sosa dijo que ya estaba todo en marcha y que al otro día él iba a hablar con la gente de Interior para empezar a ver los detalles. Dijo que había 30.000 dólares para mover en el asunto y que después iba a venir más dinero. CH preguntó quién iba a traer el dinero y Sosa y Del Castillo dijeron que ellos lo iban a traer. Me dijeron que siguiera vigilando al

senador y CH se encargó de contactarse con un brasileño, no el que mencioné antes, otro, que había estado vinculado a Gutiérrez para averiguar algunas cosas. Parece que ese brasileño había estado asilado en Montevideo pero que ahora trabajaba con la gente de CH y tenía mucha información.”

Al tal Silvera comenzó a olerle mal el asunto. Asunto que, con el camino recorrido, estaba muy caliente, admite. “En cualquier momento se hacía”, dice. Habló con Blanco y con Soria sobre sus reparos en «boletear» a un senador y a un diputado, nombrándolos genéricamente como los diputados. Le respondió uno de ellos que estaba loco, que no iba a ocurrir algo así. Le aconsejó que se retirara si no estaba seguro. Campos Hermida, aparentemente, supo de sus dudas.

Dice el tal Silvera: “Más o menos cuatro días después me sacaron del seguimiento a Michelini y me mandaron a Córdoba a buscar unos fierros (armas) que me dio otro uruguayo al que llamaban Pedro, que según me enteré después también era de la Policía y se llamaba Sánchez. [...] Héctor Sánchez. Ese Sánchez vivía en Córdoba y pasaba allí como vendedor de libros pero tenía cuatro hombres trabajando con él vigilando a chilenos y uruguayos. Los fierros que me dio los traje en el Ford Falcon de Blanco y se los di a CH. Eran tres ametralladoras y seis o siete 45. No estoy seguro porque me las dieron empaquetadas en un cajón y ni siquiera las miré. CH me dio 200 dólares por ese trabajo, me pagó los gastos que había tenido en Córdoba y todavía me dio 50.000 argentinos para que le comprara algo a mi piba, que ese día cumplía 6 años”.

Fue una de las últimas colaboraciones del tal Silvera para el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz, según dice. Supo después que, una vez secuestrados, habían sido llevados a Palermo (a Automotores Orletti, en realidad) y, de allí, a un regimiento. Obró en el ínterin de mensajero. En una ocasión, llevando de parte de Campos Hermida una caja de zapatos llena de cintas grabadas a Del Castillo, en la Embajada norteamericana, y un paquete, a su vez, que, pensaba, tenía dinero.

“Después me siguieron dando cosas así hasta que el 12 o 14 de mayo, más o menos, no recuerdo muy bien, CH me dijo que él viajaba a Montevideo y que iba a esperar allí unos días –dice el tal

Silvera—. Durante todo ese tiempo no volvieron a hablar para nada conmigo del asunto de Michelini y no volví a ver ni a CH, ni a Soria [...] ni a los otros. Sólo hacía contacto con Blanco. Cuando se llevaron a Michelini y al otro me enteré por los diarios. Y también por los diarios me enteré que habían aparecido los cadáveres. Fui a la agencia a buscar a Blanco y Blanco me llevó a ver a CH. Le dije que ya no quería seguir, pero antes de hablar con él llegó Soria y fue entonces cuando me dijo que me cuidara, porque podía meterme en un lío, como cabeza de turco. Le dije a CH que [...] largaba y me fui a casa.”

País de paradojas

Dos calles de Montevideo llevan el nombre de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz, según dispuso la Intendencia en 1985. Los sepelios de ambos se realizaron en cementerios distintos y a horas distintas de las fijadas, de modo de evitar disturbios. En los diarios uruguayos sólo pudieron publicarse avisos fúnebres de familiares y de amigos, no de carácter político. A los familiares de las otras dos víctimas halladas en el mismo auto, William Whitelaw Blanco y Rosario del Carmen Barredo de Schroeder, se les negó el derecho de velarlos.

“País de paradojas, digo, donde los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz pueden pasearse tranquilamente, impunemente, por calles que llevan el nombre de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz —dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano—. País de paradojas donde muchos políticos denuncian, en los más airados términos, la ineficiencia del Estado, después de que esos mismos políticos, o por lo menos sus partidos, han hinchado al Estado de parásitos y de burócratas inútiles que ejercen la viveza criolla a costa del país.”

En el cementerio Central, en el cual se realizó el sepelio de Michelini, la Guardia Republicana (policía montada) disolvió a la gente que se congregaba en la puerta. Del ataúd de Gutiérrez Ruiz, en el cementerio del Buceo, la policía arrebató la bandera uruguaya en la que estaba envuelto.

Mario Heber, presidente del directorio del Partido Blanco, al que pertenecía Gutiérrez Ruiz, quedó detenido. El gobierno uruguayo no emitió comunicado alguno sobre la muerte de ambos, ex ministro y ex senador uno, ex presidente de la Cámara de Diputados el otro, ignorándolos.

Michellini había nacido el 20 de mayo de 1924 en Montevideo. Presidió la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay en los cuarenta. Abrazó brevemente la actividad sindical, como dirigente bancario, y fue secretario de Luis Batlle Berres mientras ejercía la presidencia de la república, entre 1947 y 1951. Al año siguiente ingresó en el Parlamento por el Partido Colorado. En 1967, como representante de la Agrupación 99, fundada por él dentro del partido, llegó a ser senador. Durante el gobierno de Oscar Gestido fue ministro de Industria y Comercio; renunció en desacuerdo con la adopción de medidas de seguridad y retornó al Senado. En noviembre de 1971 fue reelegido senador por el Frente Amplio, coalición de izquierda fundada a principios de febrero de ese año. Poco después, el 17 de abril de 1972, un proyectil tirado con un lanzagranadas provocó destrozos en su casa; entre ellos, la rotura de un ventanal sobre la cuna de uno de sus hijos. Antes, un grupo de desconocidos había intentado incendiar su vehículo particular, estacionado frente a su domicilio.

Gutiérrez Ruiz había nacido el 21 de febrero de 1934 en Montevideo. Desde joven militaba en el Partido Nacional. En 1962, con otros muchachos blancos, fundó el Movimiento 8 de Abril, fecha conmemorativa de la muerte del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera. Tiempo después, con dos dirigentes del partido, reeditó el diario El Debate, cuya dirección integró hasta su clausura definitiva en diciembre de 1967 por decisión del entonces presidente uruguayo, Jorge Pacheco Areco. Fue elegido diputado en 1966. En 1971 fue reelegido y, en 1972, al comienzo de las sesiones parlamentarias, fue nombrado presidente de la Cámara en medio de un duro enfrentamiento con el presidente de facto Bordaberry. Lo reeligieron presidente del cuerpo en 1973; ya era miembro del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Bordaberry disolvió el 26 de junio de 1973 las cámaras legislativas uruguayas. Michellini había viajado a Buenos Aires, a pedido del

Frente Amplio, para advertirle al senador uruguayo Erro sobre el riesgo que implicaba regresar a su país. Decidió quedarse y pedir asilo político, concedido por el gobierno argentino el 13 de septiembre de 1973. Gutiérrez Ruiz también se exilió en Buenos Aires después de haber vivido cinco días como clandestino en su propio país.

En Montevideo, Elisa Lucía Michelini Delle Piane, la hija mayor de Zelmar, fue detenida y llevada al Grupo de Artillería 1 bajo la sospecha de haber sido parte de Tupamaros. En una carta dirigida al doctor Carlos Quijano, el 13 de abril de 1975, decía Michelini: “Mis cosas, igual; la hija sigue muy mal tratada. La quieren enloquecer y a mí también. Le aseguro que todo ese proceso me tiene muy angustiado pues es evidente que la tienen como rehén”.

La situación de su hija había sido motivo de preocupación en sucesivas cartas que no lograron atenuar su angustia:

- 18 de marzo de 1975: “Esta semana pasada ha sido tremenda, pues he estado con... muchas preocupaciones... De Cabildo se llevó una patrulla militar a mi hija a un cuartel y no hemos sabido nada de ella desde hace una semana. La están interrogando y no sabemos sobre qué, aún cuando sabemos de qué manera y con qué procedimientos. Te imaginarás mis nervios, mi preocupación, mi rabia, mi impotencia. Toda ha sido tremendo y todavía no ha sido esclarecido...”.
- 19 de marzo de 1975: “De mi hija ninguna noticia. Hoy, miércoles 19, sigo sin saber nada. Y ya hace 10 días que se la llevaron. Recuerda que hace 30 meses (!) que está presa y la sacan, la trasladan a un cuartel, ¿para qué? Además, el dato revelador de que algo traman: cada vez que la madre o algún abogado preguntan por ella, la respuesta es la misma: ¿se trata de la hija del senador? Para esto, como verás sigo siendo senador (!)”.
- 24 de marzo de 1975: “La han vuelto a torturar, después de 30 meses de tenerla detenida (!). Me han dicho los abogados que quedó bastante mal, pero que lo peor ya pasó, la madre no ha podido verla. Dicen que la tienen «recuperando»”.

- 29 de marzo de 1975: “De Eli, ninguna novedad. Sabemos que la han torturado, picana, submarino, golpes, plantón y la pobrecita tarda en recuperarse...”.
- 10 de abril de 1975: “De Eli, las noticias son todas aterradoras. No la han podido ver, no tiene visita. Se sabe que le hicieron todo lo que te conté, golpes, plantón, picana, submarino y cualquier atropello. Y ahora, por una compañera de celda, que a su vez le contó a su madre, se sabe que le dijeron que me habían matado y la pobre chiquilina vivió con esa angustia durante días, hasta que se encontró con esa chica que se lo desmintió. Además, le habían dicho que me mataron porque ella se negó a decir las cosas que le preguntaban...”.
- 18 de abril de 1975: “De Eli no hay novedades.... Ya van 40 días... He recibido alguna llamadita «jorobona», aconsejándome por «mi bien», no ir a hablar con la gente del Norte...”.
- 22 de abril de 1975: “Hubo alguna otra llamadita respecto a «los inconvenientes que a mis hijos y a mí mismo podría significar esta traición a mi país de ir a quejarme a los yanquis». He resuelto ignorarlas...”.

En 1985, a 24 horas de asumir el primer gobierno democrático de Uruguay después de la dictadura, encabezado por Julio María Sanguinetti, la justicia militar decretó la liberación de 111 presos políticos. Entre ellos, Elisa Michelini Delle Piane, detenida con otras 10 mujeres en el centro militar de Punta de Rieles, en las afueras de Montevideo.

A mitad de su testimonio, el tal Silvera dice: “Yo nunca maté a nadie ni torturé a nadie. Asumo la responsabilidad de lo que hice, pero nadie puede llamarme asesino ni torturador y ellos quisieron complicarme en una cosa de esas. El que me avisó fue Sosa. Me dijo que con los líos que se habían armado quizás ellos buscaran una cabeza de turco para aplacar el asunto. Entonces yo fui y le dije a CH que largaba y él me dijo que estaba bien, que era una lástima pero que si yo no quería seguir, que me fuera. Me dio unos mangos (pesos) y fui a casa. Pensaba levantar a la familia y salir de Buenos Aires pero dos horas después de llegar me fueron a buscar de la Federal. Sacaron un asunto viejo a relucir y me llevaron”.

Al final de su testimonio, el tal Silvera dice: “Entonces me fueron a buscar”.

Como si nada. Y él mismo, implicado, o complicado, a santo de nada, en un crimen horrendo, brutal, espantoso, quedó envuelto en la nada. En la nada usual de aquellos años.

6. EN EL NOMBRE DEL HIJO



N memoria de su hijo escribió Juan Gelman: “Estas visitas que nos hacemos, / vos desde la muerte, yo / cerca de ahí, es la infancia que pone / un dedo sobre el tiempo y dice / que desconocer la vida es un error. / Me pregunto por qué / al doblar una esquina cualquiera / encuentro tu candor sorprendido. / ¿El horror es una música extrema? / Las penas llevan a tu calor / cantado en lo que soñaste, / las casas de humo donde vivía el fulgor. / De repente estás solo. / Huelo tu soledad de distancia / obediente a sus leyes de fierro. / El pensamiento insiste en traerte y devolverte / a lo que nunca fuiste. / Tu saliva está fría. / Pesás menos que mi deseo, / que la lengua apretada del aire”.

Pesa, y pesaba, más que nada, más que todo, la perseverancia de un padre obcecado que no había querido dar crédito al punto final que deparaba la búsqueda. La búsqueda del último jirón de la vida de su hijo: una nieta nacida durante el cautiverio de su madre cuyo paradero pudo descifrar, cual enigma, más de dos décadas después. Y la búsqueda de la verdad. La verdad sobre la muerte de su hijo, Marcelo Ariel Gelman, periodista y poeta como él, de apenas 20 años cuando un comando militar asaltó su casa, y la verdad sobre la muerte de su nuera, María Claudia García Irureta Goyena, un año menor, embarazada de siete meses en aquel momento. La verdad inconclusa de “un padre huérfano de hijo, como soy, porque el rescate de sus restos fue el rescate de su historia”.

En ese rescate de su historia, Juan Gelman halló el 14 de octubre de 1989 los restos de su hijo. Habían sido colocados en un tonel, mezclados con cemento y arena, y arrojados al río Luján. Presumiblemente, el 21 de octubre de 1976, después de haber estado en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, de la ciudad de Buenos Aires, destino habitual de los uruguayos perseguidos por los regímenes militares de ambas márgenes del Río de la Plata bajo las alas de la Operación Cóndor.

Marcelo Ariel Gelman y María Claudia García Irureta Goyena no eran uruguayos, sino argentinos. Figuraba él, al parecer, en la agenda de una muchacha del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), razón, en principio, de la redada emprendida el 24 de agosto de 1976 y de su posterior asesinato, “de un tiro en la nuca disparado a medio metro de distancia”, así como del misterioso traslado de su mujer a Montevideo, en donde nació el 1° de noviembre de ese año la hija de ambos, María Macarena, inscrita como propia por un matrimonio uruguayo; el padre adoptivo, fallecido en el momento del hallazgo, era comisario.

En la casa de Berta Schuberoff, la madre de Marcelo, estaban su hija Nora Eva Gelman y un amigo de ella, de origen boliviano. Ambos fueron obligados a dirigirse al domicilio de Marcelo por un grupo armado, presumiblemente integrado por argentinos y uruguayos. Los liberaron 48 horas después.

“Marcelo tuvo inquietudes políticas desde su niñez —señaló Juan Gelman, radicado en la ciudad de México—. A los nueve años me sorprendía con preguntas turbadoras, y pertinentes, sobre el Che y su consigna de crear varios Vietnam en América latina. Sé por compañeros de escuela de Marcelo que ya en la primaria ejercía la protesta. Le molestaba la injusticia. Molestar es palabra muy suave para lo que sentía: indignación. Sé también que a los 14 años estaba en la Juventud Peronista de la resistencia, poniendo caños contra las transnacionales. Como miles de jóvenes, confió en Perón. Tenía 16, 17 años y se desilusionó profundamente cuando Perón volvió al gobierno y apoyó a la fascista Triple A y calificó de «jóvenes imberbes» a los que habían luchado por su retorno. La desilusión no lo confinó en la pasividad. Se fue de la Juventud Peronista por la izquierda, con la Columna Sabino Navarro. Desilusionado otra vez, merodeó por el ERP, que tampoco lo convenció. Cuando lo secuestraron no tenía militancia partidaria, pero sí la suficiente historia militante como para que la dictadura militar lo considerara un enemigo. Encontraron su dirección en la libreta de anotaciones de una muchacha del ERP. Estoy orgulloso de la militancia de mi hijo. A veces pienso que algo tuve que ver yo con ella y eso redobra mi orgullo y mi dolor.”

Marcelo, cédula de identidad número 6.827.025, había nacido el 11 de enero de 1956 en Buenos Aires y se había casado poco antes del horror, el 8 de julio de 1976, con María Claudia, también en Buenos Aires. Completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Era periodista independiente y escribía poesía.

En ese año aciago, 1976, el entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, no parecía desentendido de la trama. O, al menos, de los vínculos entre ambas orillas del Río de la Plata: “Nuestra evaluación de la evidencia e informes que tenemos nos convencen de que los secuestros de refugiados uruguayos en julio y septiembre fueron llevados a cabo por fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas, actuando clandestinamente y en cooperación, y mientras es aparente que autoridades uruguayas han preparado evidencia para apoyar su versión, no es probable que sea creída completamente tanto en la Argentina como en el exterior”, decía en un cable reservado.

Entre julio y septiembre de 1976 más de 50 uruguayos habían desaparecido en Buenos Aires. El gobierno de ese país dejó entrever el 28 de octubre que una organización terrorista se había infiltrado en su territorio. Pero, según Hill, la revelación no mereció réplicas oficiales ni cobertura periodística alguna en la Argentina. Los diarios *La Opinión*, del sábado 30 de octubre, y *La Nación*, del domingo 31 de octubre, se limitaron a reproducir los comunicados oficiales. Sin comentarios. Había 14 acusados. Que otro diario, *La Prensa*, omitió.

“Las fuentes de la Embajada disputan la versión del GOU (Gobierno de Uruguay) sobre las desapariciones –dice el cable de Hill–. Un oficial del Acnur (oficina de las Naciones Unidas para los refugiados) le dijo a un EMBOFF (oficial de la Embajada) hoy, 2 de noviembre, que 12 de los 14 nombres estaban en su lista de refugiados uruguayos secuestrados en julio y septiembre, y que acciones de hábeas corpus habían sido iniciadas en la Argentina por familiares de nueve de ellos. También le dijo que al menos 24 uruguayos desaparecieron en julio y otros 28 en septiembre. Lo que indica que no se sabe el destino de todos ellos. El oficial sostuvo que había testigos argentinos de los secuestros, pero dijo que

no se había hecho ningún testimonio legal en su momento y podría ser difícil encontrar argentinos dispuestos a testificar contra la versión del GOU ahora.”

De los desaparecidos no se hablaba en Uruguay, blanqueados ambos bandos (militares y tupamaros) con dos leyes de amnistía dictadas en el primer período presidencial de Julio María Sanguinetti, entre 1985 y 1990. Refrendada una de ellas, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por un plebiscito en 1989. Lo cual, en contraste con la Argentina, reflejaba el rechazo de la gente a la posibilidad de que los militares fueran juzgados. Posibilidad que, según el abogado Javier Miranda, miembro de Fedefam-Uruguay, tampoco iba a contar con respaldo popular.

El blanqueo, sin embargo, dejó una cuenta pendiente: qué había sido de los desaparecidos. La ley, en su artículo cuarto, promovía una investigación cuyo resultado magro no satisfizo a nadie. “Tenía 23 desaparecidos; ahora tengo 24”, esgrimió el presidente Jorge Batlle después de haberse convertido, con el hallazgo de la nieta de Gelman, en el primer presidente latinoamericano que contribuyó a esclarecer un caso de esa magnitud.

Reverso de su antecesor, Sanguinetti, aunque ambos militaran en el mismo partido, el Colorado. Uno hizo en cinco semanas lo que el otro no había hecho en dos períodos gubernamentales de cinco años cada uno.

A Gelman no quiso, o no pudo, recibirlo Sanguinetti, motivo de una carta abierta, después de haberse reunido con el secretario de la Presidencia, Elías Buth, en la cual exponía: “Mi nieta o nieto (ni su sexo conocemos) fue despojada o despojado de su padre, que apareció asesinado (de un tiro en la nuca a medio metro de distancia, en un tambor de 200 litros relleno de cemento y arena) en el mismo octubre en que su madre fue trasladada de Orletti al SID (Servicio de Informaciones). Fue despojada o despojado de su madre. Fue despojada o despojado de mí, que emprendí esta búsqueda para cumplir con el único legado que me dejó mi hijo: encontrar al suyo. Ojalá nunca padezca estas angustias, el peso de este vacío doble”.

Los uruguayos involucrados en la represión en la Argentina se vieron favorecidos, en octubre de 1989, con el indulto que dictó el presidente Carlos Menem. Indulto que favoreció, también, a los dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, radicados en Malvín y en Pocitos, Uruguay, respectivamente, pero, hasta un año antes, inhallables para la policía de ese país. Indulto que comprendía a 216 militares y civiles que habían participado de la represión, de la Guerra de Malvinas y de tres rebeliones contra la democracia en democracia, de un bando, y a 64 personas vinculadas con la subversión, del otro.

Indulto que llevó a Gelman a concluir que era la culminación de la teoría de los dos demonios que el escritor Ernesto Sabato, presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), supo formular: “Los decretos de indulto a los genocidas que ha dictado el doctor Menem, abogado, no sólo atentan contra el deber moral. Atentan contra el derecho mismo. Y cuando una ley no puede proteger al derecho, es justo que no impida ninguna injusticia. Así pensaba Shakespeare por lo menos”.

La cantidad de desaparecidos en Uruguay variaba entre los 23 (24 con la nieta de Gelman) de los que habló Batlle y los 28 de los que hablaban las investigaciones que encararon en su momento los congresistas. Esa duda pudo asaltar de pronto a la nieta de Gelman, de 23 años, aunque, en su caso, haya sido gestada por Marcelo, el único de la lista de 93 periodistas desaparecidos en la Argentina cuyo cadáver fue hallado, y por su mujer, María Claudia, trasladada en un vuelo de la compañía Pluna, el 30 de septiembre o el 1º de octubre de 1976, en compañía de los militares uruguayos José Gavazzo y Manuel Cordero, al edificio del Boulevard Artigas en el que operaba la Inteligencia del Ejército, en Montevideo. Tanto ella como su marido habían estado en Automotores Orletti, antiguo taller mecánico del barrio porteño de Floresta al que iba a parar la mayoría de los uruguayos que terminó en las tinieblas del paradero desconocido. Probablemente como represalia por la militancia de Gelman, padre, en Montoneros.

Rebelde con causa

—...¿ustedes no están enterados de qué lado viene la mano?

—No. Le voy a decir una cosa: a los militares nos importa un pito cómo viene la mano.

—¿Por qué?

—Porque, a la larga o a la corta, vamos a tener que pelear de vuelta. Ya la cosa está pasando de claro a oscuro. Está la enseñanza entregada, están todos los gremios en manos del enemigo, así que esto es muy caótico y hay muy poco para hablar.

—¿Usted considera que todos los militares están con la misma onda, entonces?

—Yo pienso que sí, que no ha cambiado nada la postura desde hace 15 años...

Casi 12 años duró la dictadura militar en Uruguay: de junio de 1973 a marzo de 1985. Casi 15 años después de su final, cual premonición, el general Manuel Fernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de Uruguay, invocaba fantasmas con sus declaraciones en Montevideo al semanario Búsqueda, primero, y a la radio Setiembre FM, después. Fantasmas que le costaron la remoción del cargo, dispuesta de inmediato por el presidente Batlle.

Acción y reacción en medio de cambios progresivos con los cuales Batlle procuraba diferenciarse de su antecesor, Sanguinetti, del Partido Colorado como él, y de Luis Lacalle, del opositor Partido Blanco, presidente entre 1990 y 1995. O procuraba imprimir un sello propio a la gestión que había comenzado el 1º de marzo de 2000.

¿Era la reacción del general Fernández un síntoma de malestar en las Fuerzas Armadas? Era un hecho aislado, según el ministro de Defensa, Luis Brezzo, fallecido en 2002.

“Si tantas cosas hemos pasado y tantas hemos sufrido, y ninguno de nosotros puede decir que alguien es culpable o que alguien es inocente, y por tanto este no es el resultado de un mundo maniqueo de malos contra buenos, a todos nosotros nos corresponde como responsabilidad primera sellar para siempre la paz entre los uruguayos”, decía Batlle, conciliador.

Con el entonces senador Rafael Michelini, líder de Nuevo Espacio, y con Tabaré Vázquez, cabeza de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio y futuro presidente, se había reunido Batlle, por separado, antes de anunciar, el 31 de marzo de 2000, el hallazgo de la nieta del poeta y periodista argentino Juan Gelman, nacida en cautiverio en octubre de 1976.

De esos cónclaves surgió como posibilidad que los desaparecidos fueran declarados muertos, que sus parientes recibieran un resarcimiento económico y que Batlle pidiera perdón por los excesos de la represión en nombre del Estado, no de los militares. Sutileza que desperdició expectativas entre la gente (uno de cada 50 uruguayos pasó por la cárcel durante la dictadura) y evitó roces con los uniformados.

Pero halló resistencia: “La muerte no se decreta por ley”, me dijo Luz Ibarburu, miembro de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Fedefam-Uruguay). Su hijo, Juan Pablo Recagno, estudiaba arquitectura en Montevideo. Lo detuvieron y, una vez en libertad, consiguió empleo en Buenos Aires como dibujante y ceramista. Desapareció en octubre de 1976; tenía 25 años. Un sobreviviente radicado en Canadá afirmó que había estado con otros uruguayos en el centro clandestino Automotores Orletti. La madre no había sabido más de él.

La reacción del general Fernández, seis días después del encuentro Gelman con su nieta, desnudó la renuencia que provocaba en un sector de las Fuerzas Armadas uruguayas, acaso el ala más veterana y dura, una virtual investigación de los excesos en los años de plomo. En especial, de la suerte que corrieron los uruguayos cuyas últimas huellas habían quedado en su propio país.

Los otros, la mayoría, desaparecieron en la Argentina, en donde la represión no era cárcel y tortura, como en Uruguay, sino, cual estadio superior, tortura y muerte. Señas infames de un plan de exterminio sistemático, la Operación Cóndor, evidente en la colaboración entre represores de ambos países.

“Simultáneamente con los rumores del mes pasado (octubre), que sostenían que los refugiados desaparecidos estaban vivos en Uruguay, había alguna indicación de que las fuerzas de seguridad argentinas estaban preocupadas porque su cooperación con agentes uruguayos en

forzar la repatriación de refugiados iba a ser revelada y así, iba a destruir su afirmación de que ningún refugiado sería devuelto a su país contra su voluntad –dice el cable de Hill–. Sin embargo, como los anuncios del GOU probablemente fueron coordinados con el GOA (Gobierno de la Argentina) de antemano, pudo haberse decidido que las relaciones públicas se iban a beneficiar al exponer un complot terrorista y publicitar el trato justo y decente que el GOU le da a los prisioneros y superaría cualquier especulación negativa.”

Habla, sin embargo, del “destacado silencio del GOA” y de “la cautela de la prensa al informar sobre el asunto”. Lo cual sugiere que “prefiere minimizar su rol tanto como sea posible”.

En noviembre de 1976, María Claudia había sido vista en dependencias del Servicio de Informaciones (SID), oficina del Ministerio de Defensa centrada, entonces, en la persecución política. Dio a luz en el Hospital Militar de Montevideo. Por un tiempo amamantó al bebé.

Por órdenes del teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, jefe del Departamento III, y del capitán José Arab, alias El Turco, terminó en un centro clandestino del Ejército conocido como Valparaíso. Intercambiaron frente a la tropa una frase terrible, según Gelman: “A veces hay que hacer cosas embromadas”. Nunca más se supo de ella. Bajo una identidad falsa, la niña quedó en manos del coronel Jorge Silveira y del capitán de la policía Ricardo Medina. La entregaron en enero de 1977 al comisario que la crió.

Marcelo, rebelde en la adolescencia, según su madre, Berta Schubaroff, era poeta, como el padre. Legó una pieza con tono premonitorio: “Me despido de este país. Me despido de mis amigos, / de mis enemigos. / Amigos. / Sólo quiero recordarles / que no dejen de ser / mis amigos. / Sólo quiero recordarles / que no me olviden / a la marcha del tiempo, / a la marcha del tren / en que me vaya / que borran las huellas de la / amistad lejana”.

Tenían 20 años, él, y 19, ella. María Claudia no era uruguaya; pudo haber sido confundida por su apellido. Juan Gelman procuraba preservar la identidad y la intimidad de su nieta, criada por una familia uruguaya cuyo padre adoptivo, un policía retirado, habría muerto a fines

de 1999. ¿Qué le habrá dicho cuando se vieron? Tal vez aquello que escribió alguna vez: “Los dos somos huérfanos de él”.

Doble impacto para la muchacha. Aún faltaban los exámenes de ADN, finalmente positivos, pero tanto para Gelman como para Batlle coincidían los datos. Datos que, por vías separadas, también aportó Michelini, sensible por haber perdido a su padre en Buenos Aires, con la colaboración de Diana Conti, entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Argentina.

De Gelman decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Se ha convertido en un doble símbolo de otros que en Uruguay o en la Argentina buscan a sus seres queridos y se abren paso en la neblina de la impunidad, pero además símbolo de todos los que creemos que en este mundo la belleza es posible”.

El drama, íntimo, inobjetable, intolerable, empezó el 24 de agosto de 1976 con el secuestro de Marcelo y de María Claudia, embarazada de siete meses. Dos años después, una carta breve, remitida por un sacerdote del Vaticano, le anunciaba que un bebé había nacido en cautiverio. Estaba escrita en inglés: child podía ser varón o mujer. Mujer fue, finalmente, en el Hospital Militar, de Montevideo. Todos eran cabos sueltos hasta que un oficial indiscreto se ufano en una reunión privada: “¿Cómo no voy a conocerla si fui yo quien la entregó?”.

Aquello llegó a oídos de Gelman, de 70 años. Era la pieza que faltaba, luego corroborada por el servicio de inteligencia y por la familia adoptiva. La pista clave, al fin, de un caso piloto que ponía a Batlle en una posición de mayor compromiso con los derechos humanos que sus antecesores. Quizá porque, a los 71 años, no tenía nada que perder, o tenía mucho que ganar en el plano político (en Uruguay no hay reelección directa, sino, como ocurrió con los dos períodos de Sanguinetti, turnos cada cinco años). Quizá porque los coqueteos con la izquierda, con mayoría de número en el Parlamento, fueran la llave de la gobernabilidad en los cinco años siguientes.

Como fuere, Batlle manejó sin anuncios, acaso como una inversión en espera de resultados, la posibilidad de pedir perdón por los excesos en nombre del Estado (no de los militares, de modo de no herir

susceptibilidades), de declarar muertos a los desaparecidos y de resarcir económicamente a sus parientes. Era una forma de cerrar un capítulo oprobioso de un lado del mostrador. O de abrirlo, del otro. Que tenía su costo. Como la reacción del general Fernández. O la reacción en cadena en otros países que, por motivos distintos, coincidió en el tiempo.

En Chile apareció una arenga a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas firmada por Santiago Hermógenes Pérez de Arce, miembro de la Fundación Pinochet, que publicó el diario *El Mercurio*, de Santiago: “La política está matando el derecho y la Constitución –decía–. No es la primera vez que la izquierda, con apoyo externo, lo hace en Chile. La diferencia es que la Carta de 1925 no tenía garantes y la de 1980 los tiene. Confío en que éstos sabrán cumplir su misión”.

En la Argentina aparecieron penas por Videla de una tal Elena Cruz, de profesión actriz, candidata a legisladora porteña por Encuentro por la Ciudad.

La cruzada de Batlle, curiosamente apoyada por el embajador norteamericano en Uruguay, Christopher Ashby, sin ser anunciada en forma pública, puso en aprietos a Sanguinetti, destinatario, en el último tramo de su gobierno, de cartas de cinco premios Nobel, entre otras, con tal de que hiciera algo por Gelman.

“Siento alegría por él –me dijo Sanguinetti en su casa del barrio Punta Carretas, de Montevideo–. Dijimos que, aunque tuviéramos diferencias sobre el modo en que se había manejado la difusión del caso, seguiríamos ayudándolo. Si ahora ha tenido éxito en su búsqueda, nada nos gratifica más por cuanto se deja atrás una situación personal penosa y se da un paso más para superar las consecuencias de aquellos años de violencia.”

Sus palabras contrastaban con las críticas de Gelman, publicadas ese mismo día en el diario *La República*, de Montevideo: decía que dirigentes políticos le habían confiado que Sanguinetti poseía información, pero no podía proporcionársela por razones institucionales. O de Estado: “¿Eso significa que sabía? ¿Cuáles serían esas razones de Estado o de partido? Es decir, que negó la participación de militares uruguayos en ese traslado y, por ende, que se realizó el Plan Cóndor. ¿Qué hacía mi nuera dando a luz en el Hospital Militar?”.

En la oportunidad del reclamo radicaron las diferencias: las primeras noticias de Gelman que tuvo el gobierno uruguayo, según Sanguinetti, databan de abril de 1999 merced a un artículo de su autoría que había publicado el diario *Página/12*, de Buenos Aires. En ese momento estaba en su apogeo la campaña electoral. Bombardeada, en términos figurados, por reclamos de Galeano; de otro escritor uruguayo, Mario Benedetti; de Elsa Parón, la primera abuela de Plaza de Mayo que halló a su nieta; de José Saramago, premio Nobel de Literatura (“De hombre a hombre, ayúdese a sí mismo y ayude a la democracia”, escribió); de Darío Fo, otro Nobel; de Rigoberta Menchú y de Adolfo Pérez Esquivel, dos más; de los cantantes Daniel Viglietti y Chico Buarque, y de Eric Hobsbawn, historiador británico, entre otros. Hasta el cantante argentino Fito Páez se atrevió a escribirle: “Déjese de joder, Presidente”.

Sanguinetti replicó el 6 de noviembre en una carta dirigida a Gelman: “Estamos hablando de hechos ocurridos hace 24 años. Quienes eventualmente podrían brindar algún dato fidedigno son personas que en su inmensa mayoría ya no están sometidas a jerarquía militar ni a la autoridad del Estado uruguayo. Y que en muchos casos murieron o son ancianos”.

No tanto, al parecer. Sara Méndez, segura de que su hijo, Simón Riquelo, nacido poco antes que la nieta de Gelman, también vivía en Montevideo, aportó lo suyo: “Oíamos vocesitas de niños, pero, por los comentarios de los guardias, también estábamos enterados de que una mujer embarazada estaba ahí –me dijo–. Gelman me mandó el abril de 1998 un mensaje por correo electrónico en el que me pedía información sobre ella”. Había estado en cautiverio, como María Claudia, en el edificio del Boulevard Artigas.

La reacción del general Fernández, con sus respuestas a *Búsqueda* y a *Setiembre FM*, demostró que, en realidad, no todos habían muerto ni eran ancianos. O que la verdad asustaba.

–¿Cómo está viendo las acciones del presidente Batlle sobre el tema de los desaparecidos?

–Nosotros sabemos tal vez menos que ustedes.

–¿Usted percibe que hay un cambio de la política de no revisionismo?

–Yo creo que no. Una cosa es revisionismo y otra cosa muy distinta es averiguar el paradero de los desaparecidos. Si empezamos con estos temas, ahí sí vamos a tener inconvenientes.

–Pese a que no posee demasiada información, ¿usted piensa que la idea de Batlle es averiguar sólo el paradero y no seguir investigando?

–No. Yo, como conozco al enemigo, pienso que no. El enemigo tiene por doctrina la vieja doctrina marxista-leninista. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Toda fisura que haya es un elemento que al enemigo le sirve. Lo llamo enemigo porque no hemos hecho las paces. Aquí no hubo cese de hostilidades y no hubo absolutamente nada...

Es decir, nada había cambiado. Para él, al menos. Ni para Gelman, acompañado en su búsqueda en Montevideo por su segunda mujer, Mara La Madrid: “El único legado que me dejó mi hijo fue encontrar a mi nieta –me dijo por teléfono, desde la ciudad de México, cuando recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo 2000–. Yo no le guardo rencor a la Argentina. Siento odio por los genocidas que supimos concebir. El país ha cambiado y yo también, pero ya no pienso volver. Uno entierra a los padres, no a los hijos.”

En noviembre de 1976, la nuera de Gelman había sido vista en dependencias del SID, oficina del Ministerio de Defensa. Dio a luz en el Hospital Militar de Montevideo. Por un tiempo amamantó a la niña. Terminó en un centro del Ejército conocido como Valparaíso. No por la ciudad chilena, sino por una cruel asociación de palabras: “Va al paraíso”.

Un equipo del Laboratorio de Antropología Forense Judicial y de la Universidad de la República, ambos de Uruguay, coordinado por el antropólogo forense de la Morgue Judicial de Montevideo, determinó por primera vez, a comienzos de 2004, las áreas del Batallón de Infantería Blindada Número 13, de Montevideo, en la cuales podrían yacer los restos de María Claudia y de otros desaparecidos durante la dictadura militar. El presidente Batlle, de tensas relaciones con su par argentino, Néstor Kirchner, se negó a ordenar las excavaciones. Las ordenó Vázquez, presidente desde el 1º de marzo de 2005.

En memoria de una era, más que de su hijo, escribió Juan Gelman: “Mi hijo no era un inocente (...) La dictadura militar consideró culpables a decenas de periodistas que no pensaban como ella. A centenares de intelectuales que no pensaban como ella. A sacerdotes, abogados y a miles de obreros y estudiantes que no pensaban como ella. A los familiares de personas que no pensaban como ella. Y también a muchos que deseaban cambiar la vida, como pidió Rimbaud, y lo intentaban por distintos caminos. ¿Y por eso no son inocentes? Todos ellos, sea que canalizaran su voluntad de cambio por escrito, desde el púlpito, la cátedra, los sindicatos, centros estudiantiles, organizaciones populares, partidos políticos o por las armas, ¿no son acaso víctimas de la dictadura militar?”.

Gelman enterró a su hijo. Sus obsesiones, plasmadas en libros como *El juego en que andamos*, *Velorio del solo*, *Gotán*, *Cólera buey*, *Hechos y relaciones*, *Hacia el Sur*, *Anunciaciones*, *Carta a mi madre*, *Salarios del impío*, *Dibaxu*, *Incompletamente*, *Debí decir te amo* y *Prosa de prensa*, entre otros, eran la niñez, el amor y la revolución. Era su nieta. Y, cual última pieza del rompecabezas en el cual se había convertido su vida, era María Claudia, de modo de cerrar el círculo. “Siento que las cosas se dan en espiral”, me dijo. Como si estuviera pidiéndole revancha a la vida.

SEGUNDA PARTE

7. DEVUÉLVASE AL REMITENTE



INMEDIATAMENTE después del golpe de Estado de 1973, las fuerzas militares de Chile cerraron emisoras de radio, destruyeron o confiscaron sus transmisores, y clausuraron Clarín, Noticias de Última Hora, El Siglo, Punto Final, Puro Chile y la agencia cubana de noticias Prensa Latina. En pocos días tomaron La Nación, allanaron la editorial estatal Quimantú e hicieron añicos sus publicaciones. En abril de 1975, según el Colegio de Periodistas, 400 colegas habían perdido su trabajo, 200 habían huido del país y 14 purgaban en prisión. Hasta la llamada prensa autorizada, como El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa y Ercilla, estaba sujeta a la censura previa.

Algunos medios de comunicación cerrados perdieron en forma simultánea sus bienes. El Partido Socialista se quedó sin Radio Corporación; su cadena pasó a manos del Ejército hasta la fundación de la nueva Radio Nacional. El Partido Comunista, a su vez, se quedó sin sus imprentas, como la empresa editora de Clarín, y padeció la clausura de 40 radios. Resarcimientos económicos, o morales, no hubo para ninguna de las dos caras visibles de la Unidad Popular, liderada por el ex presidente Salvador Allende.

“El régimen militar persiguió el control absoluto de la prensa —dice Arturo J. Escandón Godoy en un ensayo sobre la censura y el

liberalismo en Chile—. Una vez que la prensa favorable al allendismo fue silenciada, las críticas de la prensa autorizada se mantuvieron bajo control por medio de la censura previa y las sanciones ejemplares. El Decreto Ley 1009, además, modificó la Ley de Seguridad del Estado, facultando al tribunal competente para suspender la publicación o transmisión, hasta por 10 días, del diario, revista, emisora radial o canal de televisión infractores. La policía política de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), filtró deliberadamente información a la prensa acerca de la persecución de disidentes, quienes eran mostrados típicamente como subversivos peligrosos y delincuentes. Se usaron controles estrictos a la publicación de cualquier información que pudiera crear la impresión de desorden u oposición al Gobierno, y la DINA fabricaba información para consumo público sobre temas polémicos.”

Era al comienzo; también al final: en 1987, al filo de la democracia, la prensa no pudo ingresar en el sitio en el que fueron ejecutados en forma extrajudicial 12 presuntos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como parte de la Operación Albania, emprendida por la Central Nacional de Investigaciones (CNI), la policía de Inteligencia que reemplazó a la DINA.

Censura absoluta no hubo a pesar de ello. Radios como Chilena, Balmaceda y Cooperativa soportaron presiones de todo tipo, al extremo de la clausura, pero siempre estuvieron un paso delante de los límites que imponía el régimen. Entre 1975 y 1976, las prohibiciones iniciales empezaron a cobrar forma de decretos y de leyes con los cuales eran introducidos crímenes nuevos por medio de la Ley de Seguridad del Estado, de modo de incrementar las penas y, sobre todo, los miedos.

“Algunos periodistas, esos mismos a los que consideraba mis hermanos, atravesaban la calle cuando me veían —me dijo Manola Robles—. Siete años estuve cesante. Trabajé en lo que pude, no en periodismo. Estudié alemán, hice un poco de teatro, y cuidé a mi hija, de menos de un año. Todos temíamos por la vida, no importaba que no fuera nadie y que no hiciera nada. Bastaba con que pensara. A veces, no me permitía pensar en público. Mi fantasía me indicaba que «los otros» hasta podían adivinarme el pensamiento. Una tontería, pero llegué a pensarlo.”

El miedo era la fuerza. Robles, consejera de Prensa de la Embajada de Chile en Buenos Aires desde 2001 hasta 2005, estudió en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En esos años, fines de los sesenta, “los jóvenes creíamos que el mundo nos pertenecía y que podíamos hacer cosas por los demás”. Sus padres eran republicanos españoles, exiliados a causa de la Guerra Civil. Románticos cuyo único tesoro, los libros, poblaba la biblioteca. De ahí, su pasión por el teatro y el periodismo.

“Al cabo de ese período, una amiga, Marianela Ventura, me llevó a Radio Cooperativa, en donde comencé a trabajar en el ochenta, un 1º de enero –continuó Robles–. Y no me moví más. Sin transar en ninguno de mis pensamientos, recibí innumerables premios periodísticos, porque respeté la contraparte, y fui respetada. La radio me dio todas las oportunidades posibles, y respondía con una gran capacidad de trabajo y lealtad. Nos clausuraban de vez en cuando. El riesgo era de cada día, por cada día, varias veces al día. Nuestras voces decían lo que muy pocos afirmaban. El castigo para el medio era, obviamente, la publicidad. Las empresas no avisaban en la radio. Subsistimos con solidaridad, cuando se entendió que sólo con una prensa independiente podíamos lograr el retorno a la democracia. La desinformación y la ignorancia son las bases para que se perpetúen regímenes indeseables.”

En Cooperativa llegó a ser la voz ancla de la segunda edición del informativo El Diario de Cooperativa. En sus comienzos, Robles tuvo un jefe de reconocida trayectoria nazi, Alberto Callis, en Radio Agricultura. “No quiero que esto se tome en forma contradictoria –advirtió–. El me enseñó lo que no se enseña en las escuelas de periodismo, y respetó mi pasión por las noticias y mis posturas republicanas y democráticas. Paralelamente escribía en una revista llamada Plan, Política Latinoamericana Nueva, en la que me publicaban reportajes de dos páginas completas sobre situaciones sociales. En la revista 7 Días también colaboré. Luego fui a Radio Chilena (entonces, propiedad del Arzobispado), en la que, siendo joven, hice notas muy buenas. Tal vez, la irresponsabilidad de los años me permitía un riesgo no calculado. Me fui a España, y trabajé en la

agencia EFE y en el diario Ya. Franco, en el poder, y yo, hija de republicanos y en el diario de la falange. No tuve problemas, pero retorné a Chile.”

A Chile también retornó, años después y en otras circunstancias, Augusto Pinochet. Tenía 85 años, la arrogancia en baja, la arteriosclerosis estable y la demencia en alza después de las 503 noches del posoperatorio inesperado, y obligatorio, al que debió someterse en la residencia de Virginia Water, cerca de Londres. Atenuado, en cierto modo, con la visita frecuente de una diva como Margaret Thatcher. Causa, quizá, de sus deseos ardientes de volver a casa. Por la razón o por la fuerza, como reza el canto de una moneda de 100 pesos chilenos. Que, echada a rodar, cayó ceca allende los Andes.

De sobra sabía Pinochet que iba a ser sobreseído por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Los achaques no eran tan malos como parecían. Sobre todo si resultaban una vía de escape. O una purga. Casi en estéreo con su eximición de juicio por falta de juicio, el 9 de julio de 2001, su par argentino de los años de plomo, Jorge Rafael Videla, pasaba a ser, al día siguiente, el primer dictador latinoamericano procesado por la Operación Cóndor. Patentada en Santiago a fines de 1975. Tres meses antes del golpe en la Argentina, dos años después del golpe en Chile y seguían los golpes. O las firmas. Con los regímenes militares de Chile, la Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador comprometidos con la anuencia de los Estados Unidos en una meta común: conjugar el futuro imperfecto del verbo aniquilar en tanto se tratara de los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), los tupamaros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), entre otros. Enrolados todos ellos, y algunos más, en la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), creada en diciembre de 1973, en París, bajo los auspicios de la IV Internacional mientras sus líderes ordenaban bombas, secuestros y asesinatos desde las sombras.

Eran el prólogo de después. De la presentación en secreto de la Operación Cóndor, mentada por el coronel chileno Manuel Contreras, alias Cóndor Uno, desde la DINA. En Santiago, entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975. Con un título pomposo: Primer Encuentro de

Inteligencia Nacional. Y una consigna encubierta: “Establecer las bases de una excelente coordinación y una mejor acción en beneficio de la seguridad nacional en nuestros respectivos países”. Aunar esfuerzos, en definitiva, contra las llamadas fuerzas negativas. Sólo interesadas en extender la lucha armada como estrategia para tomar el poder y socializar el continente, según el documento fundacional.

Las bases habían sido acordadas por los regímenes de facto de Pinochet, en Chile; de Hugo Bánzer, en Bolivia; de Alfredo Stroessner, en Paraguay, y de Joao Figueredo, en Brasil, así como por los gobiernos constitucionales de María Estela Martínez de Perón, en la Argentina, y de Juan María Bordaberry, en Uruguay.

A un disparate sobrevino otro disparate. De desapariciones, torturas y ejecuciones. Y la venia para persecuciones, capturas e interrogatorios de involucrados, y de sospechosos, en los países miembros y en otros. Con casos extremos, como el asesinato del general chileno Carlos Prats, ministro de Defensa del gobierno de Allende, y su mujer, Carmen Sofía, en Buenos Aires. Perpetrado el 30 septiembre de 1974 por Michael Townley, norteamericano, experto en explosivos de la CIA, contratado por la DINA y secundado por militares argentinos. Secundado, a su vez, por cubanos anticastristas para matar, el 21 de septiembre de 1976, al ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffit, en los suburbios de Washington, DC. Y por mercenarios neofascistas en el intento fallido de liquidar en Roma, el 6 de octubre de 1975, a Bernardo Leighton, dirigente de la democracia cristiana chilena, y su mujer, Anita, heridos de gravedad en la balacera.

Estremecidos, los chilenos recibieron el 28 de noviembre de 2004 el informe de las torturas perpetradas por el régimen de Pinochet entre 1973 y 1990. Informe que, con ojos llorosos, presentó el presidente Ricardo Lagos después de haberlo encargado, un año antes, a la Comisión de Prisión Política y Tortura. De 35.000 testimonios reunidos, 28.000 correspondían a casos de tortura en más de 1000 recintos utilizados como centros de detención.

“Como chilena, nada me gustaría más que Pinochet sea juzgado en mi propio país –me dijo Isabel Letelier, viuda del ex canciller, durante

sus diligencias en el Congreso de los Estados Unidos en procura de aportar más pruebas contra el senador vitalicio, entonces detenido en Londres—. Pero ello no quita que sea juzgado en Gran Bretaña, en España o en el Reino de los Cielos.”

Pinochet, hábil en deslindar responsabilidades y en maquillar verdades, entregó en 1978 a Townley a la justicia norteamericana. Un año antes había disuelto la DINA. Contreras, considerado a sí mismo un elegido de Dios en la cruzada contra el comunismo, estuvo en prisión hasta febrero de 2001 por la muerte de Letelier. Sobre él, mientras el juez chileno Juan Guzmán apuraba su procesamiento por la Operación Cóndor, pesaba un pedido de extradición de la justicia argentina por la muerte de Prats.

En agosto de 1974, según Contreras, ocho agentes de la CIA desembarcaron en Santiago con el propósito de instruir a agentes de la DINA. Era parte de un trato rubricado con el director adjunto del organismo, general Vernon Walters, tras una reunión de directores de institutos militares latinoamericanos en Washington, DC.

“¿Cuántas operaciones criminales se reprodujeron en la región, como Diablo (así llamó la CIA a la que preparó la invasión y el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala), Colombo, Calipso, Zeta, Cóndor y otras? —dice la periodista Stella Calloni—. Los mecanismos del Cóndor se extendieron hacia otras regiones, se fundieron con otros operativos. Hubo cónclaves de criminales y en Centroamérica se volvieron a encontrar en los años ochenta en otras tareas. Chilenos, argentinos, uruguayos y otros fueron asesores. La CIA y las instituciones estadounidenses no necesitaban ninguna clandestinidad especial para actuar porque el gobierno de Washington estaba allí, armando y protegiendo a los represores y operando en guerras sucias que se discutían en el Congreso.”

En general, los gobiernos de facto tenían una raíz común, pero actuaban según las realidades de sus respectivos países. Entre ellos, el brasileño, a diferencia de los otros, apeló a la guerra psicológica, más que a la tortura, merced a los llamados procesos de arrepentimiento: los guerrilleros renegaban de la izquierda y elogiaban a la dictadura frente a cámaras de televisión, deponiendo las armas. No menos de 18, entre 1970 y 1976, terminaron siendo modelos propagandísticos del régimen.

Desde el comienzo supo el gobierno de los Estados Unidos de la Operación Cóndor. Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, contemporáneos del golpe de Estado en Chile, tenían una relación muy particular: se admiraban y se necesitaban mutuamente, pero no podían convivir en la misma administración. Coincidían, sin embargo, en el desprecio hacia América latina, su democracia precaria y, sobre todo, el comunismo de Allende. Que, por la razón o por la fuerza, ayudaron a derrocar el 11 de septiembre de 1973.

Un cable con el sello de top secret, dirigido en noviembre de ese año a Kissinger, daba cuenta del resultado de los primeros 19 días del régimen militar: 320 ejecutados en forma sumaria, 1500 muertos en otras acciones y 13.500 detenidos. “Ejecuciones chilenas”, se titulaba.

Fue el comienzo de la era Pinochet, inspirador y garante de la represión como sistema. Invulnerable hasta que comenzó a transitar su vía crucis desde que quedó detenido en la London Clinic, el 16 de octubre de 1998, por pedido del juez español Baltasar Garzón. Roto el invicto que conservaba en Chile desde su retiro del poder, en marzo de 1990, como primer soldado, senador vitalicio y Tata a secas de una democracia vigilada, como solía ufanarse. Solía ufanarse, también, de su condición, o de su mote, de intocable. Ni una hoja se movía sin su conocimiento, decía. Casi una leyenda era, como el espíritu que abrevaba en el cabernet sauvignon reserva Capitán General, en el blanco Doña Lucía (su mujer) y en el tinto Don Augusto.

Una marca registrada. Como la Operación Cóndor en sí, descrita el 28 de septiembre de 1976 por Robert Scherrer, agente del FBI, en un despacho a su sede central, en Washington, DC: “Es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de informaciones de inteligencia acerca de izquierdistas, comunistas y marxistas – dice–. Fue creada hace poco entre servicios que cooperan en América del Sur con el propósito de eliminar terroristas marxistas y sus actividades en la región. Además, se encarga de desarrollar operaciones conjuntas contra blancos terroristas en los países miembros de la Operación Cóndor. Chile es el centro de la Operación Cóndor, de la que participan, además, la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay”.

Otra referencia a la Operación Cóndor, habitualmente omitida su mera mención, hizo el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Robert White, en un cable remitido en 1978 al Departamento de Estado. Dice en él que los gobiernos miembros “se mantienen en contacto entre sí a través de un predio de comunicaciones norteamericano en la zona del canal de Panamá que cubre toda América latina. Este predio de comunicaciones de los Estados Unidos es utilizado básicamente por oficiales estudiantes para llamar a sus casas en América latina, pero también es usado para coordinar información de inteligencia entre las naciones del Cono Sur. Mantienen la confidencialidad de su comunicación a través del predio de los Estados Unidos en Panamá mediante el uso de códigos bilaterales”.

Mensajes claros, encriptados y claves que, descifrados, componían las estrofas de la neolengua, o del newspeak, que habían acordado en Santiago con tal de emprender aquella suerte de guerra santa contra las fuerzas del mal. Y, una vez derrotadas, contra la izquierda. Y, una vez derrotada, contra políticos, sindicalistas, obreros, profesores, estudiantes, artistas y... periodistas.

“Un total de 23 periodistas, 9 estudiantes, 20 trabajadores de la comunicación, 21 periodistas que fallecieron posteriormente (a raíz de sufrimientos en prisión, maltratos, enfermedades no atendidas, pérdida de la previsión, exilio y otras causas) y 28 obreros gráficos asesinados es el número de bajas que sufre el periodismo nacional en el período que va de 1973 a 1990 –dice Escandón Godoy–. La muerte de estos periodistas no siempre hizo noticia. Once de las 23 personas reseñadas integran las listas de ciudadanos detenidos desaparecidos. Generalmente fueron arrestados sin testigos, se les recluyó en una prisión clandestina, recibieron una muerte secreta en un lugar desconocido, se respondió con mentiras y evasivas a los requerimientos de sus familiares y, 20 años después, todavía no aparecen sus restos. La noticia de sus muertes no se publicó en los medios en que trabajaron. Otros asesinatos de periodistas fueron registrados en la prensa como enfrentamientos.” Que no eran tales.

Estamos prisioneros, carcelero

¿Había libertad de expresión durante el gobierno de Allende? “Absolutamente existió libertad de expresión y, más que eso, diría yo, libertinaje –dijo Robles–. Se decía y se publicaba todo. La polarización en que se fue sumiendo el país se transmitió a la prensa, pero los periodistas, trabajaran donde lo hicieran, en diarios a favor o en contra del gobierno, tenían una suerte de hermandad, de compañerismo y de lealtad insuperables. Yo era amiga de todos en el sentido amplio de la palabra. Trabajé en revistas juveniles, en la agencia informativa Orbe y en el diario Última Hora (propiedad de intelectuales y empresarios socialistas).”

Robles no militaba en ningún partido político ni abrazaba ideología alguna: “Mi teoría es que un periodista no puede ser militante y mi ideología es de defensa de la democracia, de los valores del ser humano, antifascista, y de acogida y contención de los pobres, los perseguidos, los humillados, los excluidos. Mi militancia ha sido la verdad informativa. Parece un slogan, pero así es”.

Slogan o no, el golpe de Estado produjo en ella “una tristeza profunda e irreversible”. Quizá porque, como periodista, “había sido testigo, más allá de los aciertos o los desaciertos de Allende, de la máquina para impedirle gobernar. Su engranaje no tuvo un momento de descanso, ni siquiera para mantenimiento. Los documentos desclasificados avalan mis palabras. Trabajaba en el diario Última Hora; fue cerrado junto con Puro Chile, Clarín y toda la prensa que estaba por respaldar el gobierno de Allende. El golpe me arrancó el corazón. Un sentimiento profundo de indefensión, de pena, de haber perdido no sólo la libertad, sino, también, los sueños y el futuro”.

En su fuero íntimo, Robles conservaba un secreto. Le pregunté si sufrió en carne propia la represión y me respondió: “No quiero hablar de eso; me hace daño”. Tanto daño que soltó un “solo un dato: la dictadura me debe un hijo que no alcanzó a nacer”.

Un periodista británico llegó a comparar la Operación Cóndor, en el Cono Sur, con el Programa Fénix (por Phoenix), en Vietnam. Scherrer dice en el despacho que envió a sus jefes del FBI: “Una tercera fase, y más

secreta, de la Operación Cóndor incluye la formación de equipos especiales de los países miembros para viajar a cualquier parte del mundo y a países que no son miembros con el propósito de reprimir y asesinar incluso a terroristas o partidarios de grupos terroristas. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro de la Operación Cóndor se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial de la Operación Cóndor para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo de la Operación Cóndor para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros de la Operación Cóndor”.

En los suburbios de Londres, durante su arresto, Pinochet usaba el correo electrónico para mantenerse en contacto con sus camaradas. ¿Su dirección? Cóndor, según el diario británico *The Sunday Telegraph*. No por el ave nacional de Chile, de cresta roja y ojos marrones, guardiana de los Andes, sino por la asociación ilícita por la cual pagó Videla, presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981, bajo detención domiciliaria, a los 75 años, por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura. Había sido condenado a reclusión perpetua, pero se vio favorecido en 1990 por los indultos que firmó el presidente Carlos Menem. Luego casado, en segundas nupcias, con una conductora de televisión chilena: Cecilia Bolocco. Doble de cuerpo, ella; doble de edad, él. Codo a codo con el presidente de Chile, Eduardo Frei, demócrata cristiano, en la defensa del principio de territorialidad por el cual Pinochet debía ser juzgado en su país.

Menem era llamado “El Incondicional” por el diario *La Hora*, de Santiago. “Fue el único que interpretó y difundió los principios de soberanía que defiende el gobierno de mi país”, me dijo el general retirado Luis Cortés Villa, director ejecutivo de la Fundación Pinochet. Era el final de una era y, también, su correlato. La resaca de la cultura autoritaria que, en democracia, no dejaba de existir, amenazante.

A fines de marzo de 1999, el general miraba desde los balcones, desde los graffiti, desde los diarios, desde las revistas y, si cuadraba,

hasta desde el fondo de un plato de sopa. Miraba, pero no veía. Ausente y presente a la vez en Santiago, el rostro severo en las penas de los que habían perdido a sus seres queridos y en los vítores de los que habían recuperado la dignidad nacional. El mismo rostro, siempre, tres cuarto perfil derecho de billete de curso legal, inquebrantable.

Tantas dualidades había causado el general que unos y otros, víctimas y partidarios, apelaban al rito de la vigilia en vísperas de la decisión sobre su inmunidad que iban a adoptar los lores, seres de otro planeta o de bailes de disfraces para los chilenos por su atuendos estrafalarios, hasta que el juez Garzón dictó la orden internacional de captura de Pinochet por los crímenes perpetrados durante la dictadura. O, según el auto de procesamiento, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Desde la tapa del tabloide La Tercera, de Santiago, Pinochet parecía lanzar un pedido de clemencia. Lacónico: “Hay un odio visceral contra mí”, decía. Chile, partido al medio por los sentimientos encontrados de unos y otros, era el país de las dos vigiliias. Y el general viajaba en taxi, iba de compras, supervisaba los cambios de guardia en La Moneda (sede del Gobierno), recorría cafés con piernas (bares atendidos por muchachas de faldas cortas, tacos altos y escotes generosos), aparecía en la televisión, ronroneaba en la radio y deambulaba en el ciberespacio. No estaba, pero era como si nunca se hubiera ido. Tan presente parecía que cualquiera de los dos caminos que podía emprender, la ida a Madrid o la vuelta a casa, iba a ser un problema de soberanía, en el primer caso, o un problema de justicia, en el segundo.

El caballero, como solía llamarlo el primer ministro británico, Tony Blair, con tal de omitir su apellido, también era requerido por la justicia de Francia, Suiza, Bélgica e Italia. Y pesaban sobre él querellas en Chile, la Argentina, Alemania, Suecia, Austria y Noruega.

“El país ha estado dividido en los últimos 25 años –me dijo la difunta Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)–. Nosotros confiamos en que los lores ratifiquen el fallo, ya que la justicia británica es muy rigurosa, pero el país va a seguir igual. A Chile no puede volver como héroe ni como mártir.”

Prevalecía, de un lado, la sensación, o el deseo, de que el general continuara envuelto en el laberinto en el que se había despertado durante la misión oficial, y especial, por hernia de disco. Prevalecía, del otro lado, el rechazo al proceder británico, traducido en planes que se tejían y se destejían en los cuarteles, y en advertencias tan oscuras como presuntas cargas de caballería y de artillería contra Londres, por más que el general fuera un soldado de Thatcher, y contra Madrid, por más que el general fuera un discípulo del generalísimo Francisco Franco.

Prevalecía al mismo tiempo, cual estigma, un rasgo de la cultura autoritaria: Alejandra Matus, de 33 años, periodista de La Tercera, autora de *El Libro Negro de la Justicia Chilena*, del sello Planeta, iba a verse obligada a pedir asilo político en los Estados Unidos, en donde se encontraba después de haber pasado 10 días de angustia en Buenos Aires, por falta de garantías: “No me sentiría segura de regresar a Chile sabiendo que seré perseguida y puesta en prisión simplemente por criticar a las autoridades del Estado y revelar sus actos irregulares, cual es, precisamente, la naturaleza de mi profesión y de la persona que soy”, adujo. La declararon en rebeldía el 14 de mayo de 1999 por ignorar su citación judicial, publicada el 8 de ese mes en un aviso en El Mercurio.

El caso, tomado por el relator especial para la libertad de expresión de las Américas, Santiago Canton, quedó registrado con el número 12.142 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Era censura a secas, vedada, en principio, por el artículo 19 de la Constitución de Chile y por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Censura iniciada un mes y un día antes, el 13 de abril, en coincidencia con la aparición del libro. Censura agravada el 16 de junio, con la detención, la liberación bajo fianza y el posterior sobreseimiento de Bartolo Ortiz y de Carlos Orellana, gerente general y editor general de la editorial, respectivamente, considerados coautores del libro, por infringir la Ley de Seguridad del Estado.

Que, según interpretó el juez Rafael Huerta Bustos, designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, preveía sanciones contra “los que difamen, injurien o calumnien al presidente de la República, ministros de Estado, senadores o diputados, miembros de los tribunales superior-

res de Justicia, el contralor general de la República, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o el general director de Carabineros, sea que la difamación, la injuria o la calumnia se cometa con motivo o no de las funciones del ofendido”. Una ley anacrónica y una actitud contradictoria, según Canton.

“Al día siguiente de la presentación del libro, mi hermano me advirtió que algo podía sucederme –me dijo Matus–. Fuimos con mi novio al aeropuerto y compramos el primer boleto disponible. Era para Buenos Aires. Esperábamos una resolución inminente. Sobre todo, en democracia, nueve años después de la dictadura. Pero tardó tanto que decidimos partir rumbo a Miami. Allí alterné entre la corresponsalia para publicaciones de Santiago y un año de trabajo en El Nuevo Herald mientras me colgaba al cuello el cartel de conflictiva. Una cruz, más que un mérito, en el periodismo chileno.”

En menos de 24 horas, 1141 ejemplares de *El Libro Negro de la Justicia Chilena* fueron incautados por la fuerza pública tanto de los depósitos de Planeta como de las librerías de Santiago por el recurso interpuesto por uno de los afectados, Servando Jordán López, ministro de la Corte Suprema. Y quedó prohibida su reproducción, pero era posible comprarlo, fotocopiado, en puestos de venta ambulante u obtenerlo en forma gratuita vía Internet desde el portal de La Tercera. Lo cual, violada la libertad de expresión, provocó un quebranto tanto a la editorial como a la autora, así como un aguijón para la imagen de Chile en el exterior. El líder de las reformas económicas y sociales en América latina, más allá de sus resultados, retrocedía a la Edad Media. O de Piedra. Hasta que en julio de 2001, la justicia chilena, con la nueva Ley de Prensa, levantó las restricciones.

Seis años había invertido Matus en el libro. Hecho en secreto, de modo que el proyecto no corriera el riesgo de ser abortado. En julio de 1997, de vuelta en Santiago después de una beca en una universidad norteamericana, tenía escritos tres capítulos; en marzo de 1998 decidió invertir el resto del año en redondearlo en Miami. Ciudad en la cual, después, iba a vivir, y sufrir, el exilio, pensando varias veces en la posibilidad de regresar a Chile y, aunque fuera detenida, apurar una definición.

Pero no, me dijo. Demasiado tenía ya con la censura y con el asilo. Era la vía del martirio, según ella.

Matus, Premio Ortega y Gasset de periodismo en 1996 por una investigación sobre el crimen de Letelier publicada en La Nación, de Santiago, advertía en el prólogo del libro que algunos hechos, por más que estuvieran fundamentados y comprobados, iban a resultar incómodos para los autores. Terminó siendo una premonición. Así como la calificación del Poder Judicial: “Un servicio público a las órdenes del rey en los tiempos de la Colonia, del poder político, salvo en el gobierno de Salvador Allende”. Y, mientras Pinochet continuaba recluido en las afueras de Londres, una afirmación que molestaba: “Hubo un período en el que el presidente Aylwin pidió investigar hasta esclarecer la verdad, pero luego la situación cambió con la llegada de la doctrina Frei —no nos metamos con los casos de los desaparecidos; dejémoslo así—, y así se ha hecho”.

De Jordán López, el querellante, jubilado en julio de 2002, decía que era un bebedor asiduo y que llegaba tarde a la sesiones de la Corte, entre otras cosas. De Frei, el mandatario, no tenía los mejores recuerdos: la jefa de Prensa de La Moneda, Marta Caro Díaz, objetó, e impidió, su presencia como reportera de La Tercera en una gira por Francia realizada entre el 8 y el 13 de abril de 1997 por haber protagonizado un supuesto escándalo de índole sexual en el avión presidencial, con otros tres colegas, mientras volvía de un viaje a los Estados Unidos, el 1° de marzo de ese año.

Su pecado, me dijo, había sido preguntarle a Frei en el aeropuerto por qué había habido tan pocos congresistas durante su disertación en el Capitolio y por qué había tenido tan poca repercusión en los medios de comunicación norteamericanos. Le susurraron, camino a la escalinata del avión, que se había ganado dos enemigos. Caro Díaz, sancionada en septiembre de 1998 con seis meses de suspensión de los registros por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile, procuraba indagarla sobre el asunto y, asimismo, llamaba por teléfono a los otros periodistas que habían viajado con ella, una veintena, con tal de que atestiguaran en su contra. La revista *Qué Pasa* dejó correr el trascendido sin fuentes capaces de sostenerlo, motivo por el cual debió rectificarse después.

En problemas ya había estado Matus en 1994 por un artículo de su autoría sobre corrupción en el Hospital Militar que había publicado La Epoca. La investigación judicial, acaso la instigación, no pasó a mayores, pero, no obstante ello, pesaba en su contra como agravante en caso de que fuera juzgada por *El Libro Negro de la Justicia Chilena*. Por el cual, me dijo, sintió miedo. Miedo antes de recibir el asilo político en los Estados Unidos, concedido en apenas un mes. Miedo cada vez que debía ir a otro país por la posibilidad de que no pudiera ingresar nuevamente. Miedo cuando debió acudir a la Embajada de Chile en Washington, DC, para presentar escritos vinculados con su caso. Miedo y postergaciones. Boda, hijos, dividendos... Y la rutina de pasarse cuatro horas cada mañana frente a la computadora, respondiendo correos electrónicos, concediendo entrevistas, e insistiendo ante Canton y ante Ricardo Trotti, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros, con tal de que su caso no quedara en el olvido.

Ni olvido, ni perdón

En el olvido no había quedado el general tras 17 años en el Gobierno, ocho como comandante en jefe del Ejército y poco menos de un año como senador vitalicio. En una carta a los chilenos, lejos de arrepentirse, sostenía que “el país sabe que nunca busqué el poder”.

Sus partidarios, mientras tanto, se preparaban para lo peor. Con planes de acción labrados en lenguaje castrense:

- Formular una protesta verbal ante la máxima autoridad de la Embajada en Chile del país agresor.
- Expresar nuevamente la protesta, pero esta vez por escrito ante la máxima autoridad de la Embajada en Chile del país agresor.
- Llamar a informar al embajador chileno en el país agresor.
- Retirar al embajador de Chile en el país agresor por tiempo indefinido.
- Nombrar persona no grata al embajador en Chile del país agresor.

- Romper relaciones diplomáticas con el país agresor.

El país agresor, Gran Bretaña, era, en realidad, el apéndice de la justicia española. Y tan férrea pretendía ser la defensa del general que The Sunday Times y The Mail on Sunday, ambos de Londres, difundieron fotos del ministro británico del Interior, Jack Straw, en un encuentro de jóvenes con el entonces senador Allende. Straw tenía el pelo rizado y llevaba anteojos mientras estrechaba la mano del alcalde de Viña del Mar, Juan Andueza. La foto databa de 1966. Una tal Nancy de Gálvez, polola (novia) de él, señaló que “no quiero convertirme en una segunda Monica Lewinsky hablando de una relación con una famosa figura política”. Straw, según los relatos, le cantaba canciones de los Beatles.

Las vigiliadas continuaban. El general confesaba en su carta que había encomendado el éxito de la asonada de 1973 a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen, Patrona de las Fuerzas Armadas y Reina de Chile. Sombreada su relación con la Argentina por disputas territoriales por las cuales la guerra, impedida por la mediación del Papa Juan Pablo II, estuvo a punto de tender alambres de púas sobre los Andes.

Los militares chilenos no habían perdido una guerra, como los argentinos contra Gran Bretaña por las islas Malvinas. Ni habían asumido las responsabilidades de las atrocidades cometidas, como el general Martín Balza del otro lado de la Cordillera. Habían respondido a un unicato comparable con la dictadura de Stroessner en Paraguay o, en otros términos, con los 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. No habían tenido juntas que iban turnándose a medida que perdían poder, como las argentinas. Hasta que la derrota de Leopoldo Fortunato Galtieri, confiado en que Ronald Reagan iba a estar de su lado mientras negociaba con Thatcher el emplazamiento de misiles de alcance intermedio en Europa, debió dar un paso al costado, cediendo el mando al general Reynaldo Bignone y, por la razón o por la fuerza, a la democracia.

El país de las dos vigiliadas acusaba el impacto de la estocada que había lanzado el general Fernando Rojas Vender, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, frente a las narices del presidente Frei: comparó la polarización de la sociedad con las condiciones que habían propiciado en

1973 el golpe contra Allende, tildado de comunista-marxista-leninista con todas las letras y algunas más.

Era el miedo que volvía o, como me decía la secretaria de la AFDD, Mireya García, la manipulación del miedo. En vigiliadas parecidas por causas distintas, la Fundación Pinochet oficiaba misas por su líder y la izquierda organizaba velaciones (velas y claveles frente a las fotos de los muertos durante la dictadura). Con una pregunta: “¿Dónde están?”. Con un mensaje: “Una noche sin sueño para que la humanidad duerma tranquila”.

En la calle, alterando la fisonomía pueblerina del lujoso barrio Vitacura, de Santiago, la gente de Pinochet entonaba un bis de Nino Bravo: “Libre,/ como el ave que escapó de su prisión/ y puede al fin volar”. Era, paradójicamente, la canción de los presos políticos en el Estadio Nacional. Adentro, en la Fundación, una casita moderna y amplia con piscina vacía, fotos de miserias de otros tiempos (atentados contra militares, en su mayoría), procuraban resarcir la mano dura que aplicó el general (mi general, en boca de todos): “Asesinados por el marxismo –advertía un cartel–. Nuestras víctimas del terrorismo internacional, a través de sus agentes locales, son 1392. De esto nos salvó Augusto Pinochet”.

Gracias, mi general. Pinochet, envuelto en una madeja legal por la cual no podía cumplir con el anhelo de aquellos que llevaban la palabra bienvenido estampada en camisetas y en banderas, expresaba su agradecimiento por medio de la Fundación, su regalo de cumpleaños, a los 80, con el fin de difundir, cual ejemplo, el legado del gobierno militar.

“En realidad, todos somos responsables de lo que pasó aquí – me dijo Cortés Villa, ex agregado militar en Buenos Aires–. Mi generación debe asumir la responsabilidad. No estoy hablando del gobierno de mi general, sino del motivo por el que Salvador Allende llegó a la presidencia. Nosotros fuimos al Gobierno porque el país pidió el pronunciamiento. Y estamos orgullosos de nuestra historia.”

Tan orgullosos que la Embajada de España en Santiago, al igual que la británica, era blanco del repudio de los adeptos de Pinochet. Como contrapartida, los recolectores de residuos habían tomado posición: “Gra-

cias por sacar la basura de Chile –decía un cartel rubricado por ellos–. Nosotros sacamos la de su Embajada”. Un ómnibus, asimismo, iba por las calles con la inscripción: “16 de octubre, Día de la Justicia. A España el perro fascista”.

Un año antes, en ocasión del arresto de Pinochet, no cabía la posibilidad de una investigación de los militares y de los carabineros (policía) sobre el destino de 1200 detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1990), como acordó la mesa de diálogo entre ambas partes que algunos sectores no reconocían como válida.

Era el capítulo siguiente de las investigaciones de la Comisión Rettig (debía el nombre a su presidente, el jurista Raúl Rettig, fallecido): en 1990 consignó 1068 homicidios perpetrados por agentes de seguridad bajo las órdenes de Pinochet y 90 más cometidos por particulares. En su mayoría, en los cuatro primeros meses del régimen. Entre los desaparecidos estaba Charles Horman, periodista y cineasta de 31 años, norteamericano, sobre cuya historia se basó la película *Missing*, de Costa Gavras, protagonizada por Jack Lemmon y Sissy Spacek, y estrenada en 1982. En 1991, el presidente Patricio Aylwin pidió perdón a los chilenos.

La dictadura chilena se caracterizó por los fusilamientos colectivos y sumarios, o la eliminación inmediata y sin contemplaciones, apelando incluso a la fabricación de armas químicas y toxinas con tal de no dejar huella, mientras los militares uruguayos optaron por los encarcelamientos prolongados y los argentinos optaron por las desapariciones.

El informe dado a conocer por Lagos señala que el método predilecto de los agentes de seguridad eran las palizas. Podían ser puñetazos, puntapiés o culatazos con armas de fuego, al igual que apedreamientos, quemaduras con objetos calientes o ácidos, extracciones de dientes o uñas, colgamientos desde vigas, aplicación de electricidad, simulacros de fusilamiento, obligación de comer materia fecal o humillaciones, como besar las botas de los militares, entre otras atrocidades. Tres mil trescientas noventa y nueve mujeres dijeron que fueron sometidas a abusos sexuales. Macabros algunos de ellos, como la práctica de sexo oral con los captores, las violaciones con perros adiestrados y la introducción de arañas y ratas en la vagina.

El norteamericano Horman, según un cable diplomático del 25 de agosto de 1976 revelado sólo el 8 de octubre de 1999, había sido secuestrado en su casa, en Santiago, y llevado al Estadio Nacional, en donde estaban aquellos que eran sospechosos de haber colaborado con el gobierno de Allende. Después de meses de insistencia, la familia halló el cadáver. Su viuda, Joyce Horman, había entablado una demanda civil en los Estados Unidos que debió retirar por no tener acceso a documentos de su propio gobierno a pesar de haber enviado varias cartas rogatorias.

En Chile ya había proselitismo para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre de 1999 entre el candidato por la Concertación, Lagos, de izquierda, y el candidato por la Alianza por Chile, Joaquín Lavín, de derecha.

Por imperio de la contradicción, el eventual regreso de Pinochet a Santiago iba a ser menos favorable para Lavín que para Lagos, finalmente ganador. Por más que socialistas como él y como el canciller Juan Gabriel Valdés y su antecesor, José Miguel Insulza, se habían visto en la penosa obligación de esgrimir el principio de territorialidad con tal de beneficiar al dictador que había hecho estragos en sus vidas. Con esa posición coincidía otro socialista, Felipe González, mientras el presidente de España, José María Aznar, conservador, prefería no entorpecer la labor del juez Garzón. Más allá de que el Partido Popular hubiera surgido, en parte, de las raíces del régimen de Franco, cuyos crímenes jamás han sido juzgados. “Primero nos colonizaron y evangelizaron, y ahora tenemos el avasallamiento de la colonización judicial”, espetaba el presidente argentino Menem.

El gobierno de Frei, entre la espada y la pared, recibía cartas tajantes de los familiares de los desaparecidos: “Creemos que ningún gobierno que dice ser democrático puede ni debe defender a un genocida —decía una de ellas—. Resulta inaceptable y vergonzoso que las autoridades de un país se coloquen del lado de los culpables en vez de apoyar a las víctimas”.

En coincidencia con el año de arresto de Pinochet, el 16 de octubre de 1999, iban a cantarle el Feliz Cumpleaños. Faltaba más de un

mes para su cumpleaños, el 25 de noviembre. Grupos de derechos humanos y de partidos de izquierda habían montado en la calle una torta de telgopor que terminaron partiendo en 1000 pedazos entre globos, papel picado, serpentinas, silbatos, matracas y hasta un hombre disfrazado de él, vestido de preso, que agitaba un cartel con la palabra Madrid desde una celda, o jaula, en la parte trasera de una camioneta.

En otro sector de la ciudad, el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, y su par de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, hacían votos en una misa por su pronto regreso al país. Sano y salvo.

El Tata, o mi general, era, en la marcha que se realizaba a la misma hora a varias cuadras de distancia, Pin-8, según una pancarta, o El Criminal, según los cánticos. Todo se resumía con ritmo de batucada en una frase con clave de sentencia: “¡Ya cayó!”. La marcha promediaba por la Alameda, nombre popular de la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, rumbo al edificio Diego Portales, del Ministerio de Defensa, en donde antes, durante la dictadura, Pinochet rendía sus informes anuales cada 21 de mayo. Los carabineros, una veintena en la puerta, se miraban entre sí.

“Con los huesos de Allende/ haremos un gran puente/ por el que pasarán/ Augusto y sus valientes –cantaba el otro gentío, frente a la Fundación Pinochet–. Con la lengua de Lagos/ haremos un estofado/ del que comerán/ marxistas y exiliados.”

En el escenario, los oradores se sucedían en repetir las mismas cosas. Que era una injusticia, que Chile se había salvado de una educación a la cubana, que Colombia necesitaba un Pinochet para terminar con la guerrilla, que los chilenos no se rendían (una avioneta llevaba el mensaje en un cartel), y que debía reaparecer la raza soberbia, gallarda y belicosa que había caracterizado al país.

Hasta que Hermógenes Pérez de Arce, presentado como intelectual, dio rienda suelta, con tono catedrático, al desacierto de la detención de Pinochet y su acierto, tiempos ha, en haber respaldado a Thatcher, también ovacionada, durante la Guerra de las Malvinas. Galtieri, silbado, iba a encarar, después de la recuperación de las islas, una campaña en contra del patrimonio chileno, explicó.

“Pero, afortunadamente, lo que nos separó de nuestros hermanos argentinos está superado –dijo–. Es hora de expresar nuestro agradecimiento al presidente Menem por el apoyo que ha dado a nuestro Gobierno. Le deseamos a Carlos Saúl la reelección que se merece dentro de cuatro años.”

Jamás lo imaginó Pinochet. Como tampoco imaginó que iba a dejar de ser aquel que decía que en Chile no se movía una hoja sin su conocimiento: “Cuando hace exactamente un año Pinochet y sus partidarios celebraban su regreso a Chile después de 503 días detenido en Londres ninguno imaginaba lo que le esperaba –decía el diario El Mercurio, de Santiago, el 4 de marzo de 2001–. Ni siquiera sus más acérrimos adversarios pensaron que después de su regreso semi triunfal, cuando bajó del avión al son de sus marchas militares preferidas y con todos los honores de los comandantes en jefe, comenzaría, sólo días más tarde, a enfrentar una batalla judicial plagada más de derrotas que de triunfos y que podría vivir esta semana un crucial paso, mientras espera que el caso se cierre por motivos de salud. Quiérase o no, Pinochet copó la agenda del primer año de Lagos”.

Tolerancia cero

Con la desclasificación de documentos vinculados con la dictadura de Pinochet, el gobierno norteamericano había destapado la lata de gusanos (definición de un agente de la CIA sobre los papeles que confirmaban los lazos entre Washington, DC, y Santiago antes del golpe de Estado de 1973 y después de él) a pocas horas de que el presidente Frei arrancara una tibia promesa de sensibilidad de su par español, Aznar, con tal de que Pinochet pudiera volver a casa.

“Algunos dictadores y hombres fuertes en un tiempo poderosos están encontrando que el mundo es un refugio cada vez menos hospitalario –decía un editorial de The New York Times–. Vladimiro Montesinos, el misterioso jefe de los servicios de Inteligencia de Perú que se ocultaba en Venezuela, ahora ha sido llevado esposado

a Lima para enfrentar acusaciones de asesinato, tortura, extorsión y tráfico de armas y drogas. Yugoslavia ha iniciado un proceso legal para enviar a Slobodan Milosevic, su ex presidente, al tribunal de crímenes de guerra de La Haya, Holanda. El general Augusto Pinochet, de Chile, quizá logre escapar de un juicio por acusaciones de encubrir docenas de asesinatos y desapariciones forzadas de sus enemigos, sobre la base de que no está mentalmente apto para ser sometido a ese proceso. Pero después de su arresto en Londres en 1998 y su acusación oficial en Chile, es un hombre desacreditado, ridiculizado y en plena desgracia. Entre las cosas que estos tres hombres compartían estaba la creencia de que eran inmunes a cualquier juicio. Esa creencia se ha visto desmentida rotundamente.”

Frei, con mandato a plazo fijo hasta fines de 1999, aducía razones humanitarias (neologismo para la colección de fin de siglo, como limpieza étnica y daños colaterales) en su afán de obtener piedad para el senador vitalicio que había caído en desgracia, pero Aznar tomaba prudente distancia del asunto: el juez Garzón, no su gobierno, había girado el pedido de extradición por crímenes contra ciudadanos españoles en los años de plomo. Y la Justicia, mi amigo, es independiente, decía.

Una respuesta de circunstancia. ¿Quién podía negarle compasión a un anciano con diabetes, depresión y problemas cardiorrespiratorios, por más que fuera Pinochet? Frei, empero, se quedaba con una palabra no conforme a derecho: sensibilidad. Casi al mismo tiempo, el gobierno de Bill Clinton, ausente sin invitación en la cumbre entre países de América latina y Europa que se realizaba en Río de Janeiro, decidía romper con más de ocho meses de cabildos que iban a contramano de su aspiración de ser el campeón mundial de los derechos humanos.

Era consecuente con sus palabras: “Salvo una excepción, el día de los dictadores ha terminado en América latina”. Palabras pronunciadas en 1998 en el Congreso de Chile, ausente con aviso, por razones de salud, el senador vitalicio. “Nunca más, never again”, exclamó Clinton, en español primero y en inglés después.

De la lata de gusanos, la correspondencia diplomática antes reservada, afloraban al filo del milenio detalles de la represión, inauditos

algunos de ellos. El Cóndor pasaba, versión Simon & Garfunkel, pero quedaban los sonidos del silencio. Y, entre ellos, las cuentas pendientes de los muertos y de los desaparecidos de la era Pinochet. En Chile y en el exterior. El fin de la indiferencia del gobierno de Clinton tenía un costado humanitario. No de razones humanitarias, como esgrimía Frei, sino de derechos humanos que, como en Kosovo, estaban por encima de la soberanía de los países. Tenía, también, un costado político: Londres, el cuarto vértice del eje Santiago-Madrid-Washington, DC.

Blair, anfitrión por la razón o por la fuerza de Pinochet y socio en todo de Clinton, necesitaba bases firmes que legitimaran la decisión de su gobierno de retenerlo hasta que comenzara el proceso de extradición. El sinceramiento norteamericano, después de todo, involucraba a un presidente muerto, Nixon, y a un ex ladero de él que nunca se mostró interesado en América latina, Kissinger, miembros, los dos, de una administración republicana, signada por el Watergate, que estuvo a punto de abrir en Miami, tierra de cubanos anticomunistas, una oficina regional de la Operación Cóndor.

Richard Helms, jefe de la CIA, tomaba nota en 1970 de una orden de Nixon: “No preocuparse por los riesgos que implica. Diez millones de dólares disponibles. Más, si fuera necesario. Hacer estallar la economía”. No alcanzaba: Allende iba a ganar las elecciones. Tres años después, Pinochet recibía elogios de Washington, DC, por haber restaurado el orden y por haber encarrilado la economía al estilo monetarista ortodoxo de los Chicago Boys.

No era un caso único: la lista de derrocados por instancias del gobierno norteamericano ya incluía a Mohammed Mossadeq, en Irán (1953); a Ngo Dinh Diem, en Vietnam del Sur, y a Juan Bosch, en la República Dominicana (1963), y a Kwame Nkrumah, en Ghana (1966).

Que Pinochet hubiera vuelto, o sido devuelto, a Santiago no significaba necesariamente una victoria de la que pudiera ufanarse a bastón suelto. Era, quizá, la forma más elegante que había encontrado el gobierno británico, en aprietos desde que recibió el pedido de extradición de la justicia española, de deshacerse de él. O, tal vez, el broche de un acuerdo político cuyas primeras hilachas comenzaron a vislumbrarse

en vísperas de las elecciones presidenciales en las que, después de una primera vuelta reñida, Lagos, socialista enrolado en la Concertación, coronó la continuidad que regía en Chile desde el final de la dictadura.

El triunfo de Lagos, aunque no fuera demócrata cristiano como Frei y Alwyn, pasó a ser algo así como una figurita repetida en los 10 años anteriores frente a un candidato por la derecha, Lavín, alcalde exitoso de un municipio caro de Santiago, Las Condes, que había renunciado a mitad de camino a la causa del general por considerarla perdida. No era negocio, al parecer, insistir con el prócer de otra generación. Cuyos defensores habían apelado a un principio, y un fin en sí mismo, que no cuadraba en la decisión del gobierno británico: las atrocidades por las que Pinochet era requerido en Madrid, comprendidas en la Convención contra la Tortura (1984) y en la Convención contra el Genocidio (1948), estaban por encima de las constituciones nacionales de los países signatarios, como Chile y, más allá de la posición adoptada por Menem, la Argentina.

Esto quería decir, en sintonía con las causas que habían avivado el fuego en Kosovo, que primaban los derechos humanos sobre los soberanos. Y que Pinochet quedó en libertad por piedad. O, en todo caso, por ese motivo, presumiblemente deshonroso en su frondosa foja de servicios, que el gobierno chileno llamó razones humanitarias. Podía bailar una cueca si quería. Y burlarse, de ese modo, de los informes médicos que hablaban de lesiones cerebrales y demás cuitas severas, pero otros dictadores que vivían fuera de sus países, y que cargaban cruces parecidas, continuaban en zonas de riesgo. Como Stroessner, de Paraguay, en Brasil; Idi Amin, de Uganda, en Arabia Saudita; Jean-Claude Duvalier y Raoul Cedras, de Haití, en Francia y en Panamá, respectivamente, y Hissene Habre, de Chad, en Senegal.

En julio de 1984, la revista Alborada, del Ejército de Chile, publicaba un artículo referido al terrorismo en el cual definía a la subversión como marxismo disfrazado de violencia y describía su finalidad específica: “Difundir el miedo y desvincular a la población del Gobierno a través de acciones violentas para facilitar la sumisión de las masas, sacudir a los indiferentes y atenuar la resistencia de los oponentes”. Y advertía que

radioemisoras y diarios habían sufrido ataques que ponían de manifiesto que sus instigadores y ejecutores actuaban en forma planificada y concertada con un alto grado de preparación técnica. Detrás de todo asomaba la sombra del MIR, coordinado por medio de radio Moscú en una suerte de complot llamado Operación Retorno.

El proceso de Pinochet, durante el cual se produjo la tercera transición de Chile en democracia sin heridas ni cicatrices para el sistema, deparó cambios en la sociedad chilena. Imperceptibles en ese momento. Hasta que Lagos designó a la médica Michelle Bachelet como ministra de Defensa. La cartera más crítica. A cargo de una mujer que, además de esa condición en un entorno machista y de haber militado en el socialismo, pasó por las cárceles de la dictadura, padeció el exilio y perdió a su padre, el general Alberto Bachelet, por haber respaldado al gobierno de Allende. Fue torturado; murió por falta de asistencia.

Periodismo versus patriotismo

Algo había cambiado. No en todos los órdenes. Ni en Chile, ni en el exterior. En Londres, por ejemplo, la prensa estaba en aprietos durante la represalia contra el régimen talibán en Afganistán, correlato de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Si criticaba los bombardeos, corría el riesgo de ser identificada con Osama bin Laden; si guardaba silencio, corría el riesgo de ser identificada con la pasividad, o con la anuencia, frente a las muertes de civiles. ¿Entonces? Equilibrio, Watson.

Ya había sucedido durante la Guerra de las Malvinas: Thatcher decía que la cobertura de la BBC favorecía a la Argentina. Al enemigo, en definitiva. El asunto, o la acusación, llegó al Parlamento, me dijo Margaret Scammell, especialista en medios de comunicación de la London School of Economics and Political Science. Primó, finalmente, el interés nacional.

¿Hasta qué punto el interés nacional puede primar sobre la libertad de prensa? La inquietud, traducida en discusión, condimentó un seminario organizado por el Foreign Office, en Londres, del cual partici-

paramos periodistas de Malasia, Letonia, Etiopía, Paquistán, Túnez, Marruecos, India, Rusia, Kirgistán, Turquía y un servidor. Con un eje: el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Y con una prerrogativa: las limitaciones frecuentes de la televisión británica, a diferencia de la prensa escrita, de ir a contramano del Gobierno. En circunstancias dramáticas, sobre todo. Como una guerra. O una campaña contra algo tan nefasto como el terrorismo internacional.

Era la pelea de siempre: el periodismo no reconocía límites y, a su vez, el Gobierno pretendía imponerlos. Todo pasaba por el control de la agenda, según el parlamentario laborista Shaun Woodward Esq: “La prensa puede publicar aquello que cree conveniente, pero, en algunos casos, no evita la tendencia hacia el sensacionalismo y la trivialización de la información –nos dijo–. Es el precio de la libertad de expresión”.

¿Tenía precio o valor? Tenía más valor que precio. Pero el precio, en caso de que alguien resultara agraviado, no bajaba del millón de libras (poco más de un millón y medio de dólares) sólo para iniciar una querrela. Por más que existiera en Gran Bretaña un organismo independiente, la Press Complaints Commission, financiado por los medios impresos, que procuraba resolver disputas entre injuriados o calumniados y editores de diarios y de revistas.

En ese momento, con la herida abierta por los atentados contra las Torres Gemelas, el 75 por ciento de la opinión pública británica apoyaba los bombardeos contra Afganistán y, según David Walter, director de comunicaciones del Partido Liberal Demócrata, la proporción era aún mayor entre los parlamentarios. La BBC enfrentaba, como en 1982, su gran dilema: pertenecer al Gobierno y, al mismo tiempo, ser independiente mientras exportaba una imagen. Con la diferencia, en el caso de CNN, de no ser un canal comercial.

El interés nacional contrasta generalmente con el interés político. Y ahí radica el conflicto, según Julia Langdon, la primera mujer nombrada editora de política en un diario nacional, el Daily Mirror, y la primera acreditada como corresponsal en el lobby de Westminster (Parlamento): “El Gobierno está más pendiente de lo que dice el Sun (el diario de mayor

circulación, propiedad de Rupert Murdoch) que de lo que dice el Financial Times (de orientación económica)”, nos dijo.

En las elecciones, como en la guerra, el quid, o el desafío, es el equilibrio, de modo de recuperar los lectores y los televidentes perdidos. O cedidos en préstamo, sin opción, a Internet. En un mundo distinto desde el 11 de septiembre de 2001. Dominado por la guerra entre el bien y el mal, versión George W. Bush. En blanco y negro, cual tablero de ajedrez. Mundo en el cual, paradójicamente, el mayor respeto a los derechos humanos, versión Kosovo, no transaba con grises si de terroristas se trataba. Pero, al mismo tiempo, no dejaba espacio para la disidencia, sino para la adhesión: criticar los actos terroristas en los Estados Unidos y las víctimas civiles en Afganistán a la vez no era políticamente correcto. Ni aquí, ni allá, ni, elemental, Watson, en el más allá.

Algo había cambiado, empero. A mediados de los noventa, Jimmy Carter narraba en el recuento de un viaje por Chile, Brasil, la Argentina y Jamaica: “Raúl Alfonsín dijo en varias ocasiones que le salvamos la vida y Menem, en prisión en 1980, escribió que sus carceleros saltaron de alegría cuando Reagan fue elegido”. Fiel a su costumbre, el presidente norteamericano entre 1976 y 1980, comprometido con la defensa de los derechos humanos en desmedro de las dictaduras militares, había redactado en su computadora portátil su visión de esos países una vez que terminó la gira, de modo de contribuir al derrotero por la región que iba a emprender Clinton, el primero tan al Sur en sus ocho años de gobierno.

Mientras era presidente, Carter había cruzado lanzas con Pinochet. En una carta fechada el 31 de octubre de 1977, le decía que debía tomar recaudos para promover los derechos humanos y restablecer la democracia. En su respuesta, fechada el 9 de noviembre, Pinochet esgrimía que un grupo de trabajo ad-hoc, designado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estaba metiendo sus narices en donde no correspondía, violando “en términos casi absolutos el principio de no intervención en asuntos internos de un país soberano mediante el abuso del ejercicio de la jurisdicción que, en materia de investigaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, compete a las Naciones Unidas”.

En 1998, Clinton iba a realizar una visita oficial de dos días a Chile previa a la II Cumbre de las Américas, en Santiago. Con un pie en el Air Force One, el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Jeffrey Davidow, luego embajador en México, nos dijo a un grupo de periodistas latinoamericanos: “La prensa es una institución fundamental para la libertad”.

No era una frase antojadiza. Ni de circunstancia. La CIDH había acordado la creación del cargo de relator especial para la libertad de expresión de las Américas, de modo de monitorearla y, cuando cuadrara, de ejercer presión sobre aquellos gobiernos que incumplían con esa premisa. El proyecto, barajado por Clinton desde su visita del año anterior a Buenos Aires, tenía su aval. Lo iba a ejercer, por primera vez, Canton, abogado argentino, entonces director de Información Pública de la OEA.

“Imagínense ir a trabajar todos los días sabiendo que un buen desempeño podría costarles la vida –decía un artículo de The New York Times–. Cambian a sus hijos de colegio, contratan un guardaespaldas y, mientras conducen el auto, van con un ojo en el espejo retrovisor. Esto suena a película de James Bond, pero es una realidad para muchos periodistas de América latina y el Caribe, en donde son, a veces, independientes y soldados en la línea de fuego de una doble batalla: la lucha contra la droga y la corrupción, y la intensificación de la democracia.”

Si un periodista resulta dañado, no sólo él sufre las consecuencias: “Si es asesinado o intimidado, la democracia resulta herida –me dijo Thomas McLarty, enviado especial de la Casa Blanca para América latina en el gobierno de Clinton–. La libertad de prensa es el derecho de los ciudadanos tanto a tener información como a imprimirla, y son ellos, los ciudadanos, los que sufren cuando se reprime la expresión”.

A la prensa, según Clinton, América latina debía, y debe, su democracia. McLarty me contó una anécdota: “De una investigación surgió que un congresista tenía 50 millones de dólares en su cuenta bancaria. Cuando se le preguntó de dónde provenían, el caballero respondió, incómodo, que había ganado 24.000 veces la lotería”.

¿Qué dejó la dictadura de Pinochet? “Se aprendió un lenguaje distinto –dijo Robles–. A llamar las cosas de tal manera, diciendo lo que

había que decir, para que el censor no tuviera argumentos. Chile entendió ese lenguaje. Esa forma de hacer periodismo, en la cual nunca dejé de formular las preguntas que debía hacer o de investigar lo que había que buscar. Me marcó definitivamente.” La marcó “para siempre”.

El hallazgo posterior de cuentas bancarias secretas de Pinochet en los Estados Unidos, abiertas y engrosadas durante sus 17 años en La Moneda, demostró que la corrupción no repara en gobiernos militares o civiles, sino en las tentaciones de los hombres. Hasta de aquellos que en algún momento se creyeron imprescindibles.

8. MONTESINOS Y YABRANES

POCOS zorros, como los hombres, tienden una trampa, ponen la carnada y meten la pata. De perfil, Vladimiro Montesinos mueve las manos, inquieto en un sillón. E inquiera: “¿Cuánto, cuánto? Acá hay 10, usted dígame”. De frente, el congresista opositor Alberto Kouri, lejos de decir “me”, sube la apuesta desde otro sillón: “Hablemos de 15, 20...”, vacila. Y obtiene como respuesta: “Bueno, 15. Diez más cinco, 15”. De frente y de perfil, el precio de tránsito en pie rondaba los 15.000 dólares en el Perú de Alberto Fujimori.

Kouri, uno de ellos, guarda el dinero en el bolsillo interior del saco y firma su adhesión al oficialismo, Perú 2000, fechada el 5 de abril de 2000. No ha contado los billetes. Confiado en los cálculos del jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El anfitrión. Dueño y señor de la oficina espaciosa, en Lima, desde la cual ha movido en los últimos 10 años los hilos del país. De Fujimori, en particular.

El ojo, y la mano suelta, de Montesinos engordaba el ganado, asegurándose la mayoría de número en el Congreso, mientras sus operaciones eran registradas por una cámara disimulada detrás de una pared falsa. Un seguro contra todo riesgo que, en ocasión del soborno de Kouri, terminó convirtiéndose en un boomerang.

El video cayó en manos del congresista opositor Fernando Olivera y de Susana Higuchi, la primera dama de la República hasta que se separó de Fujimori y, como consecuencia de ello, no pudo ingresar más en la Casa de Pizarro (sede del Gobierno). Como Zulema Yoma después de haber sido expulsada por Carlos Menem de la residencia presidencial de Olivos, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes del escándalo, o de la vergüenza, impactaron el 14 de septiembre de 2000 en miles de televidentes peruanos y del exterior que no podían dar crédito a sus ojos. Y desencadenaron la crisis del gobierno de Fujimori, pero, a la vez, desnudaron las facultades del asesor

presidencial en cuestiones de inteligencia. Un cargo de segunda línea. Una fachada. Con la cual manejaba algo más que las fuerzas militares y policiales del SIN: un tercio de los generales de división y de los brigadieres se había graduado con él, en 1966, en la Escuela de Oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos.

Era el poder virtual detrás del poder real. O viceversa. Al desnudo, ahora, por otro poder real. O, acaso, por el más realista de todos los poderes: los medios de comunicación. En una encrucijada, como en los años de plomo, que iba a derivar en el mayor desafío de la historia: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, de Nueva York, y el Pentágono. Expuestos en todo el mundo a la lucha del bien contra el mal planteada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush: “Los que no están con nosotros están contra nosotros”. Traducido: periodismo, o autocensura, versus patriotismo.

El imperio del mal, versión Ronald Reagan de la Unión Soviética, venía a ser desplazado por el eje del mal, versión Bush de Irak, Irán y Corea del Norte. El comunismo, plasmado en la amenaza de un totalitarismo capaz de someter pueblos enteros, venía ser desplazado por el terrorismo, plasmado en la amenaza de repetición de golpes fantasmales. De fanáticos que mataban muriendo. Pasma tras pasmo. Espanto tras espanto. En una era diferente, signada por la globalización y, cual herramienta, por la influencia decisiva de los medios de comunicación.

Jaqueados, como correlato de los atentados, por un pedido de la consejera de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, secretaria de Estado en el segundo período de Bush, y del vocero de la Casa Blanca, Ari Fleisher, de omitir imágenes de Osama bin Laden en las cadenas de televisión ante la posibilidad de que transmitiera mensajes encubiertos desde su cueva, o su refugio, en una geografía árida de aparente tonalidad afgana. Pedido aceptado por la mayoría, así como, después, durante la guerra contra Irak, en 2003, la veda del video del canal qatari Al-Jazeera con los cuerpos despanzurrados de siete soldados norteamericanos y los rostros demudados de otros cinco, prisioneros.

Jaqueados, también, por requisas de investigadores federales norteamericanos en sitios de acceso a Internet, como Hotmail, America

Online, Earthlink y otros, con tal de examinar las casillas de correo electrónico que tuvieran la palabra Alá (Dios, en árabe). Actitud que iba a violar la privacidad y, sobre todo, con las libertades individuales y colectivas, más allá de la emergencia de la hora.

El rigor patriótico, en desmedro de la libertad informativa, se acentuó con el discurso de Bush frente a ambas cámaras del Congreso, el 20 de septiembre. Blanqueó la propaganda oficial, realzando el heroísmo sobre la tragedia. Consignas de tono bélico comenzaron a copar las pantallas. Consignas como: “En guerra contra el terror”, de CNN, y “América contraataca”, de CBS. Consignas que no diferían de los arrebatos nacionalistas que habían marcado los tiempos más duros de América latina. Sin democracia: “Los argentinos somos derechos y humanos”, decían los volantes y las calcomanías que eran arrojados desde los balcones del centro de la ciudad de Buenos Aires en coincidencia con una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1979, por denuncias de secuestros, torturas, crímenes y restricciones varias.

En los Estados Unidos, sin embargo, los perros guardianes de la democracia, endiosados en todo el mundo por haber destapado ollas insospechadas con investigaciones que hicieron escuela, promovían el periodismo corporativo. En bloque. En aras de exaltar el patriotismo. Con margen escaso para opiniones políticamente incorrectas. Al acecho de la intolerancia, o de la censura previa, parecida a los afanes del autoritarismo latinoamericano en las décadas anteriores.

La información era, y ha sido, la desinformación. O el silencio en el cual caía una persona que desaparecía. De la mañana a la noche, o de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Degradada la palabra en el NN de una tumba. En los brotes de orgullo nacional en contraste con la persecución y el exilio de aquellos que manejaban, precisamente, la palabra. Pintados, o descriptos, como un peligro, cual vacilo letal. Sobre todo, en los documentos que surgían de cónclaves de inteligencia secretos y de cables diplomáticos también secretos. Y que, restauradas las instituciones en casi toda la región, no han dejado de ser blanco de agresiones: “¿Cuál es la relación entre la impunidad y el funcionamiento de una prensa libre en una sociedad democrática; por qué no se investigan y se

llevan a juicio tan pocos delitos contra periodistas; por qué son asesinados más periodistas que abogados, ingenieros, médicos, militares o políticos actualmente en el poder; por qué después de que un periodista es asesinado aparecen rumores desprestigiando su vida personal; por qué la reacción después del asesinato es condenar a las víctimas mientras los responsables siguen en libertad; cuál es el papel de las instituciones legislativas, policiales y judiciales; y qué correlación hay entre la impunidad y el narcotráfico, la insurgencia, la corrupción, y los gobiernos autoritarios?”, se preguntó Ricardo Trotti, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Basado sobre la evidencia, y la estridencia, de las estadísticas: entre 1992 y 2001 habían sido asesinados 389 periodistas en todo el mundo, según el Committe to Protect Journalists (CPJ). De ellos, 298 cayeron en el ejercicio de su profesión. Es decir, 7,7 de cada 10. En apenas 20 casos habían sido detenidos y juzgados los autores intelectuales de los crímenes. En los otros, muertos como moscas, campeaba la impunidad.

Salvoconducto de monjes negros de la democracia. Como Montesinos en Perú, presunta víctima de un video indiscreto. Como el empresario Alfredo Yabrán en la Argentina de Carlos Menem, presunta víctima de una foto indiscreta. Presuntas víctimas de trampas tendidas por ellos mismos, en realidad.

Suicidio en defensa propia

Horas después del presunto suicidio de Yabrán, un funcionario del Departamento de Estado me dijo en Washington, DC: “Todos saben que se mató, pero nadie sabe quién lo hizo”. Pensaba en voz alta, procurando ordenar con elementos escasos las piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. La trama siniestra que comenzó en febrero de 1996 con el rostro del hombre más influyente de la Argentina, y menos conocido del mundo, sorprendido por primera vez en público en la portada de la revista Noticias, de la ciudad de Buenos Aires, y que derivó, el 25 de

enero del año siguiente, en el brutal crimen del autor de la foto, José Luis Cabezas.

Tres veranos después del asesinato a sangre fría, cometido en las mismas arenas en las que había sido retratado de improviso mientras caminaba a orillas del mar con su mujer, María Cristina Pérez, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, provincia de Buenos Aires, tildó a Yabrán de investigador principal, y dictó sentencias de reclusión y de prisión perpetuas contra ocho hombres vinculados con su seguridad personal.

Yabrán nunca se enteró: se habría dado un tiro en la boca, cual harakiri por otros medios, el 20 de mayo de 1998. Estaba solo, después de 15 días en la clandestinidad, en el casco de la estancia San Ignacio, a unos 70 kilómetros de Larroque, provincia de Entre Ríos, en donde había nacido en 1944. Tan increíble había sido el desenlace que el imaginario popular insistía en situarlo en una playa parecida a Pinamar, provincia de Buenos Aires, escenario de la foto y de la muerte de Cabezas, con otro rostro, otro nombre, otra vida.

Entre los argentinos, descreídos, desconfiados y abrumados desde la cuna por la ineficacia de la Justicia, primaba la sensación de que el caso Cabezas, en el que cayeron en un principio los autores primarios (intelectuales y materiales) del crimen, iba a desentrañar las redes de corrupción que, presumían, habían poblado la década en el poder de Menem. Ni imaginaban que, desde el 7 de junio de 2001, iba a ser el primer ex presidente constitucional detenido. Sin mella para la democracia. Imputado por asociación ilícita y por falsedad ideológica en la venta de armas a Croacia, entre 1991 y 1993, a pesar del embargo internacional que regía entonces, y a Ecuador, en 1995, a pesar del conflicto de ese país con Perú por la Cordillera del Cóndor y del papel de garante de la paz que debía ejercer la Argentina como signataria del Protocolo de Río de Janeiro, de 1942. En 166 días, el 20 de noviembre, quedó en libertad.

Harina de otro costal. Cabezas, ultimado con una saña propia de tiempos aparentemente idos, era la segunda víctima, entre los hombres de prensa, desde la restauración de la democracia en la Argentina, el 10 de diciembre de 1983. Víctimas de un modus operandi asociado con las señales de la mafia: el cadáver de Mario Bonino, empleado de la Secreta-

ría de Prensa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), había aparecido el 15 de noviembre de 1993 en las aguas turbias del Riachuelo después de cuatro días de incógnita sobre su paradero.

En el momento de su desaparición, Bonino, de 37 años, participaba de un seminario titulado “La radio de fin de siglo” en el auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la ciudad de Buenos Aires, después de haber distribuido un comunicado de repudio por amenazas de muerte contra periodistas de la provincia de San Luis. En el ínterin pasó por su casa, tomó un baño y jugó un rato con su hijo Federico, de ocho años. Le prometió que, al volver, iba a llevarle sus figuritas favoritas de fútbol (era simpatizante de River Plate, como él). Le prometió por teléfono a Felicia, su mujer, que, al volver, iban a compartir un helado. No volvió. Ni hubo indicios de él en los tres días siguientes.

En la víspera de que su cuerpo fuera hallado en las aguas, frente al Servicio de Hidrografía Naval, en el barrio porteño de La Boca, Menem, y su antecesor, Raúl Alfonsín, sellaban el llamado Pacto de Olivos, trampolín de la reforma constitucional de 1994 y, como consecuencia de ella, de la reelección, al año siguiente, del peronista que batió el récord de permanencia en el poder de Perón, su líder. A su vez, tres sujetos forzaban la puerta de una de las sedes de la Utpba, golpeando con una barra de hierro la cabeza del sereno, Miguel Gavilán, con la intención de destruir los muebles y las computadoras.

Bonino había comenzado su carrera en la sección Deportes del diario La Razón, de la ciudad de Buenos Aires. Trabajó después en el diario Sur y en el Diario Popular. Iba a ser, curiosamente, el primer eslabón perdido entre varios ataques despiadados contra periodistas. Entre ellos, Marcelo Bonelli, del diario Clarín y de Radio Mitre, y Hernán López Echagüe, del diario Página 12, golpeados con dureza. Prólogos, acaso, del espantoso crimen de Cabezas. Y recordatorios, también, de una crueldad sin membrete, sello ni firma: la Operación Cóndor.

Crueldad corregida, y adaptada según las circunstancias, en los países miembros. La Argentina, entre ellos, según documentos hallados en los Archivos del Terror. La pieza suelta que dejó Alfredo Stroessner, dictador vitalicio de Paraguay. Y que, con otros desclasificados por el

Departamento de Estado, rubricaban, o redondeaban, un estilo. La trama siniestra de persecución y de represión por la cual pagaron 84 periodistas, según el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, *Nunca Más*. En el capítulo dedicado a ellos reproduce el comunicado número 19 de la Junta de Comandantes en Jefe. Fechado el mismo día del golpe de Estado: el 24 de marzo de 1976. Una amenaza, más que una advertencia, por la que iba a ser reprimido con reclusión de hasta 10 años aquel que, por cualquier medio, difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales.

Había terminado la dictadura. ¿Había empezado la inquisición?

Las dos pericias que ordenó el juez Raúl Irigoyen revelaron que Bonino había muerto en circunstancias dudosas. En ello coincidieron los peritos oficiales y el perito de parte, Mariano Castex. Es decir, no había perecido por asfixia ni por haber ingerido sustancias tóxicas. Estaba haciendo dieta y dejando de fumar, según sus familiares, lo cual sustentaba la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio en una situación límite. O de máxima tensión. Entre otras hipótesis, descartado el suicidio, pudo haber sido secuestrado y, tal vez, no resistió la presión. En la jerga argentina, un vil apriete.

La Utpba había lanzado una campaña de la cual, como militante sindical, Bonino participaba en forma activa: “La peor opinión es el silencio”. En ese momento, el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf, luego vicepresidente de la República, luego gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego canciller, llegó a vincular el crimen con sectores fascistas enquistados en los estamentos del poder y en la sociedad argentina. Menem suscribió sus palabras, hablando, incluso, de grupos mafiosos, pero la Utpba criticó las investigaciones del fiscal especial designado por él, Luis González Warcalde, por haber considerado que se trató de un suicidio y por haber averiguado más sobre la víctima que sobre los eventuales responsables.

Entre 1989 y 1998, la Utpba recibió 1008 denuncias de atentados contra periodistas. Las muertes de Bonino y de Cabezas coronaron una

trilogía funesta con el asesinato de Ricardo Gangeme, propietario y director del semanario El Informador Chubutense, de la ciudad patagónica de Trelew, el 13 de mayo de 1999. Lo mataron de un balazo en la puerta de su casa. Los tres acusados, Gustavo Fabián Smith, Osvaldo Daniel Viti y Alejandro Zabala, quedaron en libertad, por decisión unánime de la Cámara I del Crimen de Trelew, el 12 de septiembre de 2002.

La delgada línea roja

Pregunta: ¿cómo se hace para saber si un espía es argentino?

Respuesta: lleva un cartel que dice que es el mejor espía del mundo.

¿Humor negro? Idéntica pregunta e idéntica respuesta podrían caberle a un fotógrafo de cualquier nacionalidad: una cámara revela su profesión. Una cámara, y un chaleco sin mangas lleno de rollos de películas, y un bolso con accesorios, y un trípode, y demás...

Es, desde ese momento, tan poderoso como vulnerable. O, acaso, la cámara en sí misma sea tan poderosa como vulnerable por la posibilidad única, e inaudita, de contar una historia, o de cantar una verdad, con un certero movimiento de índice. Siempre y cuando el fotógrafo, por obra y gracia del olfato o de la casualidad, esté en el momento oportuno en el lugar preciso. Clave de toda primicia.

Quizás haya sido el caso de Cabezas, asesinado por haber obtenido las primeras fotos de Yabrán, habitualmente esquivo para la prensa. Su cámara, tan poderosa como vulnerable, apareció incinerada, como su cadáver. Y quizás haya sido el caso, también, de Martín Filpo, rehén de una banda de delincuentes que tomó, el 14 de junio de 2000, una estación de servicio de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Lo liberó, después del disparo de un francotirador que anunciaba que su captor se había quedado sin balas, un policía disfrazado de fotógrafo.

El policía, cual espía argentino, cambió su cartel por uno de fotógrafo. Se valió de otro para cumplir con su labor. ¿Qué habría pasado si el captor, con el revólver clavado en el cuello de Filpo, hubiera tenido

una bala en la recámara? Esas que carga el diablo. Nos habríamos replanteado límites y competencias. De la prensa y de la policía, respectivamente. O, toco madera, habríamos lamentado otra muerte absurda en un continente en el cual la SIP llevaba contados, y registrados, 258 crímenes de periodistas entre octubre de 1988 y junio de 2002, según estadísticas de agosto de ese año.

Sólo en los primeros ocho meses de 2001 eran 13. Casi el doble que en todo 2000. Siete en total, según el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, ex relator especial para la libertad de expresión de las Américas, en cuyos registros figuraban 170 casos de posibles violaciones de ese derecho y 60 querellas contra periodistas o contra medios de comunicación. La SIP, alerta frente a la escalada de la violencia, creó en enero de 2000 la Unidad de Respuesta Rápida, dirigida por Trotti, de modo de investigar in situ los asesinatos de periodistas y de evitar la impunidad.

Filpo, fotógrafo del periódico El Civismo, de Luján, provincia de Buenos Aires, pudo ser uno más. Salió ileso después de haber aceptado llevarles a los delincuentes dos chalecos antibalas en compañía de un cronista de radio. Quedó como rehén, o garantía, a cambio de un conductor de camión que sufría una descompensación cardíaca. Y, de milagro, no perdió la vida.

La realidad, mientras tanto, transcurría en vivo y en directo por la televisión: los fotógrafos y los camarógrafos, agazapados detrás de los surtidores de combustible (un peligro por la posibilidad de que una bala perdida provocara una explosión), estaban a apenas tres metros de los delincuentes; los policías, dispersos, buscaban la forma de reducirlos.

No tuvo mejor idea uno de ellos que usar una cámara como camuflaje. Un despropósito. De cabo a rabo, por más que los fotógrafos, por vocación, quieran gatillar hasta en las amígdalas ajenas. Perdidos estamos, sin embargo, si los policías no velan por la seguridad de los hombres de prensa en lugar de utilizarlos. Y si entre ellos no hay límites. Víctimas, tal vez, de la sed de primicias que lleva a periodistas de radio y de televisión a hablar por teléfonos celulares con delincuentes en situaciones límites, como un secuestro, obrando de mediadores en algunos casos.

“Unas veces, los periodistas han sido calificados como fiscales; otras, como jueces, y siempre en medio de un equívoco sobre la razón de ser de nuestro oficio —dijo el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), José Claudio Escribano, subdirector del diario La Nación, de Buenos Aires, y presidente de la Academia Nacional de Periodismo—. Los periodistas no están para encarnar ninguna de aquellas funciones, sino simplemente para exponer e investigar y comentar hechos que llegan a su conocimiento.”

Eran los papeles alterados de sociedades que desconfiaban de sus instituciones: los delincuentes ya no pedían la presencia de un juez o de un abogado, sino de la prensa. Buscaban su espacio en un mundo mediático que requería presencia mediática. Presionaban de ese modo a las autoridades frente al peligro de una represalia que, sin testigos, podía pasar inadvertida. Un seguro de vida para ellos. Compartido, cual código, por la gente: si tenía problemas con los servicios públicos, por ejemplo, llamaba primero a los medios de comunicación, o amenazaba con hacerlo, y después, si no resultaba, recurría a quien correspondía. Actitud frecuente en el gobierno de Menem.

¿Menem creó las circunstancias o las circunstancias crearon a Menem? Del apellido palíndromo, capicúa en porteño básico, surgió el menemismo. Pero el menemismo no ha sido sólo una corriente interna del Partido Justicialista (PJ) divorciada del legado estatista y nacionalista de Perón, sino, también, una expresión cultural de la sociedad argentina. O de su sector más influyente, anclado en los barrios caros de la ciudad de Buenos Aires. La misma gente que había vivido en 1955 el derrocamiento del tirano prófugo, según el léxico de la Revolución Libertadora, coincidía cuatro décadas después con los estratos bajos en algo más que en el furor por los cantantes populares en las fiestas que organizaban en hoteles de lujo.

La brecha entre ricos y pobres ha ido profundizándose con los rigores del ajuste de la economía, como sucedió en otros países de América latina, pero, paradójicamente, unos y otros tuvieron llamativos puntos de contacto en la Argentina. Los principales detractores de Perón daban con el hombre, más que el nombre, en el cual iban a ver reflejada su

irreverente exaltación de frivolidad y de extravagancia. Que existía a priori. Sin identidad. Ni autoría intelectual. Sin Menem y su debilidad por el jet-set. En forma anónima. Casi espontánea. Expresada en programas de televisión exitosos, bendecidos por el rating, y en revistas de circulación masiva que hacían de la superficialidad un culto. Vacíos de contenido. Devotos del dinero fácil. Pura cáscara. Como los cuerpos raquíticos de las modelos de pasarelas.

Envidia de un sector más o menos pudiente, la clase media, propenso al consumo. Capaz de romper con las frustraciones de los inmigrantes europeos que, desde principios del siglo XX, sólo anhelaban amasar fortunas (“Hacer l’ America”, decían) y volver a casa. No volvieron. Echaron raíces. E inculcaron a sus hijos el desdén contra todo aquello que fuera argentino. En especial, las instituciones y las leyes. Como si también estuvieran de paso en un país cuyos nativos, si los hay, tienen apellidos ilustres. De calles y de avenidas.

“Dicen que De la Rúa es aburrido –observó el escritor mexicano Carlos Fuentes poco antes de la transición de fines de 1999–. Pero al lado de Carlos Menem hasta Cantinflas parecería aburrido. De patilludo caudillo riojano envuelto en poncho (imagen Facundo) a símbolo sexual desplegado en bikini (imagen Playboy), a restirado modelito maduro (imagen Armani), las metamorfosis de Menem el galán no oscurecen los méritos de Menem el estadista.”

El estadista superó a su líder: estuvo en el Gobierno más tiempo que Perón. Pero, a diferencia de él, no entró por la fuerza, antes de ser legitimado en las elecciones de 1946, ni salió por la fuerza, expulsado por un golpe de Estado en 1955. Eran otros tiempos. Con un país hartado, ahora, de violencia. Más afecto a la insoportable levedad del ser, plasmada en los talk-shows de la televisión, que a los nefastos comunicados numerados de la dictadura militar. Cercado entre la obsecuencia del círculo presidencial y el dudoso arte de mofarse del prójimo con cámaras ocultas y bromas de baja estofa.

“En todo caso, entre gobierno y sociedad existió un influjo recíproco cuyo signo más patético fue, probablemente, la audaz pirueta de Moisés Ikonicoff, el hombre que saltó de los despachos oficiales al tin-

glado de la revista teatral”, señaló Bartolomé de Vedia, editorialista del diario La Nación.

Decían los griegos que los políticos deben tener las manos limpias, pero, también, los ojos limpios. Ver más allá. Vislumbrar que de la monotonía a la indiferencia puede haber poco trecho. El tedio llegó pronto a una región desacostumbrada de otra cosa que no fueran discursos militares. En la mayoría de los casos, el principio rector ha sido la crítica a la política neoliberal durante la campaña electoral y, una vez en el Gobierno, la profundización de la agenda neoliberal. Que, en general, se ha visto atesorado por tres oleadas:

- La primera, dubitativa, en los ochenta, después de la transición de las dictaduras, con Raúl Alfonsín en la Argentina, Julio María Sanguinetti en Uruguay, José Sarney en Brasil, Miguel de la Madrid en México, y Fernando Belaúnde y Alan García en Perú.
- La segunda, a fines de esa década, con un bisturí más filoso en el ajuste y en el libre comercio que ha dejado como saldo países modernizados, no modernos, y la deuda de la prosperidad prometida por Menem en la Argentina, por Fujimori en Perú, por Luis Lacalle en Uruguay, por Fernando Collor en Brasil, por Carlos Salinas de Gortari en México, por Carlos Andrés Pérez en Venezuela y por Jaime Paz Zamora en Bolivia. En sus campañas atacaron los efectos negativos de las políticas neoliberales (pobreza, estancamiento, fuga de capitales), de modo de tomar distancia de sus antecesores. Distancia que luego acortaron. Hubo más neoliberalismo en un acuerdo tácito con sindicatos en franca decadencia y con congresistas sin poder real (caso patético: el autogolpe de Fujimori en 1992).
- La tercera, caracterizada por transiciones traumáticas en las que campea la herencia de corrupción, profundiza las políticas neoliberales al extremo de la desazón. Signada por una creciente demanda social en un mundo que reniega de la globalización, pero que, al mismo tiempo, no puede ni quiere salir de ella. Nos han privatizado hasta la emoción.

Un poco de insatisfacción

Más de 10 años después, la duda seguía siendo la misma: what's left? Y la respuesta era tan dispar como el tamaño de los escombros que deparó el 9 de noviembre de 1989 el derrumbe del Muro de Berlín. Era una pregunta con trampa. Con doble significado y doble intención: ¿qué queda?, por un lado; ¿qué es izquierda?, por el otro.

Más de diez años después, doble seguía siendo la visión de los polos de poder. El mundo, obstinado, insistía en encasillar políticos, y gobiernos, en derechas e izquierdas. Degradadas, en general, en centros sometidos a dieta. Centros light. En los cuales, como fieles intérpretes, se habían enrolado los medios de comunicación, transmitiendo, en algunos casos, la visión mesurada de una realidad desmesurada. Desmesurada del todo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Semilla de una confrontación en cierne entre el periodismo y los valores.

Toda crisis, traducida en insatisfacción por falta de justicia social o de expectativas a secas, influye en forma dramática en el estado de ánimo de la gente, golpeada por problemas económicos recurrentes. Y repercute de inmediato en el valor que asigna a su sistema de gobierno. De vida, en definitiva. La democracia. De la encuesta Latinobarómetro 2001, patrocinada desde 1995 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en áreas urbanas de 17 países, surgía una realidad: la mayoría de la gente velaba más por el bolsillo que por la democracia. Era una realidad y, a la vez, un déficit. Que, con el pequeño Fujimori que todos llevábamos dentro, reflejaba confianza escasa, o cero, en un repunte. O en un milagro. Seis de cada 10 personas pensaban que la situación económica era mala. Siete de cada 10 estaban convencidas de que su suerte dependía de rachas, no de nuevas políticas. Y ocho de cada 10 consideraban injusta la distribución del ingreso. Puntos cruciales en los que reparaba el BID: “¿Cómo es posible que la insatisfacción sea tan alta a pesar del crecimiento, por modesto que haya sido, y del aumento del gasto social que se ha observado en la última década?”.

Traducido: what's left?

Las variables varían y las constantes no existen. Los pobres, a los ojos del BID, cobraban dos dólares por día. O menos. Ningún país podía jactarse de una declinación de ese índice. Entre los más afectados estaban El Salvador, la Argentina, Nicaragua y Bolivia. Señal de que la deuda interna, o de contención social, había ahondado las diferencias.

Algo no funcionaba, entonces. Un médico por ahí, por favor. Un psicólogo, mejor. Un psiquiatra. Un periodista, en definitiva. La modernización, el desarrollo económico, la urbanización y la globalización habían originado una virtual disminución de las señas particulares: “En la actualidad, las personas se identifican con quienes más se les parecen, con aquellos que hablan su mismo idioma, que comparten su religión, sus tradiciones o su historia”, postulaba Samuel Huntington, autor de *The Clash of Civilizations (El Choque de Civilizaciones)* y de *The Remaking of the World Order (La Reconstrucción del Orden Mundial)*.

Era algo así como una renovación de los nacionalismos, no necesariamente reflejada en los medios de comunicación. Los campesinos paraguayos, por ejemplo, se sentían más cerca del general Lino Oviedo, capaz de hablar guaraní fluido y de compartir una empanada en el desayuno, que del presidente Luis González Macchi, poco carismático y encerrado en sus asuntos. Por más que uno adeudara 10 años de prisión por un conato de golpe de Estado contra el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, en abril de 1996, y fuera sospechoso del crimen del vicepresidente Luis María Argaña y de la muerte de siete jóvenes que reclamaban por la democracia en Asunción, en marzo de 1999, y que el otro hubiera ocupado el cargo como correlato del magnicidio y, a raíz de él, del exilio en Brasil del ex presidente Raúl Cubas Grau.

Casi 220 millones de personas vivían en la pobreza en el continente, según la Comisión Económica para América latina (Cepal). Era un 36 por ciento de la población. Carne de cañón de experimentos populistas, fueran las empanadas de Oviedo en Paraguay, la arepa de Hugo Chávez en Venezuela, la seguridad de guerrilleros y de paramilitares en Colombia o la mano dura de la cual se habían valido Fujimori y Montesinos

en Perú. Una ensalada de izquierdas y de derechas revueltas, de amores y desamores diluidos como el vino tinto derramado en el mantel, en la cual la mirada atlántica parecía confundirse con el natural pacífico, como en los versos de Mario Benedetti.

Parecía que todo estaba en orden, sin embargo. En calma virtual. Hasta que saltó una chispa. Justo en las vísperas. En Seattle, Estado de Washington. Y la Ronda del Milenio, cual coronación del norte democrático y capitalista hacia el que pretendía enlazar el mundo después de la muerte del fascismo y del ocaso del comunismo, descarriló en la primera curva de 2000. Poco antes, en noviembre de 1999. A merced de asignaturas no contempladas en el presupuesto, como los derechos humanos y el medio ambiente en los países de menores recursos.

La chispa provocó una reacción en cadena en la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), máxima expresión del capitalismo. En una ciudad bajo toque de queda se intentó debatir una mayor apertura de los mercados. Insólito. Fue el correlato de un siglo en el cual el hombre puso por primera vez un pie en la Luna, pero no pudo afirmarse en la Tierra. O, desorientado como un zorro en un gallinero, no encontró un cable a tierra a pesar de los campos de concentración, de Hiroshima, de Nagasaki, del apartheid, de la Operación Cóndor, de las limpiezas étnicas y de los demás horrores que supo concebir.

No nos poníamos de acuerdo. Insistíamos en la discusión entre países capitalistas y países comunistas (China, Cuba y Corea del Norte) mientras el eje, según Alvin Toffler, pasaba por países rápidos (los desarrollados) y países lentos (los subdesarrollados). No reparábamos, en la transición, en el corte transversal que se produjo entre países ricos y países pobres. Fiel reflejo de ello era el slogan de American Express: "Pertener tiene sus privilegios". No pertenecer, en esas circunstancias, significaba perder el tren. O viajar sin boleto en un mundo que, rotulado por Internet como la consumación de la aldea global de Marshall McLuhan, avanzaba a dos velocidades. Y mezclaba, en las ferias populares de los países de la desorbitada órbita soviética, desde las matrioshkas con las caras regordetas de Bill Clinton, de Boris Yeltsin o de los Harlem Globetrotters hasta las alfombras

carísimas de Asia Central, los electrodomésticos hechos en Corea del Sur, las medallas con el martillo y la hoz, y los amuletos con los gestos adustos de Lenin y del Che Guevara.

El cambio no tuvo una fecha precisa. Pudo ser en 1989. No con las relaciones estrechas, o carnales, de la Argentina con los Estados Unidos después de casi un siglo de desconfianzas mutuas, sino con la caída del Muro de Berlín, el comienzo del fin de la Unión Soviética y el acta de defunción de la Guerra Fría. Pudo ser antes. Quizá desde el momento en que los gobiernos empezaron a desentenderse del Estado de Bienestar, los llamados progresistas (socialistas europeos y demócratas norteamericanos) se amigaron con el capitalismo y los controles estatales alzaron las barreras a las multinacionales.

Hasta la Marcha Peronista, símbolo de la cultura demagógica y estatista de mediados del siglo XX en América latina, dejó de combatir el capital. Y el año 2000, a pesar de los vanos presagios de Perón, no nos encontró unidos o dominados, sino desunidos y globalizados en un mundo de vertiginosas fusiones y transfusiones de compañías que tenían, en algunos casos, más voz y voto que los mismísimos gobiernos. Tan desunidos nos encontró que ya era más fácil intimar por computadora con una muchacha bonita de Colonia Narvarte, ciudad de México, o de Auckland, Nueva Zelanda, que cara a cara con la vecina de al lado; hasta los negocios que atendían las 24 horas atentaban contra la mera excusa del pedido interesado de una taza de azúcar.

Tan globalizados nos encontró que, a imagen y semejanza de los norteamericanos, la opción de los latinoamericanos no era sólo entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, sino, también, entre McDonald's y Burger King, Nike o Reebok, Levis o Lee, American o United. Todo con precios traducidos en dólares y con cupones a cuenta de tarjetas de crédito, siempre las mismas, en centros comerciales que, como los aeropuertos y los hoteles, no guardaban diferencias entre sí.

El cambio pasó inadvertido para los partidos políticos tradicionales. De ahí, el acierto del caballito de batalla de un presidente argentino malogrado como Fernando de la Rúa en su campaña proselitista: "Dicen que soy aburrido". Había sido, más que todo, la expresión del desánimo

de la gente frente a cambios de gobierno que sólo auguraban cambios de caras y de estilo, no de rumbo. El resultado era la falta de expectativas. Lo cual traía, bajo el poncho, la inseguridad. En particular, entre aquellos que seguían dependiendo de un dinosaurio como el Estado. La mayoría, en verdad.

Encajaba, pues, en los reclamos de Seattle: mano de obra barata que, en un mundo cuya tasa de natalidad era superior en los países que Toffler llamaba lentos, prometía crisis por falta de empleo. Y una mayor defensa de los intereses particulares reflejada en los medios de comunicación, fuera la vida de los delfines, la adicción a las drogas ilícitas o el matrimonio entre personas del mismo sexo, en desmedro de los intereses generales, representados por partidos, y por políticos, cada vez más propensos a diluirse en alianzas estratégicas. Por ahí, no por la tercera vía de Clinton, Tony Blair y Gerhard Schröder, transitaba el déficit del tren que descarriló en Seattle, enfrentando policías con uniformes Robocop y con temple Terminator contra aquellos que habían sido hippies en los setenta. Eran, en los Estados Unidos, los baby-boomers, la generación de consumistas que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 y 1964.

No era casual el estallido en Seattle, la ciudad de Microsoft (computadoras) y de Boeing (aviones). Los símbolos de la globalización que vino a ponerle un mote amistoso al imperialismo, como machacaba Francis Fukuyama, en la cuna del grunge (los perdedores de *Generación X*, la novela de Douglas Coupland, que terminan sus estudios secundarios y no consiguen empleo; que ven amenazados sus sentimientos por el sida y sus vidas por el daño ecológico, y que, a tono con la negación del futuro de los punks, optan por quedarse al costado del camino). No eran casuales, tampoco, los atentados terroristas en Nueva York y en Washington, DC, espejos del poderío económico y político norteamericano. De la república imperial, versión Raymond Aron.

Seattle lleva el nombre del gran jefe Sealth, líder de los duwamish. Aquel que en 1855 puso reparos a la venta de las tierras que ocupaba su tribu desde siempre, en el Estado de Washington, al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce: “Mis palabras son inmutables como las

estrellas –le escribió–. ¿Cómo se puede vender el cielo? ¿La tierra? Si no poseemos la frescura del aire y la viveza del agua, cómo pueden comprarlas. El viento que dio a nuestro abuelo su primer aliento también recibió su último suspiro. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida, y empezamos a sobrevivir”.

Sobreviviendo estábamos, pues, mientras apestaban el agua del Río de la Plata, y el aire de las ciudades de México y de Santiago, Chile, entre otras calamidades. Que refutaban por sí mismas un sabio proverbio indio: “No heredamos la tierra de nuestros antepasados; la tomamos prestada de nuestros hijos”. Apestaba también, no por desastres ecológicos, que el único fenómeno global en serio, y en serie, fuera la corrupción. Y que, como en la dictadura militar, aquel periodista que osara meter sus narices en ella corriera peligro. Peligro de muerte.

Emblema de la corrupción ha sido Montesinos en Perú, así como Yabrán en la Argentina. Hombres sin sombra. Que eligieron ser fantasmas.

Uno, sólo retratado en 1984 por la revista *Caretas*, de Lima, merodeó en el anonimato durante seis años hasta que apareció en octubre de 1996, sonriente frente a las cámaras, con el zar de la lucha antidrogas de los Estados Unidos, general Barry McCaffrey, en las escaleras de la Casa de Pizarro; dos meses antes, el narcotraficante peruano Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano, había declarado en una audiencia pública que, entre julio de 1991 y agosto de 1992, le pagaba 50.000 dólares mensuales por usar una pista de aterrizaje desde la cual mandaba cocaína a Colombia.

El otro se vio sorprendido por un fotógrafo indiscreto. En su caso campé, más que la voluntad política, el reclamo de la gente: “No se olviden de Cabezas”. Predica que obligó al gobierno de Menem, con el que Yabrán había tejido negocios en las áreas postal, aeroportuaria y de seguridad privada, a apartarse de él. Lo dejaron solo tras haber sido recibido en la Casa Rosada (sede del Gobierno) por el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, mientras, casi al unísono, el Presidente se ofendía por la mera mención de su apellido en una conferencia de prensa que ofreció en el hotel Inter-Continental, de Nueva York. “La gente no come vidrio, no se traga sapos y no digiere las mentiras”, espetó.

Nada más burdo que la imagen de Yabrán con la foto que sólo mostraba los ojos de Cabezas. Ojos de mirada punzante en contraste con ojos de mirada apagada. Muertes curiosas en parajes curiosos. Serenos, respetuosos de la siesta. Siesta alborotada por estrépitos. Que sellaron el final de un inocente y, al parecer, la inmolación de un perseguido.

El derrotero de Yabrán por las esferas del poder empezó en la dictadura militar, continuó en el gobierno de Alfonsín y alcanzó su cenit con Menem. No habrá previsto el escollo que iba a desencadenar, cual bola de nieve, la denuncia en el Congreso de Domingo Cavallo, el 23 de agosto de 1995, sobre la existencia de mafias enquistadas en el poder. De las que, según el ministro de Economía que iba a reincidir con De la Rúa, padre y sepulturero de la convertibilidad de la moneda, Yabrán era uno de los jefes. O de los capos. Catástrofe de un imperio forjado en forma más que misteriosa.

Yabrán era un coto de caza legítimo de la prensa. Por más que, como se rumoreaba, no permitiera ni que sus hijos fueran retratados en los actos escolares. “El Presidente le tiene miedo”, llegó a decir Cavallo, canciller de Menem antes de ser ministro, o superministro, de Economía.

Siete horas estuvo Yabrán en el Congreso, el 10 de abril de 1997, frente a senadores y diputados inquietos por sus lazos con el Gobierno y, sobre todo, por el origen de su inmensa fortuna, después de criticar a Cavallo por el manejo de la privatización del Correo. Siete horas que reportaron más signos de interrogación que de afirmación. Ya se había ganado otro enemigo, también distanciado de Menem después de haber sido el vicepresidente de la Nación en su primer período: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, promotor de una reforma, o depuración, policial que se tradujo en un severo aumento del delito. Coronada con el asesinato de Cabezas, cometido por ex miembros de la fuerza.

Peor no pudo ser el muerto para Duhalde, perdedor en las elecciones legislativas de 1997 y en las presidenciales de 1999. Presidente, entre 2002 y 2003, como resultado del descalabro del país después de la renuncia de De la Rúa. Perdedor, no obstante ello, desde que Yabrán, con su suicidio, le quitó letra a su discurso. Del caso Cabezas quedó una

frase que, si no la pronunció, habrá sido su primera reacción: “Me tiraron un cadáver”. Cadáver por el que ya no pudo ufanarse de la mejor policía del mundo, según sus palabras, y por el que ofreció de inmediato, por datos que condujeran al esclarecimiento, una recompensa de 100.000 dólares que triplicó en un par de días tras haber pedido hasta la participación del FBI en la pesquisa. Cadáver que apareció esposado y calcinado, así como el auto y la cámara fotográfica, en un sitio desolado de Pinamar, balneario que queda a unos 340 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.

A Cabezas, según los testimonios del juicio, lo esperaban a las 5.15 de la mañana en la puerta de la vivienda que alquilaba aquel verano. Regresaba de una fiesta que iba a terminar con un desayuno en la residencia del empresario postal Oscar Andreani. Fueron a su encuentro en cuanto quiso descender del auto. Lo intimidaron, golpeándole una o más veces el cuello, mientras otros hacían de vigías desde un Fiat Uno que estaba estacionado a la vera de un terreno baldío, enfrente.

Su suerte parecía echada no bien enfilaron en los dos autos hacia Manantiales, un descampado, por un camino de tierra que desemboca en la laguna Salada Grande. Lo esposó el ex oficial Gustavo Prellezo, jefe del grupo, con un juego marca Alcatraz; llevaba un revólver calibre 32 con mirilla roja que había sido secuestrado por policías de Valeria del Mar a ladrones de poca monta del casino. Lo obligó a arrodillarse y, cual ejecución sumaria, le disparó dos veces en la nuca. Muerte instantánea por destrucción de la masa encefálica, según las pericias forenses. Lo acomodaron de nuevo en el auto. Lo rociaron con combustible. Lo quemaron.

Un mes y dos días antes del crimen, Prellezo había tomado nota de una advertencia de Yabrán: “Quiero pasar un verano tranquilo, sin fotógrafos ni periodistas”. Era el 23 de diciembre de 1996. La reunión privada, en la sede de Yabito S.A. (propiedad de Alpha, como lo llamaban sus custodios), en la ciudad de Buenos Aires, no duró más de cinco minutos. Cinco minutos en los que dejó entrever el rechazo, o el pavor, que sentía por la exposición pública. Una foto era, para él, un disparo en la frente.

A tal extremo llegaban sus temores frente a los 443 (número con el cual sus custodios identificaban a los hombres de prensa) que le man-

dó un jarrón de regalo a un dirigente sindical con una tarjeta por demás sugestiva: “Muy feliz cumple –dice la foja 17.162, cuerpo 85, del proceso–. Si no te sirve de adorno es para que se lo rompas en la cabeza a algún fotógrafo indiscreto”.

Por el asesinato del fotógrafo indiscreto, Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Yabrán, así como Horacio Braga y Gustavo González (coautores), y Héctor Retana y José Auge (partícipes primarios), fueron condenados a prisión perpetua. Sobre Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta recayó la pena de reclusión, también perpetua.

No había razón para que Ríos y Prellezo mataran a Cabezas, según los jueces. Salvo la molestia que podía provocarle a Yabrán la posibilidad de ser retratado de nuevo o, tal vez, la foto que había sido publicada 11 meses antes en la revista Noticias, dirigida por Héctor D’Amico. Luna se ocupó de los preparativos. Braga, Retana (muerto de un paro cardíaco, el 8 de abril de 2001, en la cárcel de Olmos), Auge y González, llamados Los Horneros, cobraron 4000 pesos (4000 dólares de entonces) por el trabajo sucio; en 2005, por una gracia judicial llamada dos por uno (cuenta dobles los días que pasaron tras las rejas sin sentencia) y por el cumplimiento de las dos terceras partes de sus respectivas penas, quedaron todos en libertad.

El sistema Excalibur, de rastreo telefónico, demostró que Yabrán mantenía contactos con figuras empinadas del poder. En la agenda de Emir Yoma, cuñado y amigo de Menem, el primer pez gordo en caer en la red de la triangulación de las armas desviadas hacia Croacia y Ecuador, figuraba en la letra A, de amigo; era El Amigo a secas.

La estampa y figura de Yabrán, investigada hasta por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), campea entre los casos de corrupción más sonados del gobierno de Menem, como el contrabando de armas, la mafia del oro, el lavado de dinero y un contrato espurio entre el Banco Nación e IBM.

El crimen de Cabezas no prometía ser más que la muerte de un cartero (mote al que también respondía su instigador por sus orígenes humildes y por sus intereses en el rubro). Pero, cual onda expansiva de una bomba de alcance insospechado, tendió la muralla definitiva entre

Menem y Duhalde. Y, a su vez, unió a la gente en un reclamo unánime de justicia. Bien escaso en una sociedad convencida de que sus políticos barrían la basura debajo de la alfombra y privilegiaban el interés personal sobre el nacional.

Cabezas era uno más. Un ignoto. Hasta que, posmortem, su apellido se asoció con el pan argentino de cada día. Con la cobardía y la alevosía de tiempos, y verbos, que parecían pretéritos en un país que aún no había sofocado la pesadilla de dos atentados contra blancos judíos: la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994. En los que también participaron policías bonaerenses.

Sólo comparable pudo ser el caso Cabezas con la muerte del soldado Omar Carrasco, broche del servicio militar obligatorio después de haber puesto en aprietos al jefe del Ejército en la era Menem, general Martín Balza, también detenido por el tráfico de armas, y con la muerte de María Soledad Morales, adolescente de la provincia de Catamarca cuyo trágico desenlace jaqueó a la familia Saadi, dinastía de raíces peronistas.

El menemismo no era necesariamente lealtad inquebrantable a Menem y su causa, como sucedía con la simbiosis entre el peronismo, Perón y la marcha que sus militantes entonaban con más fervor que el Himno Nacional, sino un estilo de vida objetado por sus mismos precursores. A despecho de los valores republicanos, de la independencia judicial y de la austeridad, remodelando la residencia de Olivos como si fuera propia, con una cancha de golf hecha a su medida, y su pueblo natal de Anillaco como si fuera del Estado, con una pista de aterrizaje hecha a su antojo. Para uso personal en ambos casos.

Una década después, al final de dos períodos consecutivos que pretendió que fueran tres, su obra se vio empañada, y empeñada, por un balance desprolijo de recesión, desempleo, baches fiscales, inseguridad, marginalidad y corrupción. Fomentado, en cierto modo, por su estrecha relación con personajes de dudosa honestidad, como Yabrán, el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar y el general paraguayo Oviedo. Más allá de su debilidad por tomarse fotos con Xuxa, Madonna y los Rolling Stones.

De la Rúa, cuyos ejes de campaña eran su poco virtuosa cara de aburrido y la vana promesa de terminar con la fiesta de unos pocos, no coronó sus promesas, desdibujado desde su primer año de gobierno entre los quebrantos económicos, las fisuras de la Alianza (con la súbita renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, apodado “Chacho”) y los romances de su hijo mayor, Antonio, con la cantante colombiana Shakira, y de Menem con Cecilia Bolocco, presentadora de televisión chilena a la que casi duplica en edad. La fiesta continuó y, a falta de una oposición real, la oposición virtual eran los humoristas y los conductores de los programas de televisión con matices irónicos.

En marzo de 1998, Duhalde se topó con un bocadillo del jefe de la Reserva Federal entre 1979 y 1987, Paul Volcker, durante un almuerzo en Nueva York: “¿Qué posibilidades tiene el presidente Menem de ser reelegido?”, preguntó. El entonces candidato presidencial, rápido de reflejos, dijo: “Tantas como Clinton”. Vedado de un tercer mandato. Pero Volcker, no conforme con la respuesta, insistió: “En mi país no cambia la Constitución”. Duhalde cerró el ping-pong con un tiro de gracia: “En el mío tampoco”.

Mentiras verdaderas

En los círculos norteamericanos, al margen de las buenas calificaciones económicas de Menem, no era bien vista su eventual candidatura para la segunda reelección. O re-reelección. Tenían la misma intención los presidentes de Brasil, Cardoso; de Perú, Fujimori, y de Panamá, Ernesto Pérez de Balladares. El mensaje compartido era claro: yo o el diluvio.

Mensaje, o ansiedad, no necesariamente exclusiva de repúblicas bananeras. Prueba de ello ha sido el apuro de John Ellis, director de noticias de Fox News, en proclamar la victoria de su primo, Bush, en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Cometió un error capital. O garrafal: la falta de rigor. Exagerado, en cuestión de minutos, por el vértigo de una noche larga, el martes 7 de noviembre de 2000, que sólo iba a deparar penumbras políticas y, por extensión, periodísticas: CNN,

ABC, CBS y NBC también declararon ganador al candidato republicano. Y estalló la algarabía en Austin, Texas, con una pantalla gigantesca instalada frente al Congreso bajo una lluvia, y un frío, que pronosticaba gripe.

Fue periodismo en bloque. Corporativo. Todos habían contratado a la misma encuestadora: Voter News Service (VNS). Lo cual demuestra, cual regla básica, el riesgo de depender de una sola fuente de información. El candidato demócrata, Al Gore, advertido por la televisión del resultado adverso después de la confusión que provocó su triunfo temporal en el Estado de Florida antes de que se convirtiera en la manzana de la discordia, felicitó por teléfono a Bush, concediéndole la gloria. Iba a pronunciar el discurso de aceptación de la derrota en el War Memorial Plaza, de Nashville, Tennessee. “My fellow americans...”, pensaba decir con tono grave.

El escándalo por la indefinición, con el recuento manual de los votos y la pelea legal en Florida en los que iban a derivar las elecciones, disimuló, en cierto modo, el otro escándalo: el error de Ellis, por apuro, por negligencia o por entusiasmo, copiado por las demás cadenas de televisión.

La Cámara de Representantes ordenó una investigación. Los primeros anuncios sobre Florida, en donde ganaba Gore, pudieron haber afectado las elecciones en otras regiones del país (la Costa Oeste tiene una diferencia de tres horas respecto del Este) y pudieron haber desalentado a los republicanos que aún no habían votado.

El afán de informar, en especial en momentos cruciales, condujo a errores. ¿El que tiene boca se equivoca? Peor aún si no es boca de urna, sino la boca del pariente de uno de los dos candidatos en elecciones en las cuales no había un centímetro de diferencia entre uno y el otro en las encuestas, ya fuera por falta de convicciones o de estímulos en un país tocado por la varita mágica de la bonanza económica.

Ellis, despojado de todo rigor profesional, estuvo en contacto telefónico casi permanente con el círculo íntimo de Bush. Especialmente con su primo Jeb, gobernador de Florida y hermano menor de W. “Jebbie me llama 8000 veces por día”, se ufano el día de las elecciones, por la mañana, en una entrevista con la revista *The New Yorker*. ¿Fue apuro,

entusiasmo, negligencia? El problema no era él, sino Fox. ¿Por qué contrató para su mesa de noticias nada menos que al primo de uno de los candidatos, hijo de Nancy, hermana del ex presidente Bush?

Entre las 7.49 y las 8 de la noche, hora del Este, Fox, CNN, ABC, CBS y NBC, así como la agencia de noticias Associated Press, dijeron que Gore había ganado en Florida. En la Costa Oeste todavía estaban votando. Casi dos horas después, a las 9.54, el mapa en el que aparecían coloreados los Estados en los cuales había triunfado uno de los dos volvió a quedar en blanco. A las 2.16 de la madrugada, por recomendación de Ellis, Fox decretó la victoria de Bush y tuvo eco inmediato en las otras cadenas.

Mucha gente se fue a dormir con la certeza de que Gore, primero, y Bush, después, era el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero amaneció con una sorpresa: la casona de la avenida Pensilvania 1600, de Washington, DC, con inquilino hasta el 20 de enero de 2001, no iba a tener ocupante por un rato. Un rato largo, por cierto.

La incertidumbre es, muchas veces, peor que una mala noticia. La mala noticia para los diarios que respaldaron a un candidato o el otro en sus editoriales, como es tradicional antes de las elecciones, había sido el cambio sobre la marcha de ediciones completas, en la madrugada del miércoles 8, por haber confiado en la televisión. Como Gore.

Algo parecido ocurrió en México. En las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000, en las que ganó Vicente Fox, candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), un diario del Distrito Federal, seguro de la victoria de Francisco Labastida, candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde 1929, debió retirar de circulación todos los ejemplares de un suplemento que ya había impreso. Pecó su director, ansioso también, de apuro, de negligencia y, acaso, de entusiasmo.

El amor y la tos no pueden ocultarse. Como tampoco puede ocultarse el poder de los medios de comunicación. En Italia, Silvio Berlusconi era, desde su victoria en las elecciones del 13 de mayo de 2001, el poder en el poder. Un magnate de la televisión que sacó provecho de ella una década después de que CNN provocara una revolución con la transmisión en vivo y en directo de la primera Guerra del Golfo.

En las elecciones, como en la vida, una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Berlusconi, el rey, vendió la certeza de que era mejor que su rival, Francesco Rutelli, el peón de la marchita Coalición del Olivo. Y, a contramano de los discursos políticos, la sociedad civil de la que hablaba Antonio Gramsci terminó comprándolo. O terminó comprando el reality show de la prosperidad. Concentrada en el bienestar personal, no en los orígenes dudosos de sus bienes. Ni en las causas en las que había sido hallado culpable: financiación ilegal de partidos políticos (transfirió 11 millones de dólares al Partido Socialista; el primer ministro Bettino Craxi, después de ser condenado, se fugó a Túnez, en donde murió); sobornos a funcionarios de la Guardia de Finanzas que revisaban las declaraciones de impuestos de su grupo empresarial, Fininvest, y trampas con los balances de Medusa, la división cinematográfica de Fininvest, en la compra de terrenos.

Un caballero, Il Cavaliere, calificado de no idóneo, sinónimo elegante de inepto, por el semanario británico *The Economist*. En especial, por no haber resuelto el conflicto de intereses entre los negocios privados y la actividad pública. Y por haber sido investigado por blanqueo de dinero, vínculos con la mafia, evasión fiscal, pertenencia a la Logia Masónica P2 de Licio Gelli, y chantajes de políticos, jueces y funcionarios gubernamentales después de su primer acto como premier, siete meses en 1994. Lo condenaron tres veces. En total, 77 meses de prisión. Ni un día purgó en ella. Una excepción en el país de las Manos Limpias. Que izó la bandera, o hizo bandera, con la lucha contra la corrupción.

Señal de alerta para el semiólogo italiano Umberto Eco, temeroso de descubrir un buen día todos los medios de comunicación en poder de Berlusconi, dueño de tres canales de televisión y de otras compañías, como la editorial Mondadori. Temeroso, asimismo, de que la democracia, dominada por una sola voz, descarrilara en un régimen de facto. Y de que la alianza ganadora, Casa de las Libertades, terminara dando un portazo frente a las narices de la libertad de expresión.

Actitud que Fujimori preservó hasta el final en Perú, empalagado de prensa chicha (oficialista). Quizás el fin justificara los medios, pero la difusión del video del soborno de Kouri fue el comienzo del fin. O el fin

del SIN. Y de él mismo, prófugo en Tokio después de haber apelado a la expropiación de medios de comunicación: caso Baruch Ivcher, director y presidente del directorio del Canal 2, Frecuencia Latina, privado arbitrariamente hasta de la nacionalidad, coartando sus derechos.

El derrumbe de Fujimori pudo haber empezado el 28 de julio de 2000, Día de la Independencia y de su cumpleaños. Día en que, a los 62 años, asumió por tercera vez la presidencia en medio del caos: murieron seis personas y resultaron heridas 50 mientras las llamas devoraban los edificios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Banco de la Nación como epílogo de la Marcha de los Cuatro Suyos (regiones del imperio inca), encabezada por el futuro presidente de la República, Alejandro Toledo, en el centro de Lima.

Fue un descuido de Montesinos. El único, tal vez. Siempre eficiente desde que, después de la primera vuelta de las elecciones de 1990, se acercó a Fujimori. Un outsider (ajeno a la política) sin partido ni programa, como su rival de entonces, Mario Vargas Llosa. Le llevaba la propuesta de blanquearle deudas impositivas derivadas de operaciones inmobiliarias. Había extraído documentos comprometedores de oficinas públicas, haciendo alarde de sus dotes de espía. Trabajaba desde hacía un año en el SIN.

El Doctor o El Doc, como iba a ser llamado en forma frecuente, deslumbró primero a Susana Higuchi, aún esposa de Fujimori. Y, después, al hombre de mirada achinada, gestos despectivos y presunta nacionalidad japonesa por la cual, en principio, no podía ser candidato. Usó una frase que iba a ser su respuesta usual en los próximos 10 años: “¡Olvídense del problema, ingeniero!”.

Escondía una carta en la manga: la resolución, firmada por el fiscal de la Nación, que limpiaba el buen nombre y honor de Fujimori de toda sospecha de fraude. Eran las vísperas de las batallas frontales contra Sendero Luminoso, con la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992, y contra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), con el rescate de 71 rehenes de la residencia del embajador japonés en abril de 1997. Estrellas que iluminaron el derrotero de Montesinos, siempre en las sombras, protegido por Fujimori hasta que su situación se hizo

insostenible y, sin orden de arresto en su contra como mandaba la ley y como demandaba la oposición, partió hacia Panamá. Cayó en la Venezuela de Chávez después de varios meses en la clandestinidad.

Dejó detrás de él una estela de acusaciones de violaciones de los derechos humanos y de restricciones de la libertad de expresión mientras Fujimori, con rasgos de autócrata, en vano se jactaba de haber derrotado la hiperinflación y el terrorismo, y de haber resuelto el conflicto limítrofe con Ecuador. De haber sacado al país del pozo, según sus palabras, en momentos en que decidía abandonar su único hobby conocido, gobernar Perú, antes que bajarle el pulgar a su fiel ladero. Chinochet, como confesó que le gustaba ser llamado por su identificación con Augusto Pinochet, estaba a punto de perderlo todo.

Quizá Montesinos no haya advertido que el video con Kouri iba a ser usado en su contra. Quizá tampoco haya advertido que iba a tratarse de una venganza. Al parecer, de militares afectados por haber sido excluidos de la conferencia de prensa en la que Fujimori y él revelaron, el 21 de agosto de 2000, el éxito de la operación de inteligencia con la cual desbarataron el contrabando de 10.000 fusiles rusos AK-47, procedentes de Jordania, que iba a nutrir el arsenal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los 42.000 kilómetros cuadrados que dominaban en el sur del país, como parte del diálogo de paz en medio de la guerra, la policía secreta colombiana descubrió 10.000 cartuchos de procedencia peruana que tenían idéntico destinatario.

La explicación sobre la desarticulación de la banda internacional de tráfico de armas no satisfizo al entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, receptor de 1300 millones de dólares de Washington, DC, para eliminar, o sustituir, los cultivos de coca y de amapola. Mucho dinero para la lucha contra el narcotráfico, socio de la guerrilla, como para permitir, al mismo tiempo, que militares peruanos de alta graduación estuvieran involucrados en triangulaciones.

La paz más desventajosa es menos redituable que la batalla más justa. Sobre todo, para los traficantes de armas. Gente poco escrupulosa que pacta con un gobierno democrático o con una dictadura militar y, con tal de hacer su negocio, se vale de los rasputines de turno. Encargados,

a su vez, de convencer al zar de que el matrimonio es la única guerra en la cual los enemigos duermen juntos. En las otras talla el engaño. Como en la política. Y, por ello, no ha habido una sola escaramuza que no fuera santa. Por Dios y por la patria, cual juramento presidencial.

Demandantes, en última instancia, de haber caído en la tentación de obtener ganancias de las desgracias ajenas. Tan ajenas para la Argentina, al parecer, como Croacia y la desintegración yugoslava, por más que tropas propias nutrieran el pelotón de los cascos azules de las Naciones Unidas, y el conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, por más que Perú haya sido solidario con el régimen de Leopoldo Fortunato Galtieri durante la Guerra de las Malvinas.

El arresto de Menem devaluó su pretendida luna de miel con Bolocco en Siria (la tierra de sus mayores y del traficante Al Kassar) en una modesta luna de hiel con su amigo Armando Gostanian en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Y, también, engarzó otro eslabón en una larga cadena de ocasos de políticos por sospechas de corrupción. Vinculadas, algunas de ellas, con los dividendos siempre jugosos de la triangulación de armas, o el mercado de la muerte, en la cual suelen sobresalir más los intermediarios, como apoderados, que ellos mismos.

Adiós a las armas es, a veces, adiós al honor. Como sucedió en Alemania. Helmut Kohl, el canciller vitalicio que derribó el Muro de Berlín y abrazó la causa de la Unión Europea, perdió en 2000 la presidencia honoraria de la Unión Cristiana Democrática (CDU) desde el momento en que sus auditores financieros admitieron que, en complicidad con el ex presidente francés François Mitterand, jaqueado en 1988 por financiar su campaña con facturas falsas, nutrió las arcas partidarias de millones de marcos de origen turbio antes de las elecciones de 1994.

Provenían del traficante de armas Karlheinz Schreiber, ligado con el entonces tesorero de la CDU, Walther Leisler Kiep. El ministro de Defensa, Gerhard Stoltenberg, había rechazado la entrega de 36 tanques Fuchs a Arabia Saudita. Que, finalmente, Kohl autorizó tiempo después. O después de que el dinero estuviera acreditado. No en beneficio propio,

sino del partido, mientras la gente no padecía, como en América latina, los rigores del desempleo y de la pobreza.

Toda prisión tiene una ventana, sin embargo. En el otro extremo del mapa, Montesinos halló una apenas quedó huérfano de amparo: miles de videos, o vladivideos, de pactos non sanctos con medio mundo, filmados por decisión propia. Salvoconducto que conservó hasta el final, perdido por perdido frente a la persecución del FBI. Alertado, a su vez, por el Pacific Industrial Bank, de Miami, en donde un emisario debía retirar casi 40 millones de dólares. No sabía que dos de los ejecutivos con los cuales se reunió eran, en realidad, agentes federales. Competidores, en los sótanos de la burocracia norteamericana, con empleados y ex empleados de la CIA, como él. Más razón aún para dar el golpe de gracia y, de paso, demostrar que Chávez, íntimo de Fidel Castro, tenía malas compañías.

Cayó, o cayeron, en una trampa. Como Slobodan Milosevic, quizá. Seguro de que un nacionalista serbio como él, Vojislav Kostunica, no iba a entregarlo al Tribunal Penal Internacional de La Haya por las atrocidades que cometió mientras, ciego en su cruzada, cruzado en su ceguera, parodiaba el apocalipsis de Menguele con sus limpiezas étnicas. Su sucesor tuvo 1300 millones de razones, o de dólares, para reparar más en las necesidades de Yugoslavia, o de lo que continuaba en pie después de cuatro guerras perdidas, que en la suerte de un déspota de la deshilachada Liga Comunista.

Montesinos y Milosevic, como Pinochet a pesar de la magra cueca que improvisó en cuanto arribó a Santiago después de sus 503 noches con pensión completa en los suburbios de Londres, pagaban con creces el precio de la globalización. De la libertad de expresión, también. Por más que fueran pésimos imitadores de El Gran Hermano, capaz de controlar con su policía del pensamiento hasta los sentimientos de Winston Smith, el protagonista de la novela *1984*. Cual nariz, o cola, del monstruo que aguijoneaba con chantajes, sobornos, financiaciones ilícitas y comisiones ilegales en las democracias de pantalones cortos, después de la razzia emprendida por las dictaduras de pantalones largos. Aunadas, en el Cono Sur, en la Operación Cóndor. Ergo: no se olviden de

JORGE ELÍAS

Cabezas, pero tampoco se olviden de Montesinos y de Yabrán. Pocos hombres, como los zorros, tienden una trampa, ponen la carnada y no meten la pata.

9. LEVÁNTATE Y BAILA



ASI nunca titubeaba Madeleine Albright, secretaria de Estado norteamericana en el segundo período de Bill Clinton. Pero el 15 de agosto de 1997, a eso de las cinco de la tarde, no tuvo más remedio. En sus mejillas se había acentuado el rubor. No por el verano de Washington, DC, habitualmente impiadoso en esa fecha, ni por el exceso de maquillaje, habitualmente más impiadoso que el calor en su rostro.

“¿Estamos seguros de que la traducción es la correcta?”, inquirió, cortante.

La intérprete, conteniendo la risa, asintió.

Jesús Esquivel, mexicano, periodista de la agencia estatal Notimex radicado en Washington, DC, le había preguntado al canciller argentino, Guido Di Tella, si la designación de su país como aliado mayor extra-OTAN de los Estados Unidos iba a fomentar aún más las relaciones carnales entre ambos países.

“Relaciones carnales”, dijo.

La sala de conferencias del Departamento de Estado rompió en carcajadas.

Todos, menos Albright, parecían conocer el significado de la frase. O de la muletilla. “Ahora tenemos formas más técnicas de definir nuestras relaciones”, repuso el difunto Di Tella, autor de la ocurrencia que terminó en marca registrada. A Albright le había susurrado al oído: “Después le explico”. Ella entendió de inmediato de qué se trataba y, abanicándose con la mano, concluyó: “Es un día caluroso de agosto”.

Todavía no había estallado el escándalo Monica Lewinsky. Por fortuna.

Las relaciones carnales signaron una era en la Argentina. La era Carlos Menem. Un giro que empezó en 1989, con George Bush (padre) en el Gobierno, y que, en la década siguiente, con Clinton en el Gobierno, reportó al país el título de aliado mayor extra-OTAN de los Estados Uni-

dos cual devolución de gentilezas por haber contribuido con fuerzas de paz en donde hubiera tropas norteamericanas, fuera el Golfo Pérsico, fuera Haití, fuera Bosnia-Herzegovina, y por haber apoyado sus posiciones en foros internacionales.

“Algo hay que darles a los argies (argentinos)”, me confesó en aquellos días que había expuesto, en una reunión reservada entre sus pares, un funcionario de alto grado del Departamento de Estado que participaba de la idea de premiar al país por los servicios prestados. A pedido de Menem, no por iniciativa propia.

Ya les habían dado algo a los argies: la posibilidad de que sus ciudadanos ingresaran sin visa en los Estados Unidos, según un acuerdo gestado en diciembre de 1994, en Miami, durante la I Cumbre de las Américas. Que comenzó a regir el 9 de julio de 1996, en tanto se tratara de viajes por turismo o por negocios, y de permanencias que no excedieran los 90 días. Status, o categoría, que compartía el país con Andorra, Austria, Bélgica, Brunei, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, San Marino, España, Suiza, Suecia, Holanda y el Reino Unido. Hasta que quedó trunca, en coincidencia con la crisis económica, y política, desatada a comienzos de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa.

¿Quién iba a dudar, entonces, de que la Argentina, candidata a ser aliada mayor extra-OTAN del país más poderoso del mundo, pertenecía al Primer Mundo, como solía machacar Menem? Había aprobado el examen. Sobre los argies en general, y sobre Menem en particular, pesaba el síndrome de la desconfianza. El país de Braden o Perón, neutral en los dos conflictos mundiales del siglo XX, era imprevisible. Más desaliñado que no alineado. Dudoso. Capaz de declarar en 1982 la guerra contra Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas, sacrificando muchachos de 18 años desprovistos de instrucción militar, sin reparar en que Margaret Thatcher y Ronald Reagan estaban negociando en ese preciso momento el emplazamiento de misiles de alcance intermedio en Europa. Capaz, también, de zigzaguear en los foros internacionales a contramano de Occidente, ciego en su egolatría, convencido de la contradicción como con-

ducta. Seguro, hasta la hiperinflación de 1989, de que el granero del planeta jamás iba a agotarse.

Pero se agotó. O lo agotaron. Y Menem, aún candidato a presidente, era un tío patilludo que defendía a Muammar Khadafy y que amenazaba con la ruptura de las relaciones con los Estados Unidos durante la campaña electoral. No ofrecía garantías de cambio. En Washington, DC, por sus orígenes árabes, hasta sospechaban que era antisemita. Que el colapso del gobierno de Raúl Alfonsín, con el que no habían hecho buenas migas, iba a derivar en el retorno del nacionalismo y del populismo más rancios. En un corte al ras de las libertades. La de expresión, entre ellas.

Siempre al límite. Entre 1989 y 2001, en democracia, hubo tres asesinatos de periodistas. Disímiles entre sí, pero vinculados, todos ellos, con tramas de corrupción: Mario Bonino (1993), José Luis Cabezas (1997) y Ricardo Gangeme (1999). Lapso en el cual la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) recibió 1283 denuncias de agresiones contra periodistas. En esos 12 años, con Menem y De la Rúa en el Gobierno, sólo en 1993, en coincidencia con la muerte de Bonino, hubo 218 ataques. Cifra que cayó a 162 en 1997, cuando murió Cabezas.

Muchos pensaban que Menem era algo así como la reencarnación de Perón en un caudillo folklórico, con resultados magros como gobernador de una provincia pobre como La Rioja. Que iba a alimentar sindicatos, fortalecidos por numerosas huelgas durante el gobierno de Alfonsín, a costa de las compañías privadas. Extranjeras, en su mayoría. Que iba profundizarse el aislamiento, en definitiva.

Hasta entonces, algunos de los congresistas peronistas que luego venderían a precio de costo las joyas más preciadas de la abuela, en poder del Estado, habían rechazado las privatizaciones. La Argentina, renuente a firmar el Tratado de No Cooperación Nuclear, estaba embarcada en el desarrollo del misil balístico Cóndor II. Que, finalmente, desactivó. Era poco fiable, desconectada de la pelea Este-Oeste. Desconectada de la realidad, según la óptica de Washington, DC.

El país había tocado fondo, sin embargo. Surgió la necesidad, sin convicción al principio, de acomodarse en un escenario nuevo. Que comenzó a perfilarse unipolar con la caída del Muro de Berlín, el derrum-

be de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. La evaporación de la moneda nacional, en 1989, provocó, o aceleró, la metamorfosis. Había comenzado a insinuarse tímidamente mientras promediaba el último tramo del gobierno de Alfonsín, el primero de orden democrático después de la atroz dictadura militar que derrocó el 24 de marzo de 1976 a María Estela Martínez de Perón, Isabelita a secas. Las relaciones maduras con los Estados Unidos que planteaba en 1983 el canciller Dante Caputo no prometían ser carnales, sino, en esencia, distantes.

“El vínculo con los Estados Unidos tiene que ser el mejor posible, pero maduro, con intereses comunes, distintos y contrarios”, me dijo Alfonsín, en mayo de 1998, durante una curiosa entrevista en un cuarto de hotel de Washington, DC, en la cual permaneció todo el tiempo en la cama. En pijama, tapado hasta el cuello y con las persianas bajas. Era la hora de siesta: las cuatro de la tarde. Rito que, según comentó, siempre respetó; hasta cuando era presidente. “De camión y Padre Nuestro”, bromeó. Lo acompañaba en el viaje, no en la cama, el economista Mario Brodersohn, secretario de Hacienda de su Gobierno.

En la Argentina de Alfonsín, así en como casi toda América latina, el antinorteamericanismo, expresado en slogans setentistas como liberación o dependencia, redituaba más votos que el elefante, cual sinónimo del Estado, en el que se pavoneaba Alvaro Alsogaray. Un dinosaurio con prédica liberal y alma conservadora, de dilatada trayectoria en regímenes de facto, que iba a ser parte, y arte, del gobierno de Menem. Al igual que su hija María Julia, envuelta en denuncias de corrupción.

La era Menem coincidió en sus orígenes con circunstancias nuevas, azarosas. Un mundo distinto del que la Argentina, infiel a su idiosincrasia, no era el ombligo. Podía enrolarse en el club de los ricos como una socia pobre o insistir con el club de los pobres como una socia que se creía rica, pero que, frente a la ventanilla, no podía pagar las cuotas. Optó por el club de los ricos. Sin serlo.

La política exterior tuvo entonces una base: la alianza en inferioridad de condiciones con los Estados Unidos mientras el país recomponía vínculos con vecinos a los que había soslayado o contrariado, por más que Alfonsín hubiera sentado desde 1985, con la Declaración de

Iguazú, las bases del Tratado de Asunción. Pilar, el 26 de marzo de 1991, de la fundación del Mercado Común del Sur (Mercosur), con Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros activos.

Del nuevo vínculo con los Estados Unidos, llamado alineamiento automático o relaciones carnales, se valió la Argentina como contrapeso en el trato con el Brasil, socio mayoritario del Mercosur: “Una asociación estratégica que dispó enteramente los malentendidos que habían socavado la natural amistad entre ambos pueblos –dice un informe de la Cancillería, rotulado como confidencial–. Imprimimos transparencia a nuestras intenciones en todos los campos y mostramos al mundo una relación de confianza mutua que pronto se tradujo en notables beneficios económicos y políticos”.

Verdad a medias. La relación con el Brasil chocó muchas veces con intereses sectoriales, en el sector privado, y con intereses políticos, en el sector público. En especial, con los temperamentos de Menem y de Fernando Henrique Cardoso. Ansioso, cada uno por su lado, de ser considerado el líder natural de la región. Clinton terció en el entredicho. No eligió Buenos Aires, sino Brasilia, en la gira que hizo en octubre de 1997 por ambos países y por Venezuela, para decir: “Yo apoyo el Mercosur”.

Las relaciones carnales sirvieron de contrapeso, también, en el trato con Chile: “Concluimos un siglo marcado por desencuentros –dice el informe de la Cancillería argentina–. Mediante el acuerdo del 2 de agosto de 1991, los gobiernos de la Argentina y de Chile decidieron solucionar todas las cuestiones limítrofes pendientes. Veintidós de ellas fueron resueltas en el corto plazo; a los dos diferendos restantes se les dio un tratamiento independiente: la cuestión de Laguna del Desierto fue sometida a arbitraje y el asunto de los Hielos Continentales fue objeto de un acuerdo, firmado el 16 de diciembre de 1998”.

Súbditos de la corona

El título honorífico de aliado mayor extra-OTAN venía a ser ahora un certificado de buena conducta: “La Argentina, a diferencia de

Chile y de Brasil, tuvo malas relaciones con los Estados Unidos –me dijo Di Tella aquella tarde calurosa de agosto de 1997 en Washington, DC–. No malas, pésimas. Estuvimos al borde del centenario de las malas relaciones. Arreglamos los tantos justo antes del centenario. De un país antagonico hemos pasado a ser candidatos a lo mejor”.

Lo mejor contó con el aval de Gran Bretaña: “Obviamente, los británicos son nuestros mayores aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –advirtió Albright en la conferencia de prensa–. Fueron informados de nuestra intención en lo concerniente a la Argentina y tuve la impresión, en las conversaciones que mantuve con el secretario Robin Cook, de que podemos seguir adelante”.

Lo mejor, asimismo, provocó roces con Chile. Tres días antes del anuncio de Albright, el canciller José Miguel Insulza pidió explicaciones en el Departamento de Estado, azorado ante la posibilidad de que fuera la semilla de una carrera armamentista: “Esto no puede dejar de preocuparnos –dijo en la Embajada de su país en Washington, DC–. La frase aliado mayor extra-OTAN tiene un significado político de gran importancia. No podemos negarlo”.

Tampoco cayó bien en el gobierno del Brasil, pero Cardoso, más cauto que su par chileno, Eduardo Frei, prefirió llamarse a silencio. O mirar al costado. Como si se tratara de un asunto bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina sobre el cual prefería no pronunciarse. Su meta era obtener una banca permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de modo de afianzarse, ahora sí, como el líder natural de la región. El país y, por extensión, su presidente.

“La señora Albright ha dicho que la categoría de aliado mayor extra-OTAN está abierta a otros países del mundo y de la región –insistió Di Tella mientras comía sándwiches tostados de queso en la Embajada argentina en Washington, DC–. Y nos parece excelente. Nuestra relación con Chile y con Brasil no puede ser mejor. Es un punto de discrepancia, pero tampoco hay que darle tanto vuelo.”

Albright, pronta a echar paños fríos ante cualquier nube de conflicto desde su gestión como embajadora en la ONU, había hablado

esa tarde de beneficios militares limitados para la Argentina, bajándole el tono a la discusión en ciernes, y había ponderado el papel crucial de Gran Bretaña en el grupo de los poderosos tras la consulta formulada al secretario Cook, par de Di Tella.

Lejos de una presunta intención de herir susceptibilidades, el gobierno de Clinton miró hacia arriba y procuró atenuar los súbitos celos, y recelos, planteados en la superficie. El mayor riesgo era propiciar el rearme de la Argentina. Como temía Chile. La disposición de Menem para resolver la disputa por las Malvinas frente a una mesa de negociaciones, no en un campo de batalla, aventaba fantasmas.

El aporte de Menem a las cruzadas bélicas emprendidas por Bush y por Clinton no era el fin, sino apenas el comienzo de un largo camino. La prueba de fuego iba a ser la actitud de quien asumiera su cargo después de las elecciones de 1999. Es decir, después de una década de hegemonía. Tapizada por la reelección en 1995 gracias a la reforma constitucional de 1994. Acordada con Alfonsín en la residencia de Olivos. Y truncada, al filo del segundo mandato consecutivo, por la necesidad de un cambio que, a contramano de los afanes de Menem de una segunda reelección, o re-reelección, Washington, DC, no veía con buenos ojos.

En esos días, un diplomático norteamericano me comentó: “El ala política (Departamento de Estado) está convencida de que debemos darle algo a la Argentina, premiarla, pero el ala económica (USTR, siglas del United States Trade Representative) sigue criticando la Ley de Patentes. Es un reclamo justo. Que muestra el costado negativo de la relación”.

Eran las dos caras de una misma administración en la que cada parte se mostraba divorciada de la otra, de modo de tener las manos libres para ejercer su papel. Si hubiera sido por Mickey Kantor o por Charlene Barshevsky, a cargo del USTR en forma sucesiva, la Argentina debía pagar cara su violación de los derechos de propiedad intelectual de las patentes farmacéuticas; si hubiera sido por Warren Christopher o por Albright, secretarios de Estado de Clinton, la Argentina merecía mejor trato.

Clinton organizaba, mientras tanto, su gira tardía por Venezuela, Brasil y la Argentina. La primera por América latina después de haber ido

sólo a México. Era una de las pocas veces en los últimos años que desoía la incomodidad de Chile ante una medida que podía perjudicarlo. Ese país, cuyo modelo económico implantado por Augusto Pinochet en 1982 sentó las bases de las reformas económicas esparcidas en el continente, menos en Cuba, gozaba de más preferencias que cualquier otro. Santiago iba a ser, de hecho, la sede de la II Cumbre de las Américas, en abril de 1998.

Si Chile no integraba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), con México y con Canadá, no era responsabilidad de la Casa Blanca, sino del Congreso, dominado por los republicanos. Clinton fracasó en su intento de obtener el fast track (vía rápida), herramienta vital para suscribir acuerdos comerciales con el exterior de la que dispusieron todos sus antecesores desde Gerald Ford, en 1974. Tampoco invirtió mucho en alcanzar ese cometido.

El presidente Frei había dicho ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos que su país, entonces, era libre de establecer pactos con otros bloques regionales y consiguió, cual paliativo, el levantamiento de una ley que vedaba a los países latinoamericanos la compra de armas a compañías norteamericanas. Regía desde los tiempos de Jimmy Carter, al tanto de las violaciones de los derechos humanos. En especial, en Chile, eje de la Operación Cóndor.

En una escala de valores estrictamente políticos, México (por su cercanía y su influencia), Brasil (por ser un continente dentro del continente) y la Argentina (por su ubicación estratégica en el Cono Sur) tenían, desde siempre, luces propias en el mapa geopolítico de Washington, DC. A ellos se sumó Chile, cual estrella tras la crisis de la deuda externa en los ochenta, por su transformación económica durante el régimen de Pinochet.

La Argentina alcanzó de ese modo, entre tiranteces, el rango de aliado mayor extra-OTAN de los Estados Unidos. Único en América latina y el Caribe. Y fue, a su vez, el país que recibió la mayor cantidad de ofertas de material militar de descarte del Pentágono entre 1996 y 1997, según un estudio del Latin America Working Group, de Washington, DC. Los autores, Adam Isacson y Joy Olson, concluían que la Guerra Fría no había terminado para el Pentágono: de documentos oficiales deducían

que no había gran diferencia con los años de plomo, caracterizados por la formación de represores en la Escuela de las Américas, y por la asistencia y el entrenamiento que brindaban al sur del río Grande.

El estudio, titulado *Just the Facts (Sólo los hechos)*, señalaba: “Durante la Guerra Fría, la asistencia de seguridad ayudó a regímenes a menudo desagradables en contra de la amenaza comunista. Aunque la región está moviéndose hacia la democracia y ha mejorado la situación de los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos ha continuado con su ofrecimiento de ayuda y entrenamiento a las fuerzas de seguridad”.

El status de aliado mayor extra-OTAN de la Argentina, otorgado inicialmente el 6 de enero de 1996 por Clinton, no era entonces más que simbólico: “No significa defensa mutua ni garantía de seguridad de los otros miembros de la OTAN”, decía el trabajo de Isacson y Olson. Los países con esa categoría, como Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur, tenían prioridad en el envío de materiales de descarte de defensa y en la participación en programas militares.

El trato no varió en el gobierno de De la Rúa, sucesor no peronista de Menem. Las relaciones carnales, denigradas por definición, pasaron a ser intensas; no maduras, de modo de no volver la vista hacia el gobierno de Alfonsín. Lo cual no impidió que el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini se sintiera orgulloso de recibir, el 4 de enero de 2001, una carta de Albright en la cual expresaba su beneplácito por haber mantenido la línea: “Con la Argentina dejando el Consejo de Seguridad de la ONU a fin de año (el 31 de diciembre de 2000), extrañaremos el enfoque sensato y la capacidad de forjar consenso de su delegación”. También estaba ella por dejar su cargo por la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, republicano.

A falta de fast track en el Congreso, de modo de cumplir con la demorada promesa de incorporar a Chile en el TLC, Clinton le dio vía libre para comprar aviones de combate y armas de grueso calibre, levantando en 1997 la prohibición fijada en 1977 por Carter. De las puertas para dentro, el guiño fue asimilado por las compañías contratistas de defensa, como Lockheed-Martin y McDonnell Douglas, grandes contribuyentes de su campaña por la reelección en 1996.

Si bien apuntaba a América latina en general, el principal beneficiario iba a ser Chile, decidido a reemplazar unidades anticuadas.

Perú y Ecuador quedaban al margen, hasta nuevo aviso, a raíz de las esquiras de su guerra fronteriza. Guerra en la cual la Argentina, signataria con Brasil, Chile y los Estados Unidos del Protocolo de Río de Janeiro, actuó como garante de la paz. Pero, al mismo tiempo, era objeto de sospechas por haber vendido armas a los ecuatorianos en medio del conflicto, ignorando el apoyo de los peruanos durante la Guerra de las Malvinas. Lo mismo sucedió con cargamentos de la Argentina que fueron a Croacia, vía Panamá, vulnerando el embargo armamentista en los Balcanes mientras Menem se jactaba de contribuir con fuerzas de paz.

En Washington, DC, no se hablaba del comienzo de una carrera armamentista, pero tampoco se negaba. El enviado especial de la Casa Blanca para América latina, Thomas McLarty, amigo de Clinton desde el jardín de infantes, dijo que confiaba en la madurez de los países, expresada en su firme respaldo a la democracia cada vez que transitó por cornisas.

Lamento boliviano

“Y este papelito costó más de 10 millones de dólares”, me dijo el coronel Edgar Prudencio, agitando un documento tamaño carta con membrete de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) y sello del Ministerio de Defensa de Bolivia. Del otro lado del escritorio, el coronel Freddy Zabala, presidente de la Mutual del Seguro Policial, asentía con la cabeza: “Mi país se ha prestado a un juego maquiavélico de las autoridades argentinas”, rubricaba en la entrevista que mantuvimos en La Paz.

El papelito en cuestión, firmado por el general de división Augusto Sánchez Valle, gerente general de Cofadena, decía concretamente: “Comunicamos a ustedes que los materiales que se adquieren a esa Dirección General de Fabricaciones Militares de la República Argentina tendrán como destino final el uso por parte de las Fuerzas Armadas de la República de Bolivia”.

Estaba fechado el 8 de enero de 1991. Y era, según Prudencio y Zabala, la clave del primero de los cuatro decretos del gobierno de Menem de venta de armas, luego trianguladas a Croacia y Ecuador. El único que involucraba a Bolivia (otros dos eran para Panamá y uno era para Venezuela) y, asimismo, el único que naufragó por un error elemental: la entrega del arsenal, valuado en 51.603.601,85 dólares, según el Decreto 1633, del 3 de septiembre de 1992, iba a ser en La Quiaca, provincia de Jujuy, Argentina. Es decir, lejos del mar.

No sirvió, finalmente, por falta de un puerto cercano, pero había sido tenido en cuenta por el fiscal Carlos Stornelli en el auto de procesamiento de Menem, detenido desde el 7 de junio de 2001 por decisión del juez federal Jorge Urso.

Detrás del decreto, sin embargo, Prudencio y Zabala, policías retirados que estaban enrolados en la Vanguardia Institucional Mariscal de Ayacucho (VIMA), habían hilvanado la supuesta trama de una operación que comenzó entre el 14 y el 15 de abril de 1990, en ocasión del cumpleaños de Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, con una visita privada de Menem a su finca Picacho, de Tarija. A ella había concurrido, también, el entonces ministro de Defensa de Bolivia, Héctor Ormachea. Ya se habían reunido en La Rioja.

Prólogo, al parecer, de la venta que no fue. Entre cuyos papeles Prudencio y Zabala (ex hombres de inteligencia que trabajaron con pares argentinos en operaciones antinarcóticos y antiterroristas, en forma respectiva) hallaron presuntas irregularidades, empezando por el pedido de las armas, consignado el 16 de enero de 1991 por el comandante general del Ejército de Bolivia, Guido Sandoval Zambrana, en una carta dirigida al ministro Ormachea, soslayando de ese modo al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Figuraban, por ejemplo, 35 cañones remolcados calibre 155 milímetros, L33 Citer, Modelo Argentino, con accesorios y herramientas, y 1500 pistolas calibre 9 x 19 milímetros, HP, modelo militar, con baqueta de limpieza y cargador; en el decreto argentino, firmado por Menem y cuatro ministros, eran 18 y 4500 unidades, respectivamente.

“Todos los trámites han sido un fraude para justificar un negociado –dijo Prudencio–. La lista inicial de materiales, enviada a Fabricaciones Militares, fue tentativa. La cambiaron después sobre la base de las existencias en la Argentina y de las posibilidades de fabricación. A tal punto que han pedido miles de cartuchos... Bolivia tiene desde hace 20 años su propia fábrica de municiones.”

En VIMA militaban oficiales retirados que, en su momento, habían colaborado con la dictadura de Hugo Bánzer. Decían que, con el mote hermanos vanguardistas, eran una agrupación secreta de la Policía. Y que, ahora, luchaban contra la corrupción. En sus filas estaba, entre otros, el coronel Germán Linares, tildado de autor del secuestro del ex presidente Hernán Siles Zuazo, en 1984, y jefe de Inteligencia en el gobierno de Paz Zamora.

No se definían como un partido político, pero plantearon ante el Congreso, el 12 de julio de 2001, un pedido de juicio de responsabilidades contra Paz Zamora, Ormachea y otros supuestos involucrados en la operación de las armas con la Argentina por traición a la patria, violación de las garantías constitucionales y malversación de fondos, entre otros delitos. “Hay un sistema corrupto de hoy por ti, mañana por mí, con el cual queremos terminar para dejar de ser un país corrupto”, dijo Prudencio.

Ormachea, radicado en Madrid, procuró desvincularse de la operación con una carta remitida el 10 de junio de 2001, tres días después de la detención de Menem, a la Embajada de Bolivia en España, reproducida por la prensa boliviana: “Debo aclarar enfáticamente que si verdaderamente tal situación ha existido, ha sido con mi total desconocimiento”, decía. Paz Zamora, a su vez, en carrera para la presidencia en las elecciones del año siguiente por el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), decía en la edición del 5 de julio del diario Los Tiempos, de Cochabamba: “No por politiquería van a querer echar la desgracia de un amigo a mi persona. Eso es una cochinateda”.

En su momento, el presidente Bánzer, sucedido por el vicepresidente Jorge Quiroga por razones de salud, también tomó distancia del asunto. Pero de él, sin efecto el decreto de Menem, había sido sustancial el certificado de uso final de las armas. Que, según Prudencio, se cotizaba

en oro en el mercado: “Las autoridades argentinas sabían que el documento no tenía valor jurídico por ser de un organismo de jerarquía menor como Cofadena, sin atribuciones para la provisión de armas al Estado. Debíó existir un decreto supremo, firmado por Paz Zamora y autorizado por el Congreso, por medio de una resolución del Ministerio de Defensa”.

El arsenal en sí, por su volumen, podría haber causado un desequilibrio en la región o una virtual carrera armamentista y, por su precio, podría haber causado un déficit a Bolivia. En uno de los documentos, fechado el 18 de marzo de 1991, el ministro Ormachea comunicaba al director de Fabricaciones Militares, Nicolás Granillo Ocampo (escrito Granadillo), que continuaba interesado en el equipamiento de sus fuerzas armadas, pero habían surgido inconvenientes. Sobre todo, por las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De ahí, aparentemente, la posibilidad de saldar el pago con la cuenta del gas que Bolivia proveía a la Argentina.

“Bolivia no iba a comprar esas armas –dijo Zabala–. No las podía pagar. Ni las necesitaba, en realidad. El quid de la cuestión era darle a Fabricaciones Militares una excusa para fabricarlas y requería para ello el certificado de uso final.”

Por él, Prudencio concluyó que se habían pagado más de 10 millones de dólares. ¿De dónde sacó la cifra? “Fácil –dijo–. En el escrito del fiscal Stornelli figura el pago de una comisión del 20 por ciento como anticipo, cosa que no se hace habitualmente. Ese fue, precisamente, el valor del papelito que percibió Bolivia, desembolsado, seguramente, por Croacia o por el Ecuador.”

And the winner is...

Las relaciones internacionales llevan el nombre de los países, pero dependen, más que todo, del contacto personal entre los jefes de Estado. De la llamada química. O de los intereses en común. Menem, íntimo con Bush, no tanto con Clinton, actuó como un converso. Como un fumador que renuncia al hábito. Pasó de un extremo al otro. De la

patilla hirsuta al peinado impecable. De la dualidad frecuente a la palabra empuñada. De Braden o Perón a Terence Todman y James Cheek. Los dos embajadores norteamericanos durante su gestión que, enfrentados entre sí, se retiraron del servicio exterior una vez que terminaron sus respectivas misiones en Buenos Aires. Y regresaron como lobbistas de compañías con inversiones en el país, o con intenciones de invertir en él, también enfrentadas entre sí. Reclamamos no hubo de un gobierno ni del otro, por más que una ley no escrita del Departamento de Estado vedara ese tipo de actividades por el plazo prudencial que imponía el decoro. Un año, digamos.

Tenían licencia para hacerlo. O un trato preferencial. Quizá como consecuencia de un gesto que Menem jamás olvidó. Habían pasado sólo dos días del último alzamiento de los carapintadas durante su gobierno, encabezado el 3 de diciembre de 1990 por Mohamed Ali Seineldín, un militar místico con preceptos religiosos medievales vinculado con el general Manuel Noriega en Panamá, y Bush zigzagueaba en una disyuntiva: ir a Buenos Aires o no. Estaba en Brasilia, pronto a partir rumbo a Montevideo. No conocía del todo al nuevo presidente de la Argentina. Pudo haber suspendido su última escala en América latina antes de regresar a Washington, DC, pero iba a ser considerado un cobarde por propios y extraños. Decidió entonces, a pesar de los reparos del servicio secreto, de la CIA y del FBI, no modificar su agenda.

Una vez en la Casa Rosada, en donde habían silbado las balas, Bush alzó el brazo de Menem: “You are the winner, Carlos”, le dijo. Menem desvió la vista hacia su intérprete. “Usted es el ganador, Carlos”, tradujo. No había entendido una palabra, pero era el comienzo de una amistad entrañable.

Todman, el embajador de la administración Bush, tenía la particularidad de ser negro en un país habituado a los tonos claros. Presentó sus cartas credenciales en 1989, poco antes de que se precipitara el gobierno de Alfonsín, y partió en 1993, poco después de que se afianzara el gobierno de Menem. “Cuando llegué, la gente me miraba con extrañeza porque quería pagar con tarjeta –me dijo, sonriente, en el bar de un hotel de Washington, DC–. No había crédito para nada. Y existía una profesión

que ya desapareció: los arbolitos parados en las esquinas.” Eran los vendedores de dólares, reciclados en 2002 como consecuencia de la crisis económica y del final de la convertibilidad.

En el Día del Servicio Exterior, en mayo de 1997, Todman recibió un premio del Departamento de Estado por su labor en la Argentina y por su aporte a la relación bilateral. Estaba radicado en Tampa, Florida, y era director de Aerolíneas Argentinas y de The Exxel Group (holding formado entonces por las compañías Galeno, Supermercados Norte, Edesar, Pizza Hut y Argencard/Mastercard). Lo acompañaba en la entrevista que mantuvimos en Washington, DC, regada de jugo de naranja y de refrescos, uno de los directivos del grupo, Eduardo Franciosi.

“Mi misión en la Argentina apuntó al entendimiento y la cooperación en aras del respeto y del beneficio mutuos –recitó Todman, casi de memoria–. Hablamos desde un comienzo de un trato de igualdad, resguardando la posición de cada uno.”

–*Pero existían serias dudas sobre el peronismo y sobre Menem.*

–En los primeros dos años había empresarios argentinos que no creían y que no hicieron los cambios. Muchos pensaban irse si ganaba Menem. Después se dieron cuenta.

–*¿Y qué me dice de los norteamericanos?*

–Si los argentinos no creían, cómo iban a creer ellos. Venían a verme y me preguntaban cómo era posible que yo confiara en que eso iba a cambiar.

–*¿Le molestó que lo llamaran El Virrey?*

–No –se puso serio–. Lo hicieron para vender más periódicos. No creían en el país, ni en su capacidad de decisión. Por mí, que dijeran lo que quisieran. Yo estaba seguro de lo que estaba haciendo.

–*¿La desactivación del Proyecto Cóndor II fue el tema más conflictivo de su gestión?*

–Los misiles, sin duda. Había una gran posibilidad de peligro si hubieran terminado de desarrollarlo. Era algo que habría perjudicado la paz mundial. Y no se trataba de tecnología argentina. Era imposible, con la existencia de eso, que se desarrollara la cooperación con los Estados Unidos en cuestiones espaciales y nucleares.

—¿En qué medida perjudicaba las relaciones?

—Atentaba contra la imagen democrática y próspera del país, algo fundamental para una relación estrecha. Hay muchas cosas que los gringos no podemos hacer. La Argentina puede jugar ahora un papel único en el continente.

—¿Era lobbista mientras estaba en la Embajada?

—¡Nooo...! —exclamó con voz de trueno.

—Su sucesor, Cheek, dijo que era parte de su misión.

—Bueno, debemos respaldar a nuestras compañías, pero no podemos elegir entre una u otra. Es normal que nuestro gobierno apoye sus intereses con tal de que no se vean perjudicadas. En un caso hipotético en el cual haya compañías italianas y españolas, por ejemplo, nosotros vamos a estar con las norteamericanas.

Cambio de hábitos

Un tímido rayo de sol atravesó nubarrones espesos en cuanto Menem, aún presidente electo, y Zulema Yoma, aún su mujer, descendieron de la limusina, el 8 de julio de 1989 por la mañana, en la explanada del Congreso de la Nación. Enfrente, en la plaza, el locutor de la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento (Fepac) invocaba al Tata Inti (dios inca del sol). Y, curiosamente, salió el sol. Parecía profético. Era la ceremonia de asunción, con cinco meses de anticipación por los quebrantos económicos del gobierno de Alfonsín. Con un lapidario 5000 por ciento de inflación anual, fomentado, en cierto modo, por especuladores vernáculos que atesoraban dólares y granos con tal de que se fuera lo antes posible.

El virtual milagro se vio afectado súbitamente por la mala fama de Menem: el Cadillac descapotado en el que iba por la Avenida de Mayo hacia la Casa Rosada, de carrocería intacta y tapizados originales, sufrió un inconveniente mecánico, advertido por una profusa humareda que desprendía el caño de escape: “Lo estamos forzando mucho —dijo un custodio, risueño—. No es un Sierra”.

Alfonsín, cabizbajo, salió por la puerta lateral de la Casa Rosada, sobre la avenida Rivadavia. Con cara de haberse olvidado algo. Las llaves, acaso. Menem iba a ser el primer presidente que jugaría fútbol, básquetbol, golf y tenis con deportistas famosos. Que correría carreras automovilísticas (y que violaría leyes de tránsito por exceso de velocidad). Que convidaría pizza con champagne a figuras del jet-set, cantantes, modelos, actrices y actores de toda laya en la residencia de Olivos. Que bailarían tango con Hillary Clinton y, apuesta de por medio con el embajador Diego Guelar, con Albright. Que sería la voz cantante de América latina, con música de Washington, DC, contra los regímenes de Saddam Hussein y de Fidel Castro... Y que, con la arrogancia propia del hombre del interior que conquista Buenos Aires, legaría un mensaje: “Lo único que puede vencerme, y no sé hasta qué punto, es la muerte”.

Pasó a ser una suerte de modelo. Que adoptó, entre otros, el presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, alias “El Loco”, depuesto por el Congreso, en febrero de 1997, por incompetencia mental. Ofendido, en una entrevista que difundió el canal norteamericano Univisión, dijo: “Es una ridiculez considerar que un hombre lesione la investidura presidencial por el simple hecho de ser auténtico. Entonces, cuando el señor Menem se manda un buen bife de chorizo o baila un tango está equivocado. Y cuando el señor Clinton toca el saxofón o besa a su mujer en la calle está equivocado. ¡No! Ese concepto de presidente acartonado está cambiando”.

Robert Potash, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts y autor de la trilogía *El Ejército y la política en la Argentina*, me dijo por teléfono en octubre de 1995: “A Menem le gusta identificarse con Perón, pero eso es algo así como un recurso simbólico para mantener el apoyo de las masas. Perón tenía una ideología. Me cuesta saber si Menem tiene una ideología. Para nosotros, en el exterior, es muy claro lo que está haciendo y, a la vez, nos resulta difícil aceptar, aunque tal vez nos equivoquemos, que haya en él una firme adherencia a las ideas de Perón”.

¿Perón cumple, Evita dignifica? Ella, no él, volvió y fue millones. Millones de dólares, cristalizando la promesa que, en realidad, jamás

formuló: “Volveré y seré millones”. Volvió a fines de 1996 con Madonna, protagonista en el cine de la ópera rock de Andrew Lloyd Webber y de Tim Rice que, al menos en los Estados Unidos, hizo más por Eva Perón que los documentales revisionistas de televisión y los libros de historia. Por más que ella tampoco hubiera dicho: “No llores por mí, Argentina”. O Don’t cry for me, Argentina.

De los labios de Evita brotó en 1952, poco antes de morir, un hilo de voz: “No quiero que la gente me olvide, Juan”. La avalancha promocional de la película de Madonna, con un costo de producción de 60 millones de dólares, comenzó con las tapas de las revistas *Vanity Fair* y *Vogue*, procurando implantar un glamoroso nuevo look modelo cuarenta, rozando los cincuenta, con faldas más allá de las rodillas, sacones, capas, sombreros, anteojos, tacos altos y demás.

Lo llamaban estilo dictador. En *Vanity Fair*, al menos. Y daban consejos para seducir a los virtuales émulos de Perón: mantener el cutis opaco con una base de la marca tal, pintarse los labios con un lápiz rojo oscuro que otorgara un aire tan sensual como retro y entornar los párpados sin descuidar las pestañas. Evita sabía vestirse. “Esta fue una mujer que usaba ropa con empuñadura, fabulosos vestidos largos, enormes joyas y fenomenales estolas de visón”, describía *The New York Times*.

La película tenía un atractivo más para ellas, destinatarias exclusivas del arsenal de ropa, de cosméticos y de cuanta cosa surgió en el medio: la presencia de Antonio Banderas, el latin lover que encarna a otro que también supo ganarse más de un suspiro: el Che Guevara.

Bloomingdale’s, de Nueva York, tuvo por un mes la exclusividad de la venta de réplicas del collar de perlas de la colección Carolee que usó Madonna. Ferragamo hizo los zapatos, siguiendo la costumbre de Salvatore Ferragamo, el fundador de la compañía, con la auténtica Evita. Ni los peluqueros, peinadores tratándose de damas, se mantuvieron al margen: procuraron ingeniárselas con las presuntas virtudes del pelo tirante que desembocara en un rodete. Lo bautizaron *A la Evita*, cual manjar a la carta. “Eva legitima el papel de activista de la mujer en la cultura machista, hallando para sí misma un camino hacia su ascenso en la política”, explicaba la revista *George*.

La presentación de la película coincidió con la aparición del disco *Tango*, de Julio Iglesias, una máquina de amasar fortunas por más que haya destruido el género, y con el éxito que ya tenía *Santa Evita*, la novela de Tomás Eloy Martínez. Coincidió, también, con el debate sobre el matrimonio de un dictador con una demagoga, coronación de un proyecto que surgió en los ochenta, poco después del estreno del musical en Londres. En los años siguientes, Oliver Stone estuvo a punto de dirigirla, y Meryl Streep y Michelle Pfeiffer estuvieron a punto de protagonizarla. Le tocó finalmente a Madonna.

Y no tuvo mejor promoción que la resistencia inicial de Menem y de varios peronistas a la filmación de un tramo en el balcón de la Casa Rosada. En un diario íntimo, conseguido el objetivo, Madonna confesó: “El Presidente es un individuo encantador”. Lo convenció con el escote, al parecer. Después dio a luz a Lourdes María, hija del cubano Carlos Manuel León, orgullo de sus compatriotas exiliados en Miami y en Manhattan. El escándalo sobrevino de inmediato: en lugar de obsequiarle un habano, le pidió que renunciara a su paternidad.

En Budapest, comodín de Buenos Aires en la película, la Arquidiócesis de Esztergom se opuso en forma terminante a la filmación de otro tramo en la Basílica de San Esteban. Que sí, que no, Madonna siguió siendo noticia. Todo ayudó, en verdad. Tanto a la película como al merchandising. Sólo faltó una Barbie con rodete. Banderas argentinas cubrían de punta a punta las vidrieras de las disquerías de los Estados Unidos. Desde un costado, como el sol, Evita, con la cara de Madonna, miraba, provocativa, hacia la nada, rodeada de sombras, mientras, debajo de ella, flameaban pancartas con el nombre de Perón.

Menem hubiera querido que llevaran su nombre. En febrero de 1998 coincidió con De la Rúa en Nueva York, pero el aún jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires debió regresar en forma precipitada por lluvias intensas que provocaron tragedias. “No había nada de qué conversar”, me dijo, antes de partir, en el vestíbulo del hotel The Drake, sobre Park Avenue, a cinco cuadras del Waldorf Astoria, albergue del Presidente y de su comitiva. Siempre numerosa.

Ambos iban a compartir el palco del Lincoln Center. Esa noche, *L'Elisir d'Amore (Elixir de Amor)*, la ópera Gaetano Donizetti, embriagó a Menem. Tanto que no se le movió el moño cuando multiplicó dos por cuatro y casi redondeó 99, re-reelección, con la bailarina Carolina Zokalsi y con la modelo Diana Custodio, esposa de Guelar, al ritmo que imponía la voz de Isabel de Sebastiani, ni cuando acompañó en algún que otro bolero a la cantante María Volonté.

Era la primera vez que The Metropolitan Opera House agasajaba a un país latinoamericano por su contribución a la cultura y a las artes. Ramón Vargas (no Díaz, entonces director técnico de River Plate, el club de fútbol favorito de Menem) reemplazó estupendamente a Luciano Pavarotti. Después hubo una comida de gala. Buen bailarín y cantante resultó Menem, según comentaron, medio sorprendidos, algunos de los norteamericanos presentes. Como McLarty: “Hey, mira qué bien lo hace”, observó, condeándome.

A su alrededor, hombres de negro y mujeres de largo procuraban imitar los pasos de Menem. Como Alicia Martínez Ríos, embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desflecando su vestido gris de gasa con encaje y cintas plateadas, al son del tango y del jazz, con el senador Juan Ramón Aguirre Lanari. O la modelo María Inés Rivero. O María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente, vestida para la ocasión por el diseñador Gino Bogani.

El menú incluyó ensalada de centollas patagónicas, carne con pimienta negra (o viceversa) y postre de chocolate con dulce de leche. Todo regado alternativamente con Trapiche Chardonnary Oak Cask 1996, Navarro Correas Cabernet Sauvignon 1992, Pol Roger Brut y salsa.

Salsa que, más efectiva que el Alka Seltzer, interpretó el Trío Latino, un piso arriba, en donde funcionarios, congresistas, empresarios, banqueros y financistas de un país y del otro bailaron hasta que las velas dejaron de arder mientras Menem, satisfecho con la velada, iba rumbo al aeropuerto Kennedy. De vuelta a casa, con el moño a media asta, distendido. Lejos del mal humor de viajes anteriores en los cuales sólo debía dar una respuesta: si Domingo Cavallo, el archienemigo del empresario postal Alfredo Yabrán, responsable del crimen del fotógrafo Cabezas, iba

a seguir siendo su ministro de Economía o no. Lejos del mal humor de los viajes posteriores, sin rubor posible por las relaciones carnales ni por la re-reelección imposible.

10. ENEMIGOS ÍNTIMOS



SETE tanques Cascabel y Urutú salieron mansamente del Regimiento de Caballería 2 (RC2), Coronel Felipe Toledo, de Cerrito, y cruzaron el puente Remanso. Otro se sumó después a la inquietante caravana. Y así sucesivamente. Llegaron a ser 14 en total. No iban a un desfile militar. De uno de ellos, el octavo en arribar al centro de Asunción, partió un proyectil. Certero. Dio en un dintel del Congreso, debajo del escudo de la República de Paraguay; dejó un boquete de ladrillos desnudos y otros agujeros más pequeños. Ráfagas de ametralladora sacudían, mientras tanto, la medianoche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de mayo de 2000. Fueron poco más de 10 horas. De terror. “Temíamos lo peor”, confesó el ministro de Defensa, Nelson Argaña.

De la escotilla de uno de los tanques emergió de pronto un soldado rebelde. Le pidió el teléfono celular a un policía del bando leal. Tcleó, nervioso, un número con el prefijo 0971 (de otro teléfono celular), y martilló: “Hola, mi general”.

El general, atónito, escuchó dos insultos consecutivos en fino guaraní y, después, mitad en guaraní, mitad en español, el crudo informe de la situación: “¡Sonamos! Ya agarraron otra vez el Cuartel Central de la Policía. Yo me voy de acá”.

El soldado le arrojó el teléfono celular al policía, cerró la escotilla y emprendió la retirada. Detrás de él marcharon los otros tanques. Era el final del golpe de Estado que no había sido. Del tercer levantamiento armado que hubo en Paraguay desde que el general Lino Oviedo se plantó el 22 de abril de 1996 frente al presidente Juan Carlos Wasmosy. Con tantas ínfulas como en el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, el 2 y el 3 de febrero de 1989. En compañía, aquella vez, de uno de los comandantes de la nueva asonada, el teniente coronel Wladimir Woroniecki.

Desde 1996, el ministro Argaña, uno de los nueve hijos del vicepresidente Luis María Argaña, asesinado el 23 de marzo de 1999, llevaba

contados entre 37 y 38 rumores de golpes. De los tres intentos recientes ninguno había sido tan cruento como el que provocó la muerte de su padre, con los asilos del presidente Raúl Cubas Grau en Brasil y de Oviedo en la Argentina como correlatos. Pero, asimismo, ninguno había estado tan cerca del caos como el último.

Eran circunstancias diferentes, según el embajador adscripto Domingo Laíno, uno de los pocos liberales que quedaba cerca del presidente Luis González Macchi: “El intento de golpe existió –me dijo–. Yo participé activamente de la defensa. Una esquirla destruyó el parabrisas de mi camioneta, dañada por el revoque que cayó del Congreso. Justifico ampliamente el estado de excepción que dictó el Gobierno. La Constitución señala que es posible decretarlo”.

El estado de excepción recogió tempestades por el arresto masivo de presuntos involucrados en la asonada. Casi 80, ligados de algún modo a Oviedo. Estaba entre ellos el abogado Hermes Rafael Saguier, apodado “Rambo”, expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por haber representado militares de dudoso respeto a la democracia en procesos judiciales. Su hermano, el ex canciller Miguel Abdón Saguier, era dirigente del partido.

En la caza de brujas también sospechaban de periodistas supuestamente implicados. Como los directores de Radio Asunción, Miguel y Adriana Fernández; el director de Radio Nanawa, Juan Carlos Bernabé, y el locutor Flaviano Martínez, ex vocero del movimiento ovidista Unión Nacional de Colorados Éticos (Unacé).

Era patético el caso de Hugo Ruiz Olazar, redactor de ABC Color y corresponsal de la Agence France-Press (AFP) y del diario Clarín, de Buenos Aires, atrincherado en la redacción del diario de Asunción ante el riesgo de ser arrestado no bien pisara la calle. Una locura.

“Lo único que hace este Gobierno es perseguir a la prensa, en especial a los medios escritos –me dijo entonces, nervioso–. Quiere amordazarlos. Son todos hijos de Stroessner. Si ésta es la democracia, que vengan a buscarme.”

Ruiz Olazar, con una antigüedad de 22 años en ABC Color, de 16 en la AFP y de seis años en Clarín, supo de la orden de captura en la cual estaba su nombre por un llamado telefónico de un colega y amigo de la agencia de noticias española EFE. Al principio no le creyó: pensó que se trataba de una broma. Pero luego recibió una copia por fax. Que decía: "... por participar en el golpe de Estado...". Optó, desde ese momento, por pernoctar en el diario antes que entregarse.

En Asunción, los diarios dominicales solían estar impresos a las tres de la tarde del día anterior. En una nota que firmaba Ruiz Olazar, en la edición del 21 de mayo de 2000, se preguntaba: "¿Intento de golpe, autogolpe o qué?". Y narraba los pormenores de una sublevación que, decía, había sido tragicómica. En especial, conjeturaba, por la reacción tardía del Gobierno, permitiendo que los tanques llegaran hasta el centro de la capital y que uno de ellos abriera fuego contra el Congreso.

Eran, según Ruiz Olazar, las dudas que se planteaba la gente, más allá de las conjeturas políticas de todo tipo en un país marcado desde siempre por el síndrome del golpe de Estado. Que llevaban a preguntarse a organizaciones gremiales y campesinas, ajenas a la feligresía de Oviedo, si el estado de excepción era una excusa para detener a sus dirigentes, de modo de entorpecer las protestas contra el plan de privatizaciones que había lanzado el gobierno de González Macchi a principios de ese mes.

"Hugo tiene la pluma militante –me decía el secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, Julio Benegas, compañero de redacción de Ruiz Olazar en ABC Color–. Es ovidista y me indigna, en lo personal, la forma en que suele apañar al movimiento ovidista. Eso es una cosa. Otra, muy diferente, es que no tenga el derecho de opinar con libertad. Estamos en contra de ello. Este es un gobierno miserable con bolsones retardatarios, pero tampoco podemos justificar a estos locos (por los ovidistas). El Estado, sin embargo, no puede intervenir en la libertad de prensa, porque ya sabemos dónde nos puede llevar. Nuestra obligación, como periodistas, es dudar siempre de todo. No podemos maquillar ahora lo que ocurrió entre el jueves y el viernes, quitándoles responsabilidad a los ovidistas que participaron."

En la noche del jueves, poco antes de la asonada, Ruiz Olazar, paraguayo, de 42 años, había estado en el mismo estadio de fútbol en el que se encontraba González Macchi. Su hijo, de nueve años, se había sumado al tumulto de chicos que se tomó fotos con el Presidente.

“A mí me tildan de oviedista, como al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo –decía Ruiz Olazar–. Ningún editor va a contratar a un politiquito como periodista. El diario estuvo clausurado entre 1984 y 1989 por la dictadura de Stroessner. Nosotros comenzamos a cuestionar a Oviedo desde la intentona golpista de 1996 (contra el ex presidente Wasmosy). También lo criticamos cuando era jefe del Ejército. Lo que tratamos de reflejar ahora es el golpe que nadie vio.”

Algo parecido había sucedido en 1983. Con Stroessner en el poder. Cerraron Radio Ñanduti por 30 días y arrestaron a un columnista de ABC Color, según relataba Elliott Abrams, secretario adjunto de Derechos Humanos del Departamento de Estado, ante dos subcomités de la Cámara de Representantes, en Washington, DC.

¿Por quién doblan las campanas?

La mezcla explosiva de reclamos sociales y económicos provocaba ahora mal humor en los sindicatos. Y derivaba en agresiones contra campesinos que decidieron cortar rutas y marchar, como los tanques, hacia Asunción. Detrás de ellos, según el Gobierno, campeaba la larga sombra de Oviedo a pesar de su breve estatura. Libre de responsabilidades en sus declaraciones públicas después de otro vano conato de golpe. Con un plan tan incierto como formar una junta militar con predominio civil, de espaldas a una comunidad internacional más atenta que nunca al gatillo democrático. Su lengua, mordaz, bramaba desde Brasil o desde algún punto de la frontera: “El pueblo se alimenta una sola vez por día. El hambre no puede esperar”. Estaba prófugo.

“En esta República de Paraguay, en donde prevalece el Estado de Derecho, nadie es más ni menos que nadie –repuso el ministro del Interior, Walter Bower, de notable parecido físico con Stroessner–. Todos estamos

sujetos a la misma Constitución. En el caso de un periodista, ustedes, como cualquiera, se preocupan primero por el pariente y después por el resto. ¿Qué pasa si alguien tiene una lista de nombres de personas que deben ser asesinadas? Empresarios, entre ellos. ¿Por quién doblan las campanas, entonces? Doblan igual. Por ustedes, por mí, por cualquier paraguayo.”

Los liberales tenían voz y voto en el Congreso. Y, con el Partido Encuentro Nacional (PEN), formaron parte, hasta el 5 de febrero de 2000, de la concertación gubernamental que había surgido como consecuencia del desbande que provocó el crimen de Argaña. Pero todo era del mismo color. Es decir, colorado. Hasta Oviedo era colorado.

El Partido Colorado, o Asociación Nacional Republicana (ANR), con más de medio siglo en el Palacio de López (sede del Gobierno), remitía indefectiblemente a las generaciones de paraguayos que habían nacido, y crecido, al amparo de Stroessner, asilado en Brasilia después de los 35 años de tiranía en los que supo poner en orden un desorden de corrupción, contrabando y otras desgracias. Con un criterio democrático, pero sin democracia, adjudicando cuotas de poder a sus adversarios. Concentró, de ese modo, la mayor parcela del poder. Todo el poder.

Stroessner, nacido el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación y formado en la Academia Militar de Asunción, derrocó el 4 de mayo de 1954 a Federico Chávez con un golpe de Estado. Y, obstinado en adueñarse del poder, asumió el mando, el 15 de agosto de ese año, por medio de elecciones en las que no hubo otro candidato que no fuera él mismo tras un breve interinato en la presidencia del arquitecto Tomás Romero Pereira. Una suerte de comodín.

El mandato de Stroessner, ratificado en ocho elecciones sucesivas tomadas como modelo por Fidel Castro en Cuba, ha sido uno de los más extensos de América latina. Nutrido con el ingreso de divisas por exportaciones de algodón y de soja, créditos internacionales (no vedados a las dictaduras), los complejos hidroeléctricos Itaipú y Yacyretá, y el comercio ilegal en las fronteras. Período en el cual varios nazis perseguidos después de la Segunda Guerra Mundial hallaron refugio en Paraguay y en el cual acumuló más de 30 procesos criminales por torturas, asesinatos y desapariciones.

Hasta que cayó, en la madrugada del 3 de febrero de 1989, en el llamado Golpe de la Candelaria. El régimen, en una mera transferencia entre militares inhibidos de otra filiación política que no fuera colorada, pasó a ser una democracia restringida después de que Oviedo, granada en mano, lograra la rendición de Stroessner. Su consuegro, Andrés Rodríguez, iba a ser confirmado el 1º mayo en elecciones tan manipuladas como las anteriores.

Eran todos discípulos de Stroessner. Inescrupulosos en el manejo del triángulo Gobierno-militares-colorados. Inescrupulosos, también, en la acumulación de riqueza en un solo sector de la población, ahondando aún más las diferencias. Actitud que no cambió años después: “Aun cuando se produjo un proceso de ajuste y liberalización del sistema económico, la estructura del Estado ha tenido muy pocas modificaciones, a tal punto que el número de funcionarios públicos, lejos de disminuir, aumentó sin que se alterara la estructura organizativa de ninguno de los ministerios”, esgrime José Nicolás Morínigo en el libro *Marzo de 1999: huellas, olvido y urgencias*.

Rodríguez, nacido el 19 de junio de 1923 en Borja, ascendido a general el 12 de diciembre de 1989 por un acuerdo del Senado, dejó en buenas manos el Gobierno. En manos coloradas, el 15 de agosto de 1993, tras la victoria de Wasmosy en las elecciones. La presión internacional, tanto de Washington, DC, como del incipiente Mercosur, había surtido efecto: exigía que los militares paraguayos se apartaran del primer plano del poder.

Pero Oviedo, designado comandante del Ejército, sentía que la Virgen de Caacupé, o Nuestra Señora de la Asunción, o Nuestra Señora del Carmen, estaba en deuda con él. En las elecciones internas del Partido Colorado, desteñidas por denuncias de fraude, había movido sus fichas con tal de que el ingeniero Wasmosy derrotara al abogado Luis María Argaña, uno de los redactores de la Constitución de 1967. Hecha para, y por, Stroessner.

Merecía un reconocimiento: el poder. Y, guiado por la impaciencia, encabezó el 22 de abril de 1996 un intento de golpe contra Wasmosy. Fue relevado y pasado a retiro dos días después. No vencido, aún venci-

do, creó el 15 de mayo la Unacé, movimiento del Partido Colorado con el cual quiso presentar batalla. O imponer su voluntad con un aparato paralelo que, fiel a la idiosincracia del pueblo paraguayo, no se apartaba del unicato político que regía los destinos del país desde 1947.

Entre el 14 de junio y el 17 de agosto de 1996, Oviedo purgó en la Prisión Militar de Itauguá. Un año después, el 7 de septiembre de 1997, ganó las elecciones internas del partido frente al agua y el aceite, Wasmosy y Argaña. Era entonces candidato a Presidente. Estaba en libertad gracias un hábeas corpus después de no presentarse ante los tribunales, pero, agotadas las instancias judiciales, quedó detenido de nuevo. Esta vez, en la Primera División de Infantería. E iba a ser condenado por el delito de rebelión a 10 años de prisión, el 9 de marzo de 1998, por el Tribunal Militar Extraordinario. Sentencia rubricada el 17 de abril por la Corte Suprema.

Quedó inhabilitado para ser candidato. Nombró en su lugar a Cubas Grau mientras el partido, entre enjuagues, recomponía la fórmula con Argaña como candidato a vicepresidente. Iban a derrotar el 10 de mayo de 1998, en medio de renovadas denuncias de fraude, al liberal Laino, candidato por la Alianza Democrática.

Cubas Grau asumió la presidencia el 15 de agosto. Dos días después firmó el Decreto 117: liberó a Oviedo, contrariando el fallo de la Corte. Argaña, un cero a la izquierda al lado de otro cero a la izquierda, no podía soslayar que su antiguo rival iba a emprender el derrotero hacia la cima, haciendo campaña en el interior del país con un campesinado del cual se había ganado la confianza, y los votos, por su dominio del guaraní en el único país del planeta con bandera doble faz (distinta de un lado y del otro) en el cual el mate frío (tereré) no es señal de desprecio y la sopa (hecha con harina de maíz) se toma con tenedor.

La última vez que Félix, el mayor de los hijos de Argaña, vio con vida a su padre fue el jueves 18 de marzo de 1999, cinco días antes del fatídico lunes 23. Lo notó entusiasmado con la posibilidad de reunir los votos necesarios entre los diputados colorados para derrocar a Cubas Grau por haber liberado a Oviedo: “Fui a la casa –me dijo–. Me hizo pasar a su escritorio. Estaba trabajando. Me preguntó cómo veía la cosa. Dificil, le dije; hay mucha violencia. En una convención del partido se habían

agarrado a sillazos. El escuchaba. Y, finalmente, me dijo: mirá, Félix, decíles a los amigos que vamos a hacer el juicio, que vamos a llegar al poder y que vamos a buscar la reconciliación”.

La familia Argaña pasó el fin de semana en una estancia de su propiedad en las afueras de Asunción. Félix tuvo que ir al balneario San Bernardino; habían entrado ladrones en su casa. Del último encuentro con su padre conservaba un llavero de la veterinaria San Luis. “Tendré que venir más seguido, porque siempre me hacés algún regalo”, recordó que le dijo antes de ir a la planta alta a saludar a su madre.

Argaña, de 66 años, amaba las armas y tenía buena puntería, pero desconfiaba de su custodia. No iba con policías, sino con personal de seguridad contratado por él mismo. El día del atentado no siguió el derrotero habitual: quería pasar por una casa de tiro del centro de Asunción, Camping 44. En la calle Sargento Gauto, casi esquina Venezuela, tres sujetos a bordo de un Fiat Tempra, de color verde musgo, interceptaron su camioneta Nissan Patrol. Descendieron dos. Y abrieron fuego. Uno con armas cortas; el otro con una escopeta. Eran las 8.52 de la mañana, según los partes oficiales. Un rato antes, quizá.

Murió Argaña. Murió, también, su guardaespaldas, Francisco Barrios. Y resultó gravemente herido el chofer, Víctor Raúl Barrios Rey, con seis balas alojadas en el cuerpo.

¿Presentía Argaña que algo malo iba a ocurrirle? Antes de salir de su casa aquella mañana se había mostrado extrañamente odioso con Ricardo, el jardinero: “Limpiá el patio –le ordenó, ceñudo–. Esta tarde vienen diputados”. Diputados a los cuales pretendía convencer de la necesidad, y de la conveniencia, de llevar hasta las últimas consecuencias el juicio político contra Cubas Grau, pautado dos semanas antes en una sesión parlamentaria.

El crimen de Argaña y la muerte de siete jóvenes que protestaban tres días después en Asunción, componentes del Marzo Paraguayo, permitieron que el senador González Macchi, presidente del Congreso, asumiera el domingo 28 de marzo de 1999, a las 8.30 de la noche, la presidencia de la República. Sin urnas ni nada de eso, sino con el aval posterior de la Corte hasta 2003 frente a un caso inédito de doble acefalía.

El presunto cerebro, o autor intelectual, del magnicidio y de la masacre hallaba albergue en la Argentina de Carlos Menem mediante un pacto sellado con letra de los Estados Unidos y música de Brasil, y Cubas Grau iba camino al exilio en Camboriú. Iba camino a ser vecino y par de Stroessner, asilado en Brasilia.

Estaba todo bajo control. Oviedo, momentáneamente al margen, podía ocuparse más de sus arreglos personales (entretejido capilar e implantes dentales) que de los desarreglos nacionales (golpes y otras yerbas). Pero burló el asilo en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 1999, la víspera de la asunción del presidente Fernando de la Rúa, o del final de la década de Menem, y empezó a operar desde la clandestinidad.

Paraguay ya no era el mismo, sin embargo. Parecía indiferente. O aburrido de más de lo mismo. La asonada de mayo de 2000 pasó inadvertida entre la gente, más pendiente del televisor que de la plaza. Era como si Oviedo y González Macchi estuvieran peleándose en otro país. O en otro mundo. Pocos vislumbraban un futuro mejor. Con ellos o sin ellos. De ahí, tal vez, que la respuesta haya sido una rara sensación de lejanía: las cúpulas en las nubes y el pueblo en el subsuelo. Y de ahí, también, que el estado de excepción, o de sitio, dictado por el Gobierno, trocara en estado de decepción. Duró hasta el 3 de junio.

En la revuelta no hubo muertos; sólo tres heridos. Los tanques, no obstante ello, llegaron al corazón de Asunción. La capital. En honor a la prudencia, el ministro Argaña no objetó que González Macchi estuviera viendo un partido de fútbol, en el cual coincidió con el periodista Ruiz Olazar, mientras tambaleaban el Gobierno y la estabilidad. Siempre relativos, como la democracia.

¡Hasta la carga final!

La teoría de la conspiración no tiene marca registrada; Stroessner contribuyó a perfeccionarla en Paraguay. Era un maestro de armar revueltas y de solucionarlos, de modo de pulverizar a la oposición. Oviedo, cara

y cruz con él, era al país lo que el embargo norteamericano era al régimen de Castro en Cuba: el culpable de todo.

En Oviedo reparaba González Macchi, cual excusa, cada vez que algo no salía bien. Actitud que hacía pensar al senador colorado Juan Carlos Galaverna, presidente del Congreso, que el Gobierno pecaba de inacción en la búsqueda. En una fuerte discusión con el ministro de Hacienda, Federico Sayas, por la política de recorte de gastos, obtuvo como respuesta: “Tengo más de 800 funcionarios ovidistas que sabotearían mi gestión”.

Galaverna, apodado “Calé”, era el segundo en la sucesión presidencial a falta de vicepresidente. Y criticaba a González Macchi, tildándolo de blandengue por no haberles pedido colaboración a sus pares de la Argentina y de Brasil mientras Oviedo deambulaba por sus fronteras: “Es motivo de felicidad encontrar en el gobierno argentino, con De la Rúa, una conducta diferente respecto de ese tema frente a la podredumbre moral de Menem”, me dijo con gravedad.

En el gobierno paraguayo procuraban seguir adelante a pesar de todo. Con un ala que prefería olvidar cuanto antes lo sucedido, de modo de no postergar sus planes, y con otra que insistía en achacarle a Oviedo algo más que el intento de golpe. Esa línea, la dura, chocaba con la impotencia: continuaba prófugo y, desde algún sitio de la frontera, dentro del país o fuera de él, hablaba cuando quería y decía lo que quería. “El Gobierno actúa de otoño: arranca hojas, pero no corta ramas ni troncos y, mucho menos, se ocupa de la raíz”, observó Galaverna por una radio de Asunción.

El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Stephen McFarland, al frente de la misión diplomática en ausencia de un embajador designado por Washington, DC, como sucedía al mismo tiempo en Buenos Aires, había dicho que se trataba de un asunto doméstico de Paraguay. Pero no dudaba de la mano escondida detrás del conato de golpe: “Fue Oviedo”, afirmó después de una reunión con el ministro Bower. Y desvirtuó la posibilidad de que se hubiera tratado de un autogolpe: “Me parece un argumento que no tiene pies ni cabeza”.

El operativo del Movimiento Patriótico Teniente Coronel Fulgencio Yegros, tan clandestino como sus cabecillas, se llamaba Aratirí. Y, según los documentos incautados por el Gobierno, tenía como fechas posibles entre el domingo 14 y el viernes 19 de mayo. Lo ejecutaron a último momento, después de la visita a Asunción de De la Rúa, el lunes 15.

Entre sus objetivos figuraban el Congreso, González Macchi, la Fuerza Aérea y el Comando de Infantería de Marina. En ese orden. Por error, o por ironía, el nombre de Félix Argaña estaba escrito Feliz. Al pie de uno de los documentos, como broche, figuraba una arenga que pretendía ser definitiva: “¡Hasta la carga final! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el general Lino César Oviedo Silva!”. Disolver el Congreso y la Corte era la consigna. Y puntualizaba los pasos que iban a seguir: “Bloquear la ciudad; presionar demás unidades para lograr sus adhesiones; insistir en la adhesión de sindicalistas y dirigentes campesinos”.

En sus cálculos pesaba la posibilidad de que De la Rúa, en su breve estancia en Asunción, dejara entrever diferencias sobre la legitimidad democrática del gobierno de González Macchi. Era una presunción descabellada desde el momento en que el presidente argentino pretendía recomponer la relación bilateral, maltrecha por el cortocircuito que ocasionó el asilo de Oviedo, y la fuga, durante la gestión de Menem.

Después de un almuerzo con empresarios paraguayos, De la Rúa dijo en una rueda de prensa: “Cuanto más se desatienden los problemas sociales, más graves se vuelven. En la Argentina hay problemas sociales, como en toda la región, pero no hay peligro de estallidos. Recibí el Gobierno con 10 millones de personas en franco nivel de pobreza y con un 14 por ciento de desempleados. Y eso constituye un enorme desafío que estamos afrontando entre la Nación y las provincias, luchando para que haya crecimiento con equidad”. En ese momento, precisamente, comenzaba un corte de rutas en la provincia de Jujuy.

El plan de los rebeldes que esa misma semana iban a jaquear Asunción consistía en nombrar una junta militar que iba a convocar a elecciones en 90 días. En ese lapso iban a ser removidos los congresistas y los jueces, de modo de liberar de escollos el camino del virtual retorno de Oviedo a la escena política paraguaya.

Fue Peter Romero, cabeza de América latina en el Departamento de Estado, quien definió con mayor crudeza, y certeza, el dilema de Paraguay: comparó al Estado con un buque y al Gobierno con un capitán. Y dijo, sin rodeos, que el mejor capitán no podía con el peor buque. Ergo: el mejor gobierno no podía con el peor Estado.

Estado que acusó otro golpe, por más que no hubiera acertado en el mentón, en medio del acoso al que se veía sometido el gobierno de González Macchi por un fantasma como Oviedo que, desde las sombras, movía los hilos del país. Al extremo de llevarlo al borde del caos, entre gallos y medianoche, con un cañonazo perdido más dañino que un misil teledirigido. No dio en cualquier edificio, sino en el Congreso. Símbolo de un sistema. Del mejor que supimos conseguir. Vapuleado con rumores frecuentes de insurrecciones armadas.

En 1989 cayó una dictadura vitalicia en Paraguay, no el autoritarismo. Poco cambió al filo del siglo XXI. Seguía siendo la democracia de un solo hombre. De *Yo el Supremo*, de Augusto Roa Bastos: “Una buena milicia es la única capaz de remediar estos males. No vamos a perpetuar castas militares. No quiero parásitos acuadrillados que sólo sirven a los fines de atacar / conquistar al vecino; encadenar / esclavizar a los propios ciudadanos en su conjunto”. Faltaba el hombre, sin embargo. El líder. Oviedo era el único en carrera. Los otros estaban en el cementerio. Como Rodríguez, muerto el 21 de abril de 1997 en los Estados Unidos, y Argaña. O en el exilio, como Stroessner y Cubas Grau. O fuera de juego, como Wasmosy.

El buque dependía de un puñado de capitanes que intentaba aferrarse al timón, sorteando motines a bordo mientras veía venir el iceberg. O iba hacia él. Como el Titanic. Entre oleajes de orfandad, bamboleándose en los dos extremos históricos del continente más incontinente del mundo. Con gobiernos fuertes con sesgos autoritarios, por un lado, y sectores sociales con plegarias no atendidas, por el otro. La fortaleza de uno anclaba en la debilidad de los otros.

La democracia de un solo hombre se nutría de la olla de un solo partido, el Colorado, con más de cinco décadas de hegemonía en el poder durante los cuales había empotrado su clientela política en la administra-

ción pública. Caso único en el Cono Sur. Sólo comparable con las siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México. Partidos que, como el justicialismo en la Argentina, no han sido concebidos para estar en el llano.

En Paraguay, como en México, no había diferencia entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el partido. Se retroalimentaban. Unos a los otros. Razón de la resistencia al cambio. Y del dilema que planteó Romero: quiso decir con tono diplomático que el buque estaba hundándose. Con reclamos que iban más allá del valor de la democracia, como en casi toda América latina. La región con peor distribución del ingreso y con el índice más alto de criminalidad, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La violencia metió su cola endemoniada en el Marzo Paraguayo. Causa del caos. Y de la sensación de impunidad. Como sucedió en México después del crimen de Luis Donaldo Colosio, candidato a Presidente por el PRI. Lo mataron el mismo día que a Argaña: el 23 de marzo, pero de 1994.

El asesinato de Argaña, nacido el 9 de octubre de 1932 en Asunción, abanderado desde joven de la causa de Stroessner como congresista y como presidente de la Corte, coincidió con una marcha de la Federación Nacional Campesina (FNC) hacia el Congreso en demanda de la condonación de deudas impagas. Los campesinos acampaban en el ex Seminario Metropolitano y, en medio del alboroto, adhirieron a las protestas de los llamados jóvenes por la democracia. Las balas de los francotiradores identificados con Oviedo, contrarrestadas vanamente con piedras y trozos de maderas, alcanzaron a varios de ellos. Siete murieron y más de 100 resultaron heridos.

La convulsión duró hasta el sábado 27 de marzo: el Senado escuchó la defensa de Cubas Grau, esgrimida por sus abogados, y quedó en resolver su destitución entre el lunes y el miércoles siguientes. Pero Oviedo recuperó la libertad el domingo y, poco después, el Presidente renunció. Juró entonces González Macchi, alias "Lucho", nacido el 13 de diciembre de 1947 en Asunción, abogado, casado en terceras nupcias con Susana Galli (Miss Paraguay 1978), congresista desde 1993, jugador de básquetbol en su juventud,

enrolado en el Movimiento de Reconciliación Colorada. Fiel al legado de Stroessner, como Argaña.

Los oviedistas, a la defensiva, insinuaban que el magnicidio había sido un complot. Entre los detenidos por la asonada de mayo de 2000, Woroniecki se definía a sí mismo como un oficial en servicio activo de las Fuerzas Armadas que no podía apoyar a ningún político mientras el abogado Saguier instaba a la gente a votar el 13 de agosto por el candidato liberal a vicepresidente, Julio César Franco, apodado “Yoyito”.

Woroniecki participó con Oviedo y otros militares del derrocamiento de Stroessner. A la mañana del día siguiente debían trasladarlo a La Caballería, cerca de Asunción, pero no podía subir a la camioneta por una dolencia en una pierna. Lo ayudó Woroniceki y recibió una amenaza del coronel Gustavo Stroessner, hijo del dictador: “Oí, porante (está bien), Woroniecki, alguna vez me pagará caro lo que hizo”.

Diez años después, Woroniecki estuvo en prisión durante siete meses y medio por el crimen de Argaña. Su superior, el general brigadier Santiago Quiñonez Imas, jefe de Estado Mayor del I Cuerpo de Ejército, confirmó que permaneció entre las 7 y las 11.30 de la mañana del día del atentado en su unidad, salvándolo de culpa y cargo, pero, después, en la asonada de mayo de 2000, estaba en La Caballería. Y, sin atenuantes, fue detenido otra vez.

“El caso Oviedo en Paraguay es tan difícil como el caso Alfredo Yabrán en la Argentina –me dijo el ministro Nelson Argaña–. Estos tipos son capaces de comprar todo tipo de cosas. Y se hace difícil la detención. Este es un criminal de jóvenes, del doctor Luis María Argaña... Es el responsable de este golpe. Yabrán terminó dándose un escopetazo en la boca por la presión de los periodistas después de la muerte de José Luis Cabezas. Oviedo es un mafioso, un ladrón, un asesino que tiene muchos medios para comprar información. No queremos que termine dándose un escopetazo.”

Cortinas de humo

En diciembre de 1999, después de la fuga de Oviedo de Buenos Aires, la familia Argaña puso precio a su cabeza: 100.000 dólares. Recompensa que el prófugo más mediático y expuesto de la historia consideró irrisoria: no valía menos de un millón o dos millones de dólares, según él. Cotización corregida y aumentada en virtud del entretejido, seguramente.

Oviedo cometió un error en la primera entrevista que concedió desde la clandestinidad: invitó al periodista de la cadena norteamericana CBS Telenoticias con el que hablaba por su teléfono satelital a ir, no a venir, a Paraguay. Dijo “vaya” en lugar de “venga”. Carne de suspicacias. Que mereció una reacción desconcertante de González Macchi, calificado por él de presidente trucho (ilegal): “No sé, m’hijo –se encogió de hombros–. La verdad es que no sé qué podemos hacer”. Fue una señal de debilidad. Que Félix Argaña quiso disimular: “A Oviedo lo protege una mafia del Mercosur en la que no están implicados los gobiernos”, espetó.

Pero Oviedo, cada vez más presente a pesar de estar ausente, insistía desde su teléfono satelital: “Si me van a capturar, cosa que dificulto, me van a encontrar aquí, en Paraguay. No me van a encontrar en la Argentina ni en otro país (...) Desde el 9 de diciembre de 1999, a las seis de la mañana, no me he movido de Paraguay (...) Cómo me van a encontrar estos inútiles si no mandan ni por ellos mismos (...) Si el caradura de González Macchi tiene un poco de vergüenza, tiene que presentar su renuncia”.

Por el crimen de Argaña, el juez Jorge Bogarín condenó a 25 años de prisión al mayor Reinaldo Servín, considerado el instigador por haber financiado la operación, y a Constantino Rodas, considerado uno de los coautores por haber actuado como campana y por haber sido el último propietario del Fiat Tempra en el que iban los asesinos. El autor confeso, Pablo Vera Esteche, recibió una pena menor, de 20 años de prisión, por haber revelado la identidad de sus cómplices: Luis Rojas y Fidencio Vega Barrios.

Ambos, capturados en febrero de 2000 en la Argentina, escaparon de la alcaldía del Departamento Central de Policía con un argentino, Daniel Agustín Cabrera, alias “Tractor”, poniendo una vez más en ridículo

lo la seguridad del país después de la huida de Oviedo. Salieron por la puerta principal de la calle Moreno 1550, de Buenos Aires, a las 0.40 del domingo 17 de septiembre. La única arma que tenían, antes de reducir a los guardias, era un cuchillo marca Tramontina.

En el recinto, de nueve celdas, estaban detenidos, también, tres policías de la provincia de Buenos Aires, Diego Barreda, Mario Bareiro y Bautista Huici, procesados por su supuesta participación en la voladura de la mutual israelí AMIA, el 18 de julio de 1994. Uno de ellos, Bareiro, alertó a la policía: “Se les escaparon tres presos de la alcaidía del Departamento –dijo después de teclear el 101 (Comando Radioeléctrico)–. Hay un policía y un detenido heridos. Está todo lleno de sangre. Nosotros no nos fuimos. Estamos acá”. Fue la primera fuga desde que se inauguró el edificio, en 1888.

¿Hubo complicidad de la Policía o de las autoridades, como pensó en un primer momento Félix Argaña, indignado? Esa noche, curiosamente, no había cuatro guardias en la alcaidía, como era usual, sino apenas dos. El escándalo, no menor, derivó en reuniones en la residencia de Olivos entre el presidente De la Rúa, el vicepresidente Carlos Alvarez, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y los ministros del Interior, Federico Storani, y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, de modo de hallar una fórmula razonable para explicar lo inexplicable a sus pares paraguayos. A Rojas lo apresaron, tiempo después, en Ciudad del Este.

Las sentencias contra los asesinos de Argaña, dictadas el 24 de octubre de 2000, cerraron provisionalmente un círculo, pero no llegaron a atar los cabos sueltos. Vera Esteche declaró que el precio del magnicidio era de 300.000 dólares. Que habían recibido 120.000 como anticipo y que iban a cobrar el resto una vez que Oviedo asumiera el poder. Entre las pruebas aparecieron llamadas cruzadas entre los teléfonos celulares del mayor Servín, de filiación oviedista, y de los otros acusados. En un principio, un tal Gumercindo Aguilar dijo que había sido planeado en Pedro Juan Caballero, al norte de Paraguay, y que estaban involucrados el diputado Conrado Pappalardo y el gobernador de Amambay, Víctor Hugo Paniagua, finalmente sobreseídos.

Ya había sido arrestado Oviedo. Fue el 11 de junio de 2000 en Foz de Iguazú, Brasil, frente al río Paraná, en donde alquilaba un departamento a nombre de otra persona. En ese momento tenía el pelo largo y bigotes. Lo acompañaba un ramillete de guardaespaldas. Llevaba un documento falso y un revólver cargado. Pero no ofreció resistencia. Ni atinó a usar alguno de sus 10 teléfonos portátiles. De la Rúa, en cuanto supo, suspiró, aliviado: no estaba en la Argentina, afortunadamente.

Lo trasladaron a Brasilia, en donde debió compartir una celda estrecha con dos detenidos. Como un preso común. Su abogado, Luis Eduardo Roriz, argumentó que corría peligro de muerte. El juez Mauricio Correa, a cargo de la extradición, autorizó la mudanza a una individual. Pero recibió de inmediato nuevas quejas de un prisionero que demostraba ser cada vez más exigente: no tenía baño privado ni agua caliente.

Hasta el 24 de mayo, cinco días después del conato de golpe, el gobierno de Paraguay no había pedido formalmente a Brasil ni a la Argentina que detuvieran a Oviedo. La demora de casi seis meses después de la fuga se debió, más que todo, a resistencias entre los colaboradores de González Macchi. La captura demandó apenas 18 días. Y coincidió con un momento delicado en Asunción, con los sindicatos y los campesinos en pie de protesta.

El escape de Oviedo de la Argentina, después de 256 días de asilo, originó un gran revuelo. A tal punto que González Macchi se rehusó a comer con Menem, en Buenos Aires, el día de la asunción de De la Rúa. “Pregúntele a Menem dónde está Oviedo”, dijo, turbado. El ministro del Interior, Federico Storani, se había enterado el día anterior por boca de su antecesor, Carlos Corach: “¿Viste cómo nos cagó?”, exclamó por teléfono.

Desde el 30 de septiembre de 1999, Oviedo residía en una estancia de Tierra del Fuego, a 28 kilómetros de la ciudad de Río Grande; pagaba un alquiler mensual de 9000 dólares. Antes había estado en el haras La Madruga, del empresario Arnaldo Martinenghi, amigo de Menem, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y en una quinta de Moreno, provincia de Buenos Aires, que alquilaba por 6000 dólares mensuales.

El pretexto del viaje a Buenos Aires, el lunes 6 de diciembre, era un chequeo médico, por más que el implante capilar no corriera riesgo alguno después de los primeros 15 días si quedaba expuesto al frío patagónico. Oviedo iba a volver el jueves 9 a Tierra del Fuego, pero faltó a la cita en el Aeroparque metropolitano. Abordó una avioneta con matrícula boliviana, rumbo a La Paz, en un aeródromo de la provincia de Buenos Aires. En su plan de vuelo tenía prevista una escala en Ciudad del Este, en donde descendió.

Días después, versiones antojadizas arrojaban exactitud escasa, o nula, sobre su azaroso paradero: estaba en la frontera argentina, en Uruguay, en Brasil y, al mismo tiempo, en varios pueblos de Paraguay. Estaba en todos lados y en ninguno. La avioneta con la que había burlado el asilo, cuyo número de matrícula parecía más difícil de obtener que una línea de teléfono en la Argentina en los tiempos del monopolio estatal ENTel, había aterrizado varias veces en distintas pistas. O, con insuperable autonomía de vuelo, continuaba en el aire. Hasta llegaron a inferir en Asunción que Oviedo estaba en una estancia de Las Lomitas, Formosa, esperando una inminente visita de Menem. Y, también, que pernoctaba en una estancia de la provincia de Corrientes, propiedad de la familia Romero Feris.

Era demasiada casualidad que huyera de la Argentina un día antes de que cayera el telón de la era Menem. O demasiada desprolijidad. O demasiada negligencia. En especial, en momentos en los cuales Paraguay vivía prácticamente al son de Oviedo. Con el Ejército en estado de alerta, acuartelado, y con una crisis que prometía convulsiones. Con rumores frecuentes de golpe. Con sequía y recesión. Con malestares en el Gobierno y con el Gobierno. Con el regreso de los muertos vivos como amenaza permanente.

Oviedo aún no había escapado de la Argentina, pero ya hablaba de más. Hizo declaraciones de tono político. Prohibidas para un asilado. Como sucedió, a la inversa, con Perón, refugiado en el Paraguay de Stroessner. Menem, en medio de una discusión entre el canciller Guido Di Tella (a favor de su permanencia) y el ministro Corach (a favor de expulsarlo vía Panamá, Venezuela o Alemania), evaluó la posibilidad de hallarle refugio en Venezuela, pero, desalentado por la respuesta negativa del

presidente Hugo Chávez, se inclinó por dejarlo en el país hasta que el gobierno paraguayo se retractara de sus críticas.

Ocho militares habían sido detenidos en Paraguay a raíz de un complot vinculado con Oviedo. Dejaron trascender que no estaba en Tierra del Fuego, sino en los alrededores de Asunción, y que, de un momento a otro, iba a dar un golpe. El definitivo.

“No nos consta la existencia de un golpe de Estado, pero reconocemos que existen ciertos grupos que tienen como objetivo provocar situaciones que alteren el orden público y lograr la inestabilidad del proceso democrático –me dijo González Macchi, conciliador, en un pequeño despacho de la residencia presidencial Mburuvicha Róga (Casa del Jefe, en guaraní)–. Si lo hacen, serán aplicadas las medidas permitidas por el ordenamiento jurídico del Estado. Todo esto que ha ocurrido da indicios de un complot para un Día D. Es un complot que se ha advertido por algunos que han sido vistos o apalabrados para un Día D, un golpe de Estado, y la vuelta de Oviedo.”

El general Desconcierto y el mayor Sigilo

En casi todo Paraguay, la gente habla más guaraní que español. Y Oviedo tenía la virtud de ser uno de los pocos políticos con carisma, si no el único, que dominaba esa lengua. Así como el alemán, después de haber vivido, entre 1969 y 1979, en la República Federal de Alemania. En el interior del país, mientras gobernaba Cubas Grau, iba casa por casa y comía con los campesinos. El trato mano a mano, de igual a igual, era su fuerte, mostrándose como un benefactor.

No provenía de una familia de rancia estirpe: su padre, el mayor Ernesto Oviedo, había combatido en la guerra contra Bolivia, de 1932 a 1935, y en la Revolución de 1947; su madre, Eva Silva, era maestra. Oviedo nació el 23 de septiembre de 1943 en Juan de Mena, departamento de La Cordillera. A los 12 años, su familia se trasladó a Asunción. Estudió en el Colegio Nacional y, dos años después, se enroló en el Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, del

cual egresó, con el grado de subteniente de caballería, el 13 de diciembre de 1962. Tres décadas iban a pasar hasta que, el 14 de mayo de 1992, llegó ser general de división. Con la hazaña, en su foja de servicios, de haber tumbado a Stroessner.

“La lucha de nuestro movimiento es ética, moral y cristiana, bajo el lema Dios, patria y familia”, dijo en una ocasión de la Unacé. Prueba de que era tan amplio como incoherente: “El buen colorado debe ser gaucho y los hombres deben hacer el sacrificio de tener muchas mujeres”, dijo en otra ocasión.

En Tierra del Fuego, antes de partir para nunca más volver, dejó una carta a nombre de un panadero con el cual había trabado amistad: “Las circunstancias hacen que deba continuar mi lucha desde otras latitudes, ratificando que no claudicaré esta noble, patriótica y cristiana causa”, decía, sentimental. No habría sido la única carta que dejó. En otra, presuntamente dirigida a Menem, expresaba su agradecimiento por la comprensión y por la hospitalidad mientras presidía el país.

En vísperas de la asunción de De la Rúa, o del retiro de Menem, mandaban el general Desconcierto y el mayor Sigilo. Un general con predicamento en el Partido Colorado, eje entre el gobierno paraguayo y las Fuerzas Armadas, evaluaba tres hipótesis por las cuales se había producido la insubordinación de algunos de sus pares: un intento presidencial de deshacerse de oficiales con buena calificación, una depuración entre ellos mismos o la reacción de oviedistas disconformes con la reestructuración interna como consecuencia de la reforma del Estado. Fue, en todo caso, un golpe dentro del golpe. O del estado de golpe, y de complot, en el que vivía el país desde el asesinato de Argaña.

Patente desde el momento en que Bader Rachid, presidente del Partido Colorado, amenazó con una guerra civil si perdía, el 13 de agosto de 2000, el candidato oficialista, Félix Argaña, o ganaba su adversario liberal, Franco, las elecciones para vicepresidente de Paraguay.

De ahí, una encrucijada: “Votar por Argaña es votar por el regreso de Stroessner y votar por Franco es votar por el regreso de Oviedo”, resumían voces de alrededor de 30 años de edad en un pub de Asunción. La encrucijada llevaba a pensar a muchos que el voto

en sí no tenía valor. O, en todo caso, preferían que fuera nulo, o fraguado adrede, antes de inclinarse por uno, odiado y amado por quienes notaban que gran parte de sus vidas había sido marcada por él, o por el otro, deudor de la justicia paraguaya.

El escepticismo partía también de la premisa de que la gente no había elegido al Presidente, sólo ratificado por la Corte. Circunstancia, o cuestión de legitimidad, que presagiaba que Argaña o Franco iba a disponer su retiro efectivo y, de ese modo, uno de ellos iba a ascender al escalón más alto del Gobierno. Tanto uno como el otro juraban que no pensaban desplazarlo.

Al estilo de los diarios norteamericanos en vísperas de las elecciones, ABC Color rubricó en un editorial su respaldo a Franco y otro de circulación masiva, Noticias, reprodujo un diálogo telefónico entre Julio Mera Figueroa, ex ministro del Interior de Menem, y Daniel Isa, jefe de la campaña liberal, salteños los dos. La cinta había sido obtenida con métodos non sanctos. Una vulgar pinchadura. El artículo, titulado “Se comprueba conexión entre menemistas, Oviedo y la campaña de Franco”, dejaba entrever que Menem tenía un plan de retorno al poder para 2003. Y decía, por ejemplo: “Se portó bien la vieja, ¿no?”.

La vieja, según Isa, era Raquel Marín, la mujer de Oviedo, molesta con el mote que había usado Mera Figueroa. “No le gustó nada”, me dijo, confesando, a su vez, la ligazón con la gente de Franco. De la cual también daba pistas, en forma implícita, el editorial del ABC Color: “Nosotros votamos por Yoyito Franco porque optamos por la moral y el deseo de cambio. El candidato colorado representa a la más pura cepa del wasmo-argañonismo, una casta muy conocida por el pueblo paraguayo que se ha caracterizado, entre otras cosas, por perseguir con saña a sus adversarios políticos, especialmente a los de su propio partido”. Como Oviedo.

En un acto que se desarrollaba en un mercado municipal de Asunción. Oviedo, en campaña, lanzaba rayos y centellas desde un modesto escenario montado sobre una carretilla. Debió interrumpir el discurso por un llamado telefónico. De urgencia. Era Menem, aún presidente de la Argentina. “¡Feliz cumpleaños, Lino!”, escuchó del otro lado de la línea. Lino, conmovido, comunicó la novedad a la gente. Y la gente,

conmovida por contagio, devolvió la gentileza con hurras cuyos ecos retumbaron en Buenos Aires.

Wasmosy estaba al tanto de la relación de Oviedo, su archirrival, con Menem. Jamás le perdonó a Menem que, después de una visita a su par de Paraguay, Rodríguez, dijera, el 3 de abril de 1990, en Buenos Aires: “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. Propuso entonces la paralización de la obra por seis meses, de modo de sanearla. Cosa que nunca sucedió. Wasmosy, luego presidente de la República, era en ese momento el titular del ente binacional que provee energía eléctrica a ambos países.

A Yacyretá llegaron a llamarla BMW. No por la automotriz alemana, sino por las siglas de quienes debían ejercer su control: Bush, Menem y Wasmosy. Pero Wasmosy, con la observación mordaz de Menem trabada en la nuez, iba a cobrársela una vez que llegó al Palacio de López: “La Argentina es 10 veces más corrupta que Paraguay”, dijo. La ofensa cosechó réplicas de ministros argentinos. Como Corach: “No se deben juzgar expresiones de un presidente extranjero, aunque, de cualquier manera, la opinión pública ya tenga formado un criterio comparativo entre la Argentina y Paraguay”.

El escándalo iba in crescendo. Hubo llamados telefónicos de Wasmosy a Menem. Y una visita de apuro a la residencia de Olivos: “No te pido una, te pido mil disculpas”, dijo Wasmosy. Todo concluyó con un abrazo fraternal. De aliados, o de compromiso, no de amigos.

Las siglas BMW iban a reaparecer en el horizonte paraguayo. No por Yacyretá, en marzo de 2001, sino por el auto oficial en el cual iba González Macchi, un modelo blindado, de color gris plata, fabricado en 1997, con un precio original de 120.000 dólares. Era mau, sinónimo de trucho en la Argentina. O, en el lenguaje universal, sinónimo de ilegal.

“Al estado de paz perpetua sucederá el estado de guerra permanente –dice *Yo el Supremo*–. No atacaremos a nadie. No toleraremos que nadie nos ataque. El Paraguay será invencible mientras se mantenga cerrado compactamente sobre el núcleo de su propia fuerza. Mas, en saliéndose de este núcleo, su poder decrecerá en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en que se

dispersen sus fuerzas. He aquí la ley de gravitación ejerciéndose en forma horizontal. Newton no ve todos los días caer la manzana. Tacha manzana. Pon naranja. Tampoco sirve. ¿Quién conoce aquí a Newton?”

Menem, más conocido que Newton, había mordido una manzana ajena, retribuyendo con el asilo a Oviedo los favores que Perón recibió de Stroessner después de ser derrocado, en septiembre de 1955, por la Revolución Libertadora. No fueron muchos. Halló refugio, primero, en la residencia del embajador paraguayo en Buenos Aires, Juan Ramón Chaves. Y después, por razones de seguridad, en la cañonera Paraguay, anclada en Puerto Nuevo por tareas de mantenimiento. En nueve días obtuvo el salvoconducto del gobierno del general Eduardo Lonardi. Viajó el 3 de octubre a Asunción.

Lo condujo Leo Nowak, piloto paraguayo que murió años después, haciendo piruetas en un helicóptero, en presencia de Stroessner. Perón vivió durante dos semanas en la casa del empresario argentino Ricardo Gayol, sobre la avenida Mariscal López, cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Luego se trasladó a una quinta del caudillo colorado Rigoberto Caballero en Villa Rica, a 160 kilómetros de Asunción.

Pero, como Oviedo en la Argentina, hizo declaraciones de tono político. En su caso, a un corresponsal de la agencia Associated Press que terminó siendo acosado por la Policía. Resultaron agraviantes para el gobierno argentino. De facto. Stroessner, a diferencia de Menem, no estaba dispuesto a arriesgarse por un amigo, o lo que fuera, en desgracia. La parodia de un ataque terrorista contra la quinta de Villa Rica, con disparos de fusil, de ametralladora y de mortero, apresuró la salida de Perón de Paraguay, el 2 de noviembre de 1955, a menos de un mes de su arribo, rumbo a la Nicaragua de Anastasio Somoza.

Por rara paradoja, el hijo menor de Somoza, “Tachito”, expulsado el 19 de julio de 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o la Revolución Sandinista, huyó a Miami, pero el gobierno de Jimmy Carter se opuso a concederle la residencia. Lo recibió Stroessner. Vivió con su amante, Dinorah Sampson, y algunos de sus asistentes en Asun-

ción. Poco, en realidad. Fue asesinado, el 17 de septiembre de 1980, por un comando integrado por guerrilleros argentinos.

Franco, como vicepresidente, no tenía facultades para torcer el rumbo del país. Pero, al igual que entre Cubas Grau y Argaña, iban a pesar las diferencias de criterios. Profundizadas ahora por la legitimidad de un vicepresidente elegido, ausente con aviso en las reuniones de gabinete, y por la ilegitimidad de un presidente no elegido. Y por la presencia de Oviedo, la sombra de ambos gobiernos, al amparo de Menem mientras pudo.

En la Plaza de los Héroes, de Asunción, no había héroes, sino lustrabotas. Atrapados sin salida se llamaban a sí mismos los colorados disconformes con González Macchi, pero, al mismo tiempo, renuentes a ceder el poder a Franco. Señal, dos años después del magnicidio de Argaña, de que continuaban mandando el general Desconcierto y el mayor Sigilo. O un militar de baja estatura con arrogancia de César, su segundo nombre. Que tampoco era garantía para el soldado rebelde que, en la madrugada del 19 de mayo de 2000, impotente en la escotilla del tanque, sólo atinó a balbucear en guaraní: “Yo me voy de acá”.

11. SUEÑO CON SERPIENTES

POCO antes de la asunción de Fernando de la Rúa en la Argentina, Hugo Chávez evaluó el pedido de un amigo, Carlos Menem: que le concediera asilo político a Lino Oviedo, de formación militar como él, de deformación golpista como él, de cuna humilde como él, de horizontes amplios como él. Sin límites, siempre al límite, como él. Muchos rasgos en común.

Sobre todo, con un presidente de lengua filosa y léxico necrofilico que estaba embarcado hasta el cuello en una empresa delicada: echar la última palada sobre las tumbas de los partidos tradicionales de Venezuela, la Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y el Comité Político Electoral Independiente (Copei), socialcristiano. Víctimas, los llamados adecos y copeyanos, del monstruo con aspecto mestizo que ellos mismos habían creado después de cuatro décadas de desgobierno y corrupción.

Chávez, pendiente de la reforma constitucional que coronó el 15 de diciembre de 1999 con una victoria abrumadora en un referéndum en el que participó menos de la mitad de la gente, no podía hacerse cargo de un camarada en desgracia, prófugo de la justicia de Paraguay, con el que no compartía más que el parecido con Perón y la simpatía con Menem.

A Oviedo, recluido en la Argentina desde el 28 de marzo de 1999, cinco días después del asesinato del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, tampoco le interesaba ir a Venezuela. Quedaba lejos y era caluroso. Circunstancias que, a diferencia de Tierra del Fuego, favorecían el injerto capilar y dental que se había hecho en Buenos Aires, pero que, en definitiva, podían perjudicar su afán de volver a su país y ser, o hacer, o preservar, millones. De votos, según él. Prefirió fugarse entonces, el 9 de diciembre de 1999, en la víspera del traspaso del poder de Menem a De la Rúa, dejando en ridículo la seguridad del país que le había concedido asilo.

No podía soslayar Chávez, sin embargo, el pedido de Menem. Un amigo fiel cuyos gestos habían tenido más valor que precio antes de

que comenzara su gestión, el 2 de febrero de 1999. Al día siguiente fue el único presidente invitado con el que desayunó en Caracas, en donde el embajador argentino, Juan Carlos Viglione, acreditado un año antes de las elecciones, se jactaba de su trato mano a mano con el nuevo presidente y de tener siempre abiertas las puertas del Palacio de Miraflores. Era un operador político.

Y Menem, a su vez, era capaz de aconsejarle a Chávez, con tono paternal, que fuera más medido en sus expresiones. Que tirara de la soga, pero que advirtiera el punto en el cual podía tensarse y romperse. Que jugara en los extremos con tal de imponer su voluntad en los primeros tiempos, como él, pero que, no obstante ello, conservara el centro, el equilibrio, de modo de no trastabillar.

A Menem, defensor de causas imposibles, le debía la mediación con Bill Clinton que había emprendido el 11 de enero de 1999 en ocasión de la última visita como jefe de Estado que hizo a Washington, DC. Le había hablado maravillas de Chávez, tildándolo de joven emprendedor que merecía una oportunidad por más que tuviera el ominoso antecedente de golpista. Lo tenía al tanto de todo el entonces secretario general de la Presidencia de la Argentina, Alberto Kohan: “Oye, Hugo, Carlos está hablando de ti”, supo por teléfono mientras comía en París. “Dale las gracias y mándale saludos, le respondí”, me contó él mismo, tiempo después.

Dos años y dos meses estuvo Chávez en prisión por el conato de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez; era, desde 1991, comandante del Batallón de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, de Cuartel Páez, Maracay. Tres años antes, casi en la misma fecha, entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, Oviedo derrocaba la dictadura vitalicia de Alfredo Stroessner en Paraguay. Pero, a pesar de negarlo, iba a reincidir el 22 de abril de 1996 contra el gobierno democrático de Juan Carlos Wasmosy, razón de la condena de 10 años de cárcel que adeudaba en su país. En el momento del pedido de Menem estaba más comprometido aún por las sospechas de la autoría intelectual de los asesinatos del vicepresidente Argaña, el 23 de marzo de 1999, y de siete jóvenes que expresaban su adhesión a la democracia, tres días después, frente al Congreso, en Asunción.

Uno, Chávez, estaba en la cúspide; el otro, Oviedo, estaba a mitad del camino del abismo; el mediador, Menem, estaba en retirada. ¿Eran, en realidad, Chávez y Oviedo, tal para cual? Que los dos fueran militares formados y golpistas deformados no implicaba que provinieran de la misma escuela. En Venezuela no pesaba, como en Paraguay, una clase dominante, o una élite, entre los oficiales y los suboficiales del Ejército.

Pero no por mera coincidencia, en escenarios diametralmente opuestos, uno, Chávez, en campaña por el referéndum, y el otro, Oviedo, en la clandestinidad desde que había burlado en Buenos Aires el asilo rubricado por los gobiernos de la Argentina, de Brasil y de los Estados Unidos, le achacaron a la oligarquía de sus respectivos países el origen de todos los males. Fue más que una coincidencia. Demostró que eran parecidos y diferentes a la vez.

Tan diferentes que Chávez, otro defensor de causas imposibles, reforzó en la IX Cumbre Iberoamericana, realizada en noviembre de 1999 en La Habana, su amistad con Fidel Castro, aunque estuviera en las antípodas de Menem. Ya había aceptado officiar de mediador entre el gobierno colombiano y la guerrilla, fueran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Actitud que irritó a su vecino y par Andrés Pastrana y que, al igual que su buena relación con Muammar Khadafy y con Saddam Hussein, provocó sarpullidos en Washington, DC.

“La relación amor-odio ocurre con todos los vecinos y con todos los matrimonios –me dijo el primer canciller de su gobierno, José Vicente Rangel, luego vicepresidente, empeñado en descolombianizar la agenda de Chávez–. Tenemos 2219 kilómetros de frontera común con Colombia que acumulan todas las expresiones del delito. Estamos condenados a pagar un tributo a esa circunstancia. Nos cuesta mucho el conflicto. Somos el país más afectado del mundo por la violencia colombiana.”

Oviedo no iba a agregar nada en Venezuela, salvo que Chávez, como Menem, quisiera apostar a un futuro incierto. Su partido era otro. Ya había dejado en claro, en medio de las lluvias torrenciales que usó como excusa de la baja afluencia de votantes en el referéndum, que sólo

los peces muertos iban con la corriente. En la nueva Constitución constaban las bases de su poder, como el voto militar (antes vedado) y la reelección presidencial inmediata.

Vana era la cita de Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Lo cual era curioso: el poder absoluto, aspiración que siempre habían abrigado Menem y Oviedo, prometía ser, en la versión Chávez, o chavista, el único antídoto contra la corrupción. Corrupción que, en Paraguay, el gobierno de Luis González Macchi, formado de apuro tras el magnicidio de Argaña, decía que intentaba combatir mientras demoraba la reforma del Estado, encarcelaba militares y perseguía periodistas que hacían correr rumores sobre la presencia de un prófugo muy particular, con teléfonos satelitales y varias comodidades, cerca de Asunción.

Podía ser el caldo de cultivo de otro Chávez. Que, populista al fin, no repartía arepa (torta de maíz) entre los pobres, pero dominaba su lengua, el guaraní, y compartía sus mesas mientras recorría el interior del país antes de ser detenido, el 11 de junio de 2000, en Foz de Iguazú, al sur de Brasil, en la triple frontera con Paraguay y la Argentina, y de ser alojado en una celda especial de la Policía Militar en Brasilia.

Igual no significaba lo mismo. Chávez era tan populista como Perón, tan contrario al sistema como Alberto Fujimori y tan vanidoso como Menem. Con Perón compartía los gestos y la historia de un militar golpista que llegaba a la presidencia por las vías constitucionales, luego alteradas a su antojo. Con Fujimori compartía la fórmula de la disolución del Congreso y de la Corte Suprema con tal de imponer su voluntad. Con Menem, y con los otros también, compartía la egolatría.

Eran las tres fuentes con las cuales había pavimentado el camino hacia la abrumadora victoria que obtuvo en las elecciones del 25 de julio de 1999 para la Asamblea Nacional Constituyente, llamada soberanísima por él. Tan soberanísima que les iba a ahorrar el trabajo a los elegidos: ya tenía redactada la Constitución en ciernes de la República Bolivariana de Venezuela. Nombre pomposo y, al mismo tiempo, fundacional.

Supuestamente prestos sus oídos, durante un tiempo, a las teorías de Norberto Ceresole, argentino, que habría influido decisivamente

en él con el libro *Tecnología Militar y Estrategia Militar Nacional*. Y que, una vez en la presidencia, consideró que su modelo no era antidemocrático, sino posdemocrático.

Resumió su certeza en cuatro puntos:

1. Se diferencia del modelo democrático (tanto liberal como neoliberal) porque, dentro de la orden popular (mandato), está implícita –con claridad meridiana– la idea de que el poder debe permanecer concentrado, unificado y centralizado (el pueblo elige una persona que es automáticamente proyectada al plano de la metapolítica y no una idea o una institución).
2. Se diferencia de todas las formas de socialismo real conocidas durante el siglo XX, porque ni la ideología ni el partido juegan roles dogmáticos, ni siquiera significativos. En todos los casos conocidos, los partidos comunistas llegan al poder por guerra civil interior, guerra internacional o invasión militar.
3. Se diferencia de los caudillismos tradicionales o conservadores, porque el mandato u orden popular que transforma a un líder militar en un dirigente nacional con proyecciones internacionales fue expresado no sólo democráticamente, sino, además, con un sentido determinado: conservación de la cultura (independencia nacional), pero transformación de la estructura (social, económica y moral).
4. Es distinto de los nacionalismos europeos de la primera posguerra: ni partido, ni ideología cumplen funciones motoras dentro del modelo, aunque aquellos partidos nacionalistas hayan llegado al poder por decisiones originalmente democráticas (voto popular).

La consigna de Chávez, abrazada en especial por los pobres, clase de la cual provienen los militares venezolanos a diferencia de los argentinos y de los chilenos, era salir de la crisis económica, terminar con la corrupción y refundar el país, de modo de no esperar una década, o dos períodos presidenciales, para ser reelegido. Como sucedió con sus antecesores: Pérez (de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993) y Rafael Caldera (de 1969 a 1974 y de 1994 a 1999). Detrás del proyecto nacional, con una omnipo-

tencia rayana en la amenaza permanente contra la oposición, campeaba su proyecto personal.

“Tenemos el deber y la obligación morales de demostrar al mundo que un grupito de conservadores no puede detener esta hermosa revolución social y política encarnada por el pueblo de Bolívar, un pueblo que quiere democracia verdadera, justicia y paz”, rubricaba un editorial de El Correo del Presidente, su periódico.

Infundía temor, por más que no se apartara de las reglas democráticas: la base de su poder eran los mismos militares que habían atentado en 1992 contra el gobierno de Pérez, ascendidos o reincorporados sin la venia del Congreso, y que, con fondos reservados de la Presidencia, reparaban edificios públicos, o repartían comida, o dictaban clases de cultura castrense en los colegios.

La nueva Constitución, fácil de imponer en un ámbito en el que contaba con la mayoría absoluta de los constituyentes, hablaba de democracia participativa y protagónica, de democracia directa y de poder ciudadano. Muy latinoamericano todo, con el folklore de un populismo más cercano a los nacionalismos de la segunda mitad del siglo XX que a la globalización, y con la tendencia, tan obsesiva como peligrosa, de concentrar las decisiones en un solo puño: Chávez, todopoderoso, se comparaba con Cristo, porque, según él, expulsó a los políticos corruptos del templo de la democracia.

En Washington, DC, había reparos por sus antecedentes golpistas. De algún modo, más allá del favor de Menem, iba a vencer algunos prejuicios: Venezuela proveía petróleo a los Estados Unidos. Su otro puntal fuera de Caracas, Castro, era, curiosamente, la antítesis de Menem. Chávez, definido a sí mismo como un nacionalista de izquierda, se manejaba más por el afecto que por la ideología. Con Pastrana, por ejemplo, prevalecían los recelos que caracterizaban los vínculos entre venezolanos y colombianos desde la Colonia.

Con Menem, en cambio, hubo química de inmediato, según un diplomático venezolano acreditado en Buenos Aires. Chévere, como si se conocieran de toda la vida. Primaron, también, los intereses: la Argentina, con inversiones globales que rondaban los 3000 millones de dóla-

res, era el segundo inversor en el sector energético de Venezuela, después de los Estados Unidos. Tenía, también, intereses en petróleo y en telecomunicaciones.

Días después de la victoria en las elecciones de 1998, Chávez emprendió una gira por Brasil, Colombia y la Argentina. El 16 de diciembre, día que estuvo por primera vez con Menem en la residencia de Olivos, presentó sus cartas credenciales el embajador de Venezuela en Buenos Aires, Edmundo González Urrutia. Era su segunda vez en el mismo destino: había ejercido el cargo entre septiembre de 1983 y diciembre de 1986. Terminó en Caracas, en forma precipitada, después del conato de golpe de Estado contra Chávez, el 11 de abril de 2002, por haber dicho que el presidente provisional, y efímero, Pedro Carmona, titular de Fedecámaras, era un demócrata que iba a convocar a elecciones.

Ese día, casualmente, estaba reunida la Organización de Estados Americanos (OEA). Que se apresuró a condenar la ruptura del orden constitucional, previendo más el llamado inmediato a elecciones que un eventual retorno de Chávez. Titubearon los Estados Unidos, señal de que no condenaban el desenlace.

Por la tarde, después de tres días de protestas en Caracas, el Gobierno interrumpió la señal de los seis canales de televisión locales (administrado uno de ellos por el Estado) para transmitir declaraciones de Chávez. Los canales privados dividieron en dos la pantalla, de modo de continuar con la cobertura de las manifestaciones. El correlato fue la orden de clausura, acusándolos de conspirar contra él.

La mayoría de los diarios de Caracas no publicó la edición del 14 de abril; temían ser atacados por simpatizantes de Chávez. El Nacional y El Universal, de hecho, habían evacuado sus redacciones el día anterior. Del Gobierno habían recibido una calificación poco decorosa: escuálidos. Sinónimo de blandos, al parecer. Nada mejoró durante el interinato de Carmona: TV Catia, TV Caricuao, Radio Perola y Radio Catia Libre denunciaron que la Policía había allanado sus instalaciones y que algunos de sus trabajadores habían sido detenidos; el canal de televisión estatal, VTV, fue sacado del aire el 11 de abril por la noche, ocupado por fuerzas militares golpistas; lo recuperaron simpatizantes del Gobierno dos días después.

Chávez tenía claro que los ejes de su política exterior iban a ser Brasil, por su poderío regional, y Colombia, por su cercanía. Pero, atado a los lazos entre Simón Bolívar y José de San Martín, también prestaba especial importancia a la Argentina, de modo que Venezuela fuera una bisagra entre el Pacto Andino y el Mercosur. De la primera reunión, retribuida por Menem en su asunción, participaron, por el lado argentino, Kohan y el canciller Guido Di Tella. “Hablaron, básicamente, de la relación bilateral y de la integración”, resumió González Urrutia.

En casa, el capital político de Chávez, de 45 años cuando se hizo cargo de la presidencia, era la juventud de la población. La mitad de los 23 millones de venezolanos tenía menos de 18 años. El 80 por ciento de la otra mitad era mayor de 35. Ambos segmentos hallaron en él un oído atento a sus reclamos; cara y cruz con su antecesor, Caldera, de 82 años.

Pero pesaron desde el comienzo sus actitudes destempladas. La gente se enamoró de alguien que creyó propio, pero que, asimismo, no podía, ni quería, despojarse de su pasado, cual seguro contra todo riesgo. Jugó a su favor el aumento del precio del petróleo. Hecho que le permitió disimular la falta de inversiones y el medio millón de nuevos desempleados que hubo en los primeros ocho meses de 1999.

“Ojalá que sea otro Menem”, aventuró, a mediados de abril de 1999, Michael Skol, embajador norteamericano en Caracas entre 1990 y 1993. Es decir, mientras Chávez hacía de las suyas en 1992. Ya había ido un poco más allá, sin embargo: lanzó un programa de televisión (De frente con el Presidente), otro de radio (Aló, Presidente), el periódico El Correo del Presidente y un afiche en el cual su rostro aparecía montado sobre el cuerpo musculoso de Rambo (fusil en mano, Presidente).

Skol, ex subsecretario de Estado para América latina, agregó: “La palabra Menem ha entrado en el vocabulario de Washington, DC. En el Departamento de Estado temíamos que aplicara una política vieja, antiyanqui. Teníamos la imagen de los años cuarenta y cincuenta. La Argentina está mejor que hace 10 años. Del mismo modo se habla de Chávez, pero, en su caso, es muy temprano para decir si es bueno o malo”.

A los ojos de los norteamericanos, Menem provenía de un partido populista, pero, finalmente, mejoró la relación con los Estados Uni-

dos y con otros países, despojándose del legado de Perón. Chávez prefirió ser el arquitecto de su propio destino, aislándose cada vez más. Tanto hacia fuera como hacia dentro. Explícito el rechazo hacia él de Fedecámaras, la federación de gremios empresariales que encabezó la campaña contra la nueva Constitución en el referéndum del 15 de diciembre de 1999. En alianza con medios gráficos, como los dos periódicos tradicionales de mayor predicamento, El Nacional y El Universal, y los canales privados de televisión. Turbados por la amenaza potencial que representaba el artículo constitucional referido al derecho ciudadano a la información veraz. Curioso derecho, previo a la restricción de la libertad de expresión.

En lugar de ganarlos para su causa, Chávez no hizo más que vapulearlos frente a las pantallas. Cautivas, en el horario central, con más audiencia en algunos períodos que las telenovelas nocturnas. Actitud hostil que, puertas afuera, apuntaló con declaraciones intempestivas, e impiadosas, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, reforzadas con fotos de niños muertos en Afganistán como consecuencia de los bombardeos ordenados por George W. Bush contra los escondites de Osama bin Laden y de su banda Al-Qaeda.

Poco después, en enero de 2002, ataques contra El Nacional y otros medios de comunicación provocaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previas denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de otras organizaciones comprometidas con la libertad de expresión, que derivaron en medidas cautelares con tal de protegerlos. Detrás de la violencia, al parecer, estaban los llamados círculos bolivarianos, alentados por el Gobierno con tal de defender a ultranza la revolución de Chávez.

En el medio de la pelea, los hombres de prensa tenían exhibir sus credenciales. Un fotógrafo, Jorge Ibraín Tortoza Cruz, murió de un disparo en la revuelta de abril. Que cobró 50 víctimas. Otro fotógrafo, Jorge Recio, quedó paralizado del pecho hacia abajo, blanco de un francotirador. Que hubiera libertad de expresión no implicaba que hubiera garantías para ejercerla, fomentando la autocensura. Por miedo. Moneda corriente en Venezuela: en 1992, según el Committee to Protect Journalists

(CPJ), con sede en Nueva York, por lo menos cinco medios de comunicación fueron allanados, censurados o impedidos de circular, confiscados sus ejemplares por autoridades gubernamentales.

El oráculo de Chávez

Desde el balcón del Palacio de Miraflores, con su segunda mujer, Marisabel, en el papel de Evita, Chávez parecía Perón. Desde su sillón, con la prédica constante contra la dictadura de los partidos tradicionales, Chávez parecía Fujimori. Desde la cancha de béisbol, con ropa deportiva, Chávez parecía Menem.

Cada noche hojeaba un libro de bolsillo que voceaban a diario los buhoneros (vendedores ambulantes) en los alrededores de la Plaza Bolívar, de Caracas. Confiado en el azar, abría una página de *El Oráculo del Guerrero*, de Lucas Estrella, y, por ejemplo, leía: “Si combates en armonía con el Universo, no puedes sino vencer. Si combates porque es la única manera de recuperar el equilibrio perdido, no puedes sino vencer. Si combates porque has agotado todas las otras alternativas, no puedes sino vencer”.

Y actuaba en consecuencia. Era algo más que cultura oriental al servicio de su causa. Era el trasfondo de una retórica agresiva que afloraba cada vez que se defendía con encono de enemigos agazapados. O de fantasmas. Hablaba el idioma de la gente. E interpretaba su malestar. Sus ansias de venganza. Como Oviedo, en cierto modo.

“La crisis de un país se presenta cuando algo está muriendo y no termina de morir y, al mismo tiempo, cuando algo está naciendo y no termina de nacer –me dijo en su despacho de Miraflores–. Me llaman golpista, pero no soy eso. En Venezuela está muriendo un tiempo, un modelo político, y está naciendo algo que puja. Gracias a Dios, el parto está casi consumado. El muchachito está ahí, llorando.”

El muchachito era la nueva Constitución. O la nueva República. De chico, recordó, quería ser lanzador zurdo de las Grandes Ligas de béisbol. Pero ahora, el 7 de septiembre de 1999, su obsesión era otra:

“Decía Gramsci que lo que tiene que nacer no va a terminar de nacer hasta que no esté muerto lo que tiene que morir –insistió con gravedad–. La crisis no termina hasta que muera lo que tiene que morir y nazca lo que tiene que nacer”.

–¿Por qué apela a signos funerarios, como la moribunda, por la Constitución de 1961, o aquello de los muertos que entierran a sus muertos, por la derrota de la oposición en las elecciones?

–También hablo de parto. Mira, así como hablo de la muerte, también hablo de la vida, del amor, de la esperanza, de la reconstrucción del país, de la Quinta República que va a nacer, pero, por supuesto, está presente la muerte. No es la muerte física de nadie, sino el final de una época. Sobre la muerte siempre triunfa la vida.

–Pero no cae bien fuera de Venezuela.

–Eso tiene que ver con mi origen, de donde provengo yo. Y, por otra parte, con la estrategia de unos adversarios que perdieron el apoyo del pueblo, pero mantienen el poder económico y la capacidad de moverse en el exterior. De Venezuela desapareció el equivalente a 15 planes Marshall. Llegué una madrugada cerca de aquí –señaló una ventana– y eso quedó estigmatizado como un golpe.

–¿Volvería a hacerlo?

–En las mismas circunstancias, sí. Veíamos cómo estaba masacrándose un pueblo. Nosotros dejamos una vida más o menos cómoda, como esa canción argentina, ese tango: “Adiós, muchachos, compañeros de mi vida...” –desafinamos a dúo–. Fue como dejar la patria querida, el mango que uno sembró con sus hijos chiquitos soñando comérselo algún día. Lo más terrible fue que el pueblo salió a protestar con razón, por haber sido robado durante 30 años, y terminó masacrado. Carlos Andrés Pérez dio la orden, sentado en esta misma silla, de que salieran a pararlo. Tú debes recordarlo...

–El Caracazo, el 27 de febrero de 1989.

–Aún no se sabe cuántos muertos hubo. Yo vi con estos ojos niños mutilados, atravesados por balas de fusiles y ametralladoras. Niños, mujeres, ancianos... Quien no conozca los hechos dirá que Chávez es un golpista. Y yo les respondería como Jesús: “Perdónalos, no saben

lo que hacen”. Hay una campaña hegeliana de repetir mentiras en la que se han gastado millones de dólares en penetración en los medios de comunicación. La primera vez que fui a Buenos Aires, en 1994, invitado por empresarios que tienen inversiones aquí, dijeron que me reuní con Pinochet, con Videla, con Galtieri... A los pocos meses fui a La Habana a dar una conferencia sobre Bolívar y Castro, a quien no conocía, me recibió con un abrazo en el aeropuerto. El entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, llegó al extremo de enviarle un informe al presidente Caldera en el que me acusaba de entrenar tropas de la guerrilla y de matar gente.

—¿Siente rencor?

—No, compasión y tristeza. Yo, gracias a Dios, pasé dos años y dos meses en prisión. Y le doy gracias a Dios porque creo que perdí la capacidad de odiar, de sentir envidia, de tener rencor o algún deseo de venganza.

—¿Qué papel desempeñan los militares en tareas comunitarias?

—Por primera vez en la historia venezolana, al menos en el siglo XX, las Fuerzas Armadas que fueron autorizadas para masacrar al pueblo salieron con hospitales de campaña, dotados de herramientas para hacer operaciones en la calle. Mira, hermano, salía un domingo del programa de radio y vino una señora con un niño de siete años que no podía caminar. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que tenía despegado el fémur de la cadera. A los ocho días estaba operado, y ya camina. Yo pensé que había sufrido un accidente. No pregunté en ese momento. El niño nació así. Fue un parto difícil. Lo jalaron de una piernita y se le desprendió.

El hombre y su circunstancia

Fue una entrevista tardía. Rara. A una hora desusada para un presidente: las 10 de la noche. En la hora y media que duró, matizada con dos rondas de café, Chávez, con traje de corte italiano blanco tiza, camisa celeste y corbata azul a rayas, señalaba de tanto en tanto a ese señor. Era Bolívar, erguido en una pintura enorme a mis espaldas, en un despacho

amplio en el cual entraba y salía el edecán. Un capitán del Ejército, de no más de 40 años, que prefería ser llamado licenciado.

“Los hombres no hacemos historia –dijo Chávez–. Es una concepción muy bolivariana. No estoy juntando poder, poder y poder. El poder estuvo concentrado. Aquí arriba –desvía la vista hacia el techo– construyeron una suite para la amante del presidente Pérez. En la casona vivía la esposa. El proceso venezolano fue una cultura de dos partidos que, en el fondo, era una sociedad cómplice. Ahora comenzó la desconcentración del poder. ¿Es normal que en un país con hambre y miseria un gobernador construya una gallera (espacio para riñas de gallos) con aire acondicionado? Había presidentes que firmaban presupuestos sin saber para qué eran.”

–¿Es cierto que deja vacía la silla a su derecha en honor a Bolívar?

–¿Cómo vas a pensar eso? –se mostró indignado–. Después de la rebelión de 1992 empezó a funcionar un equipo de psicólogos que inventaba cosas. Una de ellas era que estaba loco y que estaba poniéndome peor en la cárcel. Hasta regaron en los cuarteles la versión de que tenía un retrato de Bolívar, que me paraba frente a él y que le daba el parte todos los días. Y contaron que mi esposa usaba ropas de la época de la Independencia. Es inaudito.

–¿Le molesta que lo comparen con Perón?

–Pienso que Perón tuvo su tiempo. Creo mucho en eso del hombre y su circunstancia, de Ortega y Gasset.

–Bueno, usted usa el Balcón del Pueblo, como Perón usaba el balcón de la Casa Rosada, y su mujer se emocionó cuando la cantante española Paloma San Basilio, en un recital en Caracas, le dedicó especialmente “No llores por mí, Argentina”.

–Lo del balcón es porque me da angustia salir cuando se junta mucha gente abajo. Saludo desde arriba por eso, pero no me preocupa parecerme a alguien ni voy a comportarme para parecerme a alguien.

–¿Le preocupa ser llamado nacionalista y populista?

–Soy nacionalista, pero no chauvinista. Soy un nacionalista bolivariano. Bolívar, al igual que San Martín, decía que la patria para

nosotros es América. Soy nacionalista en función de los valores de la Nación. Para mí, la Nación no es Venezuela. La Argentina es la misma Nación. Colombia es la misma Nación. Los nacionalismos, en tanto no sean negadores y perversos, son sanos en el mundo globalizado de hoy para mantener nuestras fuerzas internas, nuestras tradiciones, y no ser absorbidos por la aldea global. Populismo, en cambio, es cuando alguien, a nombre del pueblo y hablando por el pueblo, le clava la daga al pueblo, como hizo la Acción Democrática. Es una degeneración de la democracia.

–¿Usted es de izquierda o de derecha?

–Soy de los dos. Creo que hubo un muro ideológico y que se derribó. Hablamos aquí, en Venezuela, de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora. Reivindicamos nuestra propia esencia en lugar de importar modelos.

–¿Cómo puede llevarse bien con Menem y con Castro a la vez?

–Son buenos amigos –rió–. Cada uno de ellos tiene su compromiso político y una visión del mundo que respeto. No estoy de acuerdo con un ciento por ciento de sus cosas, como seguramente ellos conmigo, pero cada uno vive su tiempo y su circunstancia.

La pesadilla hegemónica

Juan Carlos de España iba a su encuentro, desenvuelto. Chávez, todavía más afecto a la venia que al apretón de manos, se detuvo, vacilante, y recibió, de pronto, un puñetazo en el estómago. Suave, en realidad. “Así que a ti te gustan los golpes...”, bromeó el rey. Fue antes de asumir la presidencia, en una gira por Europa durante la cual, como antes por América latina, procuró pulir su imagen. Desmitificarse a sí mismo.

El resentimiento de Chávez contra la AD y el Copei guardaba relación con los dos años y dos meses que había purgado en prisión por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 1992, pero, archivado, incluso exaltado, estaba ligado a un proyecto que excedía a Venezuela. En especial, después de las derrotas apabullantes que sufrió

ron los partidos tradicionales en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 y las posteriores. E, incluso, la derrota que sufrió Francisco Arias Cárdenas, un hombre de su riñón, militar como él, golpista como él, que pretendió disputarle el poder en las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2000, convocadas como consecuencia de la reforma constitucional.

“Así es que empuña tu sable y entra en batalla –sugiere *El Oráculo del Guerrero*–. Luego de vencer, retírate en silencio. Nada hay que festejar. La muerte siempre trae lágrimas aparejadas. Lágrimas por el que algún día fue tu hermano y debió morir a manos tuyas porque el destino así lo quiso.”

El destino quiso que la oposición, desmembrada, sin acción ni reacción, pagara un precio altísimo por haber adelantado un mes las elecciones legislativas de 1998, de modo de conservar una cuota de poder. Obtuvo la mayoría de número en el Congreso, pero el Congreso, como tal, dejó de funcionar desde que quedó subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente, dominada en un 92 por ciento por la gente de Chávez. En principio, no debía legislar, sino redactar, o aprobar, la nueva Constitución.

Pero se arrogó esas facultades y puso en duda la vigencia del Estado de Derecho mientras los congresistas, en un patético manotazo de ahogado, trataban saltar la verja del Congreso para entrar en el edificio, el 27 de agosto de 1999, forcejeando con efectivos de la Guardia Nacional y con simpatizantes del Movimiento Quinta República (MVR). Todo ello legitimado por la posterior falta de quórum en la versión reducida de ambas cámaras, llamada Comisión Delegada. Ausencia de garantías de seguridad, adujeron, convalidando la pesadilla hegemónica.

“Este grupo de patoteros tiene 40 años engañando al país, llevando la violencia, quitándole al pueblo sus derechos, destrozando a Venezuela –exclamaba Chávez, con su vozarrón radiofónico, en una de sus arengas habituales–. Aunque no quieren irse, el pueblo está echándolos.”

En la Asamblea, 124 de los 131 constituyentes, con diferencias entre sí, respondían al Polo Patriótico. A Chávez. La presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, decidió renunciar (suicidarse, según sus

palabras) antes de asistir al asesinato de la Justicia. Eran los coletazos de la transición de un orden gastado a uno incierto. O, según Chávez, de una revolución pacífica y democrática.

Aconseja *El Oráculo del Guerrero*: “Una vez avanzar y otra retroceder. Disgrega a tu adversario, atácalo mientras inspire. Avasállalo, no le des tiempo de reordenar sus ejércitos. Cambia permanentemente tus estrategias. Ataca a lo alto y luego a lo bajo y después al medio. Varía el ritmo de tus ataques. Una vez rápido y otra vez lento. Una vez lento y otra vez inmóvil”.

Obró en consecuencia con la Asamblea, dictando emergencias. Primero, la judicial; a fondo. Después, la legislativa; también a fondo. Después, la ejecutiva, con amenaza de cortes de cabezas de gobernadores y de alcaldes. Y, por último, la sindical.

Chávez admitía que administraba un Estado quebrado. Pero el quiebre no era sólo económico, sino, también, institucional. Asistía a un parto con dolor, como decía, mientras prevalecían los frecuentes roces con Pastrana, temeroso de que entablara diálogos con la guerrilla colombiana y de que, en caso de convencerla de que depusiera las armas, formara un partido político con crédito venezolano.

“La salida es el diálogo –dijo Chávez–. Me he pronunciado por ello. Es el momento de decir basta a la guerra fratricida y sangrienta. Creo que podemos ayudar, pero eso depende de Colombia. Si los sectores en crisis aceptan nuestra ayuda, hay que dársela. Si ellos creen que Caracas puede ser la sede de las conversaciones, estamos a la orden. Así como el presidente Pastrana tiene la potestad de decir que no en su territorio, yo tengo la potestad de decir que sí aquí. Nadie puede prohibirme que reciba en casa a quien quiera.”

–¿Pesan los recelos entre venezolanos y colombianos?

–Yo amo a Colombia. Cuando oigo el solo nombre me resuena el sueño de la integración de este mundo nuestro. El que trajo el nombre de Colombia fue ese señor que está ahí –señala la pintura de Bolívar–. Hay que reconocer el coraje de Pastrana de haber ido a conversar con Marulanda (Tirofijo, líder de las FARC) a pesar de las presiones internas que, me imagino, debe de tener de sectores reaccionarios.

—¿Le ve salida al conflicto?

—Mira, yo boxeaba cuando era cadete. En el boxeo hace falta un árbitro. Ves que uno de los boxeadores está muriéndose y no quiere salir. Le tienen que tirar la toalla. Imagínate una guerra. Yo estaba aquí, con un comando de casi 10.000 hombres dispersos en todo el país, con una misión, un objetivo, una idea, y tuve que rendirme. Fueron 12 horas, gracias a Dios, no 50 años. El esfuerzo no tiene que ser de intervención, sino de paz. Debemos oponernos a una escalada bélica. Afortunadamente, hay sectores de las FARC y del ELN que quieren la paz. Del lado del Gobierno, Pastrana quiere la paz. Lo he visto en sus ojos y en la angustia que tiene.

O inventamos o erramos

De Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, aprendió: “O inventamos o erramos”. Pues, con sus programas de televisión y de radio, y con su periódico, Chávez reinventó el populismo y el nacionalismo latinoamericanos de mediados del siglo XX con un mensaje llano y, a la vez, ambiguo: despotricar contra el neoliberalismo salvaje y mofarse de los banqueros, pero, a la vez, prometer la apertura de la economía. La oposición, mientras tanto, comenzaba a soñar con serpientes y a plantearse un dilema: ser chavista y bolivariana o ser traidora y corrupta. Ser o no ser.

Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Barinas. De la Academia Militar de Venezuela egresó, con el grado de subteniente, el 5 de julio de 1975. Entre 1989 y 1990 cursó la maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, pero dejó pendiente la tesis. Escribió, asimismo, cuentos, poesías y obras teatrales. En su momento tuvo contactos con carapintadas argentinos de la talla de Mohamed Alí Seineldín y de Aldo Rico que, según él, simpatizaban con su movimiento. “Sólo recibí saludos”, se atajó, procurando tomar prudente distancia de ellos.

Es como dice *El Oráculo del Guerrero*: “La vida del guerrero es ardua”. Dice, también, que el guerrero debe ir en busca del demonio:

“Persíguelo día y noche. Aprende a reconocer sus huellas, sus olores, sus marcas. Y cuando lo encuentres, pártelo en dos de un solo sablazo. Sin ira, pero con la fuerza del trueno. Obsérvalo cuidadosamente. Cerciórate de que esté muerto. Luego regresa a la superficie”.

En la superficie, Chávez controlaba todo. Hasta puso hombres de su confianza al frente de Petróleos de Venezuela (Pdvs), la columna vertebral del país, politizando posiciones ejecutivas. De la compañía, un Estado dentro del Estado, según su definición, dependía casi el 50 por ciento de los ingresos del presupuesto de Venezuela y más del 70 por ciento de las divisas que recibía el país.

“¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta?”, observó el contituyente David De Lima, del Movimiento al Socialismo (MAS), de tendencia socialdemócrata, aliado del MVR. Procuraba justificar de ese modo el poder de Chávez.

Poder que no justificaba, por ejemplo, la diputada Liliana Hernández (AD), presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso, atrincherada en un edificio cercano: “Ha sido Terminator, chico –me dijo–. En poco más de medio año, Chávez ha destruido todo, ha usurpado los poderes constitucionales y ha creado este estado de inestabilidad jurídica que compromete seriamente al país. La figura aquí es usurpación de autoridad. Yo soy diputada y no puedo entrar en el Congreso mientras van de visita hasta los turistas que se toman fotos”.

Rangel, entonces canciller, repuso: “Se trata fundamentalmente de restablecer la democracia que, en Venezuela, se congeló por la incapacidad de un sector de dirigentes que no entendió la necesidad de cambiar. Cabalgaron sobre la ola de la rutina. Los partidos políticos requieren escuelas de formación, con mucho debate y confrontación de ideas. Si no, se cupulizan. El aparato reemplaza al partido, se aísla del ciudadano y genera perversiones. La misma institución parlamentaria pierde toda representatividad”.

Fue la explicación que Chávez improvisó con Clinton en la reunión que mantuvo, finalmente, el 22 de septiembre de 1999, gracias, en parte, a la gestión de Menem. En ella, y ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó la reforma constitu-

cional, ratificó su compromiso con la democracia y abogó por la paz en Colombia. Y, según sus allegados, se sintió comprendido. Tan comprendido que, a pesar de haberle negado asilo a Oviedo, Chávez de Arabia, como se llamó a sí mismo, nutrió aún más su amistad con Castro y visitó en agosto del año siguiente a Hussein y a Khadafy, socios del club del petróleo, enemigos de los Estados Unidos.

EPÍLOGO CERTIFICADO

R

EVUELTO el avispero por las irrefutables imágenes del horror captadas en la cárcel de Abu Ghraib, el Pentágono no tenía más coartada que admitir su responsabilidad. Lo hizo Donald Rumsfeld en el Capitolio. A medias, en realidad. Casi al mismo tiempo, no él, sino su vocero, Lawrence di Rita, se apresuró a tildar de “descabellado, conspiratorio y lleno de errores y conjeturas anónimas” el artículo de la revista *The New Yorker* que revelaba la trama secreta de las torturas dispensadas a los prisioneros iraquíes.

El plan, aprobado después del 11 de septiembre de 2001, permitía el uso de técnicas coercitivas en los interrogatorios, ahorrando trámites legales y diplomáticos, con los presuntos miembros de la red Al-Qaeda. En el otoño boreal de 2003, concluida la guerra contra Irak, decidieron aplicarlas en las cárceles de ese país, de modo de obtener información sobre una resistencia cada vez más agresiva y escurridiza.

Las humillaciones no eran sólo un juego. Eran, también, una forma de extorsionarlos una vez que fueran liberados. De ahí, las fotos tomadas por los mismos soldados. Iban a ser una presión constante, cual chantaje, sobre hombres temerosos de sentirse avergonzados ante parientes y amigos. En la bibliografía del plan, según el artículo de Seymour M. Hersh, figuraba un capítulo del libro *The arab mind (La mente árabe)*, de Raphael Patai, dedicado al efecto psicológico de la represión sexual y el tabú de la homosexualidad entre los musulmanes.

Frente a ello, Di Rita dijo que la investigación periodística, que citaba fuentes de inteligencia retiradas y en actividad, parecía “reflejar las ideas obsesivas de aquellos que tienen una vinculación muy débil, o ninguna, con las actividades del Departamento de Defensa”. Es decir, de aquellos que, al parecer, no podían dudar del testimonio bajo juramento de Rumsfeld en el que había asegurado que no sabía nada de eso.

El Pentágono quiso matar al cartero, desviando la atención del nudo del asunto hacia la honestidad del autor del artículo, pero Sabrina Harman, la reservista que en una de las fotos se mofaba de una pirámide de detenidos desnudos y encapuchados, dijo que “recibía órdenes desde arriba” y que “el trabajo de la policía militar en Abu Ghraib era hacerles la vida un infierno” a los arrestados “para que hablasen”. En su haber, a los 26 años, no tenía más experiencia antes de ir a Irak que haber sido empleada de una pizzería.

Era, entonces, miembro del “grupo reducido de soldados” que, según el presidente George W. Bush, cometió las atrocidades por placer, al igual que los interrogadores de las compañías privadas que habían sido contratadas como parte de la renovación del ejército que encaró Rumsfeld.

Houston, tenemos un problema: si la verdad es la primera víctima de toda guerra, los periodistas somos los principales sospechosos. Y el poder, renuente a admitir su entera responsabilidad, intenta degradarnos, subestimando a la opinión pública.

Ocurre en toda guerra y en escenarios aparentemente calmos: el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, suspendió la visa de residencia temporal de un corresponsal que había escrito sobre su afición al alcohol; se la restituyó después. En el interin evitó el asunto más delicado: si su predilección por las bebidas fuertes, como señaló Larry Rohter, corresponsal de The New York Times, “está afectando su desempeño en el cargo”.

Otro presidente, Hugo Chávez, enfrentado desde el primer día de su gestión con los medios de comunicación de Venezuela y del exterior, ha amenazado desde el Congreso, en donde su Movimiento V República tiene la mayoría absoluta, con revocar la nacionalidad del empresa-

rio periodístico Gustavo Cisneros y de varios periodistas por actitudes “antipatriotas”.

Lo mismo había hecho el peruano dudoso Alberto Fujimori (dudoso por su origen japonés) cuando vivía ebrio de prensa chicha (oficialista): privó arbitrariamente de su nacionalidad a Baruch Ivcher, director y presidente del directorio del Canal 2, Frecuencia Latina, impidiéndole residir y trabajar en el país.

Menos sutil, Fidel Castro ha mandado hostigar y arrestar a varios periodistas antes de que, el 18 de marzo de 2003, encarcelara a 29 en un pelotón de 75 disidentes cuyo delito más flagrante había sido discrepar con el régimen.

En esos casos, al igual que en las evasivas del Pentágono, la intolerancia se cotiza en alza. Y corre riesgo la libertad de expresión, pilar de la democracia que el gobierno de Bush ha prometido a Irak y sus vecinos árabes. Con un valor agregado: el fantasma de la autocensura frente a temas que, de pronto vedados, pasan a ser intocables, como los camaradas de Eliot Ness.

Por una filtración que destapó la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA casada con el diplomático Joseph Wilson, enviado a Níger en 2002 para averiguar si Saddam Hussein había intentado comprar uranio antes de la guerra contra Irak, Judith Miller, periodista de The New York Times, pasó 85 días en la cárcel en 2005. No por la información en sí, sobre la cual jamás llegó a escribir, sino por negarse a revelar sus fuentes.

Todos somos sospechosos, periodistas o no, si ejercemos el oficio de la duda. Un oficio noble, creo yo. En Irak, más allá de las vejaciones cometidas en Abu Ghraib por aquellos en quienes confiábamos que no iban a ser capaces de ello, hubo un hecho aislado que quiso pasar inadvertido entre más de 10.000 bajas de civiles desde el comienzo de la guerra: el bombardeo contra un campamento en el cual resultaron muertos 40 invitados a una boda; entre ellos, 13 niños.

Un hecho aislado que el Pentágono, en jaque por los pecados cometidos, quiso soslayar: dijo que eran guerrilleros extranjeros que habían cruzado la cercana frontera siria. Hasta que aparecieron imágenes de un camarógrafo amateur, primo del novio, que murió como consecuencia

del ataque. “Los malos también hacen fiestas”, repuso el brigadier general Mark Kimmitt, jefe del ejército norteamericano en Irak, después de haber dicho que no había evidencias de una boda, como decoraciones, instrumentos musicales y restos de un banquete.

Evidencias había, finalmente. Pudo ser un error el bombardeo. O una confusión por la costumbre de los árabes de disparar al aire cuando celebran algo. Pero no pudo ser un error ni una confusión la reacción del Pentágono frente al video. Ni frente a otro divulgado por Al Arabiya: las autoridades de las fuerzas de la ocupación pidieron al canal la identidad del camarógrafo, de modo de infundir miedo y promover la autocensura.

La reacción en sí respondió a una fórmula aplicada desde siempre por democracias y dictaduras de toda laya: maten al cartero con el fin de controlar la información, clave de la Operación Cóndor.

Con defectos, errores y alguna virtud, los periodistas estamos mejor entrenados que nunca y, a la vez, somos más vulnerables que nunca.

En Woodstock, Virginia, íbamos en un autobús blanco cuya única inscripción era Massanutten Military Academy. John, el conductor, sonreía antes de partir del hotel Ramada Inn. Nada indicaba después del desayuno, mientras promediaba una mañana soleada y apacible de otoño en el bucólico valle Shenandoah, que sus últimas palabras, al menos para nosotros, iban a ser algo así como un gemido: “Oh, my God! (¡Oh, mi Dios!)”, exclamó, y cayó sobre el volante, ladeado como su gorra de béisbol. Lo liquidaron con un disparo seco. En la sien, tal vez.

Poco antes, John había clavado los frenos: una explosión a la izquierda del camino distrajo nuestra atención. Por las puertas derecha y trasera del autobús irrumpieron cuatro hombres armados y encapuchados que, después de disparar al aire, no hacían más que amenazarnos e insultarnos en fino inglés con acento británico: cabezas abajo, manos arriba (sobre el respaldo delantero), silencio. Llevaban pasamontañas negros y ropa de fajina verde. Podían ser terroristas irlandeses, zapatistas mexicanos, guerrilleros colombianos o militares tercermundistas.

Un vehículo rojo se había cruzado delante de las narices de John. Del finado John, digamos. Eramos 17 periodistas latinoamericanos

sorprendidos por una operación tan fugaz, y efectiva, que ninguno atinó a reaccionar. Un silencio tortuoso se apoderó del autobús. El diálogo con Ricardo Trotti, argentino, mi compañero de asiento, había quedado trunco; detrás de nosotros, Clarinha Glock, brasileña, también había callado. Sólo Cristian Herrera Nariño, colombiano, advirtió el peligro apenas vio la humareda al costado del camino, asociándola con el cóctel de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que acecha su país. Algo iba a suceder, dejó entrever. En cuestión de segundos.

Estábamos a 160 kilómetros de la Casa Blanca, no en Irak, ni en Afganistán, ni en Kosovo, ni en Bosnia-Herzegovina, ni en Sierra Leona, ni en Colombia, ni en la selva Lacandona, ni en Hollywood. Estábamos curtidos, no obstante ello: los atentados del 11 de septiembre de 2001 han potenciado los peligros en todo el mundo. Pero no creíamos, ni imaginábamos, que íbamos a caer en una emboscada. Que íbamos a ser presas fáciles de forajidos que, con vehemencia, comenzaron a cubrirnos las cabezas con capuchas de arpillera negra, cegándonos, mientras el autobús, conducido ahora por uno de ellos, a los tumbos, se perdía presumiblemente a campo traviesa en busca del claro en el que iban a hacernos descender, uno tras otro, obligándonos a ponernos en fila india, las manos sobre los hombros de quien iba delante. Un conocido, o un desconocido, al cual aferrarnos como única alternativa de continuar juntos, y con vida, en un infame derrotero sobre la hierba ondulante, todavía húmeda de rocío.

Dos mujeres, supimos después, habían sido separadas del grupo y cargadas en la parte trasera del vehículo rojo que se había cruzado en el camino. Eran Silvia Otero, mexicana, y María Elizabeth Yarcé Ospina, colombiana. Uno de los forajidos iba con ellas. En el medio de la fila india, también supimos después, iba uno de ellos, haciéndose pasar por uno de nosotros, al igual que al final, de modo que el último no escapara.

El primero de los nuestros llevaba las palmas unidas con los pulgares en alto, sujetos por el eventual guía del tour hacia el infierno. El infierno del secuestro. De la desesperación, jadeando sobre la hierba, poco después, boca abajo, los brazos y las piernas extendidas, dificultosa la respiración, al borde de la claustrofobia, mientras éramos despoja-

dos de todo, vaciados nuestros bolsillos, agotada nuestra paciencia. “¡Me ahogo!”, gritó uno de los nuestros.

¿Qué habíamos hecho para merecer eso? En ese momento, oscuro, silencioso, sofocante, convinimos en que estábamos en una guerra. En una guerra contra nosotros mismos, procurando calmarnos, morder la capucha para respirar mejor, abrir la boca para aguzar el oído y esperar, sobre la hierba, el desenlace. Fatal para uno de los nuestros: pensó que los forajidos se habían ido, después de una estampida de puertas y de motores, e intentó quitarse la capucha; dos balazos zumbaron sobre su cabeza.

Media hora parecía un siglo. Una vida, quizá. Librada al destino, no al azar. Librada, más que todo, al shock de la captura y de la pérdida del control. Significado de la capucha. De su opresión. De la pérdida de un sentido vital: la vista. Y de un derecho único: la libertad, empezando por el movimiento. En esas circunstancias, un solo músculo podía jugar en contra, actuando más rápido que el cerebro. Dictar sentencia. Traicionarnos, en definitiva, durante las tres fases del secuestro: la inicial, el cautiverio y, con suerte, la liberación.

La liberación, en nuestro caso, no fue tan traumática como suele serlo. “Bienvenidos al club”, nos dijeron. Eramos parte de los 8000 secuestrados en ocho años por los ex comandos royal marines de unidades especiales británicas que dictan cursos de periodismo en ambientes hostiles para la compañía Centurion, fundada por su director ejecutivo, Paul Rees, en función, originalmente, de las necesidades de la BBC. Servicios que después han sido requeridos, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, por CNN, Associated Press, Reuters y The New York Times, entre otros. Y que, en esta ocasión, habían sido contratados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para entrenar periodistas de Colombia, Venezuela, México, Guatemala, Brasil y la Argentina.

La vivencia del secuestro, tan real como los posteriores rescates de heridos en un campamento de refugiados y en un accidente de tránsito, la recorrida por una casa abandonada después de una batalla, la búsqueda de trampas en un sendero empinado y las negociaciones en un retén militar de un país controlado por una dictadura, era coronada con

risas, o catarsis, viéndonos a nosotros mismos en un video que los forajidos (nuestros instructores) habían grabado para enseñarnos la regla de oro: ser el hombre gris. Es decir, no presumir, sino pasar inadvertido. Moral alta, perfil bajo, convengamos. Sin oponer resistencia, salvo que pretendiéramos ser Clint Eastwood (es imposible que dé en el blanco a 100 metros de distancia), Mel Gibson (es absurdo que se acomode la clavícula a golpes contra un muro) o Silverster Stallone (es insensato que dispare dos armas de caño largo al mismo tiempo con algo de puntería).

En América latina han muerto cerca de 300 periodistas en los últimos 15 años. Sobre todo, en Colombia: 123. La mayoría de esos crímenes permanece impune. De ahí que la SIP, con el apoyo de la Fundación John S. y James L. Knight, haya creado en 2000 la Unidad de Respuesta Rápida (URR), como parte del proyecto contra la impunidad, e insista por medio de una campaña de educación pública por la cual los lectores exigen a los gobiernos que agilicen los procesos judiciales.

En el curso Centurion, plasmado por Trotti, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del Instituto de Prensa y de la URR de la SIP, nos dimos cuenta de que no siempre reparamos en los riesgos de cubrir una historia. Que sabemos poco, o nada, de trampas (cazabobos, digo). Que, a la distancia, un camarógrafo tiene el mismo aspecto que un francotirador. Que, en fuego cruzado, no son recomendables las ropas claras. Que el 39 por ciento de la gente muere antes de llegar al hospital por falta de asistencia (en especial, de sus vías respiratorias). Que no es lo mismo tirarse cuerpo a tierra (y gatear hacia un sitio seguro) si estalla una balacera que tirarse cuerpo a tierra (y permanecer quietos, con las piernas cruzadas y las manos sobre la cabeza) si estalla una granada. Que confiar, o confiarse, puede ser fatal. Que somos vulnerables, ya sea en una guerra o en una revuelta, y que podemos evitarlo. Que podemos hacer algo por nosotros mismos y por los demás. Y que no conviene subestimar a nadie, empezando por los dueños de casa en un país extraño.

El mundo se ha convertido en un sitio hostil. Nuestros instructores, fogueados en Malvinas, Bosnia-Herzegovina, Medio Oriente, Kosovo, Irlanda del Norte, Afganistán e Irak, entre otras guerras, nos

han dado una pauta: preguntarnos qué ocurriría si... Y, una vez respondidas las dudas antes de salir de la redacción o del hotel, reducir los riesgos, tomando precauciones. Tan elementales como llevar un botiquín de primeros auxilios, agua mineral (necesitamos de cinco a ocho litros por día), un mapa de la región y una brújula (y saber usarla, desde luego), en caso de estar en una suerte de safari por un país desconocido, y dejar para otra ocasión la camisa blanca recién planchada, y tener cuidado con el resplandor que pueden causar las gafas, los relojes, los anillos y las cadenas, así como las lentes de las cámaras fotográficas, de modo de evitar ser el centro del tiro al blanco.

Y estar preparados, si encontramos heridos, con algunas indicaciones básicas. Podemos salvarles la vida, si respiran o se mueven, acomodándolos de costado, como si estuvieran durmiendo, después de hacerles una revisión y practicar primeros auxilios. Hasta tanto acuda la ayuda médica. Debemos estar preparados, asimismo, para negociar en un retén (con sobornos de por medio, a veces), mostrando las manos en todo momento (señal de confianza), preservando el pasaporte (es preferible llevar fotocopias) y respetando los usos y las costumbres del país, o del lugar, en el que nos encontremos.

Al final de la jornada, John nos condujo al hotel, sanos y salvos. Seguía sonriendo bajo su gorra de béisbol ladeada. Como si nada hubiera sucedido. Nada había sucedido, en verdad; al menos, para él. Sólo había sido parte, una vez más, de una lección de seguridad y de socorro en situaciones de riesgo.

Fue el punto de máxima tensión de los cinco días de clases. Intensivas todas ellas, alternando entre la teoría y la práctica. Por más que la práctica haya significado, en este caso, un mojón de realidad. De la dura realidad de vernos, de pronto, en el momento incorrecto y en el sitio inoportuno, privados en carne propia de la libertad, escribiendo la crónica de un secuestro figurado, y propio, que pudo haber sido verídico. Tan verídico como todo: el escenario (territorio militar), las bombas y las balas (de fogueo), la muerte del pobre John (exagerada con su gemido: "Oh, my God!")... Un toque de humor, después, que quizá sea nuestra ayuda memoria o, Dios nos guarde, nuestro salvoconducto en una situación parecida.

En Irak murieron varios periodistas. En circunstancias extrañas algunos de ellos, confundidos con soldados (un francotirador y un camarógrafo se ven igual a cierta distancia). Fuera de Irak, muchos más están expuestos a amenazas y, en América latina en particular, a presiones, agresiones y asesinatos, como si la Operación Cóndor no hubiera terminado al igual que las dictaduras militares. Como si estuviera viva y sepultada.

Revuelto el avispero, nunca faltan quienes preparan, apuntan y preguntan sobre el origen de tal o cual información. Y, en lugar de enfrentar el espejo, ordenan. Ordenan que maten al cartero.

RXJ (FIN)

FOTOS



José Ignacio García Hamilton: "Quien cumple con su deber profesional nada debe temer como consecuencia"



Martín Almada, descubridor de los Archivos del Terror: "Me torturaron paraguayos entrenados especialmente en la Argentina y en la Escuela de las Américas, de los Estados Unidos"



Marcelo Gelman: "Sólo quiero recordarles / que no me olviden / a la marcha del tiempo, / a la marcha del tren / en que me vaya"



Raúl Reyes, comandante de las FARC, en Inspección Los Pozos, Colombia, con el autor: "Ese (por el subcomandante zapatista Marcos) no es revolucionario"



El almirante Emilio Eduardo Massera con Rodolfo Fernández Pondal, el décimo periodista desaparecido en la Argentina



Zelmar Michelini: le dijeron que había llegado su hora



Santiago Canton, el primer relator para la libertad de expresión de las Américas



Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa y de la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en uno de los simulacros organizados por la compañía Centurión

FUENTES

PRIMERA PARTE

1. La policía del pensamiento

George Orwell, 1984, Ediciones Destino S.A., Barcelona, 1984

Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, organizada entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre de 1975, Santiago

Presidencia de la Nación Argentina, Secretaría de Inteligencia del Estado, carta dirigida al jefe del II Departamento del Estado Mayor General de Paraguay, general de brigada Benito Guanes Serrano, Buenos Aires, 18 de septiembre de 1979

Respuesta del ministro del Interior de Paraguay, Sabino Augusto Montanaro, firmada por el jefe de Policía de Asunción, general de división Francisco Alcibíades Brítez, Asunción, 6 de octubre de 1979

Invitación del jefe del Estado Mayor General de Paraguay, general de división Alejandro Fretes Dávalos, al jefe de la División de Investigaciones de la Policía de la Capital, Pastor Coronel, Asunción, 7 de julio de 1976

Carta del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, director de Inteligencia Nacional, Santiago, 16 de septiembre de 1975

Editorial del diario La Vanguardia, Barcelona, 25 de agosto de 2002

María O'Donnell, Habla el poder, diario La Nación, Buenos Aires, 17 de octubre de 1999

Revista Diálogo Social, número 69, Panamá, julio de 1975

2. La ignorancia es la fuerza

George Orwell, Cazando un elefante, Editorial Guillermo Kraft Limitada, Buenos Aires, 1955

Jean François Revel, El conocimiento inútil, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1989

George Orwell, 1984, Ediciones Destino S.A., Barcelona, 1984

Departamento de Estado, documento número 1976BUENOS04844, Subject: South America Southern Cone Security Practices, julio de 1976

Departamento de Estado, documento número BUENOS 06871 191949Z, Subject: Foreign minister Guzzetti Euphoric over visit to United States, octubre de 1976

Confederación Anticomunista Latinoamericana, III Congreso, Asunción, del 28 al 30 de marzo de 1977

Confederación Anticomunista Latinoamericana, Primer documento básico para delegados al Tercer Congreso de la CAL, Guadalajara

Oficio del jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción, Pastor Coronel, dirigido al jefe de la Policía de la Capital, general de división Francisco Brítez, Asunción, 13 abril de 1981

Oficio del comisario inspector Alberto Cantero, director de Política y Afines de la Policía de la Capital, Asunción, 16 de mayo de 1977

United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Clarence M. Kelley, director, al Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, Pastor M. Coronel, Washington,

DC, 10 de diciembre de 1976

Policía de la Capital, Jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, Pastor M. Coronel, al Jefe de la Policía de la Capital, general de división Francisco Brítez

Timothy Garton Ash, Por qué ser orwellianos, diario El País, Madrid, 16 de junio de 2001

Arturo Pérez-Reverte, Territorio Comanche, Editorial Nuevas Ediciones de Bolsillo S.L., Madrid, 2001

Diario La Prensa, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1980

3. La conjura de los medios

Rodolfo Walsh, Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, Buenos Aires, 25 de marzo de 1977

Félix Luna, El último golpe, diario Clarín, Buenos Aires, 23 de marzo de 1993
 Alberto Dearriba, 24 de marzo de 1976, El golpe, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001

Richard Gillespie, Los Montoneros, Grijalbo, Buenos Aires, 1997

Apreciación de la situación subversiva en Sudamérica, VII Conferencia Bilateral de Inteligencia entre los Ejércitos de Paraguay y Argentina, 1975

Mariano Blejman, La tele del 24 de marzo de 1976, Comunicado número 1, diario Página/12, Buenos Aires, 24 de marzo de 2001

Victor Massuh, La Argentina como sentimiento, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1983

Fernando Ferreira, Una historia de la censura, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2000

Prudencio García, El drama de la autonomía militar, Alianza Editorial, Madrid, 1995

Memorándum sobre tortura y desapariciones en la Argentina, Departamento de Estado, Washington, DC, 1980

Carlos Ulanovsky, Seamos felices mientras estamos aquí, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001

Marcelo Larraquy, Cartas que no quieren morir, revista Noticias, Buenos Aires, 5 de octubre de 2002

Andrew Graham-Yooll, Memoria del miedo (Retrato de un exilio), Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1999

Jacobo Timerman, Preso sin nombre, celda sin número, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2000

Uki Goñi, El valor de la prensa, First Page, Buenos Aires, 30 de marzo de 1997

Bartolomé Mitre, Sin Libertad de Prensa no hay Libertad, Fundación Banco de Boston, Buenos Aires, 1990

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Informe de País, Argentina, Capítulo VII, Derecho a la libertad de opinión, expresión e información, 1980

Departamento de Estado, documento número 1984BUENOS06943, 30 de agosto de 1984

Argentina y sus derechos humanos, Asociación Patriótica Argentina, Buenos Aires, 1978

Entre dos fuegos, Periodismo bajo regímenes militares, revista Caretas, Lima, 30 de marzo de 2000

Cómo murió Aramburu, revista La Causa Peronista, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1974

Gabriela Cerruti, Alfredo Astiz, represor argentino: “Estaba de acuerdo con las órdenes y no me arrepiento”, revista trespuntos, Buenos Aires, 16 de enero de 1998

4. Pretérito imperfecto

Denunció el secuestro de un periodista, diario La Nación, Buenos Aires, 7 de agosto de 1977

Víctimas del desorden, diario The Buenos Aires Herald, Buenos Aires, 24 de agosto de 1977

Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), Buenos Aires, 1984

Auto del Juzgado Central número cinco ordenando la prisión preventiva a efectos extradicionales de Miguel Angel Cavallo, Juzgado Central de Instrucción Nº 5 Sumario (procedimiento ordinario) 19/1997 L - Terrorismo y Genocidio, Providencia del magistrado juez D. Baltasar Garzón Real, Madrid, 25 de agosto de 2000

Auto de procesamiento de Miguel A. Cavallo, ídem, 1º de septiembre de 2000

Auto de procesamiento de 98 militares argentinos, ídem, 2 de noviembre de 1999

Nómina de prisioneros que fueron vistos con vida en la ESMA, diario La Voz, Buenos Aires, 16 de enero de 1984

Fernández Pondal se quiso pasar de bando, revista La Semana, Buenos Aires, 22 de marzo de 1984

Munú Actis, Cristina Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin y Elisa Tokar, Ese infierno, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001

Testimonio de Lewin de García, Miriam (estudiante), Juicio a las Juntas, 18 de julio de 1985

Las revelaciones de Horacio Domingorena, diario Clarín, Buenos Aires, 26 de abril de 1985

En homenaje, diario The Buenos Aires Herald, Buenos Aires, 5 de agosto de 1978

Al año de un secuestro, diario La Nación, Buenos Aires, 19 de agosto de 1978

David Cox, En honor a la verdad, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2002

Marisa Presti, Ana Frank es argentina, Buenos Aires, 2003

Defensa confirmó que no quiere un museo en la ESMA, diario Página/12, Buenos Aires, 1° de febrero de 2001

Balza: “Me siento muy orgulloso de un hombre como Godoy”, diario La Nación, Buenos Aires, 4 de marzo de 2004

Hállase el Proceso en una etapa “netamente política”, diario La Nación, Buenos Aires, 18 de junio de 1979

La desaparición de un periodista, diario La Nación, Buenos Aires, 8 de agosto de 1985

Testimonio sobre Fernández Pondal, diario La Prensa, Buenos Aires, 8 de agosto de 1985

Tres años sin Fernández Pondal, revista Última Clave, Buenos Aires, 5 de agosto de 1980

Versión en Caracas, diario Clarín, Buenos Aires, 29 de diciembre de 1983

El caso Hidalgo Solá, diario La Razón, Buenos Aires, 14 de diciembre de 1983

El juez Dibur sigue en Venezuela por el caso Hidalgo Solá, diario Tiempo Argentino, Buenos Aires, 14 de diciembre de 1983

Recurso por el secuestro de un periodista, diario La Nación, Buenos Aires, 13 de agosto de 1977

¿Secuestros enlazados?, diario Clarín, Buenos Aires, 18 de septiembre de 1982

ESMA: quedaron detenidos otros siete marinos y dos miembros de la Prefectura, diario La Nación, Buenos Aires, 27 de febrero de 1987

El grupo de tareas en la cárcel, diario Página/12, Buenos Aires, 8 de septiembre de 2001

Rodolfo Fernández Pondal, Legajo N° 2620, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

5. Montevideo esquina Buenos Aires

Documento sobre el asesinato de Zelmar Michelini, cedido al autor por Rafael Michelini

Hallóse el cadáver de Michelini, diario La Nación, Buenos Aires, 23 de mayo de 1976

Comunicado oficial sobre dos asesinatos, diario La Nación, Buenos Aires, 25 de mayo de 1976

Un gran daño, diario La Nación, Buenos Aires, 30 de mayo de 1976

Querrela presentada por familiares de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, 16 de abril de 2004

Claudio Trobo, Asesinato de Estado. ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz?, Ediciones del Caballo Perdido, Montevideo, 2003

Los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, diario La República, Montevideo, agosto de 2001

Miguel Bonasso, La sombra del Cóndor, diario Página/12, Buenos Aires, 5 de agosto de 2001

Paino busca trabajo en el Uruguay, diario La Nación, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1983

Paino no vendrá al país a declarar, diario La Nación, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1983

“La Triple A, autora de 2000 muertes”, diario La Nación, Buenos Aires, 28 de octubre de 1983

Dijo que López Rega ordenó asesinar a Jorge Cafrune, diario La Nación, Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983

Declaraciones de Paino acerca de la Triple A, diario La Nación, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1983

Rechazan imputaciones de Paino, diario La Nación, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1983

Fue pedida al Uruguay la extradición de Paino, diario La Nación, Buenos Aires, 2 de diciembre de 1983

Dieron de alta a Paino y ya podría ser devuelto al país, diario La Voz, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1983

Paino sigue internado, diario La Nación, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1983

Paino fue alojado en una cárcel uruguaya, diario La Nación, Buenos Aires, 9 de diciembre de 1983

El Uruguay negó la extradición de Salvador Paino, diario La Nación, Buenos Aires, 24 de agosto de 1984

Investigación sobre la AAA, diario Clarín, Buenos Aires, 9 de febrero de 1976

El caso de la Triple A, revista Gente, Buenos Aires, 19 de febrero de 1976

Las muertes y desapariciones fueron excepciones a la regla, semanario Brecha, Montevideo, 31 de julio de 2000

Las FF.AA. liberaron a 111 detenidos políticos, diario La Nación, Buenos Aires, 1° de marzo de 1985

Eduardo Galeano, palabras en la presentación del libro Seregni, la mañana siguiente, semanario Brecha, Montevideo, 25 de julio de 1997

6. En el nombre del hijo

Juan Gelman, Buena memoria, poema

Juan Gelman, Elogio de la culpa, diario Página/12, Buenos Aires, 25 de marzo de 2001

Cable del embajador de los Estados Unidos, Robert Hill, documento número 1976BUENOS07203, Buenos Aires, 2 de noviembre de 1976

Juan Gelman, Carta abierta al Dr. Julio María Sanguinetti

Aldo Marchesi, La guerra y la paz, revista Los Puentes de la Memoria, La Plata, diciembre de 2000

Los periodistas desaparecidos, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), Grupo Editorial Norma S. A., Buenos Aires, 1998

Juan Gelman, Prosa de prensa, Grupo Editorial Zeta S. A., Buenos Aires, 1997

Determinan dónde estarían los restos de la nuera de Gelman, diario La Nación, Buenos Aires, 14 de febrero de 2004

Informe Gearqueológico N°435, Laboratorio de Antropología Forense, Instituto Técnico Forense, y Universidad de la República, Montevideo, 2004

SEGUNDA PARTE

7. Devuélvase al remitente

Arturo J. Escandón Godoy, Censura y liberalismo en Chile a partir de 1990, Cuadernos de Investigación del Mundo Latino, Centro de Estudios de América latina, Universidad de Nanzan, Japón, mayo de 1999

Para nunca más vivirlo, para nunca más negarlo, Comisión de Prisión Política y Tortura, Santiago, 28 de noviembre de 2004

Stella Calloni, Los años del lobo, Ediciones Continente S.R.L., Buenos Aires, 1999

John Dinges, Los archivos Cóndor, diario La Nación, Buenos Aires, 8 de agosto de 1999

Diana Jean Schemo, Revelan un apoyo clave de EE.UU. al Plan Cóndor, diario Clarín, Buenos Aires, 7 de marzo de 2001

Auto de procesamiento contra Augusto Pinochet Ugarte, diario El Mercurio, Santiago, 18 de octubre de 1998

Contreras relata sus nexos con la CIA, diario La Tercera, Santiago, 21 de septiembre de 2000

OEA, Informe N° 55/00, Caso 12.142, Alejandra Marcela Matus Acuña y otros, Chile, Washington, DC, 2 de octubre de 2000

Sanción a jefa de Prensa de la Presidencia, diario La Tercera, Santiago, 1° de septiembre de 1998

Los tragos amargos de Pinochet, diario El Mercurio, Santiago, 4 de marzo de 2001

La película tenía razón, diario Clarín, Buenos Aires, 9 de octubre de 1999

El gobierno argentino calificó el fallo de “grave” y “absurdo”, diario Clarín, Buenos Aires, 9 de octubre de 1999

The White House, Carta de James Carter a Augusto Pinochet, Washington, DC, 31 de octubre de 1977

Augusto Pinochet Ugarte, General del Ejército, Presidente de la República, Carta a James Carter, Santiago, 9 de noviembre de 1977

El terrorismo: mito y realidad de un flagelo que afecta a las sociedades no comunistas, revista Alborada, Ejército de Chile, Santiago, julio de 1984

8. Montesinos y yabranes

Committee to Protect Journalists (CPJ), Journalists killed 1992-2001, Nueva York

Ricardo Trotti, Las primeras batallas contra la impunidad, Miami, noviembre de 1999

José Claudio Escribano, Invitación al cuestionamiento, Santiago del Estero, 17 de septiembre de 1998

Carlos Fuentes, Caras nuevas para el 2000, diario El País, Madrid, noviembre de 1999

Bartolomé de Vedia, La estridencia creada por todos, diario La Nación, Buenos Aires, 4 de julio de 1999

Encuesta Latinobarómetro 2001, Santiago

Crimen de Cabezas, El Diario del Juicio, revista Noticias, Buenos Aires, 2001

9. Levántate y baila

Dos muertos y casi 1300 agresiones en 12 años, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), Buenos Aires, 24 de marzo de 2002

Adam Isacson y Joy Olson, Just the Facts, A civilian guide to U.S. defense and security assistance to Latin America and the Caribbean, Latin America

Working Group in cooperation with the Center for International Policy, Washington, DC, 1998

10. Enemigos íntimos

Comandancia del I Cuerpo de Ejército, Ejército Paraguayo, Informe, Cuartel General en Campo Grande, 26 de marzo de 1999

Morinigo, José Nicolás; Galeano, Luis A.; Caballero, Esteban; Céspedes, Roberto L., y Martini, Carlos, Marzo de 1999: huellas, olvido y urgencias; Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, Asunción, 1999

Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, noviembre de 1997

Elliott Abrams, assistant secretary, Bureau of Human Rights and Humanitarian Affairs Committee, Testimony on the Southern Cone Countries before the House Sucommittees on Human Rights and Western Hemisphere Affairs, Washington, DC, 21 de octubre de 1983

11. Sueño con serpientes

Norberto Ceresole, Caudillo, Ejército, pueblo. La Venezuela del presidente Chávez, Analítica Editores, Caracas, enero-febrero de 1999

Lucas Estrella, El Oráculo del Guerrero, Editorial Cuatro Vientos, Santiago, 1995; Alfadil Ediciones, Caracas, 1998